





Economía y política 3

**Escritos coyunturales para comprender problemas estructurales
(2014)**

Finanzas públicas, modelo productivo y desigualdad

Título: Economía y política 3
Subtítulo: Escritos coyunturales para comprender problemas estructurales.
Finanzas públicas, modelo productivo y desigualdad.
Autor: Julio C. Gambina

©FISyP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas
Montevideo 31 - 2º 3
(CP1042AAB) Buenos Aires - Argentina
Tel Fax: 4381-5574 / 6088-9949
mail: fisyp@fisyp.org.ar
web: www.fisyp.org.ar

Diseño y producción editorial:
José Luis Bournasell
jlournasell@gmail.com

La Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas es una entidad sin fines de lucro, dedicada a la actividad de investigación, docencia y difusión en diversas áreas de Ciencias Sociales.

Esta publicación puede ser reproducida libremente por cualquier medio publicando fuente y autor.

Gambina, Julio César
Economía y política 3 : escritos coyunturales para comprender problemas estructurales: finanzas públicas, modelo productivo y desigualdad / Julio César Gambina ; compilado por Julio César Gambina. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Fundación Investigaciones Sociales y Políticas - FISyP, 2015.
352 p. ; 22 x 15 cm.
ISBN 978-987-3925-01-6
1. Actividad Económica. 2. Acción Política. I. Gambina, Julio César, comp. II. Título.
CDD 330

Economía y política 3

**Escritos coyunturales para comprender problemas estructurales
(2014)**

Finanzas públicas, modelo productivo y desigualdad

Julio C. Gambina



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	1
PARTE I AMÉRICA LATINA EN EL MUNDO	5
Introducción	7
A propósito del g77+China	9
Iº Encuentro Interdisciplinario sobre cuestión social y políticas públicas	
Capitalismo tardío, procesos socio-políticos y hegemonía en América Latina	17
Expectativas con los BRICS	29
La economía está en debate en Nuestramérica	35
Promover el cambio del sistema financiero mundial	39
El Grupo de los 20 y el conflicto por la deuda pública de Argentina	45
Crisis energética y precio del petróleo: lucha por la hegemonía en el capitalismo en crisis	49
Los desafíos para la integración regional.	
Entre Bolivia en elmercosur y las relaciones Cuba y EEUU	53
PARTE II ARGENTINA: DEUDA Y FINANZAS	61
Introducción	63
La deuda pública se cancela con reservas internacionales	
¿Puede hacerse algo distinto?	65
El gobierno asumió la agenda que venía planteando el poder económico.	
Ajuste e inflación. La depreciación del peso en pocos meses.	
Multinacionales. regreso a los préstamos internacionales	69
La devaluación del peso argentino	73

Repsol, YPF y la deuda pública	77
¿Quién financia al Estado?	81
Desaceleración económica, tasas de interés y precio del dólar	85
Argentina acordó cancelar deuda con el Club de París	89
“Histórico acuerdo con los países integrantes del Club de París”	93
Argentina . La Corte de Justicia estadounidense y las potencialidades de ofensiva popular	99
El fallo de la corte de EEUU en clave de la lógica imperialista	105
Desaceleración económica y negociaciones en Nueva York	109
¡¡¡Honrar las deudas, no los fraudes!!!	115
Preocupaciones por la economía en Argentina	121
¿Argentina en default?	127
Deuda y buitres. Una novela en capítulos diarios con graves consecuencias sociales	133
Ley para el cambio de la Jurisdicción y nuevo capítulo en la novela de la deuda	137
Evasión y elusión impositiva de transnacionales y riguroso cobro a los trabajadores	145
Desendeudamiento y reendeudamiento público en la Argentina	149
Nuevo canje y emisión de deuda en la Argentina	153
PARTE III SALARIOS, PRECIOS, EMPLEO	157
Introducción	159
Precios y salarios en el debate económico	161
La devaluación y la batalla por los precios	165
Precios en alza: ¿Qué pasa con los salarios?	169
Discusión salarial y marco económico	173
Motivos para el paro del 10 de abril en Argentina	177
Empezaron las suspensiones en la industria	181
Política social compensatoria	185
Los salarios y el empleo en la discusión por la apropiación de la renta nacional	189
Inflación, deuda y problemas de empleo y salarios	193
Presiones sobre los precios: del dólar y de la fuerza de trabajo	199
PARTE IV ECONOMÍA Y POLÍTICA	203
Introducción	205
Primeros anuncios económicos del 2014	207
¿Es utópico luchar contra el capitalismo? ¡El capitalismo nacional es una utopía!	
¿Es posible sostener una sociedad anticapitalista, antiimperialista, socialista?	211
Argentina busca “normalizar” su inserción mundial	217

A 38 años del golpe de estado en argentina (1976-2014)	223
Argentina creció 3% en 2013	227
La economía entre el paro del 10/4 y Washington	231
La precariedad laboral como fenómeno estructural	235
La pobreza en discusión	239
A propósito del 1 de Mayo	243
La inflación condiciona la política económica	247
Entre la crisis capitalista y la construcción de poder popular*	251
China y Argentina con mayores vínculos económicos	259
La agenda económica del futuro en discusión	265
Urgente crédito con China	273
Los límites del modelo productivo en Argentina	275
Terrorismo económico mundial	279
Reforma a la ley de hidrocarburos	283
El mercado y las regulaciones como tema del Nobel 2014	287
¿Es posible superar la dependencia tecnológica?	289
Presupuesto, deuda pública, hidrocarburos y telecomunicaciones	293
¡El enemigo a vencer es el capitalismo!	299
La dependencia del ingreso de capitales define al capitalismo argentino	307
PARTE V DECLARACIONES Y ACONTECIMIENTOS	313
Introducción	315
Declaración de la Corriente Sindical en la CTA. iniciativa política y lucha de clases en la argentina	317
Declaración de los Economistas de Izquierda (EDI). “En vez de ajuste, monopolio estatal del comercio exterior”	327
A propósito de Venezuela	333
la Copa FIFA 2014 y el modelo de desarrollo	339



PRESENTACIÓN

Con el presente volumen insistimos por tercera vez en la publicación de buena parte de las notas producidas durante el 2014. Tienen el sentido de crónica periodística, relativa al comentario de los acontecimientos tal y como se suceden, desde un enfoque de lucha de clases, aunque la organización del libro no es cronológica, sino temática, y dentro de ello se respeta la sucesión del calendario.

Es importante recuperar la intervención recurrente sobre la coyuntura durante el 2014, para poder seguir el entramado complejo de las iniciativas políticas confrontadas de las clases dominantes y las subalternas, por lo que remitimos a un enfoque de lucha de clases, que es local, regional y global, más allá incluso, de la visibilidad del conflicto y las clases en lucha.

Por eso es que siempre se está discutiendo la Argentina, pero localizada en el territorio “nuestro americano”, e inserta subordinadamente en el sistema capitalista mundial, en un tiempo de crisis global, civilizatoria, que ya caracterizamos en un texto publicado en 2013.¹ Claro que la Argentina capitalista supone una relación social contradictoria y en conflicto, con lo cual, los intereses contrapuestos son motivo del análisis en cada uno de los escritos.

El lenguaje periodístico de las notas conlleva una impronta teórica relativa a la búsqueda que impone la crítica del régimen del

¹ Gambina Julio C., *Crisis del capital. La crisis capitalista contemporánea y el debate sobre las alternativas*, FISyP, 2013.

capital en nuestro tiempo, en el sentido de perfilar pistas para la lucha por la transformación social, la emancipación y la liberación. En un sentido más tradicional, la pretensión se orienta a responder a la necesaria construcción de aportes a la teoría y práctica de la revolución.

La fragmentación del movimiento popular y muy especialmente entre las/os trabajadoras/es, preocupación asociada a la militancia que protagonizamos en la CTA Autónoma y los desafíos por constituir alternativa política, son parte esencial de la lógica discursiva y argumental. En ese sentido vale destacar también la preocupación que significa participar en la construcción del Encuentro Sindical Nuestramérica, ESNA, con similares problemas y desafíos para el movimiento obrero en la coyuntura.

El objetivo de los escritos, entonces y ahora, es el de intervenir en la construcción de conocimiento crítico sobre la diversa realidad cotidiana, con los límites del propio pensamiento y la capacidad para hacer síntesis teórica derivada de los vínculos con el movimiento de trabajadoras/es y el debate intelectual en la práctica docente universitaria y otros diversos ámbitos del debate cultural y de ideas, muy especialmente entre las/os trabajadoras/es.

Soy consciente que la realidad necesita del abordaje interdisciplinario. Pero los escritos son pensados (más allá del éxito logrado) desde la lógica de la crítica a la economía política, siendo la Economía Política la disciplina contemporánea por excelencia, relativa a la hegemonía del régimen del capital.

La realidad capitalista fue inicialmente pensada desde los clásicos de la Economía Política, no por economistas, profesión inexistente en aquellos tiempos, sino por filósofos, pensadores, en la búsqueda de entender la lógica del emergente orden social.

Solo más tarde, y en respuesta a la crítica de la disciplina desplegada por Carlos Marx y sus seguidores (incluso hasta el presente), aparecerán los profesionales de la economía, a secas, y con ello la orientación técnica en la búsqueda de la mayor eficiencia y eficacia por obtener rentabilidad de la inversión capitalista, no ya una explicación totalizadora del orden social, económico y cultural.

Por ello es que asumimos un enfoque de análisis desde la Economía Política, más aún, desde la crítica a la teoría apologética del orden del capitalismo actual, sea la corriente ortodoxa por la liberalización, o las formas matizadas de la heterodoxia que agota

su praxis en la crítica a los neoliberales e intenta la recuperación en nuestros tiempos del imaginario teórico y práctico construido a la salida de la segunda guerra mundial, el keynesianismo y el desarrollismo.

Nos interesa asumir una explicación integradora de la realidad cotidiana, lejos del economicismo y de la fragmentación del análisis contemporáneo diseccionando el análisis con saberes parciales que dificultan la comprensión de los fenómenos.

La búsqueda de la literatura apunta a desentrañar la esencia de esos fenómenos que aparecen incomprensibles en la lógica discursiva de los medios de comunicación y de los especialistas mediáticos y otras expresiones profesionales de la lógica conceptual de las clases dominantes.

Espero que el texto contribuya a repasar la historia reciente del presente de una crisis que es económica, política, sistémica, civilizatoria y que convoca a discutir posibilidades humanas para la crítica anticapitalista, antiimperialista, anticolonial, contra el patriarcado, el racismo y toda forma de discriminación.

Hemos dividido los textos en 5 partes. Una remite al marco internacional y regional. Otra a la temática local nacional. La tercera relativa a la situación de las/os trabajadoras/es. La cuarta a posicionamientos y debates políticos. La quinta reúne declaraciones y temas generales. No es necesaria la lectura en continuado, y puede leerse como más interés al lector.

Confiamos en que el material puede ser útil para recuperar nuestra historia reciente y los debates suscitados en la lucha social y política.

Buenos Aires, septiembre del 2015



PARTE I
AMÉRICA LATINA EN EL MUNDO



INTRODUCCIÓN

América Latina es el gran laboratorio de cambio político en el mundo, con procesos interesantes para reflexionar sobre la situación mundial y la crisis sistémica del capitalismo.

Se debate el rumbo económico de la región, muy especialmente cuando empieza a cambiar la situación económica y el interés se asocia al contenido de la política económica, sea para consolidar la estructura económica social o para modificarla en un sentido alternativo, anticapitalista.

China pasó a ser un socio importante en Nuestramérica, comercial, económico y financiero y con ello a intervenir en el modelo productivo y de desarrollo, especialmente desde la lógica de los países emergentes, categoría que se discute asociada a los BRICS.

Siempre está el análisis de la situación en la Argentina, inserta en la región latinoamericana y caribeña, como parte de la disputa mundial en tiempos de transnacionalización.



*A PROPÓSITO DEL G77+CHINA**

El G77 surge en 1964, para coordinar en el seno de la ONU y en sus diferentes instancias la actividad e iniciativa de 77 países subdesarrollados, atrasados o dependientes, países del Sur del mundo. Con el tiempo la adhesión llegó a 133 miembros aunque se mantiene el nombre genérico adoptado en el comienzo. Desde entonces transcurrieron 50 años y el mundo cambió sustancialmente, especialmente en aspectos económicos y políticos. Los años 60 y los 70 constituyen el momento más elevado de la articulación de propuestas e iniciativas del Sur del mundo, inclusive con la sanción en 1974 por la ONU de la Carta de los Deberes y Derechos de las Naciones, más conocida como Nuevo Orden Económico Mundial. Carta a la que se opusieron muy pocos países capitalistas desarrollados, los del Norte, con EEUU a la cabeza. Se consolidaba allí el punto más alto de la ofensiva del Sur para contrarrestar el poder de los países del Norte, que lanzaron en simultáneo la contraofensiva reaccionaria del Neoliberalismo con el golpe de Estado en Chile (1973) y que vía Terrorismo de Estado se extendió desde Sudamérica al mundo, cuando Thatcher y Reagan lo establecieron en sus respectivos países, en Inglaterra en 1979 y en EEUU en 1980, para luego instalar el neoliberalismo en escala global hasta nuestros días con la crisis mundial del capitalismo y el ajuste europeo de las políticas de austeridad.

* Publicado en el semanario Época de Bolivia.

Los años 60 y 70, primeros momentos del G77, fueron importantes en la prédica por la lucha anticolonial, antiimperialista, anticapitalista y por un nuevo orden mundial. Fueron años de avance de la articulación del Sur, con cambios políticos muy importantes en Asia, África y América Latina. La ofensiva del capital en los 80 modificó sustancialmente el escenario y debilitó la respuesta desde el Sur, con algunos países que intentaron soluciones autónomas desde sus posiciones relativas de “fortaleza”, especialmente de quienes sustentaban cierta ventaja asociada a las tenencias de petróleo.

La crisis de la deuda en los 80 es resultado directo de la especulación y triangulación del excedente generado por el alza de los precios del petróleo y muchos países del Sur fueron víctimas de la crisis del endeudamiento externo, condicionando su desarrollo futuro, en algunos casos hasta el presente.

La ilusión del desarrollo capitalista en el Sur llevó a debilitar el movimiento de países del Sur y algunos se integraron al bloque del Norte, casos de México y Chile, incorporados a la OCDE. La ilusión del desarrollo se agigantó con la caída del muro de Berlín (1989) y la desarticulación de la URSS (1991), especialmente con las concepciones de “fin de la historia” y su consecuente triunfo del capitalismo en el este de Europa. La ilusión del desarrollo capitalista se instaló en varios países y debilitó la articulación anticolonial, antiimperialista y anticapitalista, que era hegemónica en los 60 y 70. En los 80 y 90 se habilita la ilusión del desarrollo capitalista, agigantado con la concepción de países “emergentes”, calificativo que surge para expresar a los territorios en capacidad de ofrecer alta rentabilidad al capital con límites a su rentabilidad en el Norte, especialmente con la crisis estallada en 2007/08. La ilusión del desarrollo capitalista se generalizó en contraposición de la perspectiva de liberación al inicio del G77.

NUEVAS EXPECTATIVAS POR EL CAMBIO Y SEDE BOLIVIANA

A comienzos del Siglo XXI emergen nuevamente expectativas de cambio político, especialmente en América Latina, con resistencias populares extendidas que suponen nuevas experiencias de gobiernos que critican el modelo neoliberal hegemónico hasta entonces, avanzando en nuevos procesos, algunos incluso de carácter anticolonial, anticapitalista y antiimperialista. El cónclave de Santa Cruz será ocasión ideal para mostrar los logros del gobierno plurinacio-

nal de Bolivia, como ejemplo visible de los cambios operados en Nuestramérica.

Entre otras experiencias regionales, sobresalen los cambios constitucionales que recogen el ideario del “vivir bien” o el “buen vivir”, casos de Bolivia o Ecuador; la participación popular en la gestión política, recogida por las constituciones de Venezuela, Bolivia o Ecuador; los derechos de la naturaleza y la pacha mama reconocidos en los textos constitucionales; la demanda por una nueva arquitectura financiera que surge desde la UNASUR y el ALBA-TCP, y como ella la perspectiva de una integración alternativa al modelo de integración subordinada que sostenía el ALCA o la difusión de TLC o tratados bilaterales en defensa de la inversión. Esas experiencias de integración favorecen el surgimiento de la CELAC, que excluye deliberadamente a EEUU y a Canadá. El ALBA-TCP, es quizá el instituto de integración más avanzado, que incluye articulación energética, financiera y comercial con pagos en monedas locales, el SUCRE.

En el presente la ofensiva del Norte agiganta las desigualdades entre Norte y Sur del mundo. Pero también la ilusión del desarrollo capitalista en el Sur agiganta las diferencias entre algunos países del Sur, receptores de inversiones externas y una gran parte del Sur que profundiza su atraso y subdesarrollo si no intenta una lógica alternativa al desarrollo, que es parte de la experiencia que Bolivia y otros países sustentan, por ejemplo, en el programa de seguridad con soberanía alimentaria; de soberanía energética expresada en las nacionalizaciones de los hidrocarburos del 2006 y el proceso de autonomía e independencia que permite en Bolivia que su pueblo “coma más y mejor” tal como lo expresan documentos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

El Sur del mundo necesita independizar su crecimiento y desarrollo de la demanda mundial de tierras y recursos naturales provenientes del Norte, y pretender un desarrollo autónomo, independiente, en la búsqueda de la cooperación Sur-Sur, retomando el espíritu originario del G77 y aprendiendo de medio siglo de nuestra historia. Se necesita promover una mayor articulación del Sur en defensa del medio ambiente, para un desarrollo en armonía con la naturaleza, en defensa de los bienes comunes, tal como concluyó la Cumbre Popular de la Tierra que sesionó en Cochabamba, Bolivia, en abril del 2009. Es importante sumar y comprometer a todos los países del G77+China en este propósito, alejando la ilusión del desa-

rollo capitalista y desafiarnos a pensar un mundo anticolonial, anticapitalista y antiimperialista, por el socialismo. Es la ocasión para pensar la agenda post 2015, más allá de los Objetivos del Milenio, que el capitalismo hegemónico impide su realización y materialización. La experiencia del ALBA-TCP indica que es posible otra experiencia de cooperación Sur-Sur y necesitamos habilitar una agenda para los próximos 50 años que asuma el programa de la liberación social y la articulación soberana en materia de alimentos, energía o las finanzas.

En estos cincuenta años, el Grupo de los 77, más allá de valoraciones específicas de países o grupo de países en su seno, se ha convertido en un actor importante en las relaciones económicas internacionales, y en un iniciador principal de ideas, conceptos e iniciativas relacionadas con el desarrollo y la cooperación internacional. Es la ocasión para que desde Bolivia surjan nuevos ejes y propuestas para la liberación nacional y social desde una perspectiva integradora desde el Sur, para una cooperación internacional articulada desde nuestro Sur.

Las reuniones previas marcan el camino hacia acuerdos posibles que interesa potenciar, tal como la importancia de elaborar una agenda de desarrollo post-2015 que satisfaga a los países del G77+China; la erradicación de la pobreza, como el mayor desafío que enfrenta el mundo hoy; la cuestión del endeudamiento de los países más empobrecidos; la situación del empleo y los ingresos populares; el cuidado del medio ambiente y la materialización de las resoluciones abordadas en las cumbres oficiales y populares, caso de Río+20 y otras; la situación especial de las mujeres y los niños.

Especial atención merece la Agenda de Desarrollo Post-2015, para abordar los desafíos que enfrentan los países en desarrollo, como el acceso universal a los servicios modernos de energía; garantizar la seguridad alimentaria con soberanía, y la nutrición; el empleo pleno, productivo y el trabajo digno para todas y todos, con puestos de trabajo cualificados y la formación; la situación de la agricultura familiar y comunitaria en un marco de desarrollo rural para satisfacer necesidades populares, junto a la creación de capacidad productiva rural y promoviendo ciudades sostenibles y asentamientos urbanos con desarrollo de infraestructura suficiente y adecuada para el hábitat popular y la armonía con la Naturaleza.

Se trata de pensar en un programa que aúne las aspiraciones del Sur, en momentos de crisis del capitalismo para relanzar con

más fuerza el proyecto imaginado hace 50 años por el G77, pero en las nuevas condiciones de luchas emancipadoras de los pueblos del Sur del mundo.

CRISIS ALIMENTARIA, SOBERANÍA Y AGENDA POST 2015

Al momento de asumir la presidencia del G77+China, Evo Morales señaló diez tareas fundamentales para un nuevo mundo. Entre ellas, señaló el propósito de “Erradicar el hambre de los países del sur con soberanía alimentaria”. Vale destacar la cuestión de la “soberanía alimentaria” propuesta por el titular del gobierno boliviano, ya que en general, en la terminología usual se alude a la “seguridad alimentaria”.

La seguridad alimentaria parte de una concepción de resolución del problema desde arriba, en general a cargo del Estado y sin cuestionar el modelo productivo del agro negocio que hoy impera en el sistema mundial. El concepto apela a las políticas públicas para asegurar alimentación a la población, sin cuestionar el modo de producción ni los principales beneficiarios del modelo, por caso las transnacionales de la alimentación o la biotecnología. Mientras que la soberanía alimentaria es producto de la lucha de los pueblos, los trabajadores, los campesinos, los indígenas. Es una categoría creada por el movimiento popular campesino a fines del siglo XX, cuando la Vía Campesina despliega su lucha contra la incorporación de la Agricultura en las negociaciones de la OMC. No sólo significa que los pueblos deciden qué comer, sino cómo se produce y quién lo produce. También implica la lucha por la tierra (reforma agraria popular), el agua, o las semillas.

Privilegiar la “soberanía alimentaria” no niega en la coyuntura resolver la “seguridad alimentaria”. La soberanía alimentaria se asocia al Vivir Bien, es una cosmovisión de carácter civilizatorio, mientras que la seguridad alimentaria puede favorecer el vivir mejor (propio del orden capitalista). Por eso creemos que la discusión debería centrarse en el tema de la soberanía alimentaria (sin descuidar la seguridad que, como dijimos, también es importante), sobre todo hoy cuando lo que existe es la destrucción del campo en el ámbito mundial y la imposición de un determinado patrón de consumo que tiene consecuencias serias en materia sanitaria.

Es un eje central asegurar en el ámbito nacional, regional e internacional la seguridad alimentaria con soberanía y el desarrollo

agrícola familiar y comunitario como parte integrante de la agenda internacional de desarrollo. Ello supone una financiación sostenida y una mayor inversión dirigida a aumentar la producción mundial de alimentos. Vale destacar en este sentido la importancia del Año Internacional de la Quinoa en 2013. La biodiversidad de la quinoa y su valor nutricional hacen que sea esencial para la seguridad alimentaria y la nutrición y para la erradicación de la pobreza, así como la promoción de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas de los Andes, lo que contribuye a la consecución de la seguridad alimentaria con soberanía, la nutrición y la erradicación de la pobreza. Se trata de profundizar la sensibilización sobre la producción de quinoa, su contribución al desarrollo social, económico y ambiental, y para compartir las buenas prácticas en la ejecución de las actividades del año, tal como se indica en el plan maestro de actividades para el año, titulado “Un futuro sembrado hace miles de años”, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El G77+China necesita enfatizar en las múltiples y complejas causas de la crisis alimentaria que se producen en las diferentes regiones del mundo, afectando a los países en desarrollo, especialmente aquellos que son importadores netos de alimentos, y sus consecuencias para la seguridad alimentaria con soberanía y la nutrición, que requieren una respuesta global y coordinada en el corto, mediano y largo plazo de los gobiernos nacionales y de la comunidad internacional. Las causas profundas de la inseguridad alimentaria y la ausencia de soberanía alimentaria hay que fundamentarlas en la pobreza y la inequidad. En definitiva, los precios internacionales de los alimentos son establecidos en mercados mundiales influidos por la especulación y el carácter dominante de las corporaciones transnacionales de los principales países capitalistas del Norte desarrollado. Esos mercados dominados por los monopolios transnacionales son los responsables de la volatilidad de los precios de los alimentos y representan un serio desafío a la lucha contra la pobreza y el hambre y para los esfuerzos de países en desarrollo para lograr la seguridad alimentaria con soberanía y la nutrición.

La seguridad alimentaria con soberanía y la nutrición son dimensiones esenciales del desarrollo sostenible. Los países en desarrollo son vulnerables a los impactos adversos del cambio climático que amenaza aún más la seguridad de los alimentos. El logro de la seguridad alimentaria y el cambio hacia una agricultura sostenible,

incluyendo el aumento de la producción de alimentos y la inversión agrícola, el aumento de la capacidad productiva y la mejora de la gestión agrícola y el desarrollo y el apoyo a la agricultura familiar y los pequeños propietarios agrícolas en países en desarrollo, son temas cruciales a sostener desde el G77+China. Al remitir a la agricultura, se la entiende en sentido ampliado, incluyendo la producción agropecuaria, la pesca y la silvicultura, en tanto un sector de mucha importancia en muchos países en desarrollo y fundamental para la supervivencia de millones de personas. Es preocupante la situación de países que se han convertido en importadores netos de alimentos como resultado de las prácticas de liberalización de la economía que afectaron producciones locales, especialmente de alimentos.

Un problema lo constituyen los subsidios agrícolas y otras distorsiones al comercio de los países desarrollados, que han perjudicado gravemente el sector agrícola en los países en desarrollo, y limita la capacidad de este sector clave para contribuir significativamente a la erradicación de la pobreza, el desarrollo rural y sostenible, sostenido, inclusivo y equitativo del crecimiento económico. Eliminación de esas subvenciones es una parte fundamental de los esfuerzos mundiales para promover la agricultura, el desarrollo rural y la erradicación de la pobreza y el hambre. Es preocupante en ese sentido el acceso al mercado para los países en desarrollo de los productos agrícolas en sentido amplio.

En fin, desde Bolivia y con la experiencia del cambio político regional, el G77+China puede retomar el camino originario por la emancipación de los pueblos contra la dominación imperialista que surge de la articulación de las transnacionales, los principales Estados del capitalismo mundial y las organizaciones multilaterales del sistema mundial capitalista.

La Paz, 30 de abril de 2014



1º ENCUENTRO INTERDISCIPLINARIO SOBRE CUESTIÓN SOCIAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS*

CAPITALISMO TARDÍO, PROCESOS SOCIO-POLÍTICOS Y HEGEMONÍA EN
AMÉRICA LATINA

Dr. Julio Gambina:

En primer lugar, queda claro que tenemos que estudiar portugués, ya que el aporte de Franci Gomes Cardoso resulta de gran interés para entender la cuestión en discusión en nuestra región y podemos perder su riqueza por desconocimiento del idioma del pueblo hermano del Brasil.

Resulta un tema clave de este tiempo histórico el dialogo más cercano con nuestros vecinos del pueblo brasileño, por las cercanías fronterizas y la necesidad de construir un destino común.

Uno de los grandes temas que divide a Nuestramérica es la cuestión comunicativa, es el tema del lenguaje, y no solamente con Brasil. En Paraguay, la mayoría del pueblo paraguayo es por lo menos bilingüe, cuya lengua materna es el guaraní. Ello supone un anclaje y una tradición cultural, y en general, desde Argentina no solo no entendemos el idioma, sino la tradición cultural que supone. Por su parte, Bolivia es un país plurinacional, que como tal reconoce los idiomas de los pueblos originarios, entre ellos el aymara y el quechua, junto a otras lenguas. Incluso el castellano que adoptan los pueblos en Nuestramérica no necesariamente supone una misma forma de expresión o gramática.

* Encuentro realizado en Tandil, 30 y 31 de mayo de 2014. La conferencia inaugural estuvo a cargo de las Dras. Franci Gomes Cardoso (UFMA, Brasil) y Corina Rodríguez Enríquez (CIEPP-CONICET) y del Dr. Julio C. Gambina (FISYP-UBA), cuya intervención transcribimos.

Por eso, insistamos, en el nuevo tiempo social y político contemporáneo de Nuestra América uno de los problemas remite a la cuestión cultural y especialmente al idioma, base de la comunicación entre nuestros pueblos. En ese sentido, Corina nos recordaba que el fundamento de las políticas públicas tiene un idioma común, que es el de las organizaciones financieras multilaterales, el Banco Mundial específicamente. Por ello es que las clases dominantes, empleando la terminología que utilizó Franci, tienen un lenguaje común acorde a la época, lo que les facilita la hegemonía.

El idioma y las formas de su desarrollo constituyen sentido común de época, en el sentido gramsciano que remite a la construcción de la hegemonía y dominación de la burguesía y el orden capitalista, la ganancia y la acumulación sempiterna. Así, lo normal es la explotación. El lenguaje de la dominación se impone sobre las clases subalternas y la contra hegemonía necesita de unos pueblos con capacidad comunicativa para el ejercicio de políticas de emancipación.

Entre las políticas asumidas por las clases dominantes en nuestros países están las políticas sociales, que adquieren el carácter de masivas, no necesariamente universales, ya que no son “derechos”, sino “compensaciones” ante la acumulación en un ciclo de crecimiento económico durante este comienzo del Siglo XXI. Estas políticas son facilitadas con grandes recursos fiscales provenientes de una coyuntura que incluye cuantiosos recursos derivados de las exportaciones de materias primas con precios internacionales en alza en el ciclo reciente.

No se trata solo de políticas sociales aplicadas a países con gobiernos a la izquierda. Pueden observarse su aplicación con gobiernos identificados de derecha (México, Colombia o Chile), también por gobiernos asociados con una política de centro o centro-izquierda (Brasil, Argentina y Uruguay), además de países identificados como de izquierda (Bolivia, Ecuador o Venezuela).

No se trata de igualar los sentidos políticos utilizados por cada gobierno, pero pretendemos llamar la atención sobre el “lenguaje de las clases dominantes” a través de políticas sociales masivas, de carácter compensatorio. Es decir, compensan lo que descompensa el modelo productivo y de desarrollo, es decir, la forma concreta que asume el desarrollo del capitalismo contemporáneo en condiciones de crisis y en nuestros países.

El crecimiento de Nuestramérica está más asociado a la crisis capitalista y la búsqueda de rentabilidad del capital hegemónico en otros territorios, más allá del capitalismo desarrollado, que en procesos de gestación de nuevos modelos productivos asociados a las necesidades de la población de abajo, de los trabajadores y campesinos, de los empobrecidos y explotados, lo que constituye una asignatura pendiente, más allá de las experiencias en curso que valen identificarse. En este sentido remito a los intentos por recrear el modelo económico en el marco de la lucha por construir un proyecto socialista en Cuba, o el reconocimiento constitucional boliviano a la economía comunitaria, o a los derechos de la naturaleza del nuevo constitucionalismo boliviano o ecuatoriano, y las expectativas de un programa transformador explícito en esas recientes constituciones por el “vivir bien” o el “buen vivir”.

El capitalismo contemporáneo en crisis chantajea a la sociedad mundial para salir de la crisis con más orden capitalista. Cuando digo chantaje, es porque hay una acción ideológica de disputa de la hegemonía para que las clases subalternas, los explotados, los pobres, los de “abajo”, acepten de hecho, al no movilizarse, la política hegemónica. No se trata de un consenso explícito, militante, pero predomina una conciencia social pasiva de que no se puede hacer otra cosa. Y curiosamente, los profesionales de las ciencias sociales –y específicamente los trabajadores sociales– estamos convocados por las clases dominantes a ser un “instrumento de contención del conflicto social”, lo que es altamente funcional a una política social masiva compensatoria, y a los objetivos de las clases dominantes, para que “los de abajo” estén convencidos que no se puede hacer otra cosa, salvo compensar la problemática social.

Lo que pretende el orden capitalista es el consenso en cada momento histórico, y en el tiempo que nos toca transitar, analizar y criticar es la apropiación de las políticas sociales para el proyecto de dominación. Claro que se puede hacer política social alternativa, contra hegemónica, que aún parecida a las del molde difundido por los organismos internacionales, tienen objetivos y método propio. Es el caso especial de las “misiones” en Venezuela, por solo mencionar el mejor caso de una política social ejercida desde afuera de la propia burocracia estatal.

Es una cuestión cuantificable y que se mide entre el monto invertido en política social y el resto del gasto y de la inversión pública. En Argentina, en mayo de 2014, se anunció un incremento

del 40% para los beneficios de las políticas de transferencias, de asignaciones para beneficiarios de políticas sociales, por un total de quince mil millones de pesos, casi 1.800 millones de dólares al tipo de cambio oficial. En simultáneo, el parlamento aprobó una compensación a Repsol por 5 mil millones de dólares. Luego, el acuerdo con el Club de París significa compromisos de pago por 9,7 mil millones de dólares. Empezamos el mes con quince mil millones de pesos para políticas sociales, y terminamos mayo con catorce mil millones de dólares para Repsol y el Club de París. ¿Qué es lo principal en la Argentina? ¿La transferencia de recursos fiscales a sectores vulnerables o a los sectores dominantes?

Por eso hablo de política social compensatoria y de política social masiva. Son siete millones de beneficiarios de programas de políticas sociales, más 5 millones de jubilados nacionales que perciben la mínima, un ingreso que está por debajo de la canasta de básica de alimentos. El debate estadístico de la situación de la pobreza queda muy lejos de la realidad. Muy bien planteó Corina, que hay que discutir y reflexionar sobre esto que cada día se naturaliza más: la pobreza. Estando en un ámbito de ciencias sociales, lo peor que nos puede ocurrir es que naturalicemos las condiciones de vida de una parte muy importante de la población.

Es una lógica que se verifica en el ámbito mundial y remite al crecimiento de la desigualdad generada por el orden capitalista en nuestros días. La información dice que ochenta y cinco personas, ochenta y cinco fortunas individuales tienen la misma riqueza que el 50% de la humanidad (3.500 millones de personas).

El modo de producción, la forma de producir, el capitalismo contemporáneo, genera esa brecha creciente de desigualdad. Se difunde en estos días el texto de Thomas Piketty, autor de *El Capital en el Siglo XXI*, voluminoso texto sobre variables económicas y las condiciones de vida de la población en el mundo. Desde la simplificación algunos le asignan la calificación de ser el “nuevo Marx”. El mismo economista francés lo niega al señalar que apenas leyó el *Manifiesto Comunista*, y algo de *El Capital*. Lo cierto es que ha reunido un cúmulo muy importante de datos, donde la conclusión principal es que estamos viviendo un tiempo donde los hijos de los ricos serán más ricos que sus padres, porque su condición patrimonial les genera condiciones en tiempos de recesión o de auge para seguir acrecentando su riqueza y, por lo tanto, el resto de la población continuará en la pobreza.

Una de las últimas preguntas que nos había planteado Corina, era sobre si estas políticas sociales puede sacarnos de pobres y servir para una mejor calidad de vida de la población. Los estudios históricos, como la tesis que presenta Franci, sustentada en Marx y Gramsci, con las actualizaciones de época de sus propias investigaciones, nos dice que el tema es irresoluble en los marcos del capitalismo. Y estudios no marxistas, como el que nos trae Thomas Piketty, desde otro ángulo confirman.

El mundo es cada vez más desigual, y además, existe una fuerte ofensiva de las clases dominantes, tal como se manifiesta en estos momentos en la Asamblea anual de la OIT, reunida ahora en Ginebra. Allí se discuten temas trascendentes, como el derecho de huelga. La OIT es un organismo tripartito, donde se juega la correlación de fuerzas, ahí están los gobiernos, los empresarios y los trabajadores. Todos en supuesta igualdad de condiciones, que reconoce en estos últimos cuarenta años una brutal ofensiva del capital sobre el trabajo. Un proceso iniciado en América Latina con terrorismo de Estado desde los Golpes de Estado (Chile y Uruguay en 1973 y luego Argentina en 1976, y varios otros en la región). Por ello, vale considerar la ofensiva del capital y el carácter clasista que en esencia sostiene el Estado en nuestro tiempo.

Conviene analizar el impacto de la militarización y su violencia sobre la población en la conciencia social, en la imposición del miedo, a la desaparición física, a la hiper inflación en procesos posteriores, o a la desocupación en las condiciones del desarrollo histórico en la Argentina entre 1976 y la crisis del 2001, e incluso su proyección cultural hasta nuestros días. El resultado es la desmovilización y desorganización social, asociada a procesos de desideologización y despoltización de buena parte de la sociedad, totalmente funcional al clima cultural que demandan las clases dominantes en el orden capitalista.

Esto explica que hoy el salario promedio de la Argentina sea el equivalente al salario promedio de mediados de la década del 40. Cuando la estadística oficial muestra el crecimiento desde el piso del 2001, se escamotea el proceso de serrucho con tendencia a la baja operado sobre todo desde el fin del ciclo 1973/4. Ese último año muestra el pico de la distribución del ingreso en la Argentina, momento en que se establece una ley de contrato de trabajo favorable a los trabajadores. En 1976 acceden Martínez de Hoz y el Consejo Empresario Argentino al Ministerio de Economía y hace

realidad el programa de máxima de los grupos económicos y las corporaciones transnacionales.

Lo señalado puede verificarse en la Encuesta de Grandes Empresas del INDEC (ENGE), la que muestra el crecimiento, la extranjerización y la transnacionalización de la cúpula empresarial argentina. Son las transnacionales, los grupos económicos y la burguesía local crecientemente vinculada al capitalismo del delito (drogas, armas, trata de personas, especulación, etc.).

CAMBIO POLÍTICO EN NUESTRAMÉRICA

Ese es el capitalismo de época. Eso es lo que hay que estudiar, y nuestra mesa está convocada a discutir la “cuestión social”, los procesos socio-políticos en el escenario de América Latina.

A mí me parece que el dato central que estamos desafiados a discutir a mediados de 2014, es que en estos años estamos transitando un cambio político con relación a las décadas pasadas, la segunda mitad de los años 70 y los 80 y 90. Sí las dos últimas décadas son las décadas del ajuste estructural, de la reestructuración regresiva del capitalismo, en la actualidad se siguen aplicando esas políticas de ajuste, ahora a escala mundial. Son las políticas de austeridad en Europa o el ajuste generalizado desarrollado en los principales territorios del capitalismo contemporáneo.

Mirando nuestra experiencia de cambio político a comienzo del Siglo XXI, señalamos que así como hace dos décadas sugeríamos al pueblo europeo que se mirara en el espejo latinoamericano, que anticipaba su presente, ahora también necesita mirarse en nuestro espejo, especialmente ante el atajo fascista de algunas apuestas para superar la crisis de época. Europa necesita como entonces Nuestramérica, constituir los no al ajuste reaccionario y darle paso así a la constitución de un sujeto político popular amplio y diverso que geste el cambio político en Europa, tal como ocurrió y ocurre en Nuestramérica.

Franci hablo de un sujeto constituido por trabajadores en actividad e inactividad. Las ciencias sociales en América, la intelectualidad americana, esta desafiada para estudiar el nuevo sujeto del cambio. Creo que estamos muy atrasados, pues estamos más preocupados en tesis doctorales y “papers” que sean aceptados por la academia, que por interpretar la realidad de cambio político en Nuestramérica. Nosotros sabemos que los pueblos originarios tie-

nen 500 años de antigüedad, pero no tuvieron visibilidad política para la conciencia social popular hasta los últimos veinte años, y uno de sus hijos está gobernando Bolivia. No somos conscientes, ni en Argentina ni en Brasil, que nosotros también somos “plurinacionales”, porque aquí también vive la población mapuche, los whichis, los qom, y un conjunto amplio de pueblos originarios.

¿Porque nosotros reproducimos el mensaje de las clases dominantes de que descendemos de los barcos? Porque América Latina y el capitalismo mundial se constituyó sobre la base del genocidio de los pueblos indígenas. No hay Revolución Industrial, sin el oro y la plata de América.

¿Constituye una antigüedad traer a cuento estos temas? ¿Porque creció América Latina durante estos últimos años más que la economía mundial? Por el nuevo Potosí que supone la extracción de recursos naturales en nuestro territorio, sea Pascua Lama (suspendida, por ahora por las negativas surgidas desde Chile), Veladero (San Juan). Argentina nunca fue un país minero, pero las principales inversiones extranjeras son para la mega-minería a cielo abierto. También la revolución sojera de la pampa húmeda y que se extiende sobre un conjunto de economías regionales. Las políticas estratégicas a futuro pasan por el reinado de la soja, por Monsanto, Dreyfus, Cargill, las nuevas clases dominantes de Argentina y de Brasil.

No hay diferencia en ese sentido asociado al modelo productivo en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y crecientemente Bolivia, que intenta frenar la expansión sojera a otras producciones agrarias. Nuestra región en el Sur de América se constituye crecientemente en el territorio verde, el del capitalismo verde que promocionan los organismos internacionales y que gestan la subordinación de la producción rural a la hegemonía de las transnacionales de la biotecnología y los alimentos.

Estos son los que organizan la superestructura de la que nos hablaba Franci, son los que generan el consenso de la sociedad, con la fractura hidráulica (*fracking*) en el yacimiento de Vaca Muerta, para extraer gas y petróleo no convencionales. Para llenar de gas y petróleo a una Argentina “potencia”, y abastecer el modelo productivo primario-exportador consolidado en los últimos tiempos. Para eso se necesitan dólares, por eso hay que ser pagadores seriales de la deuda pública, por eso hay que acordar con el Club de París. Por eso tienen sentido los gastos diferenciales que señalábamos en materia social y de deuda.

CONSTRUIR LO ALTERNATIVO

Por eso es importante reflexionar sobre este tiempo histórico, hay que discutir mucho más cuál es el sujeto, no cuál va a ser. Hay que estudiar los sujetos actuales, concretos, que están transformando la realidad, aunque la prensa (como negocio de la clase dominante) nos quiera ocultar los procesos. Por eso tanta propaganda contra Venezuela, Bolivia, Ecuador y contra Cuba, los proyectos más emblemáticos. No son procesos ideales, perfectos, son reales, de construcción de nuevas subjetividades y nuevos procesos sociales. Llenos de dificultades porque nadie sabe cómo se construye la sociedad emancipada; no es lo mismo emprender la construcción de una sociedad emancipada, que subordinarse a lo que es posible.

Lo “posible” se limita y contiene en una política social compensatoria, “cuidemos eso, porque sí eso no está, va a venir la derecha y lo sacará”. No, la derecha sostiene la política social masiva en México, Colombia, Perú, o Chile, porque la política social compensatoria es altamente funcional a esta etapa del capitalismo, que necesita contener el conflicto social. Volvamos a insistir que no se trata de identificar los propósitos de la política social en procesos diferentes e incluso contradictorios, sino de estudiar la constitución de sujetos contenidos en los objetivos de las clases dominantes, o alentados a profundizar una consciencia para la transformación social.

Eso nos lleva a interrogarnos sobre: ¿Por qué no hay más conflicto social explícito? Y buena parte de esa respuesta está en que la universidad pública, que es hegemónica en la Argentina, esta colonizada por un proyecto académico de carácter neoliberal. Porque estamos en una Universidad que promueve la ignorancia del “paper” y la evaluación para continuar con las reglas de la continua adecuación a la lógica cuantitativa del consumismo y el productivismo, en este caso, académico. Ese es el camino del crédito académico. En contrapartida sostenemos una Universidad comprometida intelectualmente con la nueva subjetividad popular de toda Nuestramérica.

El tema del sujeto es clave, no se puede entender el nuevo tiempo político sin la dinámica popular. La dinámica popular generó nuevos gobiernos y expectativas en la región, pero el problema es cuando los movimientos populares se constituyen en Estado, y como se trata del Estado capitalista, termina absorbiendo la dinámica de lucha y conflicto popular, y por lo tanto los des-politiza y

des-ideologiza. Coopta a buena parte de sus dirigentes políticos, los compra, aún contra la propia voluntad, gente que cobra ingresos creyendo que realiza una “disputa al interior del aparato estatal”. El problema es cuando el movimiento popular se identifica con el gobierno, pierde dinámica de protesta, de profundización de la perspectiva emancipatoria. Muy distinto es cuando el movimiento constituido en Estado asume el papel de este como instrumento para la transformación social y por lo tanto en constructor de una subjetividad consciente por el cambio político y económico.

Estamos en América, que está en una disputa: sí el sujeto popular en lucha en los 80 y 90, que constituyó la esperanza, profundiza su dinámica emancipadora en el camino de las reformas constitucionales del 2009 en Ecuador y Bolivia, en el camino de una integración alternativa del ALBA-TCP. En la dinámica que se esbozaba en la nueva arquitectura financiera regional con el Banco del Sur, prometido en el 2007, que aún duerme el sueño de los justos. En la construcción de una moneda Nuestramericana.

Vivimos un momento de crisis económica, financiera, monetaria, integral; la crisis mundial actual. Son todas ideas que permitieron en estos 15 años, en este nuevo tiempo del Siglo XXI, que el movimiento popular constituyera los nuevos sí para el cambio. Porque hoy hay un programa por los sí emancipadores en América Latina, que lamentablemente no son estudiados por la universidad pública, ni en la Argentina ni en la región. Son los programas de la soberanía alimentaria, que es una construcción de la Vía Campesina, del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST), que no surgen necesariamente de la Universidad. Una universidad que viene de la tradición de la Reforma de 1918, que pretendía asumir el programa del movimiento popular para la transformación. La soberanía energética es un proyecto que viene de los trabajadores de la energía, con su planteo del derecho a la energía. Es necesario luchar por su des-mercantilización.

La universidad está cada vez más mercantilizada. Yo soy un profesor flexible de la universidad pública argentina, y mis ingresos lo definen más los posgrados que los grados. Hay una tendencia al deterioro del grado y a la jerarquización del posgrado. Y paulatinamente lo vamos naturalizando, la educación va dejando de ser un derecho. Y obviamente, la energía es eso, una mercancía. El gas para los pobres es el más caro, el de la garrafa. Es la realidad de nuestro tiempo histórico. Con lo cual hay que trabajar con las cate-

gorías surgidas del movimiento popular. Y hay que discutir teóricamente si la única salida que tenemos es la industrialización de la ruralidad subordinada a transnacionales, o si hay que desarrollar más la agricultura familiar, comunitaria. Y para sorpresa de muchos, la FAO dice que el 60 % de los alimentos que se consumen en América Latina provienen de la agricultura familiar, por lo cual no es cierto que el modelo de sojización, que supone exportar tierra, nutrientes, agua al mundo, es lo mejor que le puede pasar a los pueblos de América. Hay que estudiar estos procesos y fenómenos desde las ciencias sociales, y más que justificar las políticas sociales, estudiar la subjetividad de las clases populares, sobre como subsisten, luchan y se organizan nuestros pueblos. No subsisten por las políticas sociales, sino con mecanismos de autogestión que desarrollan en la práctica cotidiana de sobrevivencia. También aludimos a la lucha por la soberanía ambiental, que nos independice de la lógica a la que somos sometidos por las clases dominantes a escala mundial.

En el 2005 en Argentina celebramos el *No al ALCA*, se le dijo no a la voluntad de Estados Unidos de construir un área de libre comercio en la región. Hoy, 2014, estamos a un paso de que se suscriba un acuerdo del Mercosur con la Unión Europea. Está en las noticias cotidianas y sin embargo no aparece la resistencia del mismo modo que con el *No al ALCA*. ¿Qué tiene de mejor el imperialismo europeo que el estadounidense? ¿Son mejores las transnacionales europeas que las estadounidenses? ¿Qué es lo que está ocurriendo en América Latina que no podemos instalar una política de rechazo al libre comercio?

La semana pasada el CIADI sacó una nueva sentencia contra la Argentina: la condenan a pagar 40 millones –que más intereses se llega a los 60 millones– a una empresa de agua. ¿Qué hace la Argentina todavía en el CIADI? Bolivia, Ecuador y Venezuela se retiraron del CIADI, y Brasil nunca suscribió el protocolo de pertenencia. ¿Porque tenemos que estar en esa institucionalidad dominante? ¿Porque hay que celebrar el pago al Club de París? ¿Porque a Repsol? ¿Porque no se puede cambiar esa lógica?

LOS DESAFÍOS

Estamos desafiados a mirar a la realidad de frente, romper con la lógica de creer que en las universidades estudiamos la realidad, porque lo que hacemos es reproducir mayoritariamente la lógica de las clases dominantes. Tenemos que criticar la realidad; si somos

capaces de eso, podemos llevar adelante la disputa hegemónica a la que nos convocaba Franci, pues disputar la hegemonía es cambiar el sentido común de la sociedad. Y la Universidad no tiene que reproducir el sentido común de la sociedad, tiene que contribuir a cambiar ese sentido e investigar nuevos fenómenos en materia de sujeto popular, porque son los nuevos sujetos los desafiados a llevar adelante los cambios en América Latina. Pero no alcanza con el sujeto, hace falta tener programa, ideas. En la universidad creemos estar en la fábrica de conocimientos, lo que es un error. La fábrica es el propio movimiento popular. Hay que indagar lo que allí acontece, hay que quitar el velo de lo que ocurre en la dinámica social en Nuestra América y el mundo.

Eso tampoco alcanza. Hay que estudiar el nuevo tiempo político y social, pues el capitalismo está en crisis, y todo indica que la crisis va a ser prolongada. Lo que el capitalismo pretende es salir de la crisis con más capitalismo, posibilidad que depende de que la sociedad mundial no discuta un proyecto social emancipador. Jamás Marx escribió sobre el proyecto emancipador, sus formas concretas, tampoco Gramsci ni otros teóricos de la revolución, porque es una construcción popular. El proyecto emancipador en general se ha construido sobre la crítica de la realidad, estimulando prácticas sociales emancipadoras, práctica social y teórica. Y por eso estamos desafiados, para ser protagonistas junto al movimiento popular a gestar práctica teórica emancipadora, y ser funcionales a la expectativa de cambio político que hoy está en discusión en Nuestra América.

Tandil, mayo del 2014



EXPECTATIVAS CON LOS BRICS

Existen expectativas, en el país y en la región por las presencias en estos días de los gobernantes de Rusia y de China, dos de los grandes que disputan su lugar en el poder político y económico mundial. Vladimir Putin y Xi Jinping, pasarán esta semana por Argentina, donde se esperan inversiones externas para sostener y potenciar la economía local en recesión.

Entre otras inversiones, están las comprometidas por China las represas en el Sur y la red ferroviaria, también las probables en hidrocarburos que pudiera ofrecer Rusia. Por ello es que el Senado de la Nación dio media sanción a una ley de inmunidad a las inversiones de otros países vía acuerdos de reciprocidad con bancos centrales. Un proyecto empujado por el Poder Ejecutivo con amplio acuerdo parlamentario y que se transformará en Ley en la Cámara de Diputados en los próximos días.

La lógica de la inmunidad para otorgar seguridad jurídica a las inversiones externas reproduce la esencia de la institucionalidad de los tratados de libre comercio, o los tratados bilaterales de inversión, todos en defensa de inversores externos y por los cuales la Argentina es el país más demandado ante el CIADI.

La presencia en nuestro de los gobernantes ruso y chino país se deriva de la participación de éstos en la reunión de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) en Fortaleza, Brasil, el 15 y 16 de julio próximo.

El imaginario de analistas y periodistas vuela en la bondad que supone incorporarse como país o región al BRICS, que por ahora remite a un agrupamiento de países como bloque como beneficiarios de inversiones externas de elevada rentabilidad y con escasa institucionalidad. Es verdad que pueden e intentan funcionar articuladamente y por eso promueven la constitución de un banco para la promoción de inversiones de sus empresas locales en todo el mundo, particularmente en el Sur. El modelo a imitar es el del BNDES de Brasil, sustento financiero de las translatinas brasileñas.

No solo aspiran los BRICS a recibir inversiones, sino a disputar la valorización de capitales con financiamiento propio para intervenir en la transnacionalización, valorización y acumulación de capitales.

CAPITAL PRODUCTIVO Y ESPECULATIVO: DOS FASES DE UN MISMO PROCESO

Más allá de los intereses económicos directos, de los países de América Latina y el Caribe con Rusia y China, vía inversiones, préstamos o comercio, la intencionalidad comunicativa, es decir ideológica, pretende hacer visible una estrategia de desarrollo capitalista que intenta mostrarse diferenciada a la hegemónica por la tríada imperialista de EEUU, Europa y Japón.

La razón comunicativa apunta a desmarcar el modelo productivo de los BRICS respecto de la especulación exacerbada en tiempos de una crisis que iniciada en 2007/8 no termina de ser superada. Es un dato que la burbuja financiera sigue expandiéndose y puede explotar nuevamente, lo que servirá como excusa para potenciar el ajuste y la regresiva reestructuración del orden capitalista, tal como se generaliza ahora en territorio europeo, último bastión del reformismo capitalista, Estado benefactor mediante.

La afirmación resulta más vigente ante la situación generada por el fallo estadounidense contra la Argentina. Se intenta mostrar la existencia de dos caras del capitalismo. Una despreciable radicada en la especulación financiera, los fondos buitres y otra apreciada en lo productivo, como si pudiera escindirse la producción de la circulación. Como si las transnacionales petroleras, mineras, tabacaleras, farmacéuticas, automotrices, de la comunicación, la energía o el transporte, entre otras, fueran menos buitres que Goldman Sachs, el City, El Santander, el Bilbao Vizcaya, u

otras entidades del sistema financiero mundial, incluido el Banco Mundial o el FMI.

Para ser más precisos, la producción de hidrocarburos de Rusia necesita de la inversión y tecnología de las transnacionales privadas del petróleo; del mismo modo que la fábrica china es resultado de inversiones provenientes del capitalismo desarrollado para valorizarse en territorio oferente de abundante fuerza de trabajo barata.

Ambos países, Rusia y China, son parte del ciclo mundial del capital y forman parte del fenómeno de los países emergentes, es decir, importantes receptores de inversiones externas en tiempo de baja rentabilidad en el capitalismo desarrollado. Rusia se destaca en la economía mundial capitalista por sus cuantiosos recursos naturales, especialmente petróleo y gas. China es el país más poblado del mundo, con un 20% de la población mundial, sustento de la ampliación de la relación salarial a escala global.

Es más, los excedentes generados por esa producción terminan financiando el déficit fiscal de EEUU y sosteniendo la militarización de la sociedad mundial que domina Washington.

La reconquista de Rusia y de China para el régimen del capital era una aspiración lograda en el último cuarto del Siglo XX. No solo producción y circulación mundializada, sino en una territorialidad única, abierta a la libre circulación del capital. Es un objetivo que continúa ampliándose con renovados tratados de libre comercio y por la seguridad de las inversiones externas.

Con la caída del socialismo en el Este de Europa en los 90, y especialmente la desarticulación de la Unión Soviética, fue gigantesco el flujo de inversores externos para consolidar el nuevo rumbo del capitalismo en esos territorios. Con la modernización de China y el Socialismo de Mercado desde fines de los 70, se atrajeron enormes cantidades de financiamiento para la expansión de las relaciones capitalistas hasta convertir al país de Mao en el de mayores reservas internacionales acumuladas y gran prestamista de la potencia hegemónica del capitalismo mundial.

¿EMERGENTES O INDEPENDIENTES?

Ambos procesos son funcionales al desarrollo capitalista contemporáneo, ahora como países emergentes. El problema no es ser

emergente, sino independiente. Es una cuestión nacional y de articulación regional contra el orden mundial del capitalismo contemporáneo.

Bien vale considerar estas cuestiones en la coyuntura, cuando la Argentina se juega en la disputa en los tribunales de Nueva York contra inversores “buitres”, emblema de la especulación financiera.

Claro que Rusia y China tienen aspiraciones de intervenir en la disputa por los mercados, razón por la cual intentan formas diferenciadas de acción. No es una cuestión menor para la Argentina estudiar el proceso de condonación resuelto por la Federación Rusa del 90% de la deuda por 35.000 millones de dólares de Cuba con Moscú (deuda del tiempo soviético), y el cobro del resto, 3.500 millones de dólares, en 10 años vía inversiones necesarias para el desarrollo de la isla.

Es un trato diferente, no solo por parte de Rusia, sino por la forma de negociar de Cuba. Por eso, y en el marco de las solidaridades globales diferenciadas recibidas por la Argentina, quizá vale la pena discutir en el conjunto de la sociedad si el país debe continuar pagando una deuda sin investigarla, y particularmente cuando está sospechada de fraude, incluso con sentencias judiciales sin ejecución (Juez Ballesteros, año 2000).

El gobierno informó en solicitadas publicadas el viernes 11/7/2014 que en este tiempo de desendeudamiento se cancelaron más de 190.000 millones de dólares, una abultada cifra que aplicada a resolver derechos y necesidades insatisfechas de nuestra población mejoraría sustancialmente las condiciones de vida de gran parte de la sociedad.

Es conocido el costo de pagar la deuda y se nos sermonea sobre los costos de no pagar. Las incertidumbres del no pago habilitan a pensar en otro modelo productivo y de desarrollo, con independencia y dignidad. Es el camino a transitar con la suspensión de los pagos de deuda pública, la investigación de esa deuda y sobre esa base la renegociación con pagos de la parte legítima, luego de atender la satisfacción de los resignados derechos sociales de la población empobrecida.

Se trata de un camino a transitar para la independencia, que debe asumirse desde la movilización popular y modificar el modelo productivo y de desarrollo, con nacionalización del comercio exterior y la banca para otro país y otros beneficiarios sociales. En ese

rumbo, la CTA y la Multisectorial convocan a una movilización popular para el 16/7 exigiendo la suspensión de pagos de la deuda pública y la cancelación de la deuda interna con trabajadores activos o pasivos y el conjunto de la sociedad de abajo. El propósito apunta a construir una masa social crítica y consciente para la transformación social y la independencia.

Buenos Aires, 11 de julio de 2014



LA ECONOMÍA ESTÁ EN DEBATE EN NUESTRAMÉRICA

El proceso electoral en Bolivia, Brasil y Uruguay pone en discusión los modelos de desarrollo en la región, el presente, el pasado reciente y el futuro.

Incluso, la Argentina, a un año de la elección para renovación de autoridades nacionales, abre el debate sobre el rumbo económico, el modelo productivo, el patrón de consumo y los beneficiarios de la estrategia o rumbo civilizatorio, incluso más allá del orden capitalista.

Desde el discurso mayoritario se sostiene una polémica que atrasa, entre mercado y Estado, como si fueran aspectos autónomos o contradictorios. En un marco más reducido, la discusión pretende ir más allá para discutir otro orden económico de la producción y circulación de bienes y servicios, de las relaciones de intercambio y el consumo, más pensado en satisfacer necesidades amplias de la mayoría más desprotegida.

Para que se entienda, debemos preguntarnos quien fue el que habilitó la liberalización de la economía local o mundial en las últimas cuatro décadas, es decir, el proceso de apertura de las economías, flexibilizando fronteras para la circulación de mercancías, servicios o capitales. El Estado ha sido el gran protagonista, quién sentó las bases institucionales de un cambio reaccionario que se remonta a las leyes de inversiones externas o de entidades financieras, en un marco de endeudamiento estatal deliberado que condiciona el presente.

Es más, el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, cuyos principales beneficiarios eran los grandes capitales transnacionales, era negociada por los Estados nacionales. Del mismo modo que el Estado legisló múltiples tratados internacionales en defensa de la seguridad jurídica de inversores externos y para estimular la libertad de comerciar. Fue el Estado en tiempos de la dictadura el que generó las condiciones originarias de posibilidad para consolidar desde el Estado en los años 90 del siglo pasado la reestructuración regresiva del orden capitalista local, reforma constitucional mediante, en condiciones similares en la economía regional y en el mundo.

Son los Estados los que organizan las reglas más o menos liberalizadoras del mercado y por eso interesa distinguir el carácter social, político y cultural que adquiere el Estado capitalista, o dicho de otra forma, distinguir en su seno las distintas correlaciones de fuerza. Para que se entienda lo que decimos vale pensar en términos políticos, que es lo que definió recientemente Bolivia con el triunfo del partido en el gobierno, y lo que hoy definen las elecciones de Brasil (segunda vuelta) y la Uruguay (primera vuelta), y lo que anticipa la temprana campaña electoral en la Argentina hacia octubre del 2015.

Incluso para ser más complejo el análisis, convengamos que Bolivia define en su Constitución el carácter plurinacional del Estado boliviano. Lo plural connota el objetivo civilizatorio de organización económica, política y social más allá de lo visible institucionalizado desde los tiempos de la independencia política ante el orden colonial. Ello supone el rescate de la cultura de los pueblos originarios, en un intento de síntesis de lo diverso contenido en las culturas civilizatorias contemporáneas, lo que se sustenta como estrategia de desarrollo en el vivir bien, o si se quiere en una perspectiva más amplia del socialismo comunitario del vivir bien.

Destaquemos que esa discusión no está contenida en el presente debate del proceso electoral brasileño, uruguayo o argentino. Estos están más urgidos por otra agenda, asociada a la posibilidad de sostener políticas que promuevan consensos renovados a una estrategia que sin modificar las condiciones institucionales y estructurales de los cambios acaecidos en las últimas décadas, promuevan iniciativas políticas y económicas de inserción protagónica en el orden capitalista contemporáneo. Brasil intenta ser parte de la disputa hegemónica del orden global desde su asociación privi-

legiada con China en los BRICS. Uruguay, desde los límites que le imponen los socios mayoritarios en el Mercosur, intenta juego propio en otros escenarios de la integración, incluyendo atractivos de valorización capitalista a inversores de Brasil o Argentina. Ambos procesos y la Argentina están discutiendo, desde el debate mayoritario, una inserción más o menos funcional a la hegemonía del libre comercio sin poder discutir un más allá del orden civilizatorio.

La discusión se procesa en condiciones de retracción de la actividad económica, local y global. El debate se angosta a las formas del ajuste económico y la distribución social del costo en su ejecución. Por eso el titular de la UIA alude a la ideología del “modelo económico” en la Argentina. Es un diagnóstico pronunciado en el coloquio de empresarios en Mar del Plata y que demanda como parte del colectivo empresarial, interesado en restablecer la tasa de ganancia, un clima de consenso, también ideológico, para una intervención estatal favorable a sus negocios. La pretensión de objetividad es negada desde la propia formulación para que el Estado sirva a los intereses del sector privado de la economía, una máxima de principios en los años noventa.

Pretendemos diferenciar como Bolivia y otros procesos en la región, desde sus concepciones de lo plural y una agenda para el desarrollo que dialoga desde una temporalidad de más largo alcance, pretende intervenir más allá del régimen del capital. Ni hablar de Cuba que se propone otro debate para el desarrollo desde su experiencia por el socialismo y que esta semana albergó en La Habana un encuentro del ALBA-TCP para aprobar una estrategia alternativa al combate al Ébola, con médicos y profesionales de la salud, más aportes en medicamentos y recursos monetarios para la emergencia sanitaria, que contrasta con el ejército de marines estadounidenses.

Apuntamos a destacar que discutir el orden económico supone definir rumbos de desarrollo, más allá del mercado y de las ganancias, para pensar en satisfacer variadas necesidades locales y mundiales.

Buenos Aires, 26 de octubre de 2014



PROMOVER EL CAMBIO DEL SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL *

Para avanzar en la región, los gobiernos progresistas de América Latina deben impulsar el cambio de la arquitectura financiera internacional. Si no hay cambios económicos profundos, los gobiernos progresistas de América Latina terminarán abriéndole la puerta a la derecha para su retorno.

Uno de los retos urgentes que tienen los gobiernos progresistas de América Latina es el de “empujar un cambio de la arquitectura financiera internacional”, por cuanto que en las actuales condiciones geopolíticas no alcanza con reconocer el carácter delictivo, buitre o especulativo del capitalismo contemporáneo, sino que hay que poner de presente y denunciar que éste además es el que explota y explota sin ninguna consideración ecológica los recursos naturales de la región. La observación es del destacado analista económico argentino Julio C. Gambina, quien llama la atención sobre la necesidad de pasar del duro discurso de algunos mandatarios de la región que denuncian el terrorismo económico que se despliega desde los centros imperialistas del poder para desestabilizar países, a la adopción de medidas concretas para frenar las pretensiones “del capital que sobreexplota la fuerza de trabajo y los bienes comunes de nuestra América y de todo el mundo”.

* Entrevista realizada por Fernando Arellano Ortiz, de Cronicon.net, publicada en <<http://www.cronicon.net/paginas/ediciones/ediciones101/nota06.htm>>, octubre de 2014.

Concretar instituciones como el Banco del Sur cuyo funcionamiento sigue aplazado o desatar una corriente de acción internacional de los países que integran el G77+China para forzar una auditoría de la deuda ilegítima y suspender su pago, son medidas que tendrían que adoptarse, dice este investigador social argentino, si se quiere frenar de manera efectiva la dictadura y extorsión del capital globalizado, cuyo ilimitado interés de acumulación hoy está muy vinculado al delito y al terrorismo.

—Para hablar sobre el peligro y las acciones de desestabilización que desarrolla el capitalismo especulativo y sus agentes de la reacción de la derecha en los diversos países que buscan a toda costa mantener el criminal modelo neoliberal, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano (<www.cronicon.net>) entrevistó en Buenos Aires a este investigador social de temas socioeconómicos.

—Gambina es doctor en Ciencias Sociales, analista económico de amplia trayectoria, catedrático de la Universidad Nacional del Rosario, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP) de Argentina, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y columnista de diversos medios de comunicación de su país y de América Latina. Participa como miembro del Consejo Académico de ATTAC-Argentina y dirige también el Centro de Estudios y Formación de la Federación Judicial de este país.

—La presidente Cristina Fernández señaló el pasado mes de septiembre en Naciones Unidas que Argentina y América Latina están enfrentando un terrorismo económico. Venezuela y Argentina son dos casos de extrema gravedad porque además de atacar sus economías se atenta contra sus respectivos procesos políticos. ¿Cuál es su visión?

Está muy claro que la forma de acumulación de capitales hoy está muy vinculada al delito y al terrorismo. No puede pensarse en hegemonía norteamericana sin un intervencionismo militar de la política exterior de Washington; hoy no puede pensarse en la hegemonía del dólar sin las fuerzas armadas y la influencia ideológica, cultural, simbólica de Estados Unidos en el conjunto de la economía y la sociedad mundial.

Entonces me parece que hay que plantearlo desde ahí. Creo que la dureza del discurso de la presidenta argentina en Naciones Unidas debería corresponderse con acciones muy fuertes como es un movimiento unilateral de la Argentina por la suspensión de los pagos de la deuda y eso podría desatar una corriente de solidaridad

internacional de los países de América Latina, del G77+China, para empujar un cambio de la arquitectura financiera.

No alcanza con reconocer el carácter delictivo, buitre o especulativo del capitalismo contemporáneo porque no es solo privativo de algunos capitales que compran deuda pública, es también parte de los capitales productivos que extraen los recursos naturales de América Latina. El capital buitre es el capital que sobreexplota la fuerza de trabajo y los bienes comunes de nuestra América y de todo el mundo, por lo cual creo que para corresponder la dureza de la verbalización de la crítica al capitalismo hay que tomar medidas concretas.

El propio presidente de Ecuador recomendó a la Argentina no pagar la deuda de la sentencia del juez Thomas Griesa de Estados Unidos, con lo cual el gobierno argentino debiera avanzar en ese camino y promover desde la práctica un cambio de las condiciones de funcionamiento del sistema financiero mundial. Por ejemplo: Argentina y Brasil, como dos principales responsables de países de mayor desarrollo relativo en la región, tendrían que haber empujado la materialización del Banco del Sur, que se anunció hace siete años y hoy todavía no existe. Y América Latina con un Banco del Sur que canalice las reservas internacionales de los países como sugiere desde Bolivia su ministro de economía, por ejemplo, bien podría servir para desarrollos productivos alternativos en la región.

—*¿Por qué no hay concreción del Banco del Sur?*

América Latina no avanza en la arquitectura financiera alternativa porque no hay voluntad política explícita de los gobiernos, sobre todo de aquellos que tienen mayor desarrollo relativo, mayor responsabilidad económica, y que podrían inducir a una articulación productiva en la región para intentar desconectar a nuestra América de la dependencia del capitalismo buitre especulativo mundial.

—*¿Ante esa falta de voluntad política, podríamos decir que a corto o mediano plazo el banco de los BRICS podría ser una alternativa?*

Al banco de los BRICS le puede pasar lo que al Banco del Sur. El banco del BRICS es un anuncio que habrá que ver cómo evoluciona y cómo funciona. El problema que hay es que por mucho discurso anti neoliberal que se haya desarrollado en América Latina, me temo que estamos perdiendo la ocasión de avanzar en el cambio político que fue la característica de estos últimos años, con el cambio económico. Y si no hay cambio económico, los gobiernos

progresistas de América Latina van a abrir la puerta para que retorne la derecha. Es un tema que está en discusión hoy con motivo de varios procesos electorales que hay en la región. Si eso no ocurre en Bolivia es porque este país está todavía en un proceso de redistribución de la renta que genera subjetividad en los indígenas originario, en los campesinos, en los trabajadores bolivianos. Y todavía genera una subjetividad popular por el cambio, cosa que no ha ocurrido en la mayoría de los otros países de la región.

— *¿La especulación alimentaria por ejemplo en Venezuela y la inflación y la devaluación en Argentina está articulada y coordinada por la derecha?*

En tanto y en cuanto los movimientos populares de la región no empujen gobiernos que radicalicen el cambio económico, las derechas van a encontrar espacios para la manipulación de la conciencia e incluso para retrotraer los cambios que ha vivido nuestra América en los últimos años y que ha generado tanta expectativa, o solo en la región sino en todo el mundo como el laboratorio del cambio político.

— *Uno ve que hay un fenómeno de inflación y de devaluación en la Argentina, pero al mismo tiempo se puede observar un gran consumo por parte de la población.*

Un gran consumo de una parte de la población en capacidad de consumir. No te olvides que la Argentina tiene 42 millones de habitantes y uno puede dividir al país en tres tercios. Un tercio de una elevadísima capacidad de consumo; un tercio de relativa capacidad de consumo; y otro tercio que está en situación muy negativa. Por lo tanto, la capacidad de consumo que en Argentina se puede ver es de los sectores medios y medios altos; los que ocupan las plazas de los aviones, los que ocupan las camas de los hoteles para turismo, los que ocupan las mesas de los restaurantes son, como mucho, una mitad de la población de la Argentina, la otra mitad no está en condiciones de este consumo. Es más, te diría para que tengas una dimensión de la canasta básica de alimentos que hace falta, la población de jubilados en Argentina, de trabajadores retirados, es de 6 millones, el 72% gana la mínima que es menos de un tercio de la canasta básica de alimentos, por lo cual en este país hay millones de personas, si se divide en tercios, estamos hablando de alrededor de 13 millones de personas que están en subcondiciones o condiciones de apenas abastecer un tercio de sus necesidades de consumo cotidiano para reproducir la vida.

—*¿Cómo cree que puede afectar la turbulencia económica global de Europa y Asia en la economía de América Latina?*

Afecta notablemente, consolidando la concentración, extranjerización de la economía de América Latina y el empobrecimiento de nuestros pueblos. Hasta hace muy pocos años muchos gobiernos de la región decían que estaban afuera de la crisis mundial, felizmente ahora hay reconocimiento de que estamos dentro de la crisis. Se revirtió la situación, ya no hay óptimos precios internacionales como hace unos años y por lo tanto la crisis mundial impacta directamente en América Latina. No puede ser de otra manera, porque América Latina es parte del mundo y por lo tanto está inserta en la crisis. Y la forma para resolver las crisis desde los pueblos de América Latina es más allá del orden capitalista.

—*Hay nubarrones en el horizonte de la integración política-económica en la región con la Alianza del Pacífico. ¿Cuál es su opinión?*

La Alianza del Pacífico es el ALCA. El punto es que América Latina hizo una campaña contra el ALCA que ganó, pero ahora está volviendo a través de la Alianza del Pacífico y la alianza del Mercosur con la Unión Europea.

—*Pero sin Estados Unidos saliendo en la foto*

No, Estados Unidos está en todo el mundo y por eso está la alianza de Estados Unidos con Europa, o la Transpacífico. Digamos que el problema es el capitalismo, el tema no es Estados Unidos, el tema no es Europa, el tema no es Japón, el tema es el capitalismo con la hegemonía que tenga. Sea la hegemonía de Estados Unidos o sea la hegemonía BRICS.

—*Para algunos analistas el capitalismo está en un serio proceso de podredumbre, ¿no lo ve así?*

No, el capitalismo no se pudre solo, el capitalismo tuvo su crisis en 1870, en 1930, en 1973, en el 2007 hasta la actualidad y siempre trata de salir para recrear el ciclo de acumulación del capital. El problema que tenemos es cómo crear una sociedad anticapitalista, antiimperialista, el Vivir Bien como dicen en Bolivia; o el Buen Vivir como dicen en Ecuador; o el socialismo como decíamos nosotros hace mucho tiempo.

—*Pero se están dando algunos pasos en esa dirección, ¿o no?*

Bueno ese proyecto lo estamos construyendo, lo construyen los movimientos populares, lo construye el pensamiento crítico, el movimiento emancipador. Ese es nuestro desafío, desde la prensa alternativa, desde la intelectualidad y el movimiento popular.

Oct 2014

EL GRUPO DE LOS 20 Y EL CONFLICTO POR LA DEUDA PÚBLICA DE ARGENTINA

Durante el fin de semana pasado se reunió en Brisbane, Australia, el Grupo de los 20 (G20), que a instancia de George Bush en 2008 se auto constituyó en la instancia global de análisis de la crisis mundial de la economía. Por la Argentina, ausente la Presidenta por enfermedad, participaron los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores.

Interesan dos cuestiones centrales. Una remite a la continuidad de la crisis después de siete años de cónclaves de gobernantes de los principales países del mundo, especialmente EEUU, Europa, Japón y los grandes nuevos actores políticos y económicos como China, Rusia y Brasil. Por la región latinoamericana completan la participación México y Argentina. La otra cuestión nos lleva al interés de la Argentina por incluir el tema de la deuda y muy especialmente el conflicto con la justicia de EEUU y la demanda de los fondos buitres.

PREOCUPA LA FALTA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

Sobre la cuestión de fondo, las deliberaciones y resoluciones se concentran en el escaso crecimiento de la economía mundial y la necesidad de asumir políticas que favorezcan la superación de la desaceleración económica mundial generada por la crisis desde las turbulencias del 2007, especialmente la recesión mundial del 2009. Las tendencias aluden a efectos sociales regresivos hacia el 2018, completando una década de carga de la crisis sobre los trabajadores y pobres del mundo.

El epicentro de los problemas está en los países capitalistas desarrollados, especialmente EEUU, cuyo crecimiento económico no termina de contribuir a resolver sus propios problemas locales y mucho menos a cumplir el esperado papel de locomotora de la economía mundial.

Un tema agravante es el impacto sobre el empleo con 33 millones de desocupados, peor aún para los jóvenes que retrasan la incorporación al mercado laboral y constituyen un serio problema social y civilizatorio que favorece las tendencias a extender la participación juvenil en el capitalismo delictivo. Esto se expresa, entre otros problemas, en la producción y circulación de drogas o armas, como en la trata de personas. No solo se alude al consumo y difusión de esos problemas sobre la población joven, sino al involucramiento juvenil, como medio de vida, en la producción y circulación de mercancías en el circuito del delito económico.

En este sentido, conviene asociar la evasión y elusión fiscal de las grandes transnacionales y la especulación financiera al delito que define el capitalismo contemporáneo. No solo se trata del fenómeno de la extensión de los paraísos fiscales, que el G20 viene considerando sin ningún resultado visible desde noviembre del 2008, sino de la emergencia del problema del endeudamiento público de los Estados y ya no solo de los atrasados o dependientes, sino de los principales países del capitalismo desarrollado. Entre ellos destaca EEUU con una deuda del 100% de su PBI, que en términos absolutos es la más grande del mundo, en las antípodas de la situación de 1945. Entonces, la situación de gran acreedor del mundo le permitió constituirse en potencia hegemónica del sistema mundial e imponer su moneda como equivalente universal. Es algo que ahora está en discusión por Europa y crecientemente por China, con su tendencia a habilitar acuerdos de intercambios con monedas locales que sustituyen el monopolio del dólar en las relaciones económicas internacionales.

LA LITIGIOSIDAD EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA

En ese marco es que la posición de la Argentina llegó a la declaración final con el eufemismo de la litigiosidad, en alusión a las demandas de acreedores, los fondos buitres, que afectan procesos de renegociación de la deuda pública, tal como ocurre con la Argentina en la actualidad. El G20 instruyó a las autoridades económicas y monetarias, es decir, a sus ministros de Economía y titulares de

los bancos centrales de los países que integran el G20, para aportar recomendaciones sobre el asunto.

La preocupación trasciende a la economía de la Argentina y se proyecta en el nuevo fenómeno mundializado del crecimiento del endeudamiento público de los países. Es un problema derivado de la necesidad de sostener con estímulos financieros desde los Estados la crisis mundial. En rigor, mucho neoliberalismo y discurso crítico hacia la intervención estatal, con el objetivo de desarmar posiciones de los Estados nacionales en el sostenimiento de la función social desplegada desde los años 30 del siglo pasado, pero en concreto, una fortísima participación estatal para sostener a grandes empresas y bancos, aun con el impacto social regresivo en materia de pérdidas de empleos, salarios y disminución del gasto estatal en materia de seguridad social y derechos de la población en educación, salud o empleo.

Desde el gobierno de la Argentina se celebró la inclusión del tema por abonar en la iniciativa política internacional en la denuncia sobre la demanda de los fondos buitres y la sentencia de juez Griesa de Nueva York que obliga a pagar a la Argentina el 100% de la deuda en litigio, mientras se gana tiempo para una eventual negociación a partir del cercano 2015, escapando a la cláusula de vencimiento a fin del 2014 que podría condicionar al país a ofrecer similares condiciones de pago al conjunto de los acreedores ingresados a los canjes de deuda del 2005 y del 2010.

Más allá de como termine la situación litigiosa, negociando o postergando la cuestión como problemas de una próxima administración gubernamental a partir de fines del 2015, la recomposición de reservas internacionales es una preocupación central de las autoridades económicas. En el transcurso de noviembre el stock de reservas pasó de 28.077 millones de dólares el 3 de noviembre a 28.816 millones de dólares el 18 de noviembre, último dato publicado por el BCRA al momento de la presente nota. Esa recomposición apunta a sostener un stock suficiente para hacer frente a los vencimientos de deuda y en la medida que resuelva el conflicto con los fondos buitres, reingresar al mercado financiero mundial para asumir nuevas deudas que apuntalen el ingreso de divisas y sostener un modelo económico que para funcionar requiere del ingreso sostenido de moneda externa, sea como inversiones externas o como préstamos.

La recomposición de reservas internacionales es principalmente derivada de la ejecución del segundo tramo del acuerdo

swap de China y la Argentina por 500 millones de dólares. El primer tramo fue por 814 millones, sumando ya 1.314 millones de dólares pagaderos al año desde su ingreso al tesoro, con sus correspondientes intereses, los que se cancelan con recursos fiscales que compiten con usos alternativos como las compensaciones por pérdidas de ingresos ante la inflación que demandan los trabajadores activos y pasivos en este fin del año.

Vale considerar que Argentina recibió moneda China equivalente a esos millones de dólares, al tiempo que se depositaron pesos en China por ese monto. Ambos países usan la moneda local para cancelar operaciones de comercio mutuo, alejando al dólar de las transacciones. Un dato no menor es la creciente tendencia al déficit comercial de la Argentina respecto a China, cuyas exportaciones a nuestro país superan ampliamente a sus compras. De este modo, China ya no solo es un importante socio comercial, con saldo a favor, sino que es crecientemente un inversor externo en varios rubros, especialmente en infraestructura, equipos y tierras, adicionando ahora su carácter de prestamista.

Resulta una cuestión a estudiar la nueva dinámica de inserción internacional subordinada de la Argentina en el mercado mundial, y la reanudación de un ciclo de endeudamiento. Vuelve a perderse una oportunidad para suspender los pagos y auditar la deuda pública en la búsqueda de la independencia en un marco de una integración y un desarrollo autónomo del sistema capitalista. El mundo capitalista en crisis requiere de experiencias de otro orden, algunas de las cuales se procesan en Nuestramérica y que bien podría animar y potenciar la Argentina.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2014

CRISIS ENERGÉTICA Y PRECIO DEL PETRÓLEO: LUCHA POR LA HEGEMONÍA EN EL CAPITALISMO EN CRISIS

Hacia julio del 2008 el barril llegó a los 150 dólares y ahora ronda los 70 dólares¹, con un pronóstico inestable, aunque a largo plazo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) proyecta la recuperación de los precios y los vaivenes del liderazgo productivo entre EEUU y Medio Oriente.²

En el trasfondo está la crisis energética de EEUU en los 70, que dispararon los precios del petróleo y con ellos el fenómeno de la especulación financiera y el deliberado sobre endeudamiento de los países del sur del mundo. Junto a esos fenómenos, se desarrolló el acrecentamiento de la militarización mundial en la disputa por los hidrocarburos, los territorios y la dominación de las poblaciones, especialmente desde Washington.

La respuesta estadounidense a su crisis energética (EEUU la mundializó) se resolvió comprando y ocupando, manipulando e intentando la dominación militar, económica e ideológica sobre el planeta, mientras buscaba respuestas a su crisis productiva de hidrocarburos, exacerbada por un agigantado consumo energético sin límite, convalidando el derroche y la contaminación depredadora de la naturaleza. Al mismo tiempo se alentó la agro-energía y el 30% del maíz estadounidense, el mayor productor mundial del

1 Ver <<http://www.preciopetroleo.net/>>.

2 Ver <<http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2014/november/signs-of-stress-must-not-be-ignored-iea-warns-in-its-new-world-energy-outlook.html>>.

rubro, tiene destino en la producción de combustible, compitiendo con la capacidad de alimentación y asociando crisis energética a crisis alimentaria, y junto a ellas la crisis ambiental.

Así, la producción de hidrocarburos y de alimentos se transformó en producción y comercialización de *comodities*, con la ganancia y la acumulación como objetivo central, corriendo a la energía y a los alimentos de su sentido principal de satisfactor de necesidades sociales. De un derecho a una mercancía como proceso sin fin. Ambas crisis son partes de la crisis civilizatoria en curso, donde lo económico financiero es solo la parte más visible de un fenómeno que es social, político y cultural, estructural y sistémico, que solo puede solucionarse más allá del capitalismo y que, claro, las clases dominantes empujan en el sentido de la liberalización.

La crisis energética se hizo mundial en la presente crisis desde el 2007/2008, por lo que no sorprendió la escalada de los precios ante el pico de producción y puesta en cuestión de la capacidad mundial por descubrir, explotar y apropiarse reservas de hidrocarburos. La búsqueda de hidrocarburos se hizo más costosa, especialmente con los no convencionales (*shale*), que multiplica el costo de producción sobre los convencionales. Estos tienen un costo que puede oscilar en torno a los 10 o 20 dólares el barril, según informa la AIE, mientras que aquellas pueden remitir a costos superiores a los 70 u 80 dólares, los valores actuales.

Son todas cifras variables de un territorio a otro, según la mayor o menor dificultad para la explotación, lo que convoca a pensar en que para la producción de los no convencionales hace falta un fortísimo soporte económico financiero de subsidio, que solo puede sustentarse desde el poder del Estado. Es algo que el keynesianismo resolvió hace más de 8 décadas y aun cuando se sostenga la liberalización de la economía, nadie duda en el orden capitalista sobre la importancia de la intervención estatal para sustentar la producción gasífera y petrolera. No existe límite ideológico para subsidiar a las transnacionales del petróleo, especialmente para defender la geopolítica del imperialismo. Es lo que hace EEUU y lo que ocurre en toda la geografía del mundo.

Con la explotación del *shale*, los hidrocarburos no convencionales, y la fractura hidráulica (*fracking*), EEUU desafió sus límites energéticos y pretende en el corto y mediano plazo resolver su crisis energética, no solo incrementando su producción, sino transformándose en el primer productor mundial de petróleos en 2015, según

el citado reciente informe de la AIE. El tema fue analizado hace tiempo por el especialista mexicano John Saxe-Fernández en la revista *Periferias* de la Fisyp³, colocando grandes interrogantes sobre el costo de producción y los gigantescos subsidios estatales para asegurar la hegemonía estadounidense desde el control de la producción del insumo estratégico por excelencia.

Pero que ocurre en la coyuntura, con precios en baja, dificulta la producción de los hidrocarburos no convencionales. El tema concita atención mundial y existen análisis de conspiraciones cruzadas.

Por un lado EEUU, con el alza de la producción, asociada al sostén de la elevada extracción de la OPEP, pretende ahogar económica y financieramente a países dependientes del ingreso de su factura de hidrocarburos, caso de Rusia, Venezuela o Irán. Claro que ello conspira contra su propia estrategia asociada al *shale*, con costos en el nuevo límite a la baja del precio del crudo en estas horas. En esa estrategia podría asumirse Arabia Saudita, el principal productor mundial, que, por otro lado, apunta a dificultar la competencia global estadounidense en la perspectiva del 2015/2020, que según la AIE, EEUU podría convertirse en el principal productor mundial de hidrocarburos. La OPEP acaba de definir la continuidad de la producción según los parámetros actuales, en acuerdo con Arabia Saudita y en contra de las aspiraciones de Venezuela o Irán. La decisión apunta a debilitar a sus competidores, especialmente a EEUU.

¿SE DESATÓ OTRA GUERRA POR EL PETRÓLEO?

Es un interrogante que se suma a otras guerras, la monetaria, la comercial, u otras que animan la continuidad de la crisis mundial del capitalismo. En definitiva, la discusión de los 70 vuelve en otro escenario, de agravamiento de la crisis mundial del capitalismo, con su capítulo energético, que impacta en múltiples procesos, sean de la agricultura, la industria, el comercio y los servicios, y obviamente en el conjunto del modelo productivo y de desarrollo que impactan en el medio ambiente y la vida en el planeta.

Un problema singular es la Argentina, con una factura de importación de combustibles por 12.000 millones de dólares anuales

3 John Saxe-Fernández, "Explotación de fósiles no convencionales en Estados Unidos. Lecciones para américa latina", en *Periferias* N° 21, revista de la Fisyp, en <<http://fisyp.org.ar/media/uploads/p.21-saxe.pdf>>.

y un balance comercial con un déficit cercano a los 7.000 millones de dólares. La baja del precio del petróleo reduce el costo de las importaciones aunque aleja la expectativa asentada en la explotación de los no convencionales, rentables a un precio superior al actual.

Es una mala noticia para los que esperaban resolver con inversiones petroleras los límites del capitalismo local ante la ausencia de divisas por inversiones o préstamos.

Se trata de un problema estructural, y convoca a debatir la crisis petrolera global y local discutiendo el modelo productivo y de desarrollo, cuestionando el para que de la energía y del petróleo, y desde allí definir el sentido de un nuevo modelo sustentado en la satisfacción de las necesidades sociales y no en la expectativa de ganancias y acumulación de las transnacionales de la energía y el petróleo.

No solo la Argentina tiene que discutir el impacto de la crisis energética y los precios internacionales, sino que toda la región latinoamericana y caribeña debe estructurar una respuesta común con centro en la defensa de la soberanía energética, articulada con una propuesta de soberanía alimentaria, financiera para otro proyecto de país y región en la perspectiva de la emancipación y la liberación.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2014

LOS DESAFÍOS PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL

ENTRE BOLIVIA EN ELMERCOSUR Y LAS RELACIONES CUBA Y EEUU

La integración latinoamericana sigue en la discusión como forma de enfrentar las secuelas de la crisis mundial del capitalismo y aspirar a un desarrollo alterativo del orden mundial.

En estos días se realizó la reunión del Mercosur en Paraná, Argentina, con la noticia más destacada, vía superación de obstáculos políticos e institucionales para un próximo ingreso pleno de Bolivia al bloque de integración regional.

Salvo esa novedad, muy poco en concreto para mostrar en materia de avance de una integración autónoma, a contra marcha de la hegemonía aperturista y por el libre comercio que requieren las grandes transnacionales. La ampliación de socios no es por cualquier lado, sino de países que lideran la experiencia de confrontación con la estrategia neoliberal: Venezuela y Bolivia.

Recordemos que a los cuatro originarios, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se le incorporaron Venezuela luego del rechazo al ALCA en Mar del Plata 2005, y ahora Bolivia, que aparece en la mira de todos los análisis por su estabilidad económica y el crecimiento del consenso al gobierno de Evo.

Estos dos países, Venezuela y Bolivia, junto a Cuba, dinamizan la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, con origen y propuestas para un modelo productivo y de desarrollo alternativo.

Así, ahora en el Mercosur conviven dos sentidos, el originario que remite al libre comercio y la impronta alternativa de los nuevos procesos. La duda siempre transita sobre quién se impondrá finalmente.

El cónclave del Mercosur fue en simultáneo con el anuncio conjunto entre EEUU y Cuba sobre el restablecimiento de relaciones mutuas, y de alguna manera, el comienzo del fin al criminal bloqueo del imperialismo estadounidense sobre la isla de la libertad.

Así, se reabre la discusión por el lugar de Cuba y su proyecto socialista en la región. De ser el excluido en las negociaciones por el ALCA, Cuba pasa a constituirse como miembro pleno del sistema de relaciones continentales.

También vale el interrogante sobre quién vence a quién. ¿Pesará más la lógica capitalista sobre Cuba, o esta podrá intervenir con el ejemplo de la importante experiencia de lucha por la autodeterminación y el socialismo?

ALEJARSE DEL LIBRE COMERCIO COMO DESAFÍO

Vale concentrarse en los desafíos que supone la coyuntura, especialmente para alejarse del origen neoliberal, liberalizador, del Mercosur a comienzos de la década del 90.

Eran los tiempos del fin de la bipolaridad y el triunfalismo del unicato capitalista. Aquellos eran momentos en que todos los procesos económicos y políticos en la región apuntaban a las privatizaciones, las aperturas indiscriminadas y a favorecer la iniciativa privada del capital más concentrado. El imaginario socialista tenía destino en el baúl de los recuerdos, de vieja utopía descentrada y derrotada.

Han pasado más de veinte años desde entonces y el cambio político en la región en este comienzo de siglo supuso algunas modificaciones en la agenda de la integración, muchos de los cuales aún solo son parte del discurso, o relativas a expectativas inconclusas.

Entre otras, remitimos al anunciado Banco del Sur, que cumple ya siete años desde su compromiso inicial en diciembre del 2007. No es menor considerar la ausencia de un instrumento de financiamiento regional con pretensión alternativa, precisamente

en momentos de despliegue de la crisis mundial, que incluye, entre otras, a la dimensión financiera.

Es un asunto que Argentina llevó al cónclave del Mercosur a propósito de la amenaza que significa la deuda, la especulación y el accionar combinado de la institucionalidad jurídica y corporativa del capitalismo delictual contemporáneo.

Cuando aludimos al financiamiento alternativo remitimos a otros destinos para los recursos financieros, ya que el financiamiento existe, sea que proviene de la banca comercial, del mercado de capitales, o de los organismos internacionales, y ahora de Rusia y sobre todo de China; pero de lo que se trata es de romper con la lógica de financiamiento de un determinado modelo productivo y de desarrollo. Para ello, es necesario asegurar la materialización de una política de soberanía financiera, con autonomía de la lógica y reglas del sistema financiero mundial capitalista.

En síntesis, hablamos de una nueva arquitectura financiera para la región y el mundo. Nuestros países, integradamente pueden canalizar sus recursos soberanos, entre ellos las reservas internacionales y orientarlos en la construcción del camino de la independencia y la soberanía de nuestras naciones integradas.

La realidad es que un obstáculo muy serio para encarar esa tarea de autonomía e independencia, pasa por la demora en la destrucción de la vieja institucionalidad financiera, el cambio de la política económica y la definición de un rumbo más allá del orden capitalista.

Mirando la realidad local, confirmamos en ese sentido a la ley de entidades financieras, que en la Argentina data de 1977 (gobierno dictatorial) y que fuera calificada en su momento por el ministro emblemático (Martínez de Hoz) como un instrumento esencial para la reforma económica reaccionaria promovida por los genocidas.

Otro caso es la continuidad de la presencia de Argentina y otros países de la región en el CIADI, ámbito sujeto al Banco Mundial, cuando Brasil nunca suscribió el protocolo de adhesión, mientras Venezuela, Ecuador y Bolivia denunciaron la adhesión a esa subordinación a la lógica de la ganancia y la acumulación de las voraces transnacionales.

Pero también aludimos a la difusión de contratos y acuerdos comerciales por la liberación y la seguridad jurídica de los inverso-

res externos, que se explicitan en variados tratados de libre comercio, o tratados bilaterales de inversión. Todos esos tratados necesitan ser denunciados por la región, como base para discutir nuevos marcos estratégicos para la integración soberana y el desarrollo independiente.

En rigor, no solo se trata de la institucionalidad neoliberal gestada en los 80 y en los 90, sino de una política económica al servicio del capitalismo de época, organizado por las transnacionales y sustentado en la promoción de la expansión internacional del capital, con la complicidad de los principales Estados del capitalismo mundial y los organismos internacionales. En ese marco, América Latina y el Caribe ofrecen fuerza de trabajo capacitada y disponible a bajo salario y una dotación abundante de bienes comunes para el saqueo imperialista.

Insistamos en que el debate es si se puede romper con esa lógica de funcionamiento del orden vigente. Por eso es nuestro interrogante y expectativa sobre un tiempo para profundizar el cambio en la región y desde la economía, de los cambios económicos, estructurales, de la institucionalidad y de la política económica, encarar un nuevo tiempo de transformación social, en perspectiva emancipadora, que cambie la matriz productiva y de consumo, para soñar con la liberación y el otro mundo posible. Claro que estamos hablando del proceso de la revolución socialista en nuestro tiempo.

LA PERSEVERANCIA DE LA EXPERIENCIA CUBANA

Es bueno pensar en términos de “lo posible” anti capitalista, cuando esta dimensión de “lo posible” se reduce, se achica, en sentido defensivo, relativo solo a las políticas que “sean posibles” en el marco del capitalismo, algo que sufrimos en nuestros procesos políticos nacionales y regionales.

El ejemplo cubano es relevante, como experiencia que lucha contra el capitalismo y brega por el socialismo, como ejemplo de ir más allá de lo posible dentro del capitalismo y animarse a la lucha anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo, sin final asegurado.

Con la perseverancia de sus objetivos por el socialismo cubano, la Isla, su pueblo y su gobierno supieron doblegar la política exterior agresiva e invasiva de EEUU que por más de medio siglo

bloqueó y boicoteó a la revolución cubana sin éxito. En el marco de la guerra fría había que impedir el ejemplo de la lucha por el comunismo en Nuestramérica, por eso Bahía de los Cochinos y la invasión para luego bloquear e intentar ahogar sin éxito a la isla.

El inicio de negociaciones entre EEUU y Cuba, con la mediación del Vaticano permite varias lecturas, y la primera es el éxito de las convicciones por la dignidad, la soberanía y la autonomía de Cuba. Pero también, que EEUU se estaba aislando de procesos de diálogo político en la región, cuestión que no resulta indiferente a las clases dominantes de nuestros países y del mundo, incluido, claro está el Vaticano.

Qué gran diferencia cuando en los 90 la agenda regional se definía por el ALCA y la hegemonía absoluta de EEUU y su política expansionista convalidada por gobiernos y clases dominantes locales.

La realidad indica que no solo hubo “No al ALCA”, construido éste entre 2001 y 2005, campaña popular continental mediante, sino que se habilitó un nuevo tiempo para discutir la integración. El ALBA es parte de ello, como luego y con matices la Unasur, y más aún la CELAC. Especialmente ésta durante el 2013 bajo la coordinación de Raúl Castro, que otorgó un dinamismo a las relaciones regionales con la exclusión de Norteamérica: EEUU y Canadá.

Vale considerar además, que la Iglesia juega en América Latina su disputa por la mayor fidelidad de feligreses en el mundo y está interesada en suturar fisuras o fracturas presentes o futuras del orden contemporáneo.

La Iglesia jugó en los 80 ante el conflicto y la situación local y el este de Europa. Fue una intervención para modificar la correlación de fuerzas en la lucha de clases mundial. Ahora, bajo otras circunstancias, el papado también actúa, con discurso crítico al neoliberalismo, como corresponde en estos tiempos en que la lucha popular desgastó el discurso neoliberal, el que refería a que no había alternativas.

Recordemos a Margaret Thatcher y su “There Is Not Alternative” (TINA), que entre nosotros difundiera como lema propio Carlos Menem. La alternativa empezó a pronunciarse como “otro mundo posible” en el Foro Social Mundial del 2001 en Porto Alegre, y se hizo más cercana con la reinstalación de la lucha por el socialismo que animaron los procesos más radicalizados de Sudamérica.

ca, que junto a Cuba se animaron a una integración más audaz, aún en proceso de sostenerse en la coyuntura crítica vigente.

Cuba ganó su batalla de reinserción en las relaciones interamericanas y mundiales, y las clases dominantes actúan por todos los medios posibles para evitar rupturas revolucionarias al orden capitalista, y en todo caso, negociar para intentar favorecer, desde las relaciones comerciales, la ampliación de mercados y una respuesta más a la crisis en curso. EEUU busca mercado en Cuba, canalizar inversiones que suman en la ampliación de todos y cada uno de los mercados.

En ese sentido, no hay mercados chicos, todo suma, y aun cuando la región aparece como suma de varios países, para los capitales son todos mercados que incluyen una considerable parte de mercado sustentable, sujetos de subordinarse a la lógica de la ganancia y la acumulación capitalista. Para eso luchan por la liberalización, la apertura económica y un mayor espacio para las transnacionales. Es un camino en el que también se anotan China y Rusia crecientemente, e incluso algunos países que como Brasil y sus translatinas disputan un lugar en la dominación regional y global.

EL PROBLEMA ES EL CAPITALISMO Y LA NECESIDAD DE INSTALAR LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

El movimiento popular necesita profundizar el camino de acumulación social, política y cultural para hacer realidad la disputa de poder popular y la demanda del 2001 por otro mundo posible.

La consigna empezó a ganar en credibilidad de la mano de nuevos sueños por el socialismo, con la renovación cubana y las búsquedas por el socialismo del Siglo XXI (Venezuela) o Comunitario (Bolivia), por el objetivo del Vivir Bien (Bolivia) o el Buen Vivir (Ecuador).

El anticapitalismo y el antiimperialismo es posible si se consolida una masa social mayoritaria por los cambios, la transformación, la emancipación y la liberación.

Es que la lucha por la integración alternativa, contra la inserción subordinada, demanda de un sujeto popular organizado y consciente que empuje la dinámica de la sociedad en la lucha contra el poder, por la suspensión de los pagos de la deuda, que libere

fondos para un nuevo modelo productivo y de desarrollo, con financiamiento autónomo de nuestros países.

Se trata de aprender de la dignidad de Cuba en la lucha contra el aislamiento y la generación de condiciones para sentar al imperialismo a negociar y seguir buscando nuevas posibilidades para defender lo logrado (salud, educación, cultura) e ir por más liberación social y nacional, articulando nuevas redes que hagan realidad el sueño de la patria grande en Nuestramérica.

Hay quienes piensan, en una lectura errónea del acontecimiento, que esta negociación entre EEUU y Cuba puede reiterarse para terminar con procesos coloniales, por ejemplo el que subsiste entre Inglaterra y Argentina por Malvinas.

El error consiste en considerar que la decisión del gobierno estadounidense es unilateral y generosa. Muy por el contrario, el imperialismo fue arrastrado a la mesa de negociaciones por la diplomacia cubana, la situación de integración regional sin la presencia de norteamericanos, y claro, también con el peso moral que supone el poder de la Iglesia y el papado esperanzador de Francisco. Esperanza que deviene de un papel histórico que se juega en este Siglo XXI para sostener el peso del Vaticano y su creciente influencia entre la población de nuestros territorios y otras latitudes.

Rusia condonó el 90% de la deuda que mantenía Cuba y decidió reinvertir el 10% restante en proyectos decididos desde la soberanía cubana, por la forma de negociación e inserción autónoma de Cuba en las relaciones internacionales. Lo mismo puede señalarse sobre la esencia de las relaciones cubanas con China, creciente actor político en la Isla y en la región latinoamericana y caribeña.

No debe esperarse que Inglaterra se avenga a discutir soberanía imitando el gesto de distensión de EEUU para con Cuba, Argentina debe consolidar su proyecto de independencia y solo así sentará a Inglaterra en la mesa de negociaciones. Claro que eso supone transitar el camino de confrontación con el capitalismo y el imperialismo.

Proponerse el rumbo socialista, con todas las dificultades que ello supone y donde Cuba es la vidriera para observar, marca el único camino posible para pensar en la independencia y la articulación integrada de una producción centrada en satisfacer las necesidades de nuestra población más que en la lógica de la valorización

capitalista de la explotación de la fuerza de trabajo y el saqueo de nuestros bienes comunes.

Es una decisión política que debe partir de los pueblos. Solo en esas condiciones podrán los gobernantes asumir el mandato que confirme un destino emancipado, por la liberación, y que materialice el sueño de la patria grande Nuestramericana.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2014

PARTE II
ARGENTINA: DEUDA Y FINANZAS



INTRODUCCIÓN

El debate sobre el endeudamiento público de la Argentina resulta fundamental, no solo por la prédica gubernamental relativa al des-endeudamiento, sino por el carácter condicionante que adquiere la deuda pública respecto de la política económica.

Adquiere mayor relevancia el conflicto de Argentina con la justicia en EEUU y los llamados fondos buitres, que agregó en este tiempo nuevos problemas a la inserción internacional del país, por lo que es relevante seguir el proceso de esa conflictividad y la lógica de la búsqueda de consenso social para la cancelación de la deuda y la búsqueda de condiciones para la reinserción de la Argentina en el mercado financiero mundial.

En esta parte se pretende trabajar la evolución del conflicto asociado a la deuda pública y otros problemas estructurales como el déficit energético y el papel de la empresa petrolera de gestión estatal.



LA DEUDA PÚBLICA SE CANCELA CON RESERVAS INTERNACIONALES

¿PUEDE HACERSE ALGO DISTINTO?

Las reservas internacionales bajaron a 29.858 millones de dólares, desde un máximo superior a los 52.000 millones de dólares a comienzos del 2011.

Para entender la clave de la reducción de las reservas, hay que concentrar la mirada en el pago de deuda. Para ello puede recordarse el debate oportunamente realizado en enero del 2010, a la salida de Martín Redrado de la conducción del BCRA.

La discusión entonces era si pagar deuda con recursos corrientes del presupuesto o utilizar las reservas con ese fin. Para la primera posición se anotaba la oposición sistémica, de derecha explícita, siempre dispuesta al ajuste sobre el gasto social. Para la segunda el gobierno, que es lo que finalmente se adoptó y viene impactando en el nivel de reservas, tal como justifican las autoridades.

Ambas posiciones, el gobierno y la oposición sistémica estaban y están por la cancelación puntual de la deuda, unos acudiendo al ajuste fiscal, restringiendo gasto social para cumplir con acreedores de la deuda pública, otros utilizando reservas acumuladas por saldos favorables del comercio exterior y otros ingresos de divisas, sean préstamos o inversiones.

Son discusiones recurrentes en la Argentina, Incluso en enero del 2006 se canceló deuda con el FMI con reservas internacionales y se sostuvo que las reservas se recuperarían con el crecimiento del comercio exterior y el ingreso de divisas por inversiones y créditos.

Si en diciembre del 2005 las reservas alcanzaban los 28.077 millones de dólares, al mes siguiente se redujeron a 19.689 millones, producto de una cancelación anticipada al FMI por 9.500 millones.

Es cierto que hubo recuperación de reservas, las que crecieron desde ese nivel a más de 52.000 millones de dólares a inicios del 2011, cuando comenzaron a bajar producto de la decisión de utilizar reservas para cancelar deuda.

EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE RESERVAS INTERNACIONALES

Hacia marzo del 2001, en pleno despliegue de la crisis, las reservas cayeron por debajo de los 30.000 millones, registrándose en volumen de 29.812 millones¹ y siguieron cayendo hasta el mínimo de 8.986 millones de dólares en Julio del 2002. El máximo logrado había sido en enero del 2001 con un volumen de 36.153 millones.

La baja de las reservas era expresión de la fuga de capitales para radicar la valorización capitalista fuera del mercado local. La rebelión popular ponía de manifiesto el descontento e indujo la salida de la convertibilidad. El costo sería un fuerte deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, ya que la devaluación de enero del 2002 indujo un fortísimo ajuste en contra de los trabajadores y sus ingresos y muy favorable a la renta empresaria, la que despuntó con la recuperación desde mediados del 2002. La devaluación fue el mecanismo para esa operación, disimulada con el efecto crecimiento y recuperación del empleo con salarios de miseria.

La recuperación económica, producto de la combinación de la cesación de pagos de diciembre del 2001 y la devaluación de enero del 2002, supuso que los 10.000 millones de dólares de reservas internacionales se superaron desde febrero del 2003; los 20.000 desde enero del 2005; los 30.000 desde noviembre del 2006; los 40.000 desde mayo 2007; los 50.000 desde marzo de 2008, aunque solo por dos meses, luego cayeron y consolidaron un nivel sobre los 50.000 millones desde julio del 2010, hasta los 52.618 millones de enero del 2011.

Es que la devaluación y el crecimiento de los precios internacionales de los productos de exportación, especialmente la soja,

¹ Todos los datos son del sitio del BCRA, en: <http://www.bcra.gov.ar/> (consultado el 16/01/2014)

consolidaron un saldo comercial positivo que alimentó las reservas internacionales. De ese máximo a comienzos del 2011 la reducción de las reservas fue continuada y acelerada. Se perforó el techo de los 40.000 millones en abril del 2013 y ahora, en enero del 2014 el nivel de los 30.000 millones de dólares.

El fenómeno de la caída de las reservas se consolida desde el 2011 y tiene como eje el pago de la deuda. Es la exigencia de las clases dominantes mundiales, los acreedores externos y el sistema financiero mundial, para habilitar la reinsertión de la Argentina en el orden capitalista global, del que fue desplazada parcialmente en 2001 como consecuencia de la declaración de la cesación de pagos.

Pero aún falta para ese “logro” de reinsertar al país en el sistema financiero mundial, y se requiere cancelar la deuda impaga con el Club de París por unos 10.000 millones de dólares. Además, terminar con las demandas judiciales por la deuda en cesación de pagos (juicios en Nueva York), y bonistas que no ingresaron a los sucesivos canjes, lo que adiciona otros 7.000 millones sin considerar intereses reclamados. Más las demandas en proceso ante el CIADI, estimadas en más de 10.000 millones de dólares.

Pensar en cumplir con esas obligaciones hace un cóctel explosivo, de extorsión a la soberanía y las necesidades insatisfechas de la mayoría de la población, razón por la cual en otra ocasión calificamos a la deuda como un cáncer a extirpar.

¿EXISTE OTRA POSIBILIDAD?

Se requiere discutir el camino elegido y pensar alternativas. Desde el gobierno se insiste en la cancelación recurrente de la deuda, la que se incrementó desde fines del 2001 al presente, de 145.000 millones a 209.000 millones, mientras se cancelaron en la década 173.000 millones de dólares según publicitó Cristina Fernández antes de las elecciones de octubre pasado.

Insistamos que la deuda es un cáncer, cual barril sin fondo, agotando recursos que bien podrían constituir la base de una acumulación con fines alternativos.

Es necesario frenar la fuga de capitales y para ello se requiere un estricto control de cambios y la nacionalización del comercio exterior y la banca, algo que disgustará al poder, no hay dudas, pero imprescindible para transitar un proceso de reversión del chantaje

de las clases dominantes que corren permanentemente los límites de la cancha, y queda claro con la cotización reclamada de la divisa. Las nuevas autoridades económicas y políticas luego de las elecciones de octubre aceleran como nunca la devaluación (de 6 a 6,75) y el dólar ilegal no tiene límites (de 9 a 11,25). Mientras más se devalúa más crece la cotización paralela e incide en la inflación, la que castiga a los sectores de menores ingresos.

El imaginario gubernamental es que asumiendo la agenda del poder se podrá estabilizar la economía. Por eso se apuesta a las inversiones externas para el autoabastecimiento energético, a cualquier costo “ecológico” y sobre cualquier opinión en contra de ciudades y pueblos que se manifiestan en contra del *fracking*. También se apuesta al saldo positivo del comercio exterior montado en una sojización creciente que consolida un modelo productivo primario exportador, al tiempo que se restringen las importaciones. El crecimiento de la economía es el objetivo, de cualquier modo. Nuestra apelación apunta a discutir el modelo de crecimiento de la producción y de desarrollo, lo que supone renegar de la lógica del pago sin auditar la deuda, de las facilidades para la fuga de capitales y el dispendio de recursos soberanos que debieran utilizarse para otro modelo productivo y de desarrollo.

¿Es un camino sencillo? No, se requiere discutir el propio orden capitalista, pues no hay destino en el marco de una lógica de producción que asegura ganancias monopólicas a escala global sobre la base de la especulación financiera, la militarización y el tráfico de armas; la droga y el delito de todo tipo. Esa es la realidad del capitalismo contemporáneo, no hay otro, es lo que existe, es el capitalismo real y Argentina lo sufre como parte de él. El diagnóstico es clave, sino es imposible transitar un nuevo camino. Hace falta una conciencia anti capitalista, una crítica sustancial al capitalismo de nuestro tiempo y empezar a desafiar el pensamiento y la práctica social por una nueva sociedad, que insisto en llamar socialista, aún con los errores de las experiencias desarrollados, pero con el empecinamiento de la posible construcción de otro mundo con otros beneficiarios, la mayoría de la sociedad.

Chapadmalal, 17 de enero 2014

EL GOBIERNO ASUMIÓ LA AGENDA QUE VENÍA PLANTEANDO EL PODER ECONÓMICO*

AJUSTE E INFLACIÓN. LA DEPRECIACIÓN DEL PESO EN POCOS MESES
MULTINACIONALES. REGRESO A LOS PRÉSTAMOS INTERNACIONALES

—Julio Gambina defiende el nombre de la disciplina científica, entonces no separa economía de política, habla de Economía Política y aclara, “la economía es siempre economía política, no se puede pensar a una sin la otra. Cualquier decisión en economía supone que ciertos sujetos políticos avalen ese programa de gobierno”.

—Algunos lo declaman y otros lo niegan ¿Cuándo empezó el ajuste?

El ajuste hay que pensarlo en comparación con la aceleración de los precios en 2007. En ese año se ve un agotamiento de la etapa virtuosa de crecimiento económico que había comenzado en 2002 y a partir de ahí los sectores empresariales - para defender su tasa de ganancias- trasladaron a precios lo que no lograban con mejoras de productividad o con ampliación de inversiones. Ahí se deteriora el ciclo de crecimiento y empieza un proceso de inflación.

—¿Cómo impacta ese proceso?

Impacta en distintos sectores económicos. Desde el punto de vista de los trabajadores por ejemplo hay que pensar en diez millones de personas afectadas. Sólo de jubilados nacionales son 6 millones, los perceptores de la política social son 4 millones. Este es un universo de personas que perciben ingresos fijos y que consumen en determinados sectores empresariales que viven de los que pueden consumir esos sectores de ingresos fijos. Estos trabajadores

* Entrevista realizada por Diego Colinamún para *Prensa del Tercer Milenio*.

sufren la inflación mucho más que el 10% más rico de la economía argentina que no varía su patrón de consumo. Ese ajuste es el proceso inflacionario que se vive desde 2007 y que se acelera entre un 20% y un 25%. Soy impreciso en las cifras porque el único que podría dar una cifra veraz es el INDEC que, por su metodología, no asegura veracidad en la información. Una de las estimaciones que se pueden hacer es la de la depreciación del valor del peso que se vio entre diciembre y enero de 2014. En diciembre, el tipo de cambio se devaluó en cerca del 6,5% y todavía no termina enero y tenemos una depreciación mensual cercana al 5%.

—¿Qué agenda de política económica se sigue ante esta situación?

Claramente y después de las elecciones legislativas de octubre se asumió la agenda que venía planteando el poder económico en la Argentina: devaluación —que pedían los grandes exportadores de la Argentina— y la generación de condiciones para que ingresen inversiones externas. El gobierno ha tomado el modelo YPF-Chevrón para señalar que está en ese camino para que se radiquen sus inversiones y la propia política cambiaria es un mecanismo de tentación a capitales externos excedentes para que vengan a radicarse en la Argentina.

—¿Al modelo de hidrocarburos YPF- Chevrón se le suma el otro pie con multinacionales como Monsanto?

Monsanto es anterior a la presencia de Chevrón y tiene un papel mucho más importante que el que —por ahora— tienen las petroleras externas en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales que aparecen como la nueva soja en la Argentina. Monsanto encabeza un proceso que involucra a muchas otras multinacionales como Cargill, Syngenta y Dreyfus. Monsanto destaca incluso la posibilidad que otorga el país para el desarrollo tecnológico como son los transgénicos que le permite experimentar en el territorio para globalizar el modelo de acumulación. Esto dicho por la propia empresa en declaraciones públicas.

—¿Devaluación, ingreso de inversiones externas y nueva toma de deuda?

La presencia del ministro de economía en París para discutir con el Club de París, un acuerdo anunciado desde 2007 varias veces, para terminar con la cesación de pagos, se hace para liberarse del castigo del sistema financiero y volver a tomar deuda. Toda la política de desendeudamiento tenía un destino final que ahora es

explícito y es el de volver a endeudarse. En este sentido ha habido un cambio del discurso público que ahora plantea que se debe volver a tomar crédito como deuda pública o como deuda privada. El mismo banco central ha inducido medidas para que el propio sector privado tome préstamos en el plano mundial.

22 de enero de 2014



LA DEVALUACIÓN DEL PESO ARGENTINO

Hace un año el dólar se cotizaba a menos de \$5. Hoy con la devaluación se necesitan \$8 por dólar, convalidando un incremento del 60% en el precio de la divisa.

Hasta hace poco se sostenía que la política oficial no contemplaba devaluar la moneda nacional. Sin embargo, la aceleración de la depreciación monetaria se apresuró durante el 2013 y más aún sobre fines del año, especialmente con el cambio de autoridades en el Gabinete de Ministros y en la Presidencia del Banco Central en noviembre pasado.

El comienzo del 2014 evidenció un mayor nivel de depreciación monetaria, agudizada en esta semana con la deliberada retirada del Banco Central del mercado cambiario el miércoles 22/1, que apenas pudo sostener por un día, y ya el jueves 23/4 tuvo que vender 100 millones de dólares para bajar la cotización de \$8,40 por dólar a \$7,75 por unidad de moneda estadounidense. El viernes 24/1 el precio de la divisa osciló por encima de los \$8.

Complementariamente, el gobierno dispuso flexibilizar las restricciones a la compra de divisas para atesoramiento, lo que estaba prohibido hasta ahora, lo que podrá realizarse previa autorización de la AFIP, el ente de recaudación, con un adicional de 20% a cuenta del impuesto a las ganancias, que a la cotización del día, cada dólar se obtendrá contra \$9,60.

Hasta aquí los hechos. Las incertidumbres a futuro continúan, especialmente el impacto sobre los precios, ya que la devaluación incide en la importación de insumos y bienes intermedios necesarios para la producción en el país, tal el caso de automotores o electrodomésticos entre otros, sin perjuicio de un conjunto de bienes y servicios que ajustan precios sobre costos dolarizados, e incluso expectativas.

Es un dato que las devaluaciones favorecen a los grandes productores y exportadores, y de hecho era la demanda de los sectores hegemónicos de la producción local, buena parte asociada a la transnacionalización capitalista de la economía argentina. La contracara es el perjuicio para quienes perciben ingresos fijos, los trabajadores, regulares e irregulares, activos o pasivos, a tiempo completo, flexibilizados o tercerizados, los que reciben planes sociales e incluso productores y empresarios que asocian sus ventas a este importante sector de la sociedad. Son pocos los beneficiados, el poder económico más concentrado, y son millones los que verán afectados su capacidad de compra. Las devaluaciones no generan equidad, y aun mejorando competitividad, algo que no es seguro, supone la transferencia de recursos de los trabajadores a los propietarios concentrados del capital.

¿POR QUÉ LA DEVALUACIÓN? ¿HAY OTRAS POSIBILIDADES?

Desde el gobierno se explican maniobras especulativas del titular de Shell en connivencia con bancos extranjeros, el Citi, el Francés y el HSBC. Más allá de las acciones legales que se impulsen bien vale considerar la necesidad de mantener a la banca extranjera en la Argentina y consultarnos, a esta altura, por qué continuar con la legislación financiera de la dictadura genocida. Asociado a ello se requiere un estricto control del comercio exterior, el que se concentra en un puñado de empresas extranjeras y un conjunto reducido de bienes que explican el comercio exterior.

Claro que estamos remitiendo a la nacionalización de la banca y del comercio exterior; ello supone un enfrentamiento con el poder económico y político. Luego se requiere constituir sujeto social y político para sostener la confrontación. Es necesario asumir un nuevo rumbo modificando la ecuación de beneficiarios y perjudicados del

orden económico y social en el país. Lo que ha fallado en la Argentina de este tiempo es la concepción de la posibilidad de un “capitalismo nacional” al que convocó a construir Néstor Kirchner en mayo del 2003. En la era de la transnacionalización es un imposible, como inútil es buscar una “burguesía nacional” que asuma ese proyecto, salvo la gestación de nuevos sectores de burguesía local, los que acumulan en el marco de un proceso continuo de extranjerización y dependencia de la economía local al sistema mundial del capitalismo.

La realidad es que las divisas tienen precio y la pelea por su cotización enfrentó a los sectores hegemónicos privados de la economía argentina con el gobierno, demandante de dólares, principalmente para la cancelación de la deuda pública. Eso explica la pérdida de reservas en el último tiempo, solamente 12.000 millones de dólares durante el 2013, entre fuga de capitales y pagos de la deuda, según datos oficiales.

El precio de la divisa, de los bienes y servicios, o de la fuerza de trabajo se dirime en el capitalismo en un mercado monopolizado por grandes capitales altamente concentrados y centralizados. Los Estados pueden convalidar la situación o enfrentarla, lo que supone romper la lógica del capital para intentar organizar un orden diferente, anticapitalista, incluso socialista.

Es un debate que trasciende la realidad nacional y se presenta en toda la región nustramericana, ya que el cambio político emergente a comienzos de siglo puede agotarse si no se profundizan políticas independientes y soberanas en la región. Aludo a la soberanía alimentaria, energética, financiera, que contribuya a una modificación del modelo productivo depredador y a un nuevo modelo de desarrollo para la región.

Falta poco para la cumbre de la CELAC y se discute un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Ese es el rumbo de la inserción internacional de nustramérica? La inserción subordinada de la región fortalece la dependencia del orden capitalista en las condiciones actuales de transnacionalización, generalización de la especulación y el delito. ¿Hay solución fortaleciendo la inserción en el orden capitalista mundial, ese que gerencia el FMI, el Banco Mundial, la OMC? ¿Por qué libre cambio con Europa, luego de haber rechazado el ALCA? ¿Es mejor el capitalismo europeo que el estadounidense? El interrogante es aún más válido cuando pensamos la hegemonía alemana en Europa y las políticas de austeridad generalizadas en el viejo continente.

Argentina y la región están urgidas por cambios estructurales, los que deben realizarse integradamente. Existen novedosos mecanismos e instrumentos en funcionamiento, junto a avanzadas ideas que pueden facilitar el proceso. Aludo al ALBA, incluso UNASUR y la CELAC, pese a los matices en su seno. También al sistema múltiple de pagos con monedas locales entre Brasil y Argentina, escasamente usado, o el SUCRE entre los países del ALBA, al que adhirió Uruguay. Mucho se escribió sobre la nueva arquitectura financiera, expresión de ello es el Banco del ALBA. Bolivia acaba de anunciar que dispone de la cuota asignada para hacer funcionar un Banco del Sur que puede ser depositario de las reservas internacionales, cuantiosas entre los países que adhieren a la iniciativa.

No constituye una utopía hacer realidad el otro mundo posible a que nos convocó el Foro Social Mundial a comienzos del presente siglo. El capitalismo no ofrece soluciones a los pueblos de la región y del mundo. Fue en esencia el mensaje de Hugo Chávez cuando a fines del 2004 formuló su proyecto del socialismo del Siglo XXI. Ante la debacle de la URSS y el socialismo en el este de Europa y el rumbo e inserción de China en el capitalismo global, existen voces que nos acusan de anacrónicos y cuando mucho de utópicos. Los utópicos son los que imaginan una salida dentro del capitalismo y aún, aquellos que se contienen en el límite de lo posible, intentando reformar al capitalismo.

Los límites de la heterodoxia, el neo-desarrollismo o neo-keynesianismo, según como se asuma, en la Argentina, da cuenta de los debates, en la región y en el mundo, por superar la crisis del capitalismo, la dependencia, pensando y construyendo un orden económico, social, político y cultural de emancipación, sin explotación y armonioso con la naturaleza.

Buenos Aires, 24 de enero de 2014

REPSOL, YPF Y LA DEUDA PÚBLICA

Argentina pagará 5.000 millones de dólares a Repsol por la expropiación parcial de YPF realizada en 2012. La petrolera española se compromete a retirar las demandas contra la Argentina. Algo que ocurrirá si la asamblea de accionistas de Repsol lo aprueba y lo mismo hace el Parlamento argentino.

El pago se realiza en bonos con vencimientos que llegan al 2033, que en caso de desvalorización, la Argentina se compromete a compensar con otra emisión de títulos por 1.000 millones de dólares.

Se trata de nueva deuda pública y marca el rumbo de mayor endeudamiento asumido en el último tiempo.

Los montos involucrados, de 5.000 a 6.000 millones de dólares, son valores superiores a los contables, lo que se explica en la imposibilidad de pagar al contado, por lo cual, resulta una cancelación financiada y altamente rentable para Repsol.

Si se busca una explicación a este pago, la justificación está en la necesidad de acudir al mercado mundial para financiar la tercera reserva mundial de *shale*, los hidrocarburos no convencionales, e inscribir a la Argentina como potencia petrolera. Siempre se sostuvo que Argentina tenía petróleo, pero que no alcanzaba a calificar como país petrolero, situación que se modificaría con la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.

La expropiación sin pago a Repsol era esgrimida mundialmente por las transnacionales petroleras como una restricción al ingreso de capitales para el desarrollo de la producción de hidrocarburos, ya que son estas transnacionales los que tienen la tecnología necesaria para realizar la extracción.

Con el pago a Repsol y el acuerdo oportunamente realizado con Chevron se apunta a tentar a otros inversores internacionales para transformar la potencialidad del yacimiento Vaca Muerta en realidad. Es un llamado al capital externo para invertir en la Argentina, asegurando rentabilidad. En el mensaje presidencial de apertura de las sesiones parlamentarias del 2014, la presidenta destacó el crecimiento de 3,4% en la producción petrolera y 2,2% en gas con inversiones por más de 1000 millones de dólares.

Un detalle no menor del mensaje al Congreso devino en la justificación de la privatización, al reconocer “fue para poder pagarle a las provincias las regalías que no nos liquidaban”, tras lo cual resaltó que con la expropiación parcial se ha “vuelto a federalizar el recurso, porque así lo exige la Constitución nacional, que establece en cabeza de las provincias la propiedad de los recursos”. Vale mencionar que una de las limitaciones más seria para una nacionalización completa de YPF es precisamente la provincialización de los recursos naturales que dispuso la reforma constitucional de 1994, mecanismo que aseguró que las provincias avalaran el objetivo político del Pacto entre Menem y Alfonsín.

ENERGÍA PARA QUÉ Y PARA QUIÉN

Lo que no se discute es el para qué de esa producción energética, la dependencia tecnológica, económica y financiera. Un poco más se discuten los costos ambientales y sociales de la aplicación de la fractura hidráulica o fracking para la extracción.

El argumento que preside la política energética remite a la necesidad del autoabastecimiento, que por ahora supone anualmente una importación de combustibles del orden de los 12.000 millones de dólares. Todo para que funcione el modelo sojero y agrario de subordinación a las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, la mega minería a cielo abierto, la industria del automotor y el complejo industrial de armadura.

Ese modelo productivo es el que debe discutirse, el que demanda esas magnitudes de consumo energético, lo que nos llevaría

a pensar y polemizar sobre qué modelo energético se requiere para nuestro país. En rigor, se sigue la lógica del capitalismo hegemónico, estadounidense, con una fuerte apuesta a la producción de hidrocarburos no convencionales, que más allá de resistencias en varias poblaciones y algunas disposiciones legales restrictivas a esa tecnología y modo de producción, le está permitiendo a EEUU disminuir sus necesidades de importación y retomar el camino del autoabastecimiento petrolero.

El modelo productivo en el capitalismo contemporáneo apuesta fuertemente a la explotación de la fuerza de trabajo y a la depredación acelerada de la naturaleza. Por ello es importante interrogarse sobre el modelo energético. ¿Un modelo de extranje-rización y dominación de tecnología en manos de transnacionales del petróleo o una concepción alternativa?

Esta semana se hizo una Asamblea popular sobre la crisis energética donde se sostuvo el Derecho a la Energía, una posición levantada históricamente por la Federación de los Trabajadores de la Energía, la FeTERA, agrupamiento enrolado en la CTA.

La política energética viene definida desde los 90 con privatizaciones, una política que sirvió para extraer todo el petróleo y gas posible privilegiando la obtención de ganancias, especialmente Repsol-YPF, y reorientar esas utilidades para inversiones en otros territorios, caso de África.

El cambio de gestión de la petrolera con la expropiación parcial no modificó el sentido productivo de YPF, donde la concepción mercantil se impone a una estrategia productiva para asegurar el derecho a la energía. Por eso es que se afirma que la fractura hidráulica es la mejor opción tecnológica, aun cuando se reconocen sus impactos contaminantes. Después de todo, argumentan los defensores del *fracking*, toda actividad industrial y más las extractivas, contaminan.

Al mismo tiempo crece la conciencia social y el debate sobre el *fracking* y sus efectos contaminantes, que se expresa en un movimiento social extendido que se manifiesta a varias declaraciones de Concejos Deliberantes de municipios que se pronuncian como territorios libres de *fracking*.

Lo que predomina por ahora es la negativa a la técnica extractiva, contaminante, y muy poco la discusión sobre el modelo energético y productivo en general, es decir, el para qué de la energía.

Ello conlleva la discusión por un proyecto de soberanía energética, que pueda articular una propuesta definida regionalmente, en el camino de Petro-América que alguna vez propuso Hugo Chávez.

2 de marzo de 2014

¿QUIÉN FINANCIA AL ESTADO?

La AFIP informó en estos días el crecimiento del 30,6% en la recaudación de marzo del 2014 respecto de misma fecha en 2013, totalizando un ingreso de 78.710 millones de pesos.

El porcentaje de incremento es un dato similar a la inflación presunta del año transcurrido, aunque no lo podemos corroborar por insuficiencia de información oficial y discontinuidad de los guarismos inflacionarios entre el pasado año y el presente, mediante metodologías diferenciadas utilizadas por el INDEC para el 2013 y el 2014.

El dato difundido por la AFIP remite por un lado a la confirmación de la desaceleración económica manifestada en el 3% de crecimiento del PBI para el 2013 y que confirma la previsión de la evolución del primer trimestre. Por otro lado, desnuda la regresividad tributaria asentada en tributos al consumo como el IVA y en la deformación de un impuesto a las ganancias que incluye a los salarios, cuyo mínimo no imponible no se ajusta por inflación, y que recurrentemente vuelve a la discusión sobre quién y cómo debe financiarse el Estado. Es una cuestión agravada con las exenciones del impuesto a las Ganancias y que involucra a las rentas derivadas de la actividad financiera y bursátil.

Vale mencionar que el tema es uno de los aspectos que explican el próximo paro nacional convocado para el jueves 10 de abril.

LOS DATOS DE LA RECAUDACIÓN

Esa recaudación de la AFIP reconoce al IVA como el impuesto de máxima percepción con 25.529 millones de pesos, un 39,1% más que un año antes.

A continuación aparece el registro de Ganancias con 14.939 millones, un 27,8% de incremento.

Entre ambos impuestos suman 40.468 millones, un 70% de los ingresos tributarios (sin seguridad social) y un 51% del total de entradas al ente recaudador (incluye la seguridad social).

Estos dos tributos constituyen la base del sistema impositivo con que se financia el Estado. Sumando a otros tributos, al endeudamiento público, más la venta de bienes del Estado (en su momento las privatizaciones), se completa la capacidad de financiar que asumen los Estados.

Por eso vale concentrar la atención en IVA y Ganancias, especialmente con la aceleración de precios en los últimos tiempos y la demanda sindical por actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y/o eliminarlo como se sostiene incluso desde una discusión doctrinaria sobre la juridicidad del régimen impositivo.

Con menor registro en la recaudación, aunque expresando un 30% de la recaudación impositiva, aparecen, entre otros ingresos, los derechos de exportación, que sumaron en marzo unos 5.343 millones y 33,7% de crecimiento anual; y los de importación por 2.116 millones, con 28% más respecto de un año antes. Los relativos a débitos y créditos sumaron 5.259 millones, con 29,3% más sobre marzo 2013.

La AFIP computa también un ingreso por seguridad social de 20.880 millones de pesos, un 24,3% mayor. Son recursos que preferimos diferenciar de los tributarios propiamente dichos, ya que en buena parte tienen destino específico, especialmente para la previsión social, en gran parte retenidos a los propios trabajadores.

LA COPARTICIPACIÓN

Un tema adicional es como se distribuye esa recaudación entre la Nación y las provincias.

En la reforma constitucional de 1994 se otorgaron dos años de plazo para discutir la coparticipación federal de impuestos en la Argentina. Ya pasaron dos décadas y el tema no se resuelve.

Además, en ese lapso se transitó la gran recesión entre 1998 y 2002, con graves secuelas en materia de recaudación fiscal y atención de las necesidades de la población.

El resultado fue la crisis del 2001 y el deterioro de las condiciones de vida de la población, manifestado en 57% de pobres y más del 21% de desempleados, o la mitad de los trabajadores con problemas de empleo.

Si nos interrogamos sobre que cambió luego del 2001, nos encontraremos que no solo no se discutió la nueva coparticipación federal, sino que los cambios fiscales ocurridos favorecieron la recaudación centralizada en la Nación.

La consecuencia directa es que el record de recaudación ocurrido en estos últimos años engordó las cuentas nacionales dejando a las Provincias a merced de la voluntad y arbitrio del gobierno nacional.

Más que un debate sobre cómo distribuir los recursos fiscales, demorado por años, asistimos a una centralización de recursos del fisco, los que se subordinan a la lógica de poder definido por el gobierno nacional. Las Provincias quedaron subordinadas a la lógica clientelar que supone la gestión de acrecidos recursos que percibe la AFIP.

¿EXISTE ALTERNATIVA?

Una lógica alternativa supone discutir qué tipo de país pretendemos y cuál es el Estado necesario, a todo nivel, municipal, provincial y nacional.

De ello se derivan los recursos necesarios, lo que nos lleva a discutir quién paga (¿de dónde se obtienen los recursos tributarios?) para superar el dato actual, encabezado por impuestos directos que afectan seriamente a los sectores más empobrecidos, caso del IVA, o el impuesto a las ganancias, que en buena parte recae sobre los trabajadores, algo improcedente y anticonstitucional, ya que el salario es retribución de la fuerza laboral y no pago por la inversión de capitales.

Pero también significa discutir cómo se gasta, y en este caso, por lo menos tres temas; uno remite al personal necesario para satisfacer múltiples necesidades sociales; otro a las políticas territoriales de desarrollo que impone analizar qué ciudades, provincias o regiones priorizar al momento de asignar recursos públicos; finalmente pensar si deben privilegiarse los acreedores externos de la deuda pública o los acreedores internos por derechos constitucionales no satisfechos, especialmente salud o educación.

Es el debate que el sistema político en crisis desde hace tiempo, más allá de relativas recomposiciones y mayorías electorales o parlamentarias obtenidas transitoriamente, no formuló en 20 años (1994/2014) y que constituye parte de las asignaturas pendientes en la discusión contemporánea.

Mar del Plata, 5 de abril de 2014

DESACELERACIÓN ECONÓMICA, TASAS DE INTERÉS Y PRECIO DEL DÓLAR

Se reinició el debate sobre la coyuntura, el crecimiento o no de la actividad económica, las tasas de interés y el precio de las divisas.

La desaceleración es un dato concreto, especialmente de la producción industrial. Así lo expresan los datos de las cuentas nacionales que remiten a una recesión productiva en el ámbito de la industria, con las automotrices a la cabeza y las suspensiones de trabajadores.

Desde el gobierno y los sindicatos se presiona para que las suspensiones no se transformen en cesantías, mientras se reducen los salarios de los trabajadores, que como siempre constituyen la variable de ajuste.

Es una discusión si la desaceleración o recesión se extiende al conjunto de la economía.

Desde el campo, con precios en alza y cosecha récord se contrasta la información y fluyen dólares para recomponer la crisis externa de menor superávit comercial y cierto alivio en la recomposición de reservas luego de dos años de pérdidas netas ante la fuga de capitales.

Con las tasas de interés ocurre algo insólito, ya que la política del BCRA luego de la devaluación de enero del 2014 fue la de promover el alza de las tasas al 26%.

Esa política fue la excusa de la banca privada y transnacional hegemónica en el ámbito comercial de las entidades financieras para elevar el costo del crédito a valores que oscilan entre el 85 y el 110%, en consumos con tarjetas, giros en descubiertos o créditos para consumo, o la producción.

No hay dudas que se trata de un costo usurario, imposible de financiar ninguna ampliación de la actividad económica, menos con la situación de desaceleración que se confirma en la vida cotidiana.

Desde el propio oficialismo, sea el gobierno o voces del periodismo afín se salió a denunciar el carácter usurario de la banca, sin reconocer que en el origen está la iniciativa de la propia autoridad monetaria.

Mientras se discute que los propios bancos instalen auto restricciones, sorprende que siga vigente la ley 21.526 de entidades financieras de la dictadura, o que no se acuda a la nacionalización de la banca ante la usura explícita que suponen las tasas de saqueo.

Mientras tanto el dólar volvió a subir, tanto el oficial como el paralelo, y parece haberse terminado la convertibilidad de 8 a 1 que rigió por unos meses.

Existen operaciones especulativas, no hay duda, y se asocian a la recurrente actitud especulativa que sostiene la fuga de capitales, Pero también se asocia a una inflación del 12% en el primer trimestre, según la nueva medición del INDEC, que también está en la sospecha por no recoger íntegramente el movimiento de los precios en la Argentina, e incluir a los precios cuidados en la medición del indicador mensual de evolución de los precios.

El tipo de cambio es un precio más en la economía, como el de los alimentos, el combustible, o los salarios, y cada uno de ellos evoluciona según condiciones particulares.

Los grandes especuladores y productores exportadores de la Argentina presionan por una nueva devaluación. Saben que ya tuvieron éxito al comienzo del 2014, y van por una nueva devaluación, mientras los salarios se contienen en negociaciones salariales chantajeadas por el temor al despido o la desaceleración de la economía.

Por si fuera poco el debate de la coyuntura, el pasado 22 de mayo, el CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, sentenció a la Argentina a pagar 40 millones

de dólares a la empresa eléctrica francesa SAUR International S.A. por violación al tratado de defensa de inversiones entre Francia y Argentina.

También hay que sumar pagos de intereses del 6% desde septiembre de 2007 hasta el presente. Los cálculos indican unos 60 millones de dólares entre la sentencia, los intereses y los gastos, a los que deberán adicionarse honorarios profesionales.

Se trata de un nuevo fallo en contra de la Argentina por parte del CIADI y que nos renueva el interrogante sobre la permanencia del país en ese ámbito que no integra el Brasil y del que se retiraron Bolivia, Ecuador y Venezuela en años recientes.

La realidad es que la Argentina sigue prisionera de una institucionalidad en defensa del libre comercio sustentada en los años 90, los de la hegemonía neoliberal, y que no termina de desembarazarse.

Como si ello no fuera poco, acaba de realizarse en París un encuentro entre la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, y la CEPAL, para discutir los beneficios del libre comercio en momentos en que el Mercosur discute un tratado con la Unión Europea, luego de haber rechazado en 2005 un acuerdo similar con EEUU, el ALCA.

La pregunta recurrente apunta a pensar que tendrá de diferente el capitalismo europeo para favorecer un acuerdo de libre comercio que oportunamente se rechazó con EEUU.

Convengamos que solo son preguntas para analizar la complejidad de la coyuntura económica de la Argentina en momentos de reducción de la actividad económica y amenazas sobre los ingresos populares.

Villa Mercedes, 23 de mayo de 2014



ARGENTINA ACORDÓ CANCELAR DEUDA CON EL CLUB DE PARÍS

Informes oficiales de las partes, el gobierno argentino¹ y el Club de París², explican en la fecha el acuerdo para cancelar 9.700 millones de dólares en los próximos 5 años, con opción a que sean finalmente 7 los años de pagos, si es que no llegan inversiones externas desde los países acreedores.

Lo suscripto está condicionado al ingreso de inversiones externas demoradas por la falta de pago de antiguas deudas, parte importante de las cuáles fueron asumidas en la dictadura genocida para pertrechos bélicos, armamentos, entre ellos. En la medida que ingresen esas inversiones externas, los pagos podrían acelerarse, o demorarse en caso contrario.

Japón y Alemania son de los países de mayor acreencia entre los 19 integrantes del Club de París. Entre otras, la empresa Toyota y la Siemens, que habían comprometido inversiones en Argentina esperaban el visto bueno de sus casas centrales y gobiernos, sujetos a la negociación por las cancelaciones de la deuda ahora consolidada en 9.700 millones de dólares.

Entre los principales acreedores están también Holanda, EEUU, Italia, España, Suiza, Canadá, Francia e Inglaterra. Existen expectativas de atraer capitales de esos países para los sectores más

¹ Telam, <<http://www.telam.com.ar/notas/20140...>>, consultada el 29/5/2024.

² Sitio en internet del Club de París, en <<http://www.clubdeparis.org/>>, consultado el 29/5/2024.

dinámicos de la economía local, entre ellos en el sector de los hidrocarburos no convencionales.

Los pagos comenzarán en Julio próximo con un desembolso de 650 millones de dólares, y dos pagos sucesivos, en mayo del 2015 y 2016, por 500 millones de dólares respectivamente. En total un pago directo de 1.650 millones de dólares en los próximos dos años.

Por el resto de la deuda, que se cancelará desde ahora y hacia el 2019 o el 2021, se deberán adicionar intereses con una tasa del 3% por el saldo de capital, que si se extiende el plazo de cancelación se estirará a 3,8%.

Se aduce que se trata de una tasa de interés ventajosa en las condiciones del costo del dinero en la coyuntura. Sin embargo, poco se comenta la exigencia de disposición de recursos fiscales o de las reservas internacionales, que bien podrían tener otro destino.

LA POLÍTICA ECONÓMICA NECESITA INGRESAR DIVISAS

Argentina llegó a acumular 52.000 millones de dólares en 2011 y ahora registra unos 28.500 millones de dólares. En muy poco tiempo se perdieron 23.500 millones de dólares, fugados del país por diferentes mecanismos económicos, entre ellos salida por atesoramiento, turismo, pago de importaciones, cancelaciones de deuda y remisión de utilidades al exterior.

El Presidente del Banco Central informó en un cónclave empresario que se aspira a sostener el actual nivel de reservas a fines del 2014³, con lo cual, pese a la cosecha récord y las consecuentes liquidaciones de divisas, más préstamos e inversiones que habiliten los novísimos acuerdos externos, con el CIADI, Repsol y el Club de París, la confesión de partes señala a las presiones externas para hacerse de recursos provenientes del trabajo social en la Argentina, y que convoca a sostener una política oficial agresiva de ingreso de divisas y hacer frente a la demanda de pagos al exterior.

Lo concreto es que hay que pagar deuda y más deuda; importar energía e insumos para el ensamble industrial local; cancelar

3 “El BCRA prometió bajar la tasa de interés sólo si la inflación sigue en descenso” diario *BAE* del 29/5/2014, en <<http://www.diariobae.com/notas/1826>>, consultado el 29/5/2014.

demandas por turismo y diferentes mecanismos de fuga de capitales. Las divisas generadas por las exportaciones locales no alcanzan y por eso más préstamos y estímulos a la radicación de inversiones foráneas.

¿QUÉ SIGNIFICA SER PAÍS EMERGENTE?

Argentina pretende ser reconocido por el sistema mundial y ser sujeto de préstamos e inversiones, y por eso va en búsqueda de ser considerado “país emergente”. Esa es la razón para reivindicar la invitación rusa para ser parte de la próxima reunión de los BRICS en Brasil, e imagina la transformación en BRICSA. Así, a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), deberá incluirse a la Argentina como país emergente (BRICSA).

Esta caracterización como “emergentes” suena bien, mejor que “países atrasados, en desarrollo, dependientes”, pero no es más que la denominación que le asignan los capitales excedentes a los países que ofrecen condiciones adecuadas de rentabilidad a sus inversiones.

Esas condiciones se concentran en abundante población en disposición a ser empleada a bajos salarios relativos al costo promedio mundial e importante dotación de recursos naturales para insertarlos como mercancías en el ciclo de acumulación de capitales.

Además, son consideraciones en momentos de crisis de valorización del capital en los principales centros imperialistas del sistema mundial: EEUU, Europa y Japón.

Vale recordar que los inversores están interesados en la apropiación de la renta que resulta de sus inversiones, motivo por el cual Repsol retiró 13.000 millones de dólares de ganancias obtenidas en una década en la explotación de hidrocarburos en nuestro país.

Son dos noticias que resalta el gobierno, y la presidente de Argentina se pronunció por redes sociales destacando que hoy es “un día muy importante para la Argentina, con el acuerdo por la deuda del Club de París y la invitación a la cumbre BRICS en Brasil”.⁴

Convengamos que con el acuerdo se consolidan los compro-

4 Acuerdo con Club de París. Según Cristina Fernández, “Todas las obligaciones financieras de Argentina, desde el 25 de mayo de 2003, se han venido pagando religiosamente”. *Télam*, en <<http://www.telam.com.ar/notas/20140>>, consultada el 29/5/2014.

misos de pagos que ratifican el carácter de cáncer que asume el endeudamiento público, y con la potencialidad de pertenecer a los emergentes, se confirma a la Argentina como ámbito expectable para la rentabilidad del capital.

SE PERDIÓ OTRA OCASIÓN PARA DECLARAR “DEUDA ODIOSA”

Si una deuda era pasible de ser declarada odiosa era la del Club de París y sin embargo, se optó por cumplir con los compromisos contraídos ilegítimamente por la dictadura genocida.

La opción de pagador serial de deuda y de búsqueda de reconocimiento mundial afirma a la Argentina como parte del capitalismo mundial en crisis.

El interrogante es si se puede transitar un camino alternativo, anticapitalista y antiimperialista. Ello supone fuerza política en la sociedad que desde nuevas mayorías desde la acumulación de poder popular pueda desafiarse el orden capitalista local, regional y mundial.

Es parte de lo que hoy 29 de mayo, a 45 años del Cordobazo se disputa en las elecciones de la CTA e intentar ser mayoría en el movimiento de trabajadores en la Argentina y desde allí disputar hegemonía en el seno del pueblo para ejercer soberanía integral para la liberación.

Buenos Aires, 29 de mayo de 2014

*“HISTÓRICO ACUERDO CON LOS PAÍSES INTEGRANTES DEL CLUB DE PARÍS”**

Este fue el titular predominante del día 29 de mayo de 2014 en Argentina y, podemos decir en el mundo. De esta manera, el gobierno de la gestión kirchnerista, después de varios intentos, cerraba esta negociación aceptando cancelar 9.700 millones de dólares en los próximos 5 años, con opción a que sean, finalmente, 7 años de pagos, si es que no llegan inversiones externas desde los países acreedores.

Éste fue el titular predominante del día 29 de mayo de 2014 en Argentina y, podemos decir en el mundo. De esta manera, el gobierno de la gestión kirchnerista, después de varios intentos, cerraba esta negociación aceptando cancelar 9.700 millones de dólares en los próximos 5 años, con opción a que sean, finalmente, 7 años de pagos, si es que no llegan inversiones externas desde los países acreedores. El acuerdo suscripto está condicionado al ingreso de inversiones externas demoradas por la falta de pago de antiguas deudas, parte importante de las cuáles fueron asumidas en la dictadura genocida para pertrechos bélicos, armamentos entre ellos. En la medida que ingresen esas inversiones externas, los pagos podrían acelerarse, o demorarse en caso contrario.

Recordemos que el Club de París, grupo informal que tiene la función de coordinar formas de pago y renegociar deudas externas soberanas, está compuesto por 19 países, que los pasivos impagos

* Nota escrita junto a María Elena Saludas, de Attac Argentina.

de la Argentina corresponden a 15 miembros; Alemania y Japón concentran el 60 por ciento de la deuda total (las empresas Toyota y Siemens fueron actores importantes en el proceso de negociación, como veremos más adelante). Siguen Holanda, Italia y Estados Unidos, con acreencias que no superan el 8 por ciento del total cada uno. El resto son pasivos más pequeños.

Los pagos comenzarán en Julio próximo con un desembolso de 650 millones de dólares, y dos pagos sucesivos, en mayo del 2015 y 2016, por 500 millones de dólares respectivamente. En total un pago directo de 1.650 millones de dólares en los próximos dos años.

Por el resto de la deuda, que se cancelará desde ahora y hacia el 2019 o el 2021, se le deberán adicionar intereses con una tasa del 3% por el saldo de capital, que si se extiende el plazo de cancelación se estirará a 3,8%.

Se aduce que se trata de una tasa de interés ventajosa en las condiciones del costo del dinero en la coyuntura. Sin embargo, poco se comenta la exigencia de disposición de recursos fiscales o de las reservas internacionales, que bien podrían tener otro destino.

Es evidente que la política económica que se viene implementando necesita ingresar divisas. Argentina llegó a acumular 52.000 millones de dólares en 2011 y ahora registra unos 28.500 millones de dólares. En muy poco tiempo se perdieron 23.500 millones de dólares, fugados del país por diferentes mecanismos económicos: salida por atesoramiento, turismo, pago de importaciones, cancelaciones de deuda y remisión de utilidades al exterior.

El Presidente del Banco Central informó, en un cónclave empresarial, que se aspira a sostener el actual nivel de reservas a fines del 2014, con lo cual, pese a la cosecha récord y las consecuentes liquidaciones de divisas, más los préstamos e inversiones que habiliten los novísimos acuerdos externos, con el CIADI, Repsol y el Club de París, la confesión de partes señala a las presiones externas para hacerse de recursos provenientes del trabajo social en la Argentina, y que convoca a sostener una política oficial agresiva de ingreso de divisas y hacer frente a la demanda de pagos al exterior.

Las negociaciones de este acuerdo fueron conducidas por el Ministro de Economía, Alex Kicillof y su equipo económico, en representación del gobierno nacional, con el convencimiento de que el cierre de las mismas promoverá inversiones productivas en el país. Esta concepción es compartida por el arco oficialista, por la

mayoría de la oposición y, por todos aquellos que consideran que las “inversiones externas directas” (IED) ayudarán a profundizar el actual modelo de “desarrollo”, resolverán la pobreza y la desigualdad. El famoso “desarrollo” con “inclusión social”, sin poner en debate qué tipo de modelo de desarrollo se está promoviendo, qué tipo de inserción global y cuáles son sus consecuencias.

Sin lugar a dudas, el modelo de desarrollo que se sigue promoviendo, altamente concentrador y excluyente, queda al desnudo cuando se analiza el rol que jugaron las grandes empresas de los países acreedores, que vienen haciendo buenos negocios en el país, y que en la etapa que se inicia proyectan fuertes inversiones.

Estas empresas, si bien permanecieron al margen de la escena pública, fueron los actores principales de la negociación y, según los comentarios “se movieron por interés propio (poniendo sobre la mesa de negociación los datos de crecimiento de sus negocios en Argentina, en los últimos años) pero, también empujadas por el gobierno nacional, que en los últimos tres meses mantuvo reuniones con altos ejecutivos de esas firmas para reclamarle su intervención” (diario *Página 12*, 01/06/2014).

Los emblemáticos nombres de estas compañías globales y, en qué sectores operan permite vaticinar cuál es el modelo a profundizar. Algunos ejemplos:

- En hidrocarburos se destrabarán inversiones para continuar con la exploración y explotación de petróleo y gas no convencional, con la devastadora técnica de *fracking*. Estas inversiones son, sobre todo, para Vaca Muerta (Neuquén) y la expectativa es que aparezcan nuevos interesados. “El presidente de YPF Miguel Gallucio ya sondeó a petroleras internacionales como Petronas y Pemex” incluso, se espera entusiasmar a algunas estadounidenses como Halliburton, Schlumberger y Weatherford.

- En el sector del agronegocio, Monsanto, la número uno en semillas transgénicas y a la cabeza de su comercialización, es una de las empresas que también se beneficiará, directamente, ante la resolución del default con el Club de París. Al igual que Syngenta, otras empresas del agrobussines y de fabricación de maquinarias agrícolas ((Jonh Deere).

- Las automotrices alemanas Volkswagen y Mercedes Benz; las estadounidense General Motors y Ford; las japonesas Toyota Corporation y Honda; las francesas Peugeot, Citroën y Renault.

Además de la expansión de estas firmas se espera el ingreso de autopartistas globales que ahora, expresaron: “verán con mejores ojos a un país que normaliza su deuda.”

- En minería la japonesa Toyota Tsusho que trabaja para la extracción de litio en el norte del país y tiene nuevos proyectos para esta actividad. El gigante japonés, Marubeni, es probable que reflote el megaproyecto para extracción de potasio en Malargüe, Mendoza (concesión que estaba en manos de la brasileña Vale). La canadiense Barrick Gold, también es favorecida con la firma de este acuerdo, que le permite acceder a financiamiento de la banca de desarrollo de su país, a tasas promocionales, y retomar el proyecto Pascua Lama para obtener oro.

Podríamos continuar con la lista de industrias químicas, petroquímicas, laboratorios: Dow Química, Shell, Pfizer, Roche, haciéndose aún más amplia si tenemos en cuenta las inversiones para infraestructura y tecnología. Que en verdad, no estarían mal, salvo que son funcionales al gran capital y no al servicio de los pueblos. Todo lo señalado indica que se continua y profundiza una matriz económica “extractivista, extranjerizante y concentradora” que lejos está de permitirnos alcanzar una soberanía energética, alimentaria, en fin, una soberanía sobre nuestros bienes naturales.

Sin embargo, una de las cuestiones que fueron reivindicadas con mayor fuerza en relación al acuerdo alcanzado con el Club de París fue la “soberanía” con que Argentina fijó las condiciones: sin la intervención del FMI y, “sin restringir la autonomía que debe tener como país soberano”. En general, el rol de esta institución, en el marco de eventuales convenios, es darle seguridad a los países integrantes del Club, y oportunidades de negocios a sus empresas. Tema a reflexionar, ya que la presencia del Fondo Monetario Internacional, en esta oportunidad, no fue tan necesaria, dado que las corporaciones transnacionales, con casas matrices en los países miembros de este Foro, tienen asegurado sus negocios y su acumulación, a partir del marco jurídico existente, desde los 90 en Argentina. Estamos haciendo referencia a los 58 Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) vigentes y, sucesivamente, renegociados y que remiten al CIADI (Tribunal “ad hoc” del Banco Mundial) para solucionar posibles controversias entre inversionista y Estado receptor, en este caso Argentina, país que tiene la mayor cantidad de juicios frente a este tribunal.

También, se manifestaron complacidos por la firma del acuerdo con el Club de París el arco empresarial local, ya que según lo

expresado abre un horizonte de previsibilidad para las inversiones, despeja el camino financiero y sobre todo permite reinsertarse en los mercados y normalizar las relaciones con los organismos internacionales. Otro sector altamente complacido fue la banca. Según lo expresado por altos funcionarios de la Asociación de Bancos Argentinos, permitirá acceder a financiamiento externo para encarar proyectos de infraestructura que necesita la Argentina.

POR QUÉ, DESDE EL CAMPO POPULAR, NO PODEMOS NI REIVINDICAR, NI CELEBRAR EL ACUERDO CON EL CLUB DE PARÍS.

Además, de los temas mencionados que dejan en claro la estrecha vinculación entre la Deuda Pública y el rol de los principales actores del sistema capitalista, las corporaciones transnacionales, no aceptamos que se haya acordado como cifra final 9.700 millones de dólares.

En reiteradas oportunidades, ante la inminencia de acuerdos con el Club de París (2008, 2010, 2011), varios movimientos y organizaciones del campo popular solicitamos explicaciones, haciendo uso del derecho a la información que tiene toda la ciudadanía, sobre cuál era el origen de las deudas que el gobierno argentino pretendía pagar a los países del Club de París, quiénes se beneficiaron con su contratación y cuánto se había pagado en concepto de servicios.

Siempre consideramos que el pueblo argentino no tenía, ni tiene porque pagar una deuda que no contrajo, por la que no fue consultado, que no lo benefició y que tiene su origen en contratos realizados con anterioridad al 10 de diciembre de 1983, o sea, durante la dictadura cívico-militar. Manifestamos nuestro rechazo al argumento de que las “deudas fueron legitimadas por los gobiernos democráticos que acordaron su reestructuración con el gobierno del país reclamante” ya que, la ilegitimidad de origen de esos créditos no puede ser subsanada por un acto administrativo posterior.

En esta oportunidad, como en las anteriores, persiste una diferencia en los montos. De acuerdo a la última información oficial disponible –Ministerio de Economía (MECON), “Informe trimestral de la Deuda Pública al 30.9.2013”– el Estado central le debía al Club de París unos 6.100 millones de dólares: 5.100 por Capital y 1.000 por Intereses.

El Club le reclamaba a la Argentina, en cambio, 9.700 millones de dólares –con cifras cerradas al 30.4.2014– donde el grueso

de la diferencia (unos 3.600 millones de dólares) se entiende corresponde a intereses punitivos e intereses corridos hasta esa fecha.

El acuerdo se cierra con este último monto: 9.700 millones de dólares. Son fondos que podrían servir para modificar el modelo productivo y de desarrollo atendiendo las necesidades soberanas del pueblo argentino. ¡Queda claro que el privilegio lo tienen los acreedores externos!

Finalmente, el cierre de la negociación con el Club de París impide realizar una auditoría específica sobre este tramo del endeudamiento público argentino. Fue investigado, a partir de 1982, por el ciudadano Alejandro Olmos, que inició la apertura de una primera causa contra la deuda. La resolución judicial de aquella “Causa Olmos”, producida en julio de 2000, establece sin lugar a dudas la “fraudulencia” de las operaciones y la ilicitud de las mismas que abarca, entre otros elementos, el tramo que el gobierno argentino acaba de negociar con el Club de París.

Reiteramos que de esta forma, se cierra la posibilidad de realizar una auditoría integral, pública y participativa de este tramo y de toda la deuda pública argentina.

Y, se perdió otra ocasión para declarar “deuda odiosa”.

Si una deuda era pasible de ser declarada odiosa, era la del Club de París y, sin embargo, se optó por cumplir con los compromisos contraídos ilegítimamente por la dictadura cívico-militar.

La opción de “pagador serial” de deuda y de búsqueda de reconocimiento mundial afirma a la Argentina como parte del capitalismo mundial en crisis.

El interrogante es si se puede transitar un camino alternativo, anticapitalista y antiimperialista. Ello supone fuerza política en la sociedad que desde nuevas mayorías, desde la acumulación de poder popular, pueda desafiar el orden capitalista local, regional y mundial.

Ésta es parte de la lucha diaria que llevamos adelante los movimientos y organizaciones sociales, sindicales, políticas, de mujeres, pueblos originarios, campesinos/as, ambientales y culturales disputando hegemonía en el seno del pueblo para ejercer soberanía popular e integral para la liberación.

5 de junio de 1914

ARGENTINA

LA CORTE DE JUSTICIA ESTADOUNIDENSE Y LAS POTENCIALIDADES DE UNA OFENSIVA POPULAR

Muchos temas económicos preocupan por estas horas y entre ellos la desaceleración de la economía y su impacto social en suspensiones y cesantías. Por ello se ratifica el rumbo del modelo productivo en la continuidad del régimen automotor con Brasil y se asocia la voluntad patronal con el Estado y la burocracia sindical, claramente evidenciado en el conflicto de la española Gestamp.

En ese camino se inscriben los acuerdos por regularizar la situación externa en materia de deuda y habilitar ingresos de divisas: a) por superávit comercial, negado en la coyuntura por acción especulativa de grandes exportadores; b) recepción de nuevos préstamos externos, alejando el horizonte del desendeudamiento y retomando la perspectiva de nuevo impulso al cáncer de la deuda; c) aliento a la radicación de Inversiones Externas Directas, especialmente en materia de hidrocarburos no convencionales, el camino de Chevron.

Pero también la política social compensatoria, ahora manifestada en la moratoria previsional ofrecida a un universo de 500.000 potenciales jubilados sin la totalidad de aportes, los que recibirán la mínima menos el costo de la regularización. La medida supone una inyección de 12.000 millones de pesos para intentar dinamizar el consumo popular y contrarrestar la disminución de la actividad económica.

Pero los problemas se concentran en la cuestión de la inserción internacional subordinada de la Argentina. El interrogante para el 12 de junio próximo está en manos de la Corte Suprema de Justicia

de EEUU, que puede decidir intervenir o no en la demanda de acreedores externos por la deuda en cesación de pagos de Argentina.

Aludimos a la demanda contra el país de inversores especulativos, los denominados “fondos buitres”. Se trata de 1.330 millones de dólares en litigio, parte de unos 7.000 millones de dólares (el 7% del total) que continúan en default desde fines del 2001, ya que sus titulares no ingresaron a los sucesivos canjes de deuda instrumentados en 2005, 2010 y 2013, donde se canjearon el 93% de los títulos.

Otra variante, muy esperada desde el gobierno, es que la decisión cortesana en Washington se prorrogue hasta fin de año, habilitando así la posibilidad de negociación con los litigantes, sin “pagarle lo mismo al 93% de los acreedores que aceptaron los dos canjes con quita en 2005 y 2010” según relata Alejandro Bercovich.¹

LA DEUDA ES UNA POLÍTICA DE ESTADO

Tal como venimos sosteniendo, el endeudamiento externo constituye un gran condicionante de política económica en Argentina, sufrido en 30 años de gobiernos constitucionales desde 1983. Tan es así que la cuestión de la deuda pública es “política de Estado”.

Nuestra afirmación queda confirmada con la adhesión a las posiciones oficiales sobre la situación en trámite ante la Justicia estadounidense de la oposición política con posibilidades de ser gobierno. Aludimos al massismo, el macrismo, o la alianza entre socialistas y radicales.

Pero también se comprobó en los acuerdos con los sucesivos canjes de deuda, en el cumplimiento regular de pagos a los organismos internacionales; en la nueva deuda asumida para compensar a Repsol por la expropiación parcial de YPF; en los cumplimientos de pagos a sentencias del CIADI. Más recientemente el acuerdo con el Club de París.

Es cierto que existen objeciones parciales, sobre formas de resolver y acordar, pero nunca sobre la cuestión de fondo que supone cancelar deuda y restablecer relaciones de la Argentina con el sistema financiero mundial.

¹ Alejandro Bercovich. “El Mundial de Kicillof, los laboratorios y la política bataclana”, en *BAE*, 6 de Junio del 2014, <<http://www.diariobae.com/notas/1935...>>.

Muchas veces se alude a que no existen políticas de Estado en la Argentina, situación desmentida en materia de endeudamiento. La voluntad mayoritaria del sistema político en el país es por la normalización de la inserción subordinada de la Argentina en el sistema capitalista y su hegemonía transnacional.

Por eso, pese a los discursos críticos al FMI, el organismo difundió la opinión satisfactoria sobre las modificaciones en la información estadística que publica el INDEC y que involucró la asistencia técnica del Fondo. Claro que se guarda para nuevas evaluaciones en septiembre y febrero próximos.

La Argentina es parte del FMI y del sistema internacional, más allá de las críticas o alabanzas que se hagan desde diferentes tribunas políticas por parte de las mayorías parlamentarias, oficialistas y opositoras.

Esa pertenencia al sistema capitalista es una política de Estado y bien vale discutir si existe la posibilidad de pensar más allá del capitalismo. Esta es la razón por lo cual en 30 años de gobiernos constitucionales, los diferentes turnos presidenciales se jugaron por no sacar los pies del plato.

¿HAY LUGAR PARA EL DESARROLLO INDEPENDIENTE?

Es un debate interesante la posibilidad de organizar una política alternativa, cuestión que se suscitó en diciembre del 2007 al proponer siete jefes de Estado de la región la constitución de un Banco del Sur, aun demorado en su aparición; o cuando la UNASUR, en noviembre del 2010, conformó un Consejo Suramericano de Economía y Finanzas para articular políticas comunes. Más aún los debates sobre una Nueva Arquitectura Financiera sustentados desde la Alternativa Bolivariana de los Pueblos, ALBA-TCP, sugiriendo avanzar en articulaciones económicas, productivas, financieras y monetarias para una inserción independiente en el sistema mundial.

Claro que se trataba de una cuestión en disputa, pues para algunos las medidas suponían la continuidad en el marco del capitalismo, pero ya circulaba también la posibilidad de un orden socialista.

¿Cuán cerca están esos debates y desafíos en la realidad contemporánea de la región? Las expectativas por el cambio político en la región en la primera década del Siglo XXI constituían una

esperanza más allá de nuestros territorios, con dinámica social movilizadora y extendida, a lo que se sumaban cambios institucionales, especialmente reformas constitucionales que anunciaban nuevos imaginarios civilizatorios, caso del “vivir bien” o el “buen vivir” en Bolivia y Ecuador; junto a proposiciones por la soberanía alimentaria, energética o financiera y la reaparición de la discusión por un horizonte socialista presentado por las reformas cubanas y las proposiciones de Venezuela y Bolivia.

La coyuntura nos devuelve la contra ofensiva al proceso de cambio político que se juega en la profundización de esas claves sociales, políticas e ideológicas con amplia movilización de los trabajadores y los pueblos, o la administración de lo logrado con desmovilización social, condenando la esperanza a un proceso de restauración de la hegemonía neoliberal de fines del Siglo XX.

Es lo que podrá discutirse en pocos días más, en la reunión del G77+China en Bolivia y será una ocasión adecuada para discutir el orden mundial capitalista en crisis. A medio siglo de la creación del Grupo de los 77, que hoy duplica sus miembros manteniendo la denominación, vuelve a tener sentido la discusión de 1964 sobre Dependencia o Liberación.

Claro que el tiempo no transcurrió en vano y la ofensiva popular y liberadora de los 60 y 70 dio paso, terrorismo de Estado mediante a la ofensiva del capital y las políticas hegemónicas neoliberales que arrasaron con conquistas históricas de los trabajadores y los pueblos. Al mutar la realidad, ruptura de la bipolaridad mediante a comienzos de los 90, se impuso el pragmatismo en muchos de los procesos sociales, políticos e ideológicos protagonistas de la perspectiva de liberación nacional y social.

Es lo que crudamente se pone de manifiesto hoy con la denominación de países emergentes, un lugar al que aspiran los administradores del capitalismo dependiente en todo el mundo. Por ello es que los Estados salen a la conquista de inversores externos. El imaginario posible es el capitalismo y la valorización de capitales favorecidas por inversiones externas. Se menciona incluso a Cuba, que con sus cambios económicos atrae capitales externos a la isla para resolver el abastecimiento y la creación de riqueza en un territorio que se pronuncia por un modelo alternativo, el socialismo.

Esta es precisamente lo diferente en cuestión de inversiones, ya que no es lo mismo propugnar un orden capitalista que socialis-

ta. La cuestión es quién decide sobre las inversiones, el para qué y los cómo de las mismas, como el impacto social de ello derivado. Claro que toda inversión de transnacionales tiene como propósito la ganancia y ese es el peligro mensurado de la estrategia cubana para defender lo logrado y resolver la coyuntura, muy diferente a quienes apuestan a la continuidad esencial bajo el orden del régimen del capital.

En los 60 y 70 se propagaba el imaginario alternativo desde la teoría de la dependencia, y la desconexión del orden capitalista que pregonaba teóricamente Samir Amín. ¿Podrá el cónclave boliviano del G77+China retomar el sentido de la ofensiva por la liberación de sus años de fundación o continuará con la adecuación demandada por la hegemonía? Una respuesta por la negativa supone la continuidad de la subordinación del Sur empobrecido a la lógica dominante del orden capitalista hegemónico por EEUU, Europa y Japón, a los que se asocian los “emergentes”.

PODER POPULAR Y MODELO PRODUCTIVO

La respuesta no puede confiarse solo a la discusión de los gobiernos, sino y principalmente a la acumulación de poder popular por la liberación social y nacional que se procese en cada uno de nuestros países y en la capacidad de integración no subordinada al orden capitalista.

En los 80 y 90 se impuso el modelo productivo y de desarrollo de un Sur proveedor de recursos naturales al capitalismo desarrollado, principalmente respecto de los hidrocarburos, lo que se generalizó a comienzos de este Siglo XXI al conjunto de los bienes comunes y a una aceleración de la extensión de la relación de explotación mediante salarios bajos y precarización laboral en todo el mundo, especialmente en China y la India.

No es solución para trabajadores y pueblos la adecuación al capitalismo posible, resultado de la ofensiva del capital en tiempos de transnacionalización, que sepulta toda aspiración de “capitalismo autónomo” como imaginaron burguesías locales en tiempo del desarrollismo pos conflicto bélico de 1945.

Hace falta consolidar una estrategia de acumulación popular, que en la Argentina se define en el movimiento de trabajadores y por eso la importancia de las recientes elecciones de la CTA y las experiencias autónomas de la burocracia sindical que hoy son visi-

bles y tanto preocupan a las patronales, las autoridades y el sindicalismo tradicional.

Algo nuevo ocurre en la Argentina, aunque no sea hegemónico en el análisis mediático o del poder parlamentario. Eso nuevo en el país puede contribuir a fortalecer las iniciativas que en la región empujan cambios radicalizados que avancen en las modificaciones de las relaciones sociales de producción y la correlación de fuerzas favorable a la emancipación social por el socialismo.

Buenos Aires, 7 de junio de 2014

EL FALLO DE LA CORTE DE EEUU EN CLAVE DE LA LÓGICA IMPERIALISTA

Solo son buitres los fondos especulativos? ¿No son buitres los acreedores del Club de París, como señala Diálogo 2000, que reclaman cobrar “deudas odiosas” contraídas por ilegítimos gobiernos genocidas? ¿No son buitres empresas como Repsol que vaciaron las reservas de hidrocarburos del país para abonar su ciclo de acumulación? ¿No son buitres las transnacionales que suscriben pactos secretos con acuerdos parlamentarios mayoritarios, tal el caso de YPF con Chevron? Estas son algunas de las preguntas que se hace Julio Gambina en la nota que transcribimos sobre la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Los cortesanos estadounidenses decidieron no tomar el caso de la Argentina y convalidar el fallo neoyorkino de primera y segunda instancia, por lo que se debe cancelar unos “1500 millones de dólares”, según informó en cadena nacional la Presidenta Cristina Fernández¹. Según la presidente, esta decisión puede estimular otras demandas por 15.000 millones de dólares, sin perjuicio de otras acciones que ejecuten quienes ingresaron a los canjes de deuda desde el 2005 y sucesivas reaperturas.

Nadie sabe en rigor a cuanto pueda llegar la demanda de acreedores de la impagable deuda, recurrentemente renegociada

¹ La presidenta aseguró que “Argentina va a respetar su deuda”, pero remarcó que “no aceptará ninguna extorsión”, lunes, 16 de junio de 2014, en <<http://www.presidencia.gov.ar/informacion/actividad-oficial/27625-la-presidenta-aseguro-que-argentina-va-a-respetar-su-deuda-pero-remarco-que-no-aceptara-ninguna-extorsion>>, consultada el 17/06/2014.

en tiempo constitucional y últimamente cancelando a acreedores externos con transferencia de títulos a ámbitos del Estado Nacional (ANSES, Banco Central, etc.) que penden como hipotecas sobre generaciones futuras.

Convengamos, que si la Corte de EEUU asumía el caso, ello no significaba que la Argentina iba a quedar desobligada de pagos. La expectativa más generalizada en el gobierno y el poder económico local y global era que los máximos jueces del imperio postergaran la decisión hasta fin de año. En ese plazo vence la cláusula que establece que los acreedores ingresados al canje pueden demandar el mejor trato recibido por algún tenedor de títulos en cesación de pagos (default). De este modo, el gobierno ganaría tiempo, y superado el plazo de respetar condiciones de pago, podría negociar con los inversores demandantes (los fondos buitres) cuánto, cómo y cuándo cancelar deudas sin tener que hacer lo mismo con el 93% ingresado a los canjes de deudas del 2005 y 2010.

La hipótesis fue siempre cancelar esa deuda, incluso se reabrió el canje de deuda con ese propósito, sin fecha de cierre en 2013, todo con acuerdo de la oposición sistémica, del mismo modo que viajaron a EEUU para incidir sobre la Justicia del imperio. Como hemos dicho, el pago de la deuda es una política de Estado.

ESPECULACIÓN FINANCIERA, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DEL ESTADO

En el discurso presidencial se critica la ganancia especulativa del “fondo NML” que “adquirió los bonos en 2008 por 48,7 millones de dólares”, que “ganó el 1608 por ciento en dólares” y que demanda cobrar 428 millones de dólares” y el Juez falla abonar 1500 millones.

Lo que se omite es decir que esas son las reglas del capitalismo, ya que los bonos los emitió la Argentina para circular en el mercado mundial en las condiciones de mercado (al momento de la compra y de la realización). Que la ganancia por especulación es parte de la ganancia en general, ya que la ganancia es plusvalía extraída del trabajo social y apropiada como renta del suelo, ganancia comercial o financiera (tasa de interés) y beneficio industrial. Con Marx aprendimos que la ganancia es plusvalía transfigurada y fuente de ingresos de todos los capitalistas.

No se trata de pensar que los especuladores exprimen a los empresarios de la producción. No es mejor el capital productivo

que el financiero, pues ambos son parte de una integralidad capitalista. Producción y circulación del capital son un fenómeno integrado, que se requieren mutuamente. De nada sirve hablar al corazón del capitalismo, porque siempre responden con el bolsillo. El problema es el orden capitalista.

Es el capitalismo argentino, y más precisamente los gestores del Estado, los que otorgaron las condiciones en sus bonos para que solo con el 100% de los acuerdos pudieran resolverse una renegociación de deuda como la del 2005. ¿Por qué se avanzó en el canje sabiendo esas limitaciones? ¿Valió la pena el desarme estadístico (argumento para la intervención en el INDEC) para no inflar mayores pagos a los acreedores? Esos gestores del Estado son los responsables de ceder soberanía jurídica facilitando litigar en tribunales externos. ¿Es solo una condición de los 80 y los 90? ¿Por qué se insistió con la cesión de soberanía en los contratos con Chevron?

El problema es que los cambios institucionales consagrados en los 90 e inspirados desde el terrorismo de Estado de 1975/6 siguen vigentes y condicionan como un cáncer nuestra vida cotidiana. La deuda es un cáncer a extirpar, y no se puede avanzar en ese sentido mientras subsista la lógica del capital para el modelo productivo y de desarrollo vigente. Se impone una lógica anticapitalista y antiimperialista, muy lejana de la política hegemónica en el gobierno y la oposición sistémica.

¿Solo son buitres los fondos especulativos? ¿No son buitres los acreedores del Club de París, como señala Diálogo 2000, que reclaman cobrar “deudas odiosas” contraídas por ilegítimos gobiernos genocidas? ¿No son buitres empresas como Repsol que vaciaron las reservas de hidrocarburos del país para abonar su ciclo de acumulación? ¿No son buitres las transnacionales que suscriben pactos secretos con acuerdos parlamentarios mayoritarios, tal el caso de YPF con Chevron? Qué decir sobre la sojización, los transgénicos y su impacto en pueblos fumigados, productores y comunidades desalojados por desposesión derivada del agro negocio, o la mega minería a cielo abierto, o la fractura hidráulica, todo en pro de inversiones externas que buscan ganancia y acumulación de sus capitales invertidos, a cambio de calificarnos como países emergentes.

¿TODO LO QUE SE PUEDE HACER ES PAGAR?

En su alocución, la Presidenta confirmó que “la voluntad de pago de Argentina ha quedado más que probada: hemos pagado el acuerdo de 2005, el de 2010, hemos llegado a un acuerdo con Repsol, que retiró su demanda del CIADI” y que se cerró “un acuerdo por la deuda del Club de París”. Tras cartón diferenció “lo que es una negociación, de lo que es una extorsión”. Luego de ello no termina de quedar claro qué acciones impulsará el gobierno de la Argentina.

¿Cómo sigue el trámite judicial en EEUU? No alcanza con denunciar la extorsión e incluso repudiar a los inversores demandantes o a la propia justicia de EEUU.

¿Qué iniciativas de solidaridad efectiva se impulsarán? O mejor aún, porque no avanzar en ejecutar las iniciativas más avanzadas de nueva arquitectura financiera regional para confrontar con el régimen del capital y el imperialismo.

Por nuestra parte, insistiremos desde todos los ámbitos en que actuamos para avanzar en una campaña contra el pago de la deuda, por su investigación por vía judicial (existen varios procesos en curso, algunos con sentencia) o por auditorías integrales. Hay que frenar el drenaje de saqueo que supone el recurrente pago de una deuda que posterga satisfacer demandas por deuda social a la mayoría de la población.

Buenos Aires, 17 de junio de 2014

DESACELERACIÓN ECONÓMICA Y NEGOCIACIONES EN NUEVA YORK

La economía argentina se desacelera en el marco de fuertes presiones de los acreedores de la deuda con sentencia favorable de la justicia de Nueva York.

En efecto, el INDEC¹ señala que “La estimación preliminar del PIB del primer trimestre de 2014 muestra una variación negativa de -0,2% con relación al mismo período del año anterior”.

Agrega el organismo oficial de estadísticas que “El PIB desestacionalizado del primer trimestre de 2014 con respecto al cuarto trimestre del 2013 arroja una variación de -0,8%.”

La información se extiende destacando que la variación negativa de la oferta se explica por la mencionada caída del PIB y “fundamentalmente por la reducción de las importaciones de bienes y servicios reales -3,8%.” Por el lado de “la demanda se observó una variación negativa del -6,4% en las exportaciones de bienes y servicios reales, un crecimiento de 1,9% en la formación bruta de capital, un aumento de 3,4% del consumo público, en tanto que el consumo privado decreció -1,2%”.

Queda claro que el impacto se concentra en el sector privado y que los datos son amenguados por la intervención estatal en sostener el gasto público, tensionada en la coyuntura por las demandas

¹ En <http://www.indec.mecon.ar/uploads/informesdeprensa/pib_06_14.pdf>, consultado el 27/6/2014>.

de diversos sectores sociales del país con sus reivindicaciones de ingresos y los acreedores de la deuda pública, especialmente los que demandan ante la justicia de EEUU.

En el interior del país existen requerimientos de fondos públicos. Los docentes universitarios están en conflicto con las autoridades de Educación y Economía, en el marco del ajuste del salario deteriorado por las condiciones de negociación vigente y la aceleración de los precios en el último tiempo. También demandan los jubilados que solicitan recursos extras a mitad de año, el aguinaldo, precisamente por el retroceso de los ingresos previsionales contra la evolución de los precios en el primer semestre del 2014. Del mismo modo que los trabajadores regularizados pretenden subas del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias o su directa eliminación. Estos sectores son parte de las presiones locales sobre los disminuidos recursos fiscales y que compiten con los acreedores de la deuda pública.

CUMPLIR CON EL 100% DE LOS ACREEDORES

El discurso oficial, apoyado por el arco opositor con capacidad de ser gobierno, manifiesta la vocación de cancelar la deuda en su totalidad, sea el 92,4% ingresado a los canjes de deuda del 2005 y 2010, como al 1% que hizo juicio en Nueva York y ya tiene sentencia en firme, como al resto no ingresado al canje y que explica la continuidad del default (cesación de pagos) iniciado a fines del 2001.

Muy pocos parlamentarios se manifiestan contrarios a honrar el fraude de la deuda, según manifiesta la sentencia del Juez Ballesteros del año 2000, o las múltiples denuncias en sede judicial en la Argentina contra operaciones de canje de deuda en tiempos constitucionales. Algunos razonamientos aluden críticamente a la mayor validez otorgada a una sentencia gestada en EEUU que a otra surgida desde la Argentina.

En rigor, existe en el país una tendencia mayoritaria en el régimen político institucional favorable al pago de la deuda, mientras resurge una corriente crítica, que entre otros se manifiesta en la Carta dirigida al Juez Griesa por parte del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel donde señala que “no es un justo pagar una deuda ilegítima e inmoral”². Esta corriente de opinión crítica re-

2 <<http://www.eldia.com.ar/edis/20140627/Perez-Esquivel-envio-carta-Griesa-No-es-justo-pagar-deuda-inmoral-20140627193055.htm>>, consultado el 27/6/2014.

toma la consigna del No pago de la Deuda que se sustenta en una larga tradición de pensamiento y acción contra el orden capitalista y sus derivaciones especulativas, financieras y usurarias.

La crítica al endeudamiento y la presión acreedora se anima en declaraciones de apoyo, algunas que se destacan por el origen, caso de las opiniones de los presidentes ecuatoriano o boliviano.

Rafael Correa manifestó “Toda nuestra solidaridad a Argentina, todo nuestro apoyo. Yo creo que no debería pagar eso”. Agregó que “Unidos, con una acción concertada de América Latina, se podría evitar aquello, pero creo que todavía estamos lejos de esa capacidad de coordinación”. Siguió diciendo que “el orden mundial no solo es injusto sino inmoral, y solo unidos podremos resistir a ese injusto orden mundial o incluso cambiarlo, solo unidos, la integración latinoamericana.”³

Evo Morales, en su condición de presidente pro-témpore del Grupo de los 77 más China (G77+China), anunció que se comunicará “con otros mandatarios a ver qué podemos hacer para derrotar esta clase de asalto, de especulación financiera, a la extorsión económica”⁴, con relación a la sentencia estadounidense a favor de la demanda de cobro contra la Argentina. Recordemos que la presidencia boliviana del G77+China es lo que facilitó la presencia urgida del Ministro de Economía de Argentina en la sede neoyorkina de Naciones Unidas, informando sobre la situación creada a propósito de la sentencia del juez estadounidense.

La opción que surge de movimientos populares locales y expresiones parlamentarias en Argentina contra el pago de la deuda se vincula a las voces desde el exterior que claman por una nueva arquitectura financiera en la región. En rigor, demandan ensayos de caminos alternativos a la lógica del capitalismo de época. Es algo a procesar desde las definiciones que surjan desde la Argentina en el marco de una integración alternativa a la que sugiere el orden capitalista. Claro que eso supone ir en camino totalmente inverso a la decisión mayoritaria por honrar el fraude del cáncer de la deuda.

3 <<http://www.telesurtv.net/articulos/2014/06/24/rafael-correa-argentina-no-deberia-pagara-fondos-buitre-1109.html>>, consultado el 27/06/2014.

4 <<http://www.telesurtv.net/articulos/2014/06/27/morales-busca-alianzas-con-otros-gobernantes-para-derrotar-extorsion-economica-de-fondos-buitre-6628.html>>, consultado el 27/6/2014.

LA DEUDA PÚBLICA NO PUEDE Y NO DEBE PAGARSE

Pero más allá de opiniones, importan los hechos que remiten a las dificultades de la economía argentina y las restricciones para hacer frente a los pagos externos, lo que implica señalar que el país no puede pagar, salvo con la recurrencia de mayor endeudamiento, y en consecuencia, el agravamiento de una hipoteca sobre el presente y el futuro de generaciones.

Si el default del 2001 por 100.000 millones de dólares se sustentó en una deuda impagable de 144.000 millones de dólares, y la presidencia informa que se abonaron en una década 173.000 millones de dólares, y el último dato oficial indica una deuda de 209.000 millones de dólares, a lo que debe adicionarse los bonos emitidos para cancelar sentencias al CIADI, compensación a Repsol por la expropiación parcial de YPF, el arreglo al Club de París y la sentencia de la Justicia de EEUU, más otras demandas de *holdouts*, la deuda se estira hasta los 240.000 millones de dólares.

El problema es que el argumento oficial y el apoyo de la oposición sistémica es que se necesitan nuevos préstamos e inversiones. Es más, el argumento oficial transita por el desendeudamiento, que habría servido para volver a tomar deuda. Todos los caminos conducen al re-endeudamiento, aun cuando la deuda tenga una proporción menor en el PIB que hacia el 2001. Todo se reduce a más deuda para cancelar deuda y continuar profundizando el cáncer de la deuda.

La cuestión se agrava con el paso de los días. El gobierno dispuso cancelar a deudores ingresados al canje depositando los recursos necesarios en el banco pagador de Nueva York, En lugar de embargar, el Juez Griesa en EEUU, indicó al banco devolver los fondos y exige a la Argentina negociar con los acreedores de la sentencia en firme por 1.500 millones de dólares.

No se sabe cómo sigue la historia, pero es un cuento en capítulos diarios, con novedades e incertidumbres sobre el costo definitivo que significa pagar la deuda con más deuda, restando posibilidades a satisfacer necesidades insatisfechas de la población. Por eso, porque no se puede pagar sin mayores privaciones populares es que la deuda no debe pagarse.

COSTOS POR PAGAR O NO PAGAR

El interrogante inmediato es ¿qué pasaría si no se paga? Lo mismo que ocurrió luego de la cesación de pagos de diciembre del 2001. Si en el 2001 se utilizaron 12.000 millones de dólares para cancelar deuda, al año siguiente, en default, la cifra bajó a 3.000 millones, utilizando la diferencia para otros fines, que aun cuando se los discuta sobre a quienes se beneficiaron con esas políticas, la realidad es que se facilitó un proceso de aplicación de recursos públicos para la recuperación de la economía local.

Además, quedar afuera del mercado mundial de préstamos, favoreció la posición local ante la crisis mundial emergente en 2007/2009, por ausencia de exposición a nuevo endeudamiento, cuestión que afectó seriamente a países fuertemente endeudados, caso de Grecia.

¿Necesita Argentina nueva deuda e incluso inversiones externas, tal como señala el discurso mayoritario de gobierno y oposición, en consonancia con la lógica de las clases dominantes? ¿Es bueno ser país emergente, destinatario de préstamos e inversiones externas?

Diremos hasta el cansancio que es emergente el país que ofrece fuerza de trabajo barata y abundantes recursos naturales. Son los factores que hacen al modelo productivo y de desarrollo hegemónico por transnacionales, que para el caso argentino se asocian a la soja, la mega minería o al petróleo y gas no convencional. ¿Es la única opción productiva? No, se puede transitar otro camino, y no supone el aislacionismo, sino la decisión de articular integralmente con la región la posibilidad de una alternativa de cara al Sur del mundo.

El tema de la solidaridad es de ida y vuelta. Argentina no acompañó con un proceso similar a Ecuador en 2007 cuando este país hizo su auditoría para disminuir el monto de deuda por ilegalidad de la misma. El país tampoco acompañó a Bolivia, Venezuela y Ecuador cuando éstos se retiraron del CIADI, además que Brasil nunca lo reconoció. El país está en mora solidaria con esos procesos y bien podría ahora retomar una perspectiva crítica sobre la base de los pronunciamientos contra la extorsión de la justicia estadounidense y el accionar de la especulación que expresan los fondos buitres.

La Argentina puede sostener el No Pago de la Deuda y su investigación, para luego renegociar eliminando la cesión de soberanía jurídica, junto a la denuncia de la institucionalidad subordinada: los tratados bilaterales en defensa de las inversiones, como la inserción al CIADI.

Confirmamos que este rumbo supone discutir la inserción en el orden capitalista y construir una lógica inspirada en la satisfacción de las necesidades sociales más extendidas, lo que puede abordarse desde un programa de soberanía (alimentaria, energética, financiera) e integración regional.

Buenos Aires, 27 de junio de 2014

¡¡¡HONRAR LAS DEUDAS, NO LOS FRAUDES!!!

Argentina tiene que suspender pagos de deuda pública, investigar y modificar el orden económico.

La Argentina continúa recolectando solidaridad internacional para negociar con los “fondos buitres” que demandaron al país en EEUU y que obtuvieron sentencia favorable por 1.500 millones de dólares.

Oficialmente se indica que las discusiones son con el delegado del juez de Nueva York y no con los litigantes, para cubrirse de una relación amigable que podría disparar demandas de acreedores ingresados al canje por 120.000 millones de dólares, por lo menos, llevando las acreencias a cifras inmanejables para la economía local.

En lo inmediato se teme que la sentencia puede habilitar demandas entre 15.000 y 22.000 millones de dólares de otros acreedores de la deuda en default del 2001 y que no ingresaron a los canjes de deuda del 2005 y 2010.

Estos apoyos globales logrados provienen de países, entre los que destaca el propio EEUU, pese a la posición de autonomía ante la Justicia estadounidense sostenida por el gobierno de Obama. Fue la actitud explicitada por Washington en la reunión de cancilleres de la OEA, convocada a solicitud de la Argentina para discutir la situación ante el fallo desfavorable en Nueva York del juez Griesa.

También apoyaron la posición argentina países como Brasil, Francia, México, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Cuba, Chile, entre otros. Entre los organismos internacionales destaca el conjunto de países agrupados en el G77+China, organismos internacionales como el FMI, e incluso parlamentarios del Reino Unido.

Cada uno de ellos se solidariza con motivaciones diferenciadas. Los asociados al bloque de los dominados en el Sur con la expectativa de que algo se modifique en el sistema mundial, y los representantes de la dominación por temor al colapso que pueda generar la desobediencia de un país “pagador serial” y la potencial imitación en que se pueda derivar la conducta rebelde de un acreedor global.

Preocupa que un país que cancela deuda en divisas se vea “obligado” a entrar en default. Es la diferencia con el 2001, donde todos preveían la cesación de pagos por insolvencia explícita. Desde el 2005 la Argentina evidenció su intencionalidad de volver al sistema financiero y al mercado de préstamos mundial, más aun con los pagos al CIADI, la compensación a Repsol y el acuerdo con el Club de París. La rebeldía estaría asociada a lo impresentable del orden mundial que devuelve la especulación financiera exacerbada por los buitres y una justicia funcional al capitalismo delincencial de época.

En la región, además de los gobiernos, y antes que la desacreditada OEA, se pronunciaron el ALBA-TCP, el Mercosur, la UNASUR, y la CELAC. Hasta el Consejo de Administración del Banco del Sur se manifestó solidario y aprovechó para reclamar su urgente puesta en funciones, recordando la necesidad de una nueva arquitectura financiera regional.

CADA CUAL ATIENDE SU JUEGO

Claro que cada quien se pronuncia según sus intereses. El FMI teme perder su papel de garante global de los procesos de negociación de deuda en un momento donde el problema ya no es patrimonio de países empobrecidos, sino una realidad creciente en el capitalismo desarrollado, especialmente con EEUU con deuda equivalente al 100% del PIB.

Otros ámbitos del poder mundial temen por una nueva y profunda cesación de pagos de un país que viene cumpliendo con las exigencias de cancelación de deuda y otros compromisos para

pertenecer al sistema mundial, tal como pagar las sentencias del CIADI, compensar a Repsol por la expropiación parcial de YPF y arreglar con el Club de París.

¿Por qué teme el poder mundial al default argentino actual? Una cesación de pagos ahora podría disparar, especialmente en la región, una recreación de las propuestas de nueva arquitectura financiera regional, en desmedro de la lógica liberalizadora y especulativa del sistema financiero y el mercado de capitales mundial.

La nueva arquitectura financiera es una cuestión que se discutía entre 2006 y 2010, desde el Banco del Sur, la necesidad de construir una moneda regional, el Fondo del Sur y la estrategia de articulación productiva con base en la soberanía alimentaria y energética, todo en un marco de integración alternativa no subordinada a la lógica de libre comercio sustentada por el ALCA entonces, y por la Alianza Pacífico en la actualidad.

En la segunda mitad de la primera década del Siglo XXI se presentaba la ofensiva del cambio político en la región y se anticipaban propuestas que otorgaban contenido transformador de cambio económico, incluso anticapitalista. En 2005 se formula la idea de un socialismo del Siglo XXI desde Venezuela, y en 2010 surge el concepto de Socialismo comunitario desde Bolivia, mientras que en 2009 las constituciones de Bolivia y Ecuador se proponían el vivir Bien o el Buen Vivir respectivamente como horizonte civilizatorio para sus sociedades.

El anticapitalismo empezaba a designarse con categorías que requerían precisiones, contribuyendo al debate sobre un nuevo modelo productivo y de desarrollo. Por eso la contraofensiva de las clases dominantes con los golpes en Honduras o Paraguay y otras iniciativas para contrarrestar la ofensiva del cambio político y la potencialidad del cambio económico.

Ese es el marco del temor a la suspensión de pagos de la deuda por parte de Argentina, cambiando la lógica de reinserción local en el mercado mundial financiero sostenido desde 2003 con la política de desendeudamiento y cambio de acreedores externos por instituciones oficiales. Estas instituciones locales, Banco Central, ANSES, etc., acumulan compromisos de pagos futuros de difícil materialización, afectando muy especialmente los fondos previsionales acumulados por los trabajadores y gestionados por la ANSES.

Quien tiene temor al default es el poder económico mundial, prisionera de la lógica jurídica liberal de la interpretación judicial en Nueva York y la conservadora y reaccionaria Corte Suprema estadounidense. Por ello no debe sorprender que hasta las instituciones reaccionarias como el FMI se desmarquen del fundamentalismo de Griesa y la Justicia de EEUU.

¿PARA QUÉ SIRVE TANTO APOYO EN EL MUNDO?

En ese marco global, la Argentina tiene que mover las piezas del tablero mundial y declarar la imposibilidad de cumplir con el fallo de Nueva York y con ello suspender la totalidad de los pagos de la deuda e investigar o auditar las acreencias, supliendo lo no realizado en treinta años de gobiernos constitucionales.

La investigación debe sumarse e incluir los fallos de la Justicia argentina, caso de la sentencia de junio del 2000 del Juez Ballesteros denunciado el fraude de la deuda contraída por la dictadura genocida hacia fines de 1983, más las causas en proceso, incluida muy especialmente la relativa al megacanje del 2001, con un impresentable sobreseimiento reciente de los imputados locales y extranjeros. Las denuncias judiciales incluyen las operaciones de canje recientes, por lo que afirmamos que la investigación debe ser integral, de la deuda fraudulenta en origen de la dictadura genocida y sus sucesivas renegociaciones en diferentes turnos constitucionales hasta el presente.

Suspender todos los pagos supone auditar la deuda en origen de la Dictadura, y la promovida en el nuevo ciclo constitucional desde 1983 con los sucesivos canjes que intentaron legitimar el fraude del espurio endeudamiento.

Es solo en esas condiciones que puede hacerse realidad el eslogan que apunta a honrar las deudas contraídas, pero nunca los fraudes. Pero convengamos que no alcanza con suspender los pagos e incluso lograr la cancelación de las deudas, ya que si se continúa con el modelo económico y la inserción subordinada en el orden capitalista, el país volverá a sufrir las restricciones externas y el cáncer del endeudamiento.

Superar la coyuntura supone enfrentarse a los fondos buitres y la justicia de EEUU, sí, pero también al orden capitalista y por lo tanto impulsar cambios profundos en las relaciones económicas y en la inserción mundial. Es un rumbo a empujar desde la

integración regional contra el orden capitalista tal como sostuvo recientemente Evo Morales en Bolivia en sendos cónclaves internacionales: la cumbre del G77+China y la reunión sindical antiimperialista convocada por la COB, Central Obrera Boliviana y la FSM, Federación Sindical Mundial.

La solidaridad internacional y los pronunciamientos están expresados, y dan cuenta del aislamiento de los fondos buitres y la lógica judicial de Griesa y del sistema hegemónico de Justicia en EEUU, en un marco de agudización de la crisis mundial y su expresión en la potencia hegemónica a puertas de una nueva recesión. EEUU da cuenta de una caída del PIB del 1% para el primer trimestre del 2014 y signos muy preocupantes en el segundo trimestre que cerró a fines de Junio.

La crisis se expresa, según el Departamento de Comercio de EEUU, en la baja más importante de las ganancias corporativas, del orden del 10%, las más pronunciadas desde el inicio de la crisis. Agudiza la cuestión el mantenimiento del elevado déficit fiscal y comercial de EEUU, la baja de las inversiones privadas, apenas compensadas por la inversión pública y la reducción del consumo que intenta estimular la intervención estatal con emisión monetaria.

El interrogante es si la movilización social en la Argentina empuja una gesta de rebeldía contra los buitres y la justicia estadounidense que intervenga como proceso de salida de la crisis capitalista con rumbo alternativo, potenciando el proceso de cambio que anima Nuestramérica en esta primera parte del Siglo XXI.

5 de julio de 2014



PREOCUPACIONES POR LA ECONOMÍA EN ARGENTINA

Existe preocupación en la sociedad sobre la evolución de la economía argentina en la coyuntura.

Se trata de la evolución de los precios, del empleo y los salarios, pero también relativa a cuestiones estratégicas que definen la dependencia del orden económico local al sistema mundial del capitalismo. Respecto de la dependencia es obvio que remito a la sentencia en Nueva York ante la demanda de los fondos buitres.

Por el lado de los precios existe una gran dispersión, con tendencias a consolidar un aumento considerable para el conjunto del año, con un 15% señalado por el INDEC para el primer semestre del 2014. Constituye una incógnita todavía evaluar el impacto en el conjunto de los precios que tendrá la continuidad de rebajas o eliminación de subsidios a servicios públicos.

La evolución oficial de precios en 15% proyecta una medición anual que en la mínima varía en torno al 30% y que puede dispararse por encima, mientras que las actualizaciones de ingresos populares son menores.

Según el Ministerio de Trabajo, en las negociaciones paritarias el ajuste salarial promedio alcanzó el 29,7% para todo el año 2014. Son datos que influyen, especialmente, a la hora de pensar el impacto del impuesto a las ganancias de cuarta categoría entre los trabajadores de mayores ingresos relativos.

Con datos de la Encuesta de Hogares del INDEC a fines del 2013 y actualizados con un 30%, en un estudio de la FISYP, verificamos que el 35,5% de los trabajadores de minería son sujetos del impuesto; lo mismo que un 29,1% de los trabajadores de la industria petrolera; el 27,5% del sector colchones y muebles; el 22% de otras industrias manufactureras; o el 20,7% del sector de información y comunicación. En otros casos, el alcance del impuesto varía según el nivel de ingresos salariales, con una gran dispersión para un promedio de salarios del sector formal de 5.147 pesos mensuales a diciembre del 2013. Si adicionamos un 30%, ese promedio llega a los 6.691 pesos al mes.

Hay que recordar que el impuesto se paga a partir de los \$9.000, y siempre para aquellos que perciben por encima de \$15.000. El Jefe de Gabinete informó que la contribución tributaria alcanza a un millón de trabajadores regularizados.

Vale mencionar que es un tema que concentra una de las preocupaciones entre las organizaciones sindicales, más allá de la cercanía o lejanía con el proyecto oficialista y es fuente de medidas de fuerza y protesta que se discuten en la coyuntura.

Más allá del injusto impuesto, es conocido que un tercio de los trabajadores están en situación no regularizada, con menor capacidad en la defensa de sus ingresos, ya que no acceden a la negociación colectiva y no siempre son considerados por las organizaciones sindicales, aunque algunos incluyen como afiliados a sus sindicatos a los contratados en condición irregular.

Ocurre algo similar en materia de deterioro de ingresos entre los jubilados y pensionados, aun cuando tienen actualización por ley. Ni hablar del conjunto de beneficiarios de planes sociales, los que cuentan con menos posibilidades de intervenir en la demanda de mejoras de ingresos.

Un dato relevante en la coyuntura es el retorno del fantasma del desempleo y la precariedad, alimentado con la desaceleración económica informada por el INDEC y evidenciado con la creciente conflictividad motivada por suspensiones y cesantías de trabajadores en los principales rubros de la economía, especialmente en la industria.

En efecto, el INDEC acaba de difundir estimaciones preocupantes, entre las que destaca la evolución de la actividad económica, de la construcción y el saldo comercial.

El EMI (Estimador Mensual Industrial) da cuenta de una tendencia declinante desde mayo del 2013, siendo la industria el sector determinante en la recuperación del empleo y los salarios luego de la crisis del 2001.

Algo similar refleja el indicador sintético de la actividad de la construcción, a la baja desde junio del 2013.

El saldo comercial disminuye y en términos absolutos existe una tendencia a la baja de las exportaciones e importaciones. Por el lado de las exportaciones, con relativo ascenso desde marzo por el ciclo de la producción primaria, no llega al máximo de un año antes. Es una situación agravada con una tendencia a la baja de los precios internacionales producto de una gran cosecha en EEUU.

ESCENARIOS POSIBLES SOBRE LA CRISIS DE LA DEUDA

En medio de este proceso de achique y enfriamiento de la economía local que se descarga sobre los trabajadores y la mayoría empobrecida de la sociedad, se presentan las derivaciones que surgen de la sentencia del Juez Griesa en Nueva York.

No se trata solo de la coyuntura, sino de un problema estructural para afianzar la dependencia y subordinación del país al orden capitalista.

Todos los escenarios posibles sostenidos por unos y otros auguran complicaciones mayores para satisfacer demandas sociales.

Las opciones se instalaron entre pagar ya, incluso parcialmente, posición sostenida por Macri o Cobos, entre otros; o desde el comienzo del 2015 como parece derivarse del discurso oficial (pagar al 100% de los acreedores en condiciones justas y equitativas) y avalado en estos días por Lavagna que escribió “mejor un tifón que un tsunami”.

Entre esas posturas, con matices, se mueve todo el oficialismo (con duras críticas a los fondos buitres y al Juez Griesa), como Massa, Sanz, o Binner, y constituyen parte importante de los argumentos mediáticos en la mayoría del periodismo y analistas.

Pagar ya puede derivar en mayores costos estimados por el gobierno entre 120.000 y 500.000 millones de dólares por la cláusula RUFO, que condiciona a pagar la mejor oferta a los ingresados al canje 2005 y 2010.

Postergar la decisión del cumplimiento de la sentencia y el pago hasta el próximo año supone superar los límites de esa cláusula. Pero compromete recursos públicos a futuro por los montos de la sentencia, unos 1.600 millones de dólares, más aquellos que aún no litigaron ni entraron a los canjes. Se estima que el total puede alcanzar unos 15.000 millones de dólares. Es una cifra que condiciona la resolución de otras demandas sociales.

Los que quieren pagar ya, la totalidad o una parte vía depósito judicial quieren evitar el default, total el costo económico social por pagos presentes y eventuales no los involucra.

Entre los demás se especula con transferir el costo potencial del default a una medida “irracional” de Griesa, apoyados en solidaridades del campo de la dominación. El *Financial Times* dice que el juez no entiende cómo funciona el mercado de capitales, y como otros analistas, temen que Nueva York pueda perder negocios por el antecedente.

Un escenario alternativo que crece entre un conjunto de personalidades, sectores políticos y sociales pasa por la suspensión de los pagos ya y sustanciar una investigación con participación popular del carácter de la deuda pública.

Se pretende diferenciar la parte legítima de la ilegítima de la deuda y definir las porciones fraudulentas y odiosas.

Es la base para pensar redefiniciones de política económica, de modelo productivo y de inserciones globales que alejen al país de la dependencia a que condena el cáncer de la deuda y la subordinación al sistema financiero mundial.

El antecedente de rebeldía propiciado oportunamente por Ecuador o Islandia, incluso la Argentina con la cesación de pagos del 2001, da cuenta de un rumbo a transitar en la búsqueda de otra perspectiva.

No le fue mal a Ecuador, ni tampoco a Islandia con sus posicionamientos y decisiones.

Como no le fue mal a la Argentina liberando fondos destinados a cancelar deuda y orientándolos a resolver problemas económicos y sociales, aun cuando se discuta el sentido principal de la política económica entre 2002 y el presente.

Tampoco le fue mal al país estar afuera del mercado de préstamos y de la tormenta sufrida por aquellos países con fuerte endeudamiento en la explosión de la crisis del 2007/08.

Claro que una decisión autónoma e independiente de rechazo a la deuda y suspensión de pagos supone costos, especialmente por el boicot del poder económico y las clases dominantes, locales y globales.

Al mismo tiempo, es el punto de partida para actuar con independencia y propiciar otra articulación de relaciones internacionales, de cooperación y superación de la lógica capitalista.

Es un tema que se define en la disputa política por la movilización y organización popular.

25 de julio de 2014



*¿ARGENTINA EN DEFAULT?**

Llegó el día D en materia de deuda y conflicto con los buitres y la Justicia de EEUU, y se discute si Argentina entró en default o no, y qué consecuencias tiene ello para la sociedad.

Argentina había depositado a fines de junio 539 millones de dólares en el Banco Mellon de Nueva York. El destino era acreditar esos fondos en las cuentas individuales de los bonistas de la legislación estadounidense ingresados a los canjes 2005 y 2010. Con el depósito se manifestaba la voluntad de pago del gobierno.

Los dineros siguen en el Banco, por ahora sin acreditarlos a los bonistas, ni reintegrarlos a la Argentina, y ni siquiera embargados por la Justicia para cancelar deuda con los buitres según la sentencia de Griesa.

No se trata de desconocer la sentencia de Griesa, como algunos creen. El gobierno teme a la cláusula RUFO, que vence a fin del 2014 y señala que si hay mejor oferta a bonistas no ingresados al canje, los demás tendrán derecho a esas mismas condiciones de oferta.

En el gobierno se estima un costo entre 120.000 a 500.000 millones de dólares si prosperara la demanda del 92,4% de tenedores de títulos ingresados a los canjes del 2005 y 2010.

* Publicado en ALAI, América Latina en Movimiento, <<http://alainet.org/active/75846>>.

Por eso, el Ministro Kicillof solo ofrece idénticas condiciones de pago a los buitres en las negociaciones con el mediador designado por el juez.

Obviamente, los buitres, con una sentencia judicial en firme que indica pago del 100% y al contado presionan para hacerla efectiva y rechazan la oferta de la Argentina.

En el medio y tal como trascendió, la banca privada que actúa en la Argentina ofreció depositar una garantía de pago, o comprar la totalidad de los bonos de la sentencia Griesa, para facilitar la liberación de los fondos acreditados en el Mellon. Hablaron de una acción patriótica, aunque está ligada a sus propias tenencias de bonos y a la valorización de sus acciones en el mercado de capitales. Tienen intereses concretos en que no se empaste la situación económica del país.

QUEDA CLARO QUE CADA CUAL ATIENDE SU JUEGO

El juez se ampara en el aval de su sentencia, la confirmación en la Cámara de Apelaciones y en la Corte Suprema de EEUU.

Los buitres en la sentencia y la posibilidad de lograr su objetivo de cobrar todo con ganancias superlativas.

Los bancos privados intentando morigerar el impacto del descalce del país con el sistema mundial por el default selectivo ya declarado por impresentables consultoras al servicio de la especulación y la usura del sistema financiero global.

El gobierno intentando llegar a fin de año para superar la RUFO y arreglar, aun con mayores costos, el pago a los buitres.

ESPECULACIÓN FINANCIERA Y NUEVA ARQUITECTURA

Los buitres son la carroña del sistema financiero, es verdad, pero amparadas en normas de funcionamiento del orden capitalista contemporáneo que estimula y alienta la desenfrenada especulación.

Es más, los Estados del capitalismo desarrollado no escatiman esfuerzos económicos para sostener un sistema infectado de operaciones tóxicas, como se las denominó en 2007.

Entre comienzos del 2012 a fines del 2013, la FED emitió mensualmente 85.000 millones de dólares para sostener la crisis de

los bancos y empresas y desde comienzos del 2014 viene bajando todos los meses la emisión a los 25.000 millones actuales.

La cifra era gigantesca y lo sigue siendo. Es una emisión monetaria que alimenta la inflación en todo el mundo, pues la dominación global de EEUU le permite exportar el efecto monetario de una expansión sin respaldo.

Por todo ello el tema de fondo es la necesidad de una Nueva Arquitectura Financiera.

¿ES POSIBLE AVANZAR EN ESE SENTIDO EN EL ORDEN CAPITALISTA?

Parece que no, ya que las propuestas en ese sentido no prosperaron. Es una de las razones que explican la proliferación de una nueva institucionalidad de carácter regional.

La más reciente es el Banco de los BRICS y su Fondo para contingencias de los países miembros. Es el camino ensayado y no culminado del Banco del Sur y otras iniciativas que adornan documentos de cumbres presidenciales múltiples en la región, e incluso sostenidas en la Comisión de Finanzas de la UNASUR.

El problema radica en la subsistencia del orden global, al que se subordina la nueva institucionalidad, que solo intenta ocupar un lugar en el orden capitalista sin denunciarlo, y menos, confrontarlo.

CONSECUENCIAS Y PROPUESTAS

En ese marco es que deben analizarse las consecuencias de la situación en Argentina, más allá de cómo se la designe, si default o Griesafault.

Los problemas económicos sociales del país continúan, sea la inflación y su impacto entre los sectores de menores ingresos o las suspensiones y despidos de una desaceleración o recesión de la economía.

En el gobierno se apostó fuerte al ingreso de capitales vía inversiones o préstamos y la situación actual puede postergarlos. Las nuevas relaciones y acuerdos con China puede aliviar la situación. Pero todo indica que los problemas estructurales del ciclo económico local se mantienen con impacto social selectivo hacia los más empobrecidos.

¿Vale la pena continuar destinando importantes fondos a cancelar deuda con tantas necesidades locales? Son 190.000 millones de dólares lo pagado por Argentina en estos años de deuda con recursos propios, dijo la presidenta en la Cumbre de Caracas del Mercosur.

¿Por qué privilegiar acreedores de la deuda en lugar de favorecer a los acreedores de deuda social en el país? Claro que avanzar en este sentido tiene costo y lo que debe discutirse es el costo de pagar y el de no pagar.

Hay que interrogarse sobre la prórroga de jurisdicción, que viene de la Dictadura, sí, pero convalidada por más de 30 años de gobiernos constitucionales y de común uso para contratos internacionales. Se usó en el acuerdo con Chevron e YPF y ahora con los acuerdos con China, quien podrá litigar nada menos que en Londres.

Argentina tiene que denunciar sus tratados bilaterales de inversión y revertir la situación de subordinación a los intereses del capital transnacional construidos por cuatro décadas sobre la base del terrorismo de Estado.

Se necesita modificar la situación de impago involuntario por lo explicado del embrollo Griesa y definir una suspensión de los pagos en su conjunto y auditar la deuda.

Esa investigación tiene antecedentes en la Justicia argentina, con sentencia en junio del 2000 (Ballesteros por causa Olmos) y denuncias de 480 casos de fraude sobre la deuda asumida en la Dictadura 1976/1983.

Desde entonces existen causas judiciales contra todos los procesos de renegociación de la deuda que son la base de una auditoría integral y con participación popular.

Suspender y auditar es la tarea actual, lo que supone la nacionalización del comercio exterior, los puertos y la banca. Luego se puede definir el plan de pago que corresponda, siempre y cuando se establezcan las prioridades de necesidades a atender prioritariamente.

Claro que eso requiere de una mayoría política hoy inexistente, pues el sistema político ha definido una política de Estado, con escasas excepciones, por el pago de la deuda. Algunos quieren incluso pagar ya la sentencia Griesa. El gobierno quiere negociarla desde el 2015, pero ambos apuestan al pago riguroso.

Hace falta construir esa subjetividad en el pueblo argentino y al mismo tiempo discutir en la región sobre los alcances de la situación local y recrear la dinámica de un conjunto de propuestas anticapitalistas, como sostuvo Chávez al formular su propuesta por el socialismo en el Siglo XXI.

Existe la ilusión sobre el rumbo autónomo o nacional del capitalismo en tiempos de la transnacionalización. En ese sentido hay que recordar que la deuda pública es constitutiva de la acumulación originaria del capitalismo, como nos enseñó Carlos Marx en *El Capital*. Además, la deuda con la Baring nos construyó y condicionó por 80 años entre 1824 y 1904. Qué estos 38 años de deuda cancerosa no se transforme en más décadas de penurias para el pueblo argentino.

Hace falta suspender los pagos de la deuda e investigar. Pasar del impago involuntario al voluntario y animarse a proponer otro rumbo para el modelo productivo y de desarrollo en la Argentina, en un marco de integración regional para la emancipación social.

Buenos Aires, 31 de julio de 2014



DEUDA Y BUITRES

UNA NOVELA EN CAPÍTULOOS DIARIOS CON GRAVES CONSECUENCIAS
SOCIALES

Continúa la historia de la deuda con los buitres y la justicia de EEUU, con capítulos diarios que agregan novedades al análisis y al problema del endeudamiento y sus gravosas consecuencias para la población.

Finalmente llegó el día D, el 30 de Julio, fecha en que vencía el plazo para acreditar los recursos en cuenta de los bonistas ingresados al canje de deuda del 2005 y 2010. Los recursos estaban y están en el Banco Mellon de NY, depositados a fines de junio pasado por el gobierno de Argentina, y el juez Griesa no permite su acreditación, por lo que aun cuando el país dispuso de los fondos para cancelar la deuda, los beneficiarios de esos recursos no los reciben.

Es el argumento para hablar de default, calificación que el gobierno rechaza, mientras las calificadoras de riesgo, entidades privadas vinculadas al sistema financiero mundial establecieron el “default selectivo”, es decir, de una parte de la deuda. El resultado inmediato es que dispararon el cobro de los seguros por default respecto de esos títulos, lo que supone un gran negocio.

Las deudas y el sistema financiero están llenos de oportunidades para buitres conocedores de los pormenores de la especulación exacerbada del capitalismo de época.

Desde el gobierno se instruyó a la Comisión Nacional de Valores para gestionar en EEUU una demanda de investigación sobre la connivencia del juzgado de Griesa con el negocio de los seguros

por default, en alusión a la parcialidad del letrado con los fondos buitres.

Otro elemento a considerar es el papel de los bancos. Primero fueron los bancos nacionales de capital privado que intentaron una operación de compra de los títulos de la sentencia Griesa o el depósito en garantía de unos 250 millones de dólares para generar la posibilidad del *stay* o cautelar que dispondría el juez para pagar a los bonistas. Dijeron los banqueros que era una acción “patriótica” y se dio a entender que había guiño desde el gobierno, especialmente desde el BCRA. La operación no prosperó pero estaban en juego las tenencias de títulos en manos de los bancos y su potencial desvalorización.

La posta la asumen ahora un conjunto de bancos extranjeros, con la misma preocupación “patriótica”, es decir, sus intereses por resguardar las inversiones en títulos de la deuda argentina.

CADA QUIEN JUEGA SUS PROPIOS INTERESES

Estamos ante una situación de elevada complejidad donde cada quien atiende su juego.

El juez se planta en su sentencia.

Los fondos buitres tienen dictamen de cobro por el 100% y al contado y negocian desde allí, además de cobrar sus seguros contra default.

Los bancos intentan intervenir y aun con fracaso, mientras la ilusión de la negociación dura intervienen en la evolución del mercado de capitales con alzas de valores que favorecen sus movimientos de corto plazo.

La posición del gobierno pareciera apuntar a llegar a diciembre para que finalice el marco de vigencia de la cláusula RUFO y entonces si negociar con los buitres sin temor a la potencial demanda del 92,4% de ingresados al canje, estimada entre 120.000 y 500.000 millones de dólares.

En definitiva, todos los escenarios culminan en el pago de la deuda, y lo que se discute es el cuanto y como del pago de la misma.

La danza de valores se cuenta por millones y son recursos que restringen la capacidad de asistencia de otras demandas o deudas sociales.

Como sostuvimos varias ocasiones, la deuda condiciona y establece privilegios en la disputa de los recursos públicos. En la reunión del Mercosur en Caracas la presidenta anunció que la Argentina canceló 190.000 millones de dólares en el último tiempo y con esfuerzo propio, sin ayuda externa, ya que el país estaba y está afuera del mercado de crédito internacional.

Las consecuencias son gravísimas, porque se postergan demandas sociales, sea el 82% móvil que demandan los trabajadores jubilados, la disminución del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o directamente su eliminación, la solicitud de mejoras de ingresos salariales o beneficios de planes sociales y ni hablar de los presupuestos para el gasto social en educación, salud u otras áreas.

Más allá de las novedades cotidianas, esta novela con entregas diarias devuelve un escenario de especulación financiera exacerbada a escala global y por lo tanto la necesidad de disputar una nueva arquitectura financiera mundial. No es novedad, y el intento tiene varios años y fracasos múltiples motivados por quienes hegemonizan el sistema, a la cabeza EEUU y el orden instrumentado hace 70 años con el FMI y el BM.

Ante el fracaso de infructuosos esfuerzos se organizan iniciativas regionales cuyos resultados están por verse aún, por caso las iniciativas de los BRICS o las enunciadas en torno al demorado Banco del Sur.

El interrogante es si eso es posible en el marco del orden capitalista y en rigor, la nueva arquitectura financiera solo será posible si se modifican las relaciones sociales de producción a nivel de cada país y una articulación productiva integrada regionalmente que modifique el modelo productivo y de desarrollo, es decir, un camino que suponga la crítica y la superación del orden capitalista.

CAMPAÑA PARA SUSPENDER PAGOS E INVESTIGAR

Por ello es que resulta importante asumir una tarea de esclarecimiento y difusión de estrategias alternativas, entre las que destacamos la campaña iniciada por la “Asamblea por la suspensión del pago e investigación de la deuda y por la defensa del patrimonio nacional y los bienes comunes” que impulsan un conjunto de personalidades, organizaciones sociales y políticas.

Entre las principales consignas se sostiene que “El pueblo debe saber de qué se trata”, que “la única deuda es con el pueblo”, que “no hay que pagar deuda ilegítima, odiosa y fraudulenta”, que se requiere “suspender los pagos e investigar la deuda” y además “defender los bienes comunes”.

En conjunto constituyen un programa alternativo al sustentado por el club de pagadores, mayoritarios en el sistema político que conforman oficialismo y oposición. Es un programa y una iniciativa política para constituir subjetividad contra el pago de la deuda y por instaurar una auditoría integral de la deuda con participación popular, con cuyos resultados se pueda discutir el privilegio en el uso de los recursos públicos.

Necesitamos fuerza social y política para terminar con el cáncer de la deuda y discutir la política económica para un modelo productivo y de desarrollo que parta de las necesidades populares en un marco de integración no subordinada, por la liberación social.

Buenos Aires, 2 de agosto de 2014

LEY PARA EL CAMBIO DE LA JURISDICCIÓN Y NUEVO CAPÍTULO EN LA NOVELA DE LA DEUDA

En materia de deuda pública existe un fuerte consenso en el sistema político para pagar, tanto en el oficialismo como en la oposición sistémica.

El gobierno presentó un proyecto de ley para el “pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina”, cambiando la sede de pago y el ente fiduciario responsable a los acreedores que ingresaron al canje de deuda en 2005 y 2010. Con esa ley se empuja un nuevo canje voluntario para cobrar la deuda canjeada y se designa al Banco Nación como ente de pago en lugar del banco de Nueva York. En el proyecto se incluye la decisión de cumplir con el 100% de los acreedores, es decir, también a los fondos buitres.

Más allá de la discusión parlamentaria que se suscitará en los próximos días, se desconoce el efecto de la medida entre los bonistas ingresados a los canjes. Por eso, se sugiere que la medida parece un intento del gobierno por inducir a los bonistas del canje a demandar al juez estadounidense para que levante la acción que impide cobrar en el Banco Mellon de Nueva York, tal como lo hicieron bonistas europeos o el propio City Bank, cuyo reclamo aceptó en estos días la Cámara de Apelaciones de Nueva York. El problema es que el 30/9 hay un nuevo vencimiento de la deuda del canje y se pretende depositar los recursos en el Banco de la Nación como nuevo ente fiduciario para la cancelación de deuda. También se depositará allí el monto de cancelación de los bonistas no ingresados

a los canjes, incluidos claro está los fondos buitres, bajo las mismas condiciones de los canjes del 2005 y 2010.

La discusión mayoritaria en la Argentina continúa en la senda del pago de la deuda y no en la investigación o auditoría de la misma, lo que supondría la suspensión inmediata de los pagos del conjunto de la deuda pública. Es la manifestación del club de pagadores, que avalaron los canjes del 2005 y 2010 y coincidieron en la reapertura del 2013.

ARGUMENTOS PARA LA NUEVA LEY Y BASE DE UNA CAMPAÑA ALTERNATIVA

En el mensaje presidencial del martes 19 de agosto pasado, se señaló que desde 1983 en adelante el Parlamento legalizó la deuda e imposibilita revertir la situación. En ello coincide la oposición sistémica, aun matizando cuanto se debe pagar, cómo y cuándo.

Vale recordar que en junio del 2000, la justicia argentina, mediante sentencia del Juez Ballesteros denunció el fraude de la deuda, lo que podría ser la primera parte de una auditoría que debería incluir las investigaciones judiciales relativas a los sucesivos canjes de deuda en tiempos constitucionales. Es un fallo que contradice el argumento de legitimación de una deuda fraudulenta. Esta es la base de los argumentos de quienes empujan una campaña popular para suspender los pagos de la deuda pública e investigar vía auditoría la misma.

Son dos posiciones confrontadas, una mayoritaria en el sistema político por pagar, con un debate sobre cuándo, cuánto y cómo. Otra más asentada en sectores del movimiento popular por el no pago, que incluso contacta con argumentos contra los fondos buitres que sostienen adherentes a la política oficial.

La posición gubernamental fue sostenida en el discurso presidencial del pasado martes 19 de agosto al anunciar la remisión al Congreso de un proyecto de ley para el “pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina”.¹

Al anunciar el proyecto de ley en cadena nacional, la presidenta sostuvo que se trata de “una historia, que comenzó en 1976,

¹ “La Presidenta envió al Congreso un proyecto de ley de pago soberano local de la deuda externa”, 19 de Agosto de 2014, Casa Rosada, Presidencia de la Nación Argentina, en <<http://www.presidencia.gob.ar/discursos/27836>>, consultada el 23 de agosto de 2014.

cuando el monto total de la deuda externa, al momento de producirse el derrocamiento del gobierno constitucional, ascendía solamente a 8.000 millones de dólares. A partir de aquel golpe de Estado y a partir de los sucesivos gobiernos democráticos también, desde el 10 de diciembre de 1983, en adelante, esa deuda externa fue creciendo exponencialmente y convirtiéndose en una condicionante severo, crítico del crecimiento argentino, del desarrollo argentino y de las posibilidades de nuestro país como Nación.”²

Queda clara la alusión a la “legalización” del fraude de una “deuda odiosa” asumida por la dictadura entre 1976 y 1983 por la hegemonía parlamentaria, pese a la sentencia condenatoria del Juez Ballesteros de junio de 2000 imputando responsabilidades a varios funcionarios y complicidad de empresas y bancos privados, locales y extranjeros. Esa legalización se utiliza como escudo para no investigar la deuda y continuar la estrategia de cancelación, que en estos años, según se reconoce en el discurso presidencial han representado nada menos que 190.000 millones de dólares, un monto equivalente a 3.800.000 viviendas a un costo de 50.000 dólares cada uno, más que suficiente para resolver el déficit de viviendas en el país.

Como mucho, desde la oposición sistémica se discute cuando y como pagar la deuda, algo que ocurrió cuando se debatió cancelar deuda con reservas internacionales (posición del ejecutivo) o con recursos fiscales (sostenido por la oposición sistémica y el titular del BCRA), lo que motivó un importante conflicto político en enero del 2010 con la renuncia a la presidencia del BCRA de Hernán Martín Pérez Redrado, y más tarde, en abril del 2012, las modificaciones a la Carta Orgánica del BCRA.

El debate relativo a cuando y como pagar se reitera ante la sentencia del Juez Griesa en EEUU, favorable a los fondos buitres. En general no se discute ni investiga el fraude, por lo que crece una campaña popular por la suspensión de los pagos y la auditoría inmediata del conjunto de la deuda pública.

El comunicado de prensa mencionado de la Casa Rosada señala que los objetivos del proyecto remitido al Congreso de la Nación “es salvaguardar el cobro de los tenedores que adhirieron a los

² “Anuncio del proyecto de ley de pago soberano local de la deuda externa: Palabras de la Presidenta de la Nación”, en <<http://www.presidencia.gob.ar/discursos/27838-anuncio-del-proyecto-de-ley-de-pago-soberano-local-de-la-deuda-externa-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion>>, consultada el 23 de agosto de 2014.

canjes de 2005 y 2010” y agrega que “se instrumentará el canje, en las mismas condiciones, para los acreedores que no ingresaron a las anteriores reestructuraciones”, enfatizando “Que nadie diga que Argentina se niega a pagar: lo que se niega el gobierno argentino es a ser extorsionado”, afirmó la Jefa de Estado.

El proyecto de ley, con todo su palabrerío soberanista, lo único que dispone concretamente es abrir una ventanilla de pago en Buenos Aires para los bonistas que acepten ese cambio de lugar y ofrece pagarles a los buitres en esa misma ventanilla en las condiciones convenidas con los bonistas, es decir con una quita importante.

“Capitanich hizo una síntesis de la iniciativa enviada ayer al Congreso: “1. Establece un sistema de depósito para la totalidad de los bonistas en virtud de las leyes que establecieron la reestructuración de la deuda de 2005/2010. 2. Cambio del agente fiduciario, que incumplió el contrato y su sustitución por Nación Fideicomiso. 3. Jurisdicción: la Argentina establece los mecanismos para que el depósito correspondiente a los servicios de la deuda llegue a los tenedores de modo voluntario; los tenedores deben aceptar la jurisdicción y, consiguientemente, establecer los mecanismos para recibir los pagos”.³

Consultado sobre la perspectiva de que un grupo de bonistas promueva la convocatoria de una asamblea de tenedores, el funcionario respondió que “es factible en el marco del prospecto”. No obstante, explicó que la Argentina “ha tomado la decisión de enviar al Congreso el proyecto de ley de pago soberano y propicia dos decisiones trascendentales: el cambio del agente fiduciario en virtud de que el agente oportunamente designado incumple sus obligaciones y el cambio de lugar de pago, no de jurisdicción, lo cual permite garantizar que al tenedor de modo voluntario puede efectivamente cobrar en la Argentina”.

Respecto al anuncio realizado el martes 19 de agosto sobre el envío del proyecto de ley de pago local a los tenedores de bonos, según informa la Casa Rosada en mensaje citado, Cristina Fernández

³ “Capitanich: proyecto de ley sobre deuda pública busca garantizar la voluntad de pago incólume de la Argentina”, 20 de Agosto de 2014. Casa Rosada, Presidencia de la Nación Argentina, en: <http://www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/27840-capitanich-proyecto-de-ley-sobre-deuda-publica-busca-qgarantizar-la-voluntad-de-pago-incolumne-de-la-argentina>, consultada el 23 de agosto de 2014.

sostuvo que el objetivo es “además de evidenciar la voluntad e pago al 100% de los acreedores, generar los instrumentos para que esa voluntad de pago se materialice en tiempo y forma”. Puntualizó que “el próximo vencimiento de 200 millones de dólares que tenemos que pagar se operará el 30 de septiembre del corriente año, luego hay otro en octubre y uno más grande en diciembre”. Afirmó que esta solución surge “ante la obstrucción ilegal e ilegítima que hemos sufrido” por parte del juez Griesa para que los bonistas puedan hacerse con los recursos que les pertenecen.

Acerca del diferendo con los fondos buitres, insistió que “nos dimos cuenta que el negocio de ellos era no negociar, no acordar. Y que además contaban con una justicia que los amparaba, nos dimos cuenta que debíamos generar instrumentos para garantizar el pago de la deuda”. “No es una actitud patrioter, no voy a recurrir a discursos con olor a naftalina. Simplemente, voy a recurrir a la verdad, a las injusticias e ilegalidades que se han cometido, lo que no nos dejó ningún camino más que realizar este canje de deuda”, aseveró.

Afirmó que “si alguien quiere dar más, tendrá su oportunidad de gobierno, para hacerla. Pero esta Presidenta cree realmente que se ha pagado lo que correspondía”. Resaltó que “Argentina ha pagado 190 mil millones de dólares, en materia de deuda” y agregó que se ha “logrado la ratio de deuda más bajo de nuestra historia”.⁴

EL CONTEXTO ECONÓMICO Y POLÍTICO

El conflicto suscitado con los fondos buitres y la justicia estadounidense no resulta inocuo en materia económica y política y se siente en las múltiples presiones en la disputa por la renta nacional y en la gestión del capitalismo local y en la expectativa por generar alternativa popular.

Desde el gobierno, la preocupación radica en la interrupción de una estrategia que apuntaba a retornar al mercado de crédito mundial. Así lo reconoce la Presidenta cuando en su mensaje destacó el reciente pago a Repsol, el cumplimiento de las sentencias del CIADI y el acuerdo con el Club de París. Ahora, el default selectivo decretado por las consultoras al servicio del sistema financiero

4 “La Presidenta remarcó la necesidad de generar un mercado de capitales propio en la Argentina”, 20 de Agosto de 2014. Casa Rosada, Presidencia de la Nación Argentina, en <<http://www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/27841-la-presidenta-remarco-la-necesidad-de-generar-un-mercado-de-capitales-propio-en-la-argentina>>, consultada el 23 de agosto de 2014.

mundial demora el ingreso de inversiones o de préstamos externos que requiere el sector privado y público en la Argentina.

La realidad es que existen tensiones en la cuestión fiscal y en el comercio externo que no se resuelven en las condiciones actuales sin ingresos de capital del exterior. Entre otros indicadores, uno de ellos es la tendencia a la pérdida de reservas internacionales. Por un lado, motivado en las recurrentes cancelaciones de la deuda, que hasta fines del próximo año demandan más del 50% de las reservas, pero también para intentar controlar la depreciación de la moneda local. El viernes pasado (22/08/2014) hubo una importante venta de dólares de reservas realizada por el Banco Central para contener la subida del dólar oficial que había llegado a cotizarse a 8,44 para dejarlo al cierre de la jornada a 8,40 pesos por cada dólar.

Esos movimientos en la divisa estadounidense están asociados a presiones del “club de la devaluación”, por razones especulativas o asociadas a demandas de grandes productores y exportadores. El sector más concentrado de las finanzas privadas y de la producción industrial y agraria busca acelerar las devaluaciones de la moneda local, en un mecanismo similar al de hace un año, que culminó con la devaluación de enero pasado: un dólar a 8 pesos. Vale recordar que desde enero del 2013 a enero del 2014, la cotización oficial había pasado en minidevaluaciones semanales o incluso diarias, de casi 5 a casi 7 pesos por dólar y ahora, desde la corrección cambiaria de enero se pasó de 8 a 8,40 entre enero y agosto de 2014.

El problema es que la divisa es un precio más en la economía y por lo tanto, hasta por razones especulativas o de expectativas incide en el conjunto de los precios y afecta a los sectores de menores ingresos, base del conflicto social y el anunciado paro nacional de la próxima semana (27 y 28 de agosto).

Las empresas suspenden y cesantean bajo el marco de la recesión y desde el gobierno se sale al cruce de la situación planteada convocando al Consejo del Salario Mínimo para el 29 de agosto, al día siguiente de finalizada la medida de fuerza convocada por la CTA y la CGT. El sindicalismo convocado al evento anticipa un incremento del 35%, acorde a la evolución de los precios en el último año, muy lejos de las cifras oficiales.

Asistimos a una pulseada con intereses confrontados, que vía precios e inestabilidad laboral se descarga sobre los trabajadores y sectores de menores ingresos.

El sindicalismo oficialista posterga toda protesta y subordina sus reivindicaciones bajo los argumentos del oficialismo de privilegiar la discusión en la coyuntura en materia de deuda. Se intenta profundizar la fragmentación en la lucha del movimiento de trabajadores. En contraposición, la política de unidad de acción en la confrontación al ajuste, aún con modelos sindicales diferenciados y antagónicos, la jornada de movilización y paro por 36 horas de la CTA en coincidencia con el paro de 24 de la CGT apunta a hacer visible a los trabajadores como actores sociales en la disputa política.

La discusión en torno a la acumulación política de la protesta pone en evidencia la necesidad de construir alternativa política popular que otorgue cauce a la demanda anticapitalista para superar la situación actual de ajuste perpetuo y chantaje vía endeudamiento público.

Buenos Aires, 25 de agosto de 2014



EVASIÓN Y ELUSIÓN IMPOSITIVA DE TRANSNACIONALES Y RIGUROSO COBRO A LOS TRABAJADORES

Una importante noticia sobre evasión y elusión fiscal se conoció esta semana, cuando

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió a la multinacional Procter & Gamble por fraude fiscal relacionado con operaciones de importación desde Brasil que eran facturadas a través de una filial radicada en Suiza por 138 millones de dólares.¹

El mecanismo utilizado se asocia a una práctica común entre las grandes empresas que vía sobrefacturación de importaciones pagan más a sus proveedores en el exterior, sus propias casas matrices o sucursales, y así burlar la restricción a la compra y transferencias de divisas al extranjero.

Bajo esa circunstancia la AFIP

[...] suspendió preventivamente el CUIT de P&G y su inscripción en el registro de importadores y exportadores como así también la posibilidad de que la empresa opere en el mercado de cambio de divisas.²

1 La AFIP suspendió a Procter & Gamble por fraude y fuga de divisas, *Télam*, 2/11/2014, en <<http://www.telam.com.ar/notas/201411/83872-afip-suspension-procter-gamble-fraude-fiscal-fuga-de-divisas.html>>, consultada el 6/11/2014.

2 Íd.

El titular del ente de recaudación dijo que

Nuestro objetivo principal es que P&G reintegre al Banco Central las divisas fugadas y que pague las sanciones aduaneras y el impuesto a las ganancias evadido por la manipulación de los precios de transferencia.³

Resulta interesante que se investiguen y sancionen estas prácticas delictivas que afectan los ingresos públicos, máxime cuando verificamos el creciente peso de las contribuciones de los trabajadores en el impuesto a las ganancias.

En un reciente estudio que presentamos en Costa Rica⁴ dábamos cuenta que la recaudación por el impuesto a las ganancias venía creciendo en los últimos años, siendo mayor la proporción recaudada por la cuarta categoría establecida por el impuesto, o sea, los salarios.

Señalábamos respecto a la proporción de lo recaudado sobre el PBI que hacia 1999 la recaudación por ganancias “ocupaba alrededor del 3%; posterior a la caída por la crisis, continuó subiendo hasta establecerse en torno al 5% (2005-08), para volver a alzarse y posicionarse en el 6,33% del 2012”.

Al respecto se señalaba que el aporte de la recaudación por la cuarta categoría, es decir, lo que se retiene por salarios, alcanza en 2012 al 3,4% del PBI. Eso significa que más de la mitad de la recaudación no provenía de ganancias empresarias, sino de afectación a salarios y explica los reclamos sindicales desde entonces hasta el presente por subir el mínimo no imponible o por eliminar el tributo a los salarios,

En la comparación resulta que para el año 1998, el conjunto de las 4 categorías del impuesto a las ganancias expresaban el 2,4% del PBI, y las categorías 1 a 3, o sea, la recaudación por las ganancias derivadas de la renta del suelo, de la renta del capital y los beneficios empresarios, alcanzaban al 0,8% del PBI, mientras que los ingresos de la cuarta categoría acercaban al fisco el 1,6% del PBI.

3 íd.

4 Julio Gambina y Martín Bonazzi, “Sistema Tributario en Argentina: Estado como garante de la redistribución regresiva de la riqueza”. Informe presentado ante el Congreso de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, 5 y 6 de noviembre del 2014.

Para el 2005 ganancias aportaba el 4% del PBI, siendo el aporte de los salarios casi la mitad, el 1,9%, siendo reflejo de las mejoras en las ganancias de las empresas y la renta del capital. Aun así, el aporte vía salarios era muy importante fuente de financiamiento fiscal.

Como señalamos en 2012, los ingresos fiscales por cuarta categoría alcanzan al 3,4% superando las ganancias provenientes de las inversiones del capital en sus diferentes variantes.

Se trata de un sin sentido. Por definición se supone que el tributo que debe recaer sobre las ganancias de la inversión de capital, que como vemos en el caso de la transnacional denunciada, se esconden, eludiendo y evadiendo, algo que los trabajadores regularizados no pueden hacer.

Según el estudio que presentamos, se estima la evasión en ganancias cercana al 50%, con lo que queda claro que son los trabajadores los principales sostenedores del regresivo régimen tributario en la Argentina y que convoca a una mayor severidad en el control de una práctica generalizada del empresariado hegemónico, en la Argentina y en el mundo para evadir y eludir impuestos.

Al mismo tiempo se impone la discusión de fondo sobre la pertinencia o no de gravar los salarios como si fueran ganancias, con mucho más lógica cuando una de las reivindicaciones en la coyuntura pasa por el debate sobre un bono de fin de año compensatorio por la inflación que deteriora los ingresos salariales.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2014



DESENDEUDAMIENTO Y REENDEUDAMIENTO PÚBLICO EN LA ARGENTINA

El ministro de Economía de la Argentina anunció el jueves 4 de diciembre pasado el pago anticipado del BODEN 2015, que como su nombre indica vence el próximo año, más precisamente el 3 de octubre.

La opción incluye el canje por el BONAR 2024, con vencimiento el 30 de enero de ese año. El atractivo supone pasar de una tasa de 7% del BODEN 2015 a otra de 8,75% del BONAR 2014, aunque postergando el vencimiento por una década.

Al mismo tiempo se ofrece una nueva convocatoria a suscribir BONAR 2024 por unos 3.000 millones de dólares.

Por un lado, se sostiene la política de cancelar, de desendeudar, vía ofrecimiento de cancelación a los tenedores de títulos que vencía en octubre del 2015.

Algunos inversores optarán por cobrar y hacerse de dólares en momentos en que está restringido el mecanismo para obtener divisas. Son recursos que irán a las cajas fuertes u otras formas de atesoramiento, o quizá animen el mercado inmobiliario e incluso el pequeño mercado del paralelo, contribuyendo con esa mayor oferta a reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, ilegal o blue.

No es la principal apuesta del gobierno, aun cuando en el discurso oficial, la medida apunta a destacar la capacidad de pago de la Argentina, sobre todo cuando crece la especulación sobre el im-

pago continuado en 2015 a los acreedores que demandaron al país en EEUU.

El país confirma su vocación de pago, de ser “pagador serial”, tal como afirman las autoridades argentinas, que en estos años de gobiernos kirchneristas cancelaron 192.000 millones de dólares, según informa la Presidenta Cristina Fernández.

La apuesta del gobierno se concentra en estirar los plazos de vencimiento, desde el 2015 al 2024, en la expectativa de que los tenedores del BODEN 2015 acepten el convite del canje por el BONAR 2024, con mayor rendimiento.

En el fondo, sigue el festival de bonos, el cáncer del endeudamiento, aun cuando desde el punto de vista del ordenamiento de pagos, estos se estiran en el tiempo, gobierne quien gobierne en el futuro.

Desde el próximo año y por 10 años caerán vencimientos de intereses, y al final, el vencimiento total, problema de gobiernos futuros, similares o diferentes al actual. En rigor, no solo será cuestión del BONAR 2014, sino de un conjunto de viejos vencimientos a los que se suman los nuevos préstamos provenientes de China y Francia.

El costo a pagar es del conjunto de la sociedad, la que verá limitada su demanda por derechos ante reclamos de tenedores de títulos de la deuda pública.

La especulación financiera volverá a ganarle a los derechos constitucionales de una paga digna a los trabajadores estatales, y por cierto a la educación o la salud pública, la seguridad y ni hablar de los reclamos de los jubilados que confirmarán el achatamiento de la pirámide de ingresos previsionales.

Por si esto fuera poco, la Argentina confirma con esta ampliación de la deuda, que retoma el camino del endeudamiento público, al ofrecer una nueva emisión de títulos públicos, ampliando los compromisos derivados del BONAR 2024, oportunamente emitido para cancelar a REPSOL la expropiación parcial de YPF.

Ahora se ofrecen bonos por 3.000 millones de dólares que se suman a la acrecida deuda pública del último tiempo, con inversores locales en pesos equivalentes a la cotización del dólar al vencimiento; con Francia y especialmente con China. Es un aporte a las opciones de financiamiento para ahorristas con capacidad económica y fondos ociosos.

¿Para qué necesita el Estado estos recursos? Para pagar deuda, entre otras cuestiones. Con lo cual se confirma el ciclo de más deuda para seguir pagando deuda, comprometiendo recursos demandados para educación, salud, salarios de estatales, jubilaciones y variadas necesidades sociales.

CAMPAÑA POPULAR PARA SUSPENDER LOS PAGOS

Ante esta situación se requiere profundizar la campaña popular por la suspensión de los pagos de la deuda y la conformación urgente de una auditoría popular que investigue la deuda en la Argentina.

En septiembre del 2014 se votó la “ley de pago soberano” que incluía la conformación de una Comisión Investigadora por parte del Parlamento sobre la deuda desde la dictadura de 1976 hasta la actualidad. Se cumplirán tres meses desde entonces y el Congreso está en mora, y nada indica que cumplirá con su cometido.

Por eso necesitamos ejercer el derecho soberano del pueblo para organizar lo que las instituciones no realizan.

El próximo año, el 24 de abril del 2015, se cumplirán 15 años del fallecimiento de Alejandro Olmos, quien denunció la deuda en tiempos de la dictadura (1976/1983) y lograra el fallo condenatorio en el 2000, con enunciado de más de 400 fraudes comprobados. Ese es el origen espurio, ilegal, ilegítimo y repudiable de la deuda pública, que bien puede considerarse “odiosa”.

Entre la CTA Autónoma y el Comité de Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, el CADTM, se está considerando realizar una Conferencia Internacional para analizar el caso argentino y estimular la campaña por la suspensión de los pagos y la conformación de una auditoría popular que investigue lo que las instituciones no hicieron, no hacen y que muy probablemente no hagan.

La propuesta fue llevada a la Asamblea por la suspensión de los pagos, la conformación de una auditoría de la misma y en defensa de los bienes comunes. Se trata de un ámbito plural entre los variados que asumen campañas diversas por cuestiones específicas, contra la megaminería a cielo abierto, contra la fumigación de los pueblos asentados en la cuenca sojera, contra la ley de semillas ajustada a la demanda de Monsanto y el modelo productivo de reprimarización de la economía.

Todos esos movimientos y muchos otros, necesitan articularse en una propuesta integradora, que bien puede subsumirse en una campaña por la suspensión de pagos y defensa de los bienes comunes.

Se trata de constituir el sujeto colectivo consciente y masivo por otro modelo productivo y de desarrollo, por otro país, en una agenda más allá de la preocupación electoral y que la contiene, para modificar la agenda política en el país. Que no solo tenga en cuenta el programa de las clases dominantes, que contiene las propuestas de las opciones con posibilidad de gobernar a la Argentina.

Esa Conferencia Internacional que imaginan desde la CTA Autónoma y el CADTM tiene que ser el punto de partida de una consulta popular, para que la sociedad argentina, en un gran debate, pueda decidir en que utilizar los recursos públicos.

¿Debe el país seguir postergando derechos de la mayoría de la población para ratificar sus compromisos con el sistema financiero internacional?

¿Hay que seguir alimentando el mercado de la especulación y la danza de bonos que paga el pueblo?

Son interrogantes que se responden desde la política, desde la acumulación de fuerzas necesarias para enfrentar la posibilidad de un presente y un futuro con autonomía e independencia, contra la subordinación y la dependencia que confirma la política del endeudamiento estructural, sea con desendeudamiento o con re endeudamiento, tal como ocurre en el presente.

Como en otras ocasiones, el pago o no de la deuda vuelve a constituirse como dicotomía entre dependencia o soberanía.

Buenos Aires, 8 de diciembre de 2014

NUEVO CANJE Y EMISIÓN DE DEUDA EN LA ARGENTINA

Argentina retomó el camino del endeudamiento público con un ofrecimiento de cancelación anticipada de un título con vencimiento en octubre del 2015 por 6.700 millones de dólares.

Al mismo tiempo se ofreció canjear el mismo por otro con vencimiento en el 2024 mejorando la tasa de interés, del 7 al 8,75%.

En el mismo acto se ofreció una nueva emisión de ese título con vencimiento a 10 años y con cancelaciones anticipadas a la mitad de su vigencia. El título ofrecido es el mismo con el que se compensó en abril pasado a Repsol por la expropiación parcial de YPF.

La operatoria estuvo abierta por tres días, entre el 10 y 12 de diciembre, un tiempo complejo por los datos que arroja la continuidad de la crisis mundial, con bolsas en baja generalizada y tensiones varias por la disminución de los precios internacionales de las commodities, especialmente el petróleo, que perforó el piso de los 60 dólares el barril y no parece tener fin, en lo que ya se anuncia como una guerra por el manejo de la economía del petróleo, un insumo estratégico en el orden mundial contemporáneo.

Al cierre de la operatoria, el propio Ministro de Economía informó en conferencia de prensa que solo se presentaron al cobro anticipado títulos equivalentes a 185 millones de dólares, los que se abonarán en dólares en efectivo, una curiosidad en la economía de la Argentina, con fuertes restricciones en la operatoria de divisas.

Por otra parte, fueron unos 377 millones de dólares los bonos canjeados, que entregan sus títulos de vencimiento en el 2015 para recibir en canje otros con vencimiento en el 2024.

Ante la oferta de nueva emisión, se colocaron bonos por 286 millones de dólares, parte de lo cual tiene destino en cancelar aquellos 185 millones presentados a cobrar anticipadamente el vencimiento que operaba en 2015.

Información periodística de *Página 12* (medio oficialista) indica que una parte importante del canje, por unos 170 millones de dólares fue cubierta por los fondos administrados por la ANSES. Al mismo tiempo se informa que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, administrado por la ANSES se constituyó en el principal suscriptor de los nuevos títulos emitidos con vencimiento en el 2024.

La prueba llevada adelante por las autoridades económicas para reinsertar a la Argentina en el mercado mundial de créditos presenta relativo éxito, aunque desde el gobierno se juzga que la escasa presentación al cobro anticipado es un gesto de confianza en que Argentina cumplirá sus compromisos en el 2015 y aleja las consideraciones de una posible cesación de pagos en el corto y mediano plazo.

Vale aclarar, que al mismo tiempo que se desarrollaba la operatoria de canje y emisión de deuda, la Argentina solicitó el tercer tramo del crédito *swap* acordado con China este año.

La operatoria puede involucrar 11.000 millones de dólares en moneda china. Desde septiembre y en tres tramos, ya se liquidaron 2.314 millones de dólares de nueva deuda pública, con vencimiento en un año y renovable por otros tres años más. La operatoria se resolvió por 814 millones de dólares en septiembre, por 500 millones en octubre y 1.000 millones en diciembre.

Producto de ello, las reservas internacionales reconocen al presente un stock de 30.256 millones de dólares, cuando hace un par de meses el piso se encontraba cercano a los 26.000 millones y con tendencia a la baja. No solo se explica por los préstamos externos, sino por las liquidaciones de las cerealeras que se apuraron a vender la cosecha ante la baja del precio internacional de la soja.

China se ha transformado en el nuevo prestamista de última instancia de la Argentina sorteando el cierre a los mercados internacionales.

Convengamos también que la escasa aceptación de la operatoria de canje y emisión ofrecida se debe a que por las condiciones de funcionamiento del mercado de capitales local y mundial, la coyuntura de baja en los precios de los títulos hacía más ventajoso comprar en el mercado secundario los bonos y esperar al vencimiento en 2015, antes de ingresar a la operatoria oficial de cancelación anticipada o de canje.

La Argentina ratifica en estas horas su voluntad de cancelación de deuda, al tiempo que confirma su interés por volver al mercado mundial de deuda.

Esta semana puede considerarse como un ensayo, que marca el camino del re-endeudamiento en futuro cercano. Las provincias argentinas, con dificultades fiscales, esperaban este momento con expectativa para tomar nuevos préstamos en el mercado mundial.

Cualquier consideración nos lleva a la convicción que el cáncer de la deuda sigue presente. Con desendeudamiento o con nuevo endeudamiento todo se subordina a la lógica que imponen los acreedores.

Se impone un gran debate nacional sobre los costos de pagar la deuda, por lo que necesitamos discutir la legitimidad y legalidad de la deuda, ir a fondo con una investigación de la misma y avanzar en una campaña de esclarecimiento popular sobre la suspensión de los pagos y la utilización de los recursos públicos con un destino alternativo que promueve otro modelo productivo y de desarrollo.

Una medida de esta naturaleza será condenada por el sistema mundial en crisis, y nada mejor en la coyuntura internacional que ofrecer propuestas políticas alternativas que animen la perspectiva anticapitalista y antiimperialista. Lo más interesante es que no existe otra salida, sino se profundiza la dependencia y subordinación.

El camino de la independencia requiere convocar a la sociedad y al pueblo a realizar una consulta popular sobre la suspensión del pago de la deuda y la auditoría popular integral. Es una forma de constituir sujetos colectivos conscientes para enfrentar la realidad y asumir la perspectiva de un proyecto político alternativo al de subordinación y de dependencia.

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2014



PARTE III
SALARIOS, PRECIOS, EMPLEO



INTRODUCCIÓN

Salarios, precios y ganancias son el eje de esta parte, donde la inflación y los debates relativos a sus mediciones y al impacto diverso en la población constituyen un tema relevante y recurrente de la coyuntura local.

Varios de los argumentos están pensados en la lógica del conflicto de las/os trabajadoras/es por defender el ingreso salarial afectado por la evolución de los precios.

Se trata de considerar el variado impacto de la política de ingresos, del tipo de cambio y el conflicto ante la lucha por la distribución del ingreso y la riqueza.

En ese sentido se destaca la devaluación de la moneda, acontecimiento que definió el año político y económico y condicionó la disputa política en el campo económico.



PRECIOS Y SALARIOS EN EL DEBATE ECONÓMICO

La preocupación económica es la inflación y por eso, aparece como central la cuestión de los precios, entre ellos el de la fuerza de trabajo.

El fenómeno de la inflación se manifiesta como incremento de los precios, y más allá del INDEC y el viejo o nuevo indicador, la propia política de gobierno reconoce la existencia del flagelo inflacionario. Se discute la magnitud del problema, pero ya no se niega su existencia. Otra discusión es la política económica para frenar o impulsar los precios.

Por ello es que hay acuerdo de precios, por ahora solo en la zona metropolitana y en grandes centros comerciales. Empieza a extenderse a cadenas de comercialización de menor magnitud y progresivamente adquirirá carácter federal, llegando el acuerdo de precios al conjunto del país. En el “mientras tanto”, quien puede aumentar lo hace.

Es importante que se reconozca el problema, paso inicial y pre-condición para intentar confrontarlo. Claro que el problema esencial debería apuntar a reconocer no solo el fenómeno, sino las causas de la inflación. En general se reconoce la complejidad de la cuestión, pero existen teorías y enfoques que privilegian ciertos elementos.

Entre otros, existen los que apuntan a la política económica, especialmente la monetaria, y más precisamente la emisión. La

respuesta en este caso apunta a la disminución de la emisión de moneda y con ello a la reducción del gasto público. En general, esa reducción apunta a gastos sociales y nunca a aquellos destinos que satisfacen el ingreso de sectores dominantes, por caso el pago puntual de la deuda pública.

Otros señalan la cuestión estructural de la dominación monopolista en el sistema capitalista, es decir, señalan a los fijadores de precios, que no son muchos. Solo pueden establecer precios aquellos que tienen una situación de dominación en el mercado y utilizan esa posibilidad para apropiarse de una parte de la renta socialmente generada a costa del ingreso de una parte sustancial de la población. La respuesta para intentar contrarrestar esta situación apunta a medidas de control del poder económico, algunas veces de carácter imperativo y otras consensuales, como los actuales “acuerdos”.

Ambos diagnósticos pueden ser compartidos, siendo discutibles las medidas que se asocian a cada diagnóstico. Puede coincidir en que se trata de un problema de emisión y que debe reducirse el gasto. La discusión es en todo caso cual es el gasto que se debe afectar. Si se achica el gasto en salud o educación, por ejemplo, o si se asume otra política respecto al privilegio de los acreedores, entre cancelar la deuda pública con inversores locales o externos o satisfacer derechos sociales consagrados por la Constitución Nacional. En el otro sentido, el debate apunta a discutir cómo se evita el accionar de monopolio. En este caso, debe asumirse que el capitalismo hace rato abandonó una época de libre competencia para abrirle paso a la concentración y centralización del capital, habilitando la dominación monopolista de la economía contemporánea, al mismo tiempo que el carácter del Estado, más allá de contradicciones, remite a una institucionalidad gestada por el propio régimen del capital.

Vale mencionar que el acuerdo de precios en curso es voluntario y por lo tanto involucra en el debate al gobierno con grandes operadores económicos, los que consienten en la coyuntura la política de “precios cuidados”. Cada cual atenderá su juego, intentando el sector empresario corregir al alza los acuerdos transitorios en busca de rentabilidad, esencial lógica capitalista. La respuesta gubernamental amenaza con la importación y pretende involucrar a nuevos actores económicos, caso de los productores de alimentos frescos y sus propios instrumentos de comercialización, caso del Mercado Central de abastecimiento.

Queda claro que el diagnóstico necesita incluir la lógica de la ganancia, esencia del capitalismo, para poder entender que la fijación de precios al alza es uno de los mecanismos del capital para lograr su cometido. Es algo que tiene especificidad nacional, pues no ocurre del mismo modo en todos los países del mundo. EEUU es un gran emisor y sin embargo no se manifiesta en una suba descontrolada de los precios, entre otras cuestiones, por su capacidad de trasladar la inflación al resto del mundo. Existen otros países con posición hegemónica en el sistema mundial del capitalismo que actúan del mismo modo.

Por ello, no en todos los países, la respuesta del capital es la misma. En el caso de la Argentina, las restricciones estructurales evidenciadas luego del ciclo inicial de la devaluación del 2002, con efecto hacia el 2006, hizo que se defiendan la rentabilidad de la inversión con aumentos de precios. En esas condiciones, los trabajadores intentan defender sus ingresos y acuden a las paritarias, un logro de estos años, aunque solo para un sector minoritario de los trabajadores. De hecho, solo los trabajadores regularizados del sector privado han podido defenderse de la evolución de los precios, algo no logrado por los estatales y ni hablar aquellos que están en situación irregular de empleo, es decir, sin seguridad social. La mayoría de los trabajadores han perdido contra la inflación, insistamos, más allá de cualquier indicador del INDEC, el viejo o el nuevo que empezó a contabilizarse desde el comienzo del 2014.

La realidad augura conflicto a varias puntas, entre fijadores de precios y sociedad; entre los actores económicos y el gobierno, para ver quién puede disciplinar a quien; y claro, entre la mayoría de la población que vive de ingresos fijos, entre ellos los trabajadores en defensa de los salarios, a quienes pretenden disciplinar los patrones y el Estado. Este conflicto tiene a los trabajadores como sujeto esencial y por eso está en la agenda de discusión en las organizaciones de trabajadores, las que preparan las formas de intervención para obtener logros en la disputa por el ingreso nacional, destacándose pese a la fragmentación sindical la unidad de acción insospechada hasta hace muy poco tiempo. Es un juego de intereses económicos que se dirime en la política, en las iniciativas políticas para defender ingresos, es decir, ganancias los propietarios y salarios los trabajadores. El Estado juega para el capital, sí, es verdad, pero es también ámbito de disputa si se pretende construir otra institucionalidad para la transformación social, anticapitalista.

Buenos Aires, 11 de enero de 2014



LA DEVALUACIÓN Y LA BATALLA POR LOS PRECIOS

Transitada la primera semana del tipo de cambio en torno a los 8 pesos, la discusión está en la lucha por el reordenamiento de los precios.

Las remarcaciones fueron la respuesta inmediata en variados rubros. Casi nada mantuvo los precios previos a la devaluación (los que venían en alza) y eso obligó a un accionar de política económica para inducir reducciones de los precios en diferentes rubros.

En ese sentido sobresale la convocatoria a retrotraer precios al 21 de enero, previo a la importante devaluación gestada en esos días. Sin embargo, las propias autoridades aceptaron incrementos de hasta el 5% en lavarropas o heladeras, la llamada línea blanca, y 7,5% en electrodomésticos. La causa de esta convalidación está asociada al modelo industrial vigente, de armaduría, con elevada presencia de partes y componentes importados, que agregan mayores costos de producción desde la devaluación.

Como vemos, no solo cuestiones de coyuntura aparecen en la realidad, sino que se evidencia la presencia de problemas estructurales, tal como el modelo de desarrollo industrial y su política.

LA PELEA ES POR LOS PRECIOS

Esta es la primera pelea que surge luego de la devaluación, la pelea por los precios.

Más allá de la discusión entre fijadores de precios y gobierno, la inflación se siente en la disminución de la capacidad de compra de los ingresos populares y por ello interesa la discusión, entre otros, del precio de la fuerza de trabajo.

Es una preocupación que pasa por los salarios, las jubilaciones y los subsidios de la política social, que están en la base de una protesta social que ocupa nuevamente la agenda política en el país.

Más allá de paritarias en danza, algunas compensaciones aparecen ante el reclamo de los trabajadores, caso del transporte de larga distancia en vísperas del fin de semana.

Los movimientos territoriales, perceptores de planes, demandan ajustes de sus ingresos con movilizaciones de ocupación de calles que encuentran preventivas medidas de seguridad que habilitan propuestas reaccionarias de represión.

Por eso, la batalla en estas horas es por los precios de la canasta de consumo cotidiana, pero también del dinero, ya que la tasa de interés fue inducida al crecimiento desde el Banco Central, que aumentó esta semana las tasas de LEBAC y NOBAC a 25,52% y el 25,89%. Estos títulos son parte del pasivo del BCRA y orientan al sistema financiero sobre inversiones.

A su vez, los bancos respondieron con alzas en las tasas ofrecidas a sus ahorristas inversores, elevando con ello el costo del crédito a niveles muy difíciles de sostener por los sectores no hegemónicos. Es un adicional más en la transferencia de costos que engordan los precios que paga la población.

Lo curioso de la cuestión es que lo que se instaló como debate fue la compra de dólares, permitida desde esta semana, obviando el análisis más profundo del impacto de la devaluación y su impacto sobre los precios.

Es que la posibilidad de acceder a la compra de divisas movilizó a una parte de la población con ingresos declarados al mercado de divisas, en lugar de orientar ahorros en satisfacer necesidades de consumo, que al tiempo que las resuelven motorizan la producción.

El resultado concreto es el estímulo a la especulación, en pequeña escala, es cierto, pero especulación al fin, con un resultado de pérdidas de reservas del orden de los 200 millones de dólares diarios, comprometiendo recursos de la sociedad que bien podrían constituirse en fondos de promoción de modelos productivos y de

desarrollo para satisfacer demandas y reivindicaciones sociales y ambientales extendidas.

Se generaliza un sentido común favorable a la especulación, en este caso en la compra y atesoramiento de divisas. Según la información oficial, decenas de miles de pequeños inversores compraron promedio menos de 600 dólares. Es una cifra relativamente pequeña, pero que en volumen constituye una importante fuente de pérdidas de reservas internacionales.

Está claro que en sentido contrario, la política gubernamental apunta a restituir reservas que bajan desde los 52.000 millones a comienzos del 2011 a poco más de 28.000 millones de dólares al cierre de esta semana.

El acceso a la compra de divisas deteriora esa posibilidad y estimula la pérdida de reservas, a contramano de la necesidad de engordarlas, lo que se busca con negociaciones a las cerealeras para que liquiden cerca de 4.000 millones de dólares almacenados en silobolsas, según fuentes gubernamentales.

La apuesta es al “mercado” y como siempre, se contesta con el “bolsillo”, con el resultado de escaso ingreso de divisas y fuertes salidas que disminuyen el stock de reservas internacionales. Es el resultado de un “mercado libre” más allá de las restricciones a las importaciones y la compra venta de divisas, o la gestión administrativa en manos del BCRA.

NACIONALIZAR EL COMERCIO EXTERIOR Y LA BANCA

¿Tiene sentido mantener el actual sistema? Algunas voces, tal como anticipamos hace poco, comienzan a demandar la nacionalización del comercio exterior e incluso de la banca, ante las maniobras del sector financiero asociadas a la especulación de sectores monopólicos, como denunció oportunamente el propio gobierno.

La apuesta es a que los sectores del agro vendan su producción almacenada y engrosen reservas. La respuesta es que los mueve una lógica inversora, capitalista, a la espera de nuevas devaluaciones para mejorar la rentabilidad del capital invertido. En ese sentido no hay límite y por eso, aun siendo pequeño el mercado ilegal de las divisas, este presiona como objetivo a alcanzar por especuladores y grandes productores y exportadores.

Si ya se devaluó a 8, el interrogante de estos sectores es por qué no ir por más. Por ello insistimos que además de la coyuntura deben pensarse los problemas estructurales en que deriva la tendencia a la concentración de la producción, del monocultivo de la soja y al dominio de lo central de las exportaciones argentinas que ponen en discusión la nacionalización del comercio exterior y la banca.

Pero también hay búsqueda desde la política del gobierno de inversores externos o el retorno al mercado de crédito mundial, todo con el fin de lograr ingresos de divisas que contrarresten la pérdida de reservas.

Las malas noticias son la realidad, y a contramano de la aspiración por el ingreso de recursos externos, las señales vienen en sentido contrario. Es que el CIADI falló otra vez contra Argentina, ahora por 21 millones de dólares más intereses en una demanda presentada por Impregilo de Italia. Argentina había recusado el fallo del 2011 y ahora es fallo en firme.

¿Será ello un anticipo de más deuda pública? Hace poco se reconocieron sentencias por 500 millones de dólares y se decidió pagar con bonos de la deuda pública.

Vale recordar que las demandas cursadas ante el CIADI suman más de 10.000 millones de dólares, por lo que urge salir del CIADI, un ámbito del Banco Mundial. Hay que recordar que Brasil nunca integró ese ámbito y Ecuador, Venezuela y Bolivia se retiraron en el último tiempo.

Sin perjuicio de lo sostenido de la nacionalización del comercio exterior y de la banca, se impone también denunciar la participación Argentina en el CIADI y terminar con las amenazas y sanciones que finalmente paga el conjunto de la población argentina.

Como vemos, la coyuntura económica está fuertemente asociada a problemas estructurales que no pueden obviarse y que convocan a su discusión para soluciones creativas en la perspectiva de modificar la ecuación de beneficiarios y perjudicados en la sociedad argentina, lo que nos lleva al terreno de la lucha política y el poder.

Buenos Aires, 1 de febrero de 2014

PRECIOS EN ALZA: ¿QUÉ PASA CON LOS SALARIOS?

Los precios vienen subiendo con fuerza, desde hace años, por lo menos desde 2006/7, acelerados en el último tiempo, 2012/13, y especialmente este verano, desde diciembre del 2013.

Se trataba de un fenómeno ajeno al INDEC, y al final, el organismo de las estadísticas, previo acuerdo metodológico con el FMI, reconoce ahora una elevación de precios minoristas para todo el país. El indicador de enero de 2014 registró un aumento de precios minoristas nacional urbano de 3,7%, lo que anualizado significa una cifra descomunal, que preocupa a la mayoría de la población. Es una realidad que afecta seriamente a quienes perciben ingresos fijos, aún con ajustes, los que corren detrás de aumentos considerables de la canasta de consumo cotidiana.

PRIMERO AUMENTÓ EL PRECIO DEL DÓLAR, Y LUEGO EL RESTO

Pero convengamos que la aceleración de precios se convalida con la devaluación del último tercio de enero, impactando en el ascenso de precios, con o sin justificación en los costos de producción. El ciclo de aceleración de los precios tiene un momento de inicio con la corrección del precio de las divisas. El dólar tiene precio y se comercia en el mercado, el oficial, el turístico, el contado con liqui, o el ilegal. Son todos mercados, ámbitos de intermediación entre compradores y vendedores.

Ese aumento de precios es en muchos casos costo de producción, por eso se aceptaron aumentos a la línea blanca del 5%; a los electrodomésticos del 7,5%; o a las naftas del 6%, entre otros aumentos autorizados por las autoridades económicas. Como admitió el propio Ministro, “algunos aumentaron por las dudas”, “por si las moscas”, dando cuenta de la anarquía del mercado capitalista, donde los oferentes aumentan si el mercado comprador demanda.

Lo que decimos es que el precio del dólar disparó otros precios en la economía, generando grandes beneficiarios y otros muchos, más por cierto, perjudicados. Para que se entienda: todos los que compraron dólares a 6 o 7 pesos cuando la divisa cotizaba por debajo y el gobierno aseguraba que no devaluaría, ganaron una importante suma por haber anticipado el mayor precio convalidado por la devaluación. Otro ejemplo: los bancos fueron esta semana obligados a desarmar sus posiciones en activos financieros, y lo hicieron al precio actual de mercado, en torno a 8 pesos por dólar. Son activos adquiridos en el último tiempo y que permitieron a los bancos ganar en rentabilidad y estamos hablando de casi un tercio de los activos bancarios. Ni hablar de los exportadores que ahora liquidan o anticipan a un valor que demandaban hasta hace poco y les era negado.

Podemos seguir, pero queda claro que especuladores, bancos y grandes productores y exportadores hicieron la diferencia a costa de la mayoría de la sociedad. Es la lógica mercantil capitalista, nada más y nada menos, la ley del valor que se abre paso en las relaciones sociales.

¿QUÉ PASA CON EL PRECIO DE LA FUERZA DE TRABAJO?

El gran interrogante es que pasa con el precio de la fuerza de trabajo, o sea con los salarios o ingresos populares. Los últimos datos que tenemos, que surgen de un estudio de la FISyP con información del Ministerio de Trabajo destaca que el promedio de los trabajadores privados registrados alcanza a 7.393 pesos a marzo del 2013; pero que el promedio del conjunto de los trabajadores asalariados plenos, estatales y privados, perciben 5.211 a junio del 2013, como consecuencia de 5.735 pesos mensuales los registrados y 3.686 pesos los no registrados. Son ingresos que no se movieron esencialmente desde entonces hasta ahora, y explica porque varios sindicatos discutieron, y algunos lograron, una suma fija en torno del fin de año.

Existen voces que llaman a la cordura a los sindicalistas ante las próximas negociaciones colectivas de salario y condiciones de trabajo. Incluso con argumentos políticos para evitar males peores, desde un próximo gobierno a la derecha del actual, o la posibilidad de la recesión y su secuela de crecimiento del desempleo. Otra vez el chantaje de cambiar salario por empleo. Recordemos la importante expansión del empleo luego de la recesión 1998/2002, lograda sobre salarios más bajos que el promedio histórico de las décadas anteriores. Incluso, pese a la reducción del desempleo, no se logró bajar el elevado nivel que presenta el tercio de trabajadores en situación irregular, dando cuenta de la impunidad empresarial. El legado es más empleo, con salarios bajos en promedio y elevada informalidad, crecientemente estructural, ya no coyuntural.

¿Puede tener éxito el chantaje sobre los trabajadores? Existe una fuerte presión patronal gubernamental que convoca a la responsabilidad, obviando el pecado original de la devaluación y el incremento de los precios realizados con antelación.

La inflación pasada está en torno al 30%, lejos del indicador del INDEC, que ahora se discontinúa. ¿A cuánto llegará la inflación del 2014? Pareciera que el INDEC intenta ahora acercarse con registros más realistas, lo que supone la aceptación de un diagnóstico de inflación. Es cierto que desde la política económica se busca, luego de la devaluación y ciertos permisos para aumentar precios, contener la escalada de precios. Para eso se acude a los “precios cuidados”, menos de 200 productos en zona metropolitana y solo en grandes cadenas que fueron parte del acuerdo voluntario y transitorio, siempre en estudio por ajustar. También se promueven otros acuerdos, con bienes de fuerte impacto en el consumo cotidiano. Todo con la expectativa que la mayor oferta de divisas por liquidación de exportaciones, quizá por ingresos de inversiones externas o por nueva deuda, puedan contener las demandas por una nueva devaluación que reanime el ciclo alcista que intentamos explicar.

Con este marco, el 30% es el mínimo para nivelar la inflación pasada. ¿Cuánto entonces para anticipar los aumentos del 2014, empezados con el 3,7% de promedio? Por eso algunos imaginan negociaciones de un año y si se puede de más larga duración. El año pasado los sindicatos de docentes universitarios, sin acuerdo de la CONADUH, aceptaron actualizaciones que traspasaron el año. La realidad impone achicar el tiempo de validez de cualquier acuerdo, asumiendo su parcialidad en función de la evolución del conjunto

de la economía, donde no solo tallan los precios, sino también la recesión potencial y el desempleo.

EL CONFLICTO ES EL NUEVO ESCENARIO DE LA LUCHA POLÍTICA

No resulta extraño si anticipamos un tiempo de exacerbación del conflicto social por los ingresos.

Las convenciones colectivas inciden sobre los ingresos del tercio irregular, de los tercerizados y el conjunto de la informalidad.

Por eso, el conflicto generado desde los trabajadores de mejores ingresos convoca a la solidaridad de una mayoría con ingresos más bajos, incluso pasivos y perceptores de planes sociales.

El conflicto atraviesa a todo el movimiento de trabajadores, cercanos o no a la identidad en el gobierno.

Los intereses por mejorar ingresos empujan a la conflictividad, aun cuando haya quienes convoquen a la responsabilidad o la obediencia para que el salario sea el ancla de la inflación, y en definitiva la carta del ajuste en curso.

No es más que el capitalismo, el sistema sustentado en la explotación de la fuerza de trabajo. Por más que se argumenten buenas intenciones, la carga de la crisis es siempre soportada por los trabajadores. Si se pretende cambiar la historia no queda más remedio que pensar y actuar en la crítica al capitalismo para transformar la realidad.

Buenos Aires, 14 de febrero de 2014

DISCUSIÓN SALARIAL Y MARCO ECONÓMICO

Empezó la paritaria docente con diferencias entre las propias organizaciones sindicales, y entre ellas y las posibilidades que surgen de la oferta del gobierno. Entre los gremios las demandas oscilan entre 42 y 61%, con mínimos que varían de 4.800 a 5.500 mensuales. La oferta del gobierno nacional alcanza al 22% en tres cuotas, muy lejos del reclamo sindical, aunque señala que es un piso para negociar luego en cada provincia, en definitiva los responsables del pago de salarios.

Como sabemos es una negociación testigo, que habilita el camino de otras a sucederse en el próximo tiempo.

La preocupación de docentes y de otros trabajadores y sindicalistas es la ecuación entre evolución futura de los precios y capacidad de compra de los ingresos de los trabajadores.

Para el gobierno, la problemática es el conjunto de la economía y la necesidad de bajar expectativas de diferentes actores económicos. La duda es si puede disciplinar a empresarios en su estrategia de contener precios y lo mismo en su intención de contener demanda salarial.

La discusión es quién termina siendo la variable de ajuste, si la ganancia o el salario, dicho en momentos donde el Banco Central informa de una ganancia de los bancos en 2013 cercana a los 30.000 millones de pesos, superior a los años anteriores, en que la banca mostró balances superavitarios por encima de otros sectores económicos.

En el orden capitalista es conocido el resultado en la disputa entre salarios y ganancias, por eso la posibilidad de conflictividad, que para los docentes supone incertidumbre sobre el inicio de las clases.

Pero más allá de las paritarias, el gobierno considera diversas variables económicas que condicionan la economía y la política.

PRECIOS Y EQUILIBRIOS FISCALES Y COMERCIALES

Desde el gobierno, una vez reconocido un incremento de precios para enero del 3,7% y una proyección no muy diferente para febrero, se esfuerzan por contener la escalada y acuden a conversaciones múltiples.

Por un lado se intenta contener el alza de precios, con encuentros diversos con los principales formadores, especialmente en el sector comercial. La situación de precios es muy diversa por cierto y es difícil anticipar el resultado concreto, algo que se conocerá con la difusión del INDEC para un segundo mes y poder proyectar a futuro. Existe preocupación por la inflación, cuestión soslayada desde los datos oficiales hasta el registro del INDEC de enero.

En otro plano, se dispuso desde la AFIP un registro on-line de las existencias de granos (cereales y oleaginosas), con el intento de conocer la capacidad almacenada y poder actuar en casos de desabastecimiento o sospechas de acciones especulativas. Estos datos estaban en la Junta de Granos, que en aras de la liberalización de los noventa se cerró. La medida molesta a los adeptos de la liberalización y defensores del libre juego del mercado. La necesidad gubernamental de divisas empuja acciones para inducir a los acopiadores en campo, o en plantas, a liquidar existencias. El centro del tema es la cuestión fiscal (necesidad de recaudar) y comercial (exportar para mejorar el saldo comercial), para cerrar brechas externas que preocupan a las autoridades.

NECESIDAD DE DÓLARES E INVERSORES

Respecto de esas brechas externas, preocupa como termine la cuestión judicial en EEUU relativa a los fondos buitres, que si bien alcanza a 1.300 millones de dólares, tiene impacto en una cifra mayor y pone en riesgo el conjunto de la estrategia de negociación y canje. Supone ello un horizonte complejo y nos devuelve la imagen del

cáncer de la deuda pública, una cuestión que condiciona la economía presente y futura.

Con Repsol parece que se allana el camino de la compensación a cambio de salvaguardas de cobro demandadas por la transnacional expropiada. Es un tema crucial para atraer otros inversores externos, que privilegian la seguridad jurídica de reembolso de sus aportes. Atrás quedaron las declaraciones altisonantes de que la petrolera española debía compensar a la Argentina. El arreglo supone mayor endeudamiento a tasas elevadas.

Cancelar deudas y arreglar conflictos con acreedores diversos exige saldar las cuentas externas y por eso la preocupación por sostener el superávit o por lo menos niveles equilibrados de la balanza comercial y las cuentas fiscales.

En ese marco, los docentes y otros trabajadores discuten sus actualizaciones de ingresos y anticipan tiempos de conflicto, con un paro nacional convocado por la CTA, establecido para el 12 de marzo, ya iniciado el calendario escolar.

Es una situación de muchas incertidumbres y con actores económicos que demandan por intereses contradictorios, lo que supone lucha y confrontación de intereses. Es una disputa económica y política, estando en el trasfondo la cuestión del poder.

21 de febrero de 2014



MOTIVOS PARA EL PARO DEL 10 DE ABRIL EN ARGENTINA

Se viene el paro general del jueves 10 de abril y muchos discuten su carácter político.

Es obvio, ya que se trata de una iniciativa sustentada en demandas sociales, sindicales, económicas y políticas de los trabajadores.

Queda claro que los espacios sociales, sindicales y políticos que adhieren a la propuesta gubernamental no aceptan ni motorizan la medida de fuerza, aun cuando las demandas atraviesan las necesidades del conjunto de los trabajadores.

Entre varios motivos para el paro se privilegia una crítica al estilo impuesto en negociaciones paritarias condicionadas por la presión empresaria y gubernamental, identificada en cierres rápidos y a última hora con valores menores a la inflación real del 2013. Es una situación que no permite ajustes salariales que acompañen el encarecimiento del costo de vida por aumento de los precios; mucho menos si se proyecta anualmente la inflación entre enero y marzo del 2014. Vale mencionar además, que varias organizaciones sindicales estatales no tienen paritarias, o no participan de ellas por las condiciones discriminatorias del régimen legal para el reconocimiento de los sindicatos. En este sentido, pesa el reclamo por democracia y libertad sindical con proyectos presentados al debate en el Parlamento.

Ante el encarecimiento del costo de vida se sustenta en el paro un Salario Mínimo Vital y Móvil de \$9.000, al que se asocia el re-

clamo por la jubilación mínima y una actualización del 82% móvil. Vale recordar que el salario mínimo está en \$3.600 y la jubilación mínima en \$2.757, ambos valores muy lejos de satisfacer las necesidades de sus perceptores. Incluso, el salario promedio de la Argentina está muy lejos del mínimo necesario para reponer el gasto de energía física y mental del trabajador y su familia que supone la actividad laboral cotidiana.

Uno de los aspectos que más irrita a los trabajadores por inconstitucional es ser sujetos de impuestos a las ganancias. Por definición el salario es la retribución al factor de la producción “trabajo”, mientras que la retribución al capital es la ganancia. El reclamo es por eliminar del impuesto a las ganancias los ingresos salariales. Algunos sostienen esa concepción aunque admiten en la coyuntura una actualización del mínimo no imponible para defender el ingreso de los trabajadores y que los ajustes y actualizaciones de salarios no sean apropiados por el fisco. Son medidas que apuntan a una reforma impositiva que debe incluir la eliminación de las exenciones a las rentas financieras.

Las reivindicaciones son variadas e incluyen las actualizaciones y universalización de las asignaciones familiares; el aumento para jubilados de emergencia y el 82% móvil de los ingresos previsionales; la prohibición de suspensiones y despidos; contra la legislación de riesgos del trabajo y contra la precarización laboral y las tercerizaciones, lamentablemente generalizadas y que afectan a la mayoría de los trabajadores. Sobre 15 millones de población económicamente activa, la mitad tiene problemas por irregularidad en el empleo.

Existen demandas de corte más general y claramente políticas, como la lucha por la derogación de la legislación antiterrorista y la criminalización de la protesta social, mediante la cual 7.000 dirigentes sociales están procesados en el país. En ese marco se lucha por la libertad de los presos, especialmente a los trabajadores petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua.

El paro es expresión del descontento y más allá de quién lo convoca, facilita el agrupamiento de militantes sociales activos que intentan construir alternativa política. Diversos agrupamientos se suman con todas las consignas o algunas, y muchos incluso en forma individual, adhieren desde el descontento que suponen las políticas de ajuste derivadas de la devaluación, los recurrentes pagos de la deuda pública, el aumento de precios y tarifas, los recortes a las actualizaciones salariales.

Hay quienes prefieren la fidelidad política al proyecto del gobierno y rechazan las motivaciones del paro general. Es una opción de subordinación que los aleja del compromiso con las demandas y necesidades de los trabajadores. Es parte de la opción que se asume individual y colectivamente en el camino de la subordinación o la emancipación social.

Buenos Aires, 9 de abril del 2014



EMPEZARON LAS SUSPENSIONES EN LA INDUSTRIA

El INDEC informó en esta semana una corrección de los datos de evolución y crecimiento de la economía argentina entre 2004 y 2013. La nueva metodología destaca un menor crecimiento económico que el oportunamente informado, especialmente en los años 2008 y 2009, de fuerte recesión mundial.

El nuevo registro para el 2008 es de un crecimiento del 3,1% contra el 6,8% informado en su momento. Con la nueva medición surge que la Argentina no debió pagar el premio por crecimiento del PBI a los bonos de la deuda pública con esa cláusula. Ahora ya es historia, pues lo pagado no se puede revertir.

Para el 2009 el nuevo valor es de 0,1% y oportunamente se había informado un índice del 0,9%. Vale recordar que varios análisis destacaban una cifra negativa para la evolución económica.

Respecto del año pasado se confirma que según la vieja medición el guarismo indicaba una expansión del 4,9% que finalmente fue del 3% y eso motivó que el país no deba pagar por los bonos atados al crecimiento del PBI.

Los nuevos datos, con el 2004 como referencia, remiten a un PBI a fines del 2013 del orden de los 112 mil millones de dólares a precios de mercado, con un menor crecimiento del que se había informado con el viejo método, con 1993 como referencia.

LA EVOLUCIÓN EN LA COYUNTURA

Más allá del revisionismo en los datos de las cuentas nacionales, preocupa en la coyuntura la caída de la producción industrial y especialmente las cesantías que aparecen principalmente en la industria automotriz.

Se estima según fuentes periodísticas que unos 12.000 trabajadores de terminales automotrices están siendo afectados por suspensiones parciales, que se explican según las patronales en la importante disminución de las ventas, tanto al mercado local como global, especialmente a Brasil.

La baja de las ventas en abril alcanza al 35% en términos anuales y se suman a la caída registrada en marzo con tendencia a sostenerse en el presente mes de mayo. El dato para el cuatrimestre de enero a abril supone una reducción de ventas del 18% en comparación con igual periodo del 2013.

Existe una disminución de las ventas internas y externas, al tiempo que mermó la producción de las terminales y por ello las suspensiones temporales. Es una situación que ya anticipa una merma del record de producción de automotores del pasado año.

Entre las suspensiones se reconocen a 4.000 trabajadores de Volkswagen, 2.200 de FIAT, más 700 de Iveco, los camiones de Fiat. En la Peugeot, según el sindicato son 1.000 las suspensiones y otro tanto en Renault, agravado con problemas para conseguir repuestos. Se trata de una afectación de un décimo del personal de las automotrices, por lo que preocupa, especialmente, que no se transformen en despidos.

Se trata en general de suspensiones transitorias que se reiteraran semanalmente y/o mensualmente y que por ahora no se consolidan como cesantías. Hasta ahora, tanto las terminales como el sindicato intentan explicar que se trata de obstáculos a resolver, claro que los trabajadores afectados percibirán ingresos del 70% de sus haberes habituales, reducidos por las menos horas trabajadas, lo que implica menor capacidad de compra de sus ingresos en un momento de incremento de los precios en la canasta de consumo de los trabajadores y su familia.

En otras terminales automotrices podría repetirse la figura de achicamientos de turnos y suspensiones de sus trabajadores, algo que también impacta en el conjunto de la cadena de producción,

ya con despidos y suspensiones en pequeñas o medianas empresas proveedoras de las grandes terminales automotrices.

Hay que señalar que la industria del automotor explicó buena parte del crecimiento de estos años, aún con la corrección metodológica que difunde el INDEC en estas horas.

Mucho se discutió en estos años si era adecuado el privilegio a la producción automotor y si no se debía promover una producción más asociada al transporte público, especialmente el ferrocarril. Más allá del debate de fondo, las suspensiones y/o despidos no aluden a un cambio de paradigma en materia de producción, sino a las dificultades combinadas de la economía local y mundial, con los trabajadores y sus ingresos como variable de ajuste.

Buenos Aires, 10 de mayo de 2014



POLÍTICA SOCIAL COMPENSATORIA

Hacía un año que no se actualizaban los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y esta semana se informó una actualización del 40%. Aun siendo poco representativo para cada receptor del beneficio, de \$460 a \$644 por mes, la suma total afectada aporta en el intento de contrarrestar la caída del consumo y la producción que verifica la desaceleración de la economía en el presente.

El ajuste de ingresos por beneficios sociales supone varias consideraciones. Por un lado significa un reconocimiento de la variación real de los precios de bienes y servicios que consumen los sectores más desprotegidos de la sociedad; y por otro, confirma que los elevados indicadores de crecimiento de la economía en la década no alcanzan para que millones de personas resuelvan su cotidianidad con recursos provenientes del empleo.

La política económica no ha podido resolver cuestiones estructurales asociadas al ingreso popular, por lo que la política social masiva actúa de forma compensatoria, intentando morigerar indicadores sociales de marginación y empobrecimiento que constituyen legados de cambios regresivos en el orden económico y social gestados en las últimas cuatro décadas.

Vale mencionar que la AUH es el programa más extenso de una política social masiva que involucra a casi 4 millones de beneficiarios, a la que se suman otros tres millones de diversos planes sociales, entre ellos nuevos jubilados sin historial de aportes previsio-

nales. La política social alcanza a unos siete millones de personas que reciben transferencias de ingresos provenientes de la ANSES.

El movimiento de trabajadores jubilados cuestiona la distracción de fondos del ANSES para fines que no sean previsionales, sustentando que lo esencial de los recursos de la seguridad social son aportes y contribuciones con ese específico fin. En todo caso, señalan, la insuficiencia de fondos para hacer frente los pagos de jubilaciones y pensiones se asocian a la disminución de aportes patronales gestados en tiempo de Cavallo y Menem y que motivó el reemplazo con recursos tributarios. Este último argumento, la compensación con impuestos para el fondo de la seguridad social es lo que sostiene el gobierno para atender el conjunto de la política social con dinero de la ANSES.

La cuestión parece irresoluble por escases de fondos, sean del tesoro nacional o del fondo de la seguridad social. Las demandas a satisfacer son cuantiosas y más allá del debate sobre índices de pobreza e indigencia, la realidad es que una parte importante de la sociedad tiene problemas de ingresos para resolver las necesidades de la vida cotidiana.

En efecto, si son 7 millones los beneficiarios de la política social con ingresos ajustados pero escasos, y unos 5 millones de jubilados nacionales perciben la mínima, por debajo del 50% de lo necesario para una vida digna; y un tercio de los trabajadores están en situación irregular con ingresos menores a los regularizados con seguridad social; queda claro entonces la deuda del orden económico social con la mayoría de la población.

Con ese cuadro de situación se impone la masividad, no necesariamente universalidad, de una política social compensatoria ante una economía que en la crisis mundial creció a valores superiores. Es una situación que la Argentina comparte con la mayoría de los países de la región, aún con orientaciones políticas diferenciadas. En casi todos los países de Latinoamérica se aplican programas de transferencias de renta sustentados en fuertes ingresos fiscales derivados de la particular situación de suba de los precios internacionales de los productos de exportación.

Uno de los problemas a consignar es que en estudios de la CEPAL y de la OIT para la región se anticipan modificaciones en las condiciones globales del rumbo económico, del comercio y de los precios de las materias primas que pueden afectar la cuestión de

los ingresos fiscales de los países y convocarán a discutir el uso de los recursos públicos. No en vano, sectores hegemónicos presionan para la disminución del gasto público y aunque no siempre se sostenga claramente, el gasto social está en la mira del objetivo para la reducción.

Otro de los problemas proviene de la evolución de los precios, del 1,8% en abril según el INDEC, que se suma al 10% del primer trimestre, y en particular del de la divisa, que esta semana parece haber iniciado un nuevo movimiento alcista luego de la devaluación de enero. Las mínimas correcciones del valor del dólar impactan en varios precios que sufren precisamente los sectores de menores ingresos, que aun antes de percibir los ajustes ya sufren el impacto de la suba en bienes y servicios de consumo cotidiano.

Buenos Aires, 17 de mayo de 2014



LOS SALARIOS Y EL EMPLEO EN LA DISCUSIÓN POR LA APROPIACIÓN DE LA RENTA NACIONAL

Los anuncios gubernamentales en nuevos planes para sostener el empleo y apoyar (subsidiar) a empresas es una señal de los tiempos recesivos que se viven.¹

Se anunció el Plan Proemplear para intentar intervenir en la ocupación del empleo de jóvenes trabajadores. Es una iniciativa asociada a otras recientes como el plan Pro.Crear para retener a los jóvenes en la escolaridad.

También se acudió a relanzar el Repro, Programa de Recuperación Productiva, para contribuir a las empresas en dificultades con el sostenimiento de parte de los salarios. Es un programa que se difundió en la última recesión del 2009 y que ahora se reflota, dando cuenta de un problema económico y social.

Otros anuncios apuntaron a sostener la actividad económica ante la evidente desaceleración y baja de la producción.

La política pública, vía planes sociales, financiamiento o inversión, trata de limitar las restricciones que impone la desaceleración de la economía local en un cuadro de crisis global.

¹ “Hay que seguir apostando al país”, afirmó la presidenta al anunciar medidas para incentivar la actividad económica. Casa Rosada. Presidencia de la Nación Argentina, 07 de Agosto de 2014, en <<http://www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/27791-hay-que-seguir-apostando-al-pais-afirmo-la-presidenta-al-anunciar-medidas-para-incentivar-la-actividad-economica>>, consultada el 9/8/2014.

RECESIÓN Y ARGUMENTOS CRUZADOS

Desde la CEPAL² se corrige el crecimiento de la Argentina para el 2014, desde un 1% proyectado en abril al 0,2%.

Se trata una referencia coherente con los pronósticos a la baja de toda la región, del 2,7% al 2,2% y de la economía mundial, que también reflejan los organismos internacionales.

Es una consecuencia directa de la continuidad de la crisis mundial del capitalismo.

Los datos de la CEPAL son coincidentes con el cuadro de desaceleración económica y recesión productiva que motiva estas políticas públicas para intentar disminuir el ritmo de la caída de la tasa de actividad y del empleo.

En rigor, es lo que ya conocen los trabajadores y muy especialmente en la industria del automotor y otros sectores industriales, los que sufren suspensiones y cesantías, y que ante las manifestaciones de protesta reciben una combinación de represiones físicas y socio laborales en la complicidad de la burocracia sindical tradicional con las patronales transnacionales.

Entre los argumentos que se esgrimen para la represión desde la Secretaría de Seguridad de la Nación, se privilegia en la contradicción de derechos, el referido a la circulación sobre el derecho al trabajo y las mejores condiciones de empleo y de vida.

Mientras, las burocracias reasumen un discurso macartista, patético en el mensaje discriminatorio del titular del SMATA contra las comisiones internas y los delegados de base y la solidaridad del sindicalismo clasista y la izquierda.

Las patronales, caso de la UIA, ejercen el chantaje del potencial aumento de las cesantías exigiendo al gobierno devaluaciones, las que afectan regresivamente el poder de compra del salario, y condiciones de política económica para sustentar inversiones y ganancias.

Resulta un cuadro de situación complejo para la defensa del empleo y el ingreso de los trabajadores. Existen anticipos de movilizaciones e incluso de paro nacional, con diferenciadas convicciones entre las centrales obreras.

² <<http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/5/53405/P53405.xml&txsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&base=/argentina/tpl/top-bottom.xsl>>, consultada el 9/8/2014.

Las centrales más cercanas al oficialismo resignaron sus convocatorias a protestas demandando el aumento del mínimo no imponible en la aplicación del impuesto a las ganancias, privilegiando la cuestión del empleo y la agenda gubernamental en la disputa por la deuda.

La realidad es preocupante y los propios datos publicitados oficialmente a fines del primer trimestre del 2014 señalan la existencia de 1.178.000 desocupados (7,1%) y 1.352.000 sub-ocupados (8,1%), entre los cuales son demandantes de empleo 927.000, y ya perdieron esperanza y por ende son no demandantes de empleo 425.000 personas.

Más del 15% de los trabajadores se encuentran entre desocupados y sub-ocupados.

A ello debemos adicionar que un tercio de los trabajadores se encuentran en situación irregular.

El Ministro de Trabajo adelantó una reducción del 0,3% en el empleo regular para el segundo trimestre del 2014, dando cuenta de uno de los fenómenos estructurales que dejó la ofensiva del capital sobre el trabajo en las últimas décadas.

RENTA NACIONAL EN LA DISCUSIÓN

La bonanza en la generación del empleo desde la crisis del 2001 parece haberse agotado hacia el 2008.

El fuerte retroceso del 2009 no permitió importantes recuperaciones del empleo pese al crecimiento económico del 2010 y 2011, y el bajo crecimiento posterior del PIB y la recesión en curso aleja posibilidades en el corto plazo, lo que anticipa conflictos sociales explícitos y disputas por la apropiación de la renta nacional.

Esa renta está disputada por las empresas que exigen políticas a favor del capital y su rentabilidad, sean los industriales, el sector agrario e incluso los bancos tenedores de bonos de la deuda.

Todos coinciden en apropiarse de la renta vía devaluación cambiaria e incluso buscan formas de intervenir para que no se profundice el conflicto y la situación por la deuda impaga que reclaman bonistas diversos. Por eso las “acciones patrióticas” de los bancos privados de capital nacional y de varios extranjeros con fuertes tenencias de bonos argentinos en sus activos.

Queda claro que los trabajadores intentan frenar el impacto regresivo en su capacidad de compra y defienden el ingreso sin el total apoyo de las organizaciones sindicales, atrapadas en la lógica de la fidelidad a sus intereses asociados a las patronales y/o a los gobiernos. Esa es la razón de un prestigio que crece en el sindicalismo clasista que sustenta un programa anticapitalista y antiimperialista, entre ellos la CTA liderada por Pablo Micheli y un conjunto de cuerpos de delegados. Ambos fenómenos intentan articulaciones diversas en la representación sindical de los trabajadores, especialmente en el sector privado de la economía.

El gobierno también disputa la renta nacional, condicionado por los problemas fiscales y externos. En este plano verifica una tendencia a la merma del superávit por la reducción del saldo comercial y la demora o postergación *sine die* de inversiones externas remisas o préstamos esquivos. Esto es producto de las crecientes dificultades por la situación en EEUU ante la Justicia, los acreedores buitres y el propio gobierno en Washington.

EEUU rechaza la demanda de la Argentina en La Haya y existen múltiples operativos locales y mundiales, especialmente de bancos tenedores de títulos argentinos, para resolver el entuerto de una deuda que requiere ser investigada previa suspensión de pagos. Ante las restricciones económicas suscitadas por la situación de conflicto relativo a la deuda, crece la demanda por una solución autónoma, de desconocimiento de la misma y la búsqueda de solidaridades regionales efectivas que desemboquen en una nueva arquitectura financiera.

Claro que la nueva arquitectura financiera no debiera repetir y reproducir las condiciones estructurales de subordinación a la dominación de las transnacionales, los principales Estados del capitalismo mundial y los organismos rectores del sistema financiero y económico global. Crear condiciones alternativas en ese sentido es parte del desafío para la Argentina y la región en las condiciones actuales de crisis capitalista. El punto inicial de una estrategia en ese sentido se juega en la disputa por la renta nacional que despliegan los trabajadores como expresión de freno a la ofensiva del capital sobre el trabajo.

Buenos Aires, 9 de agosto de 2014

INFLACIÓN, DEUDA Y PROBLEMAS DE EMPLEO Y SALARIOS

Variadas son las tensiones en la economía local; se destaca, entre otras, el alza de los precios en general y las demandas empresarias por la devaluación del peso.

La devaluación supone el aumento de un precio en particular, el del dólar, lo que incide en los ingresos de los grandes productores y exportadores, como en las valorizaciones de los activos en moneda extranjera en manos de la élite del poder económico en el país.

Además, ese precio del dólar y las divisas en general, se incorpora como costo de importaciones diversas y expectativas de aceleración de precios en general en desmedro de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

DEUDA

A esas cuestiones hay que sumar las presiones de los acreedores externos, especialmente desde la demanda judicial en EEUU. Una situación que se reiterará, por lo menos hasta comienzos del 2015, plazo que parece haber establecido el gobierno argentino para negociar y cumplir la sentencia estadounidense y no soportar el potencial costo de la cláusula RUFO.

En ese sentido vale consignar que las novedades son cotidianas, con un juez que no atina a embargar los fondos depositados a fines de junio en la banca de Nueva York, realizados por el gobierno argentino con destino a los bonistas del canje 2005 y 2010. A fines

de septiembre puede repetirse y agravarse la situación por nuevos vencimientos de la deuda negociada.

Las condicionalidades del propio juez neoyorkino se derivan del accionar de terceros, caso del City Bank, que solicitan la Cámara de Apelaciones de la Justicia de Nueva York que se revise el fallo de Griesa y se destrabe una situación que afecta al negocio de la especulación financiera global.

Por su parte, la solución entre privados, los Bancos que ofrecen comprar bonos a los fondos buitres, no avanza. Entre las explicaciones que circulan se aduce falta de acuerdo en el precio de los bonos de la sentencia, aunque también la noticia de una negociación entre bancos y buitres parece una operación de prensa de grandes bancos transnacionales que intentan con sus anuncios frenar la desvalorización de sus tenencias de bonos argentinos. Es que más allá de cualquier debate, esos bonos que figuran en los balances de los grandes bancos son calificados en default para el sistema financiero global.

La novedad política en el país es el inicio de una campaña popular que sostiene la suspensión del pago de la deuda y su investigación, impulsada por un amplio abanico de organizaciones y personalidades que esta semana desplegó mesas de debates en algunas ciudades del país para generar consenso en tratamientos alternativos a la cuestión del endeudamiento y la conflictividad a propósito de los buitres y la justicia de EEUU.

No es menor el impacto en la Argentina del embrollo Griesa. Es importante e incide sobre las certidumbres de rentabilidad que pretenden los inversores en tiempo de crisis y entre otras cuestiones se manifiesta en la discusión sobre el nivel de las tasas de interés que promueve el Banco Central, una cuestión que se presenta como internas entre el Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Economía. Aquel en perspectiva más ortodoxa y por la estabilización macroeconómica y éste más afecto a la recuperación de la economía más allá de la escalada de los precios.

Por eso es que se discute a quién beneficia el alza de tasas luego de la devaluación de enero y ahora a la baja. Es una tensión entre favorecer la especulación financiera entre tasas, bonos y divisas, aun enfriando la economía y generando costo social, o el crecimiento de la producción para morigerar el efecto social de

suspensiones y despidos. Es evidente que no es lo mismo una cosa que otra, pero sea por la rentabilidad financiera o productiva, el eje siempre está en el beneficio del inversor especulativo o productivo y el costo se difunde entre trabajadores y sectores empobrecidos de la sociedad.

PRECIOS, INGRESOS Y EMPLEO

Todas son tensiones en la disputa por la renta nacional, que suponen beneficiarios y perjudicados de una trama compleja de relaciones socioeconómicas.

El problema a consignar es que el costo de estas tensiones recae sobre salarios y empleos, agudizando el deterioro en la calidad de vida de la mayoría de la población.

El marco general de funcionamiento de la economía es de una recesión que parece no terminar en el corto plazo y que se proyecta para todo el 2014, en consonancia con las tendencias verificadas en la región y en el mundo, aunque agravadas en la Argentina. El país aparece en las proyecciones estadísticas provistas por organismos internacionales entre los de más bajo crecimiento económico. Ese deterioro de la capacidad productiva en el país convoca a la disputa para no perder posiciones en la cúpula y a escala de la pirámide del poder económico y por ende, cada quién intenta trasladar el costo hacia sectores de menor poder relativo de una organización de la economía sostenida en la amplia base social por los trabajadores y diversos sectores sociales empobrecidos.

Un dato relevante es que el alza de los precios acumula a Junio un 16,7% según el INDEC y reaparece la discusión sobre el nivel efectivo del crecimiento inflacionario.

No se trata del dibujo grosero de las estadísticas hasta diciembre pasado, pero sí de privilegiar en el registro oficial los precios cuidados que no tienen alcance territorial nacional y disminuyen el promedio de los precios de los bienes de consumo cotidiano. A cuanto llegará la inflación anual es la preocupación del amplio arco social de ingresos fijos.

La desactualización de los ingresos populares, sea por el encarecimiento de los precios, el impacto del impuesto a las ganancias, las suspensiones y despidos motivan acciones diversas.

INICIATIVA POLÍTICA EN JUEGO

El gobierno interviene en el cierre y pedido de quiebre de la estadounidense Donnelley que afecta a 400 trabajadores y a sus familias, y más allá de las acusaciones por “sembrar el terror” pretende contener el conflicto social y responsabilizar a buitres productivos. Es una iniciativa convergente con el impulso legislativo para aprobar instrumentos que condicionen, limiten y repriman las formas de protestas callejeras.

Vale interrogarse sobre las responsabilidades de la política económica y el modelo productivo y de desarrollo que otorga sustento a inversores como los de la gráfica estadounidense u otras empresas que hoy son visibles en el conflicto por el empleo y el ingreso de los trabajadores.

Esa iniciativa política del gobierno intenta recrear una subjetividad entre sectores socio político afines, con un discurso contrario a ciertas características del orden capitalista, escamoteando el reconocimiento que se trata de una tendencia hegemónica de la acumulación capitalista de época.

Claro que esa épica ocurre en simultáneo con una orientación a insertarse más decididamente en el mercado mundial de préstamos y atraer inversiones externas para perpetuar el desarrollo capitalista.

Un desarrollo que está plagado de buitres y no solo en el campo de las finanzas, tal como puede verificarse en la biotecnología, la alimentación o la mega minería a cielo abierto, la producción por ensamble en las automotrices, electrodomésticos o artículos para el hogar y otro sectores de la producción industrial.

Además del gobierno existen iniciativas políticas diversas que intervienen en la disputa por la organización de los trabajadores y el modelo sindical, con vetustas burocracias que sostienen sus posiciones renovadas en años de recuperación económica capitalista y extensión de negociaciones colectivas con beneficio para el sector formalizado del empleo. Son beneficios logrados desde la lucha de los trabajadores y apropiada por burocracias más interesadas en sus intereses corporativos y asociados a la rentabilidad empresarial.

La disputa por la voluntad de lucha y organización de los trabajadores está siendo protagonizada por proyectos políticos expresados en comisiones internas combativas, vinculadas a partidos de

izquierda y a la voluntad creciente de la CTA por insertarse más decididamente entre los trabajadores del sector privado, parte importante de la motivación en la convocatoria al paro de 36 horas desde el 26 de agosto. La misma CGT no quiere quedar afuera y anticipa un próximo paro nacional, que será convergente con el anunciado por la CTA.

El fenómeno de lucha y organización que se difunde en nuestro tiempo remite a experiencias lideradas por un activismo que en algunos casos asocia su accionar con la tradición en la izquierda social y política y en otros expresa la búsqueda por un nuevo modelo sindical, superador del modelo de negociación entre los intereses del trabajo y el capital.

La discusión apunta al límite de las demandas y reivindicaciones, interrogando sobre el alcance de las luchas, que no pueden quedarse en reivindicaciones democráticas por salario y condiciones de empleo y necesitan ampliarse a la discusión del modelo productivo y de desarrollo, en una crítica profunda al orden capitalista y a pensar más allá, en una perspectiva anticapitalista, anti patriarcal, contra la discriminación de patrones, burócratas sindicales y una cultura hegemónica que reproduce un estilo de vida que se satisface en el consumismo derivado de una matriz productiva para resolver cuantiosas ganancias.

Es el desafío para el movimiento obrero en la búsqueda de un lugar en la disputa por la renta y el poder en la Argentina.

Buenos Aires, 16 de agosto de 2014



PRESIONES SOBRE LOS PRECIOS

DEL DÓLAR Y DE LA FUERZA DE TRABAJO

Las noticias económicas en esta semana se asocian por un lado a las demandas sindicales por un bono compensatorio de fin de año o la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias o directamente su eliminación, lo que involucra al paro bancario, las negociaciones de los petroleros patagónicos, la apertura anticipada de las paritarias de los estatales en la provincia de Buenos Aires, demandas de los camioneros y el paro y jornada de movilización de la CTA Autónoma para el próxima 20 de noviembre; y por otro a la disputa por las tenencias de los dólares, o si se quiere, de las divisas en general, explicados con la emisión de nueva deuda pública y un fuerte operativo de diferentes oficinas del gobierno para controlar la especulación en el cambio de moneda.

En efecto, desde el accionar de la AFIP por un lado, y en conjunto del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera, sobre empresas y personas que intervienen en la elusión y evasión impositiva, junto a maniobras especulativas en la negociación de divisas y la fuga de capitales, el efecto concreto ha sido la reducción de la brecha entre la cotización oficial del dólar y otros valores que asume el tipo de cambio para el turismo o las operaciones en la Bolsa y en el dólar ilegal, paralelo o blue. Aunque vale reconocer que se trata de oscilaciones de sube y baja del tipo de cambio, donde la política oficial intenta potenciar la tendencia a la baja. En rigor, más allá del operativo de control, lo que está en el fondo del tema es la relativa mejora en la tenencia de reservas internacionales administradas por el BCRA en torno a

los 28.000 millones de dólares, provenientes de préstamos externos, entre ellos la ejecución de un tramo del acuerdo con China por unos 835 millones de dólares, otras aportaciones del exterior y la emisión de títulos en pesos pagaderos al vencimiento al tipo de cambio oficial. Aludimos a dos operaciones, una primera en septiembre pasado con vencimiento en 2016 y otra de esta semana que vence en 2018. Ambas operaciones captaron unos 1.600 millones de dólares y suponen el ofrecimiento de inversiones que compiten con el dólar; por tratarse de una colocación a mediano plazo, después del cambio de turno presidencial en diciembre del 2015, se especula con futuras correcciones de la cotización del dólar.

Señalamos que la cuestión de fondo en la baja de la cotización está motivada en las acciones de control a la evasión y al comercio ilegal y fuga de capitales por especulación de divisas, pero más precisamente por el ingreso de fondos vía mayor endeudamiento público, que compensan los pagos por cancelaciones de deuda pública. Esto confirma que se agotó la estrategia de des-endeudamiento y que además, la cercanía del fin de año y, con él, la finalización del efecto de la cláusula RUFO, entonces hace falta mantener cierto stock de reservas internacionales para hacer frente a una negociación con los holdouts, no solo los de la sentencia Griesa, sino que se suman otros tenedores que apuestan a repetir la decisión de la justicia estadounidense comprometiendo las cuentas fiscales de la Argentina.

Por eso, el ministro de Economía lleva a la reunión del G20 en Australia la preocupación sobre el conflicto suscitado con buitres y la justicia de EEUU para intentar respuestas globales favorables a la posición argentina, tal como en la ONU, el G77+China o los foros regionales. Claro que en el G20 están los poderosos Estados del capitalismo mundial que no acompañaron en bloque la posición del gobierno argentino en este crucial tema. La discusión de fondo en el cónclave auto asumido para discutir la crisis mundial es el crecimiento, mejor dicho, los límites que encuentra, producto de la prolongación de la crisis mundial que no tiene horizonte de culminación en el corto plazo.

EL PRECIO DE LA FUERZA DE TRABAJO ES MENOS NOTICIA QUE EL PRECIO DEL BLUE

Son muchos los que sacan cuentas en la coyuntura y no solo relativo al precio del dólar. Los datos del INDEC mediante la En-

cuesta Permanente de Hogares para el segundo trimestre del 2014 señalan que la mitad de los trabajadores asalariados gana menos de 4.500 pesos por mes en su ocupación principal. Son datos relevados en un estudio realizado por el área de Economía Política de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. La información da cuenta de un 33,5% de trabajadores asalariados no registrados por sus empleadores, señal de impunidad empresarial, en el mismo sentido que los grandes evasores y responsables de la elusión de impuestos.

Entre los trabajadores no registrados, el 81,2% percibe menos de 4.500 pesos mensuales en su ocupación principal y el promedio de los trabajadores no registrados es de 2.903 pesos al mes y se eleva a 3.745 pesos cuando trabajan a tiempo completo, es decir, más de 35 horas semanales. Del conjunto de trabajadores asalariados registrados el 62,9% ingresa menos de 6.000 pesos mensuales en su ocupación principal; el 42,5% menos de 4.500 pesos al mes también en su ocupación principal.

Son datos oficiales a junio del 2014 y explican el retraso de los ingresos de la mayoría de los trabajadores. Solo un poco más del 10% de los trabajadores son contribuyentes del impuesto a las ganancias, lo que demuestra la importante dispersión salarial en la Argentina. Algunos son afectados por el impuesto a las ganancias y la mayoría sufre bajos y escasos ingresos junto a la inseguridad de un piso difícil de bajar de trabajadores no regularizados por la impunidad patronal, lo que incluye al propio Estado nacional, a los provinciales y municipales.

En definitiva son los datos duros de la realidad. Mientras desde un ángulo se lucha por la sobrevivencia, con bajos ingresos y elevada inseguridad social, la de los trabajadores, la otra cara de la realidad nos devuelve la impunidad empresarial asociada a la especulación financiera, la evasión y la elusión fiscal, el fraude y la especulación.

Son dos aspectos a resolver y que se manifiestan en reclamos diferenciados por la liberación de la cotización de las divisas y por la mejora de los ingresos de los trabajadores, aun cuando las noticias se preocupan más por la cotización de las monedas externas que por los salarios, el precio de la fuerza de trabajo.

La coyuntura se define en la disputa de unos y otros por satisfacer sus demandas, unos para mejorar su capacidad de acumu-

202 | JULIO C. GAMBINA

lación y dominación capitalista y otros, los trabajadores, para resolver condiciones adecuadas de la vida cotidiana para ellos y sus familias, a la sazón, la mayoría de la población argentina.

Buenos Aires, 15 de noviembre de 2014

PARTE IV
ECONOMÍA Y POLÍTICA



INTRODUCCIÓN

Aquí se aborda una diversidad temática relativa a considerar aspectos coyunturales y estructurales de la organización económica de la sociedad argentina, del corto y del largo plazo.

Respecto del pasado se recupera el punto de inflexión con el golpe de Estado en 1976 y su incidencia en el cambio estructural de la economía local, pero también la influencia en el presente ante la consolidación del modelo productivo y de desarrollo que alimenta la extranjerización económica.

Los vínculos con China, nuevo socio en el marco de la diversificación de las relaciones internacionales, aparecen como tema de interés para pensar el presente y el futuro de la inserción global del país.

Para la polémica se incluye la discusión sobre el carácter utópico o no de las consignas por el socialismo o por el capitalismo nacional. Un debate necesario para delimitar el campo de lo posible en la construcción de un imaginario alternativo al hegemónico que devuelve la cotidianeidad.



PRIMEROS ANUNCIOS ECONÓMICOS DEL 2014

Empezó el 2014 con algunas novedades anunciadas por el gobierno en materia de política económica.

Una de ellas remite a un nuevo acuerdo transitorio de precios. Otra a sanciones a las empresas distribuidoras de energía. Finalmente se anunciaron centenares de objetivos y metas para el presente año.

AUMENTOS Y ACUERDOS DE PRECIOS

Sobre los precios, vale registrar que el anuncio solo involucra un conjunto de productos y aplicables a la zona metropolitana. El interior profundo del país deberá esperar mejor ocasión.

La antesala del anuncio se presentó con incrementos del boleto del transporte de pasajeros en el Gran Buenos Aires, del precio de boletos de avión, los aumentos de las naftas y los peajes. Todos en cifras muy por encima de los registros oficiales de evolución de los precios, e incluso de lo que indican fuentes privadas, en general opositoras al gobierno.

Más allá del acuerdo de precios, queda claro que el año comienza con aumentos que inciden en la capacidad de gasto de la mayoría de la población, especialmente los perceptores de ingresos fijos. Es una situación que anticipa importantes debates salariales en cuanto se habiliten las negociaciones colectivas, y entre ellas destaca la paritaria docente con la incertidumbre de todos los comienzos de año relativa al inicio de las clases.

EL ESTADO Y LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS

Respecto de las eléctricas, y aun persistiendo el problema de los cortes de luz y agua para algunos usuarios, el Ministerio de Planificación anunció un conjunto de multas a las empresas y resarcimientos a usuarios afectados, incluyendo sanciones retroactivas a similares episodios de años anteriores.

El anuncio incluye la posibilidad de rescisión de los contratos. Las medidas expresan una clara intención de hacer responsables de los cortes a las empresas.

Lo que se omite es hacer un balance crítico del accionar del ENRE, el ente de control, con escasa capacidad de incidir en la prevención de la crisis.

Pero aún más, se requiere apuntar al conjunto de la política energética, lo que requiere discutir desde la producción a la distribución de la energía. Ello no solo es electricidad, sino también petróleo o gas.

Ese fue precisamente el colofón de la exposición de De Vido, resaltando la potencia del yacimiento Vaca Muerta, especialmente en materia de gas. Aun resolviendo el abastecimiento energético del verano y los picos de demanda, la realidad es que la crisis energética ocupará buena parte de las discusiones del presente año.

OBJETIVOS Y METAS 2014

En cuestión de objetivos y metas resaltan el fuerte crecimiento esperado para la economía, como la consolidación de un importante saldo comercial estimado en 10.124 millones de dólares, con exportaciones por más de 94.000 millones de dólares.

Los anuncios trascienden la economía, pero entre ellos resalta la afirmación de un modelo productivo que tiene epicentro en el extractivismo. En efecto, en materia agrícola se anuncia el objetivo de lograr un incremento del 20% en la producción de trigo con una meta a lograr a 11 millones de toneladas, al mismo tiempo que se sostiene una meta de 115 millones de toneladas para cereales y oleaginosas en la perspectiva del 2015.

Queda clara la continuidad en la soja y sus derivados como producto central del complejo agrícola del país, base esencial de la expansión de las exportaciones. Pero no solo agro en los anuncios,

también la minería se presenta con una expectativa de inversiones externas por 3.800 millones de dólares.

La primarización y el extractivismo aparecen en el primer plano. Los anuncios relativos a política social expresa los límites estructurales de la economía argentina.

Entre otros, se aspira a un desempleo del 6,3% muy lejos de los valores históricos.

En materia de trabajo no registrado se aspira a que sea menor a 32,5%, dando cuenta de las dificultades para regularizar el empleo y terminar con la impunidad empresaria en la contratación irregular de la fuerza de trabajo.

La Asignación Universal por Hijo se incrementará para llegar a 4.501.939 beneficiarios, consolidándose como la principal política social y el mantenimiento del problema estructural de la pobreza.

Todos los anuncios denotan preocupación gubernamental ante las protestas y reclamos del fin de año, sea por la carestía de la canasta de consumo cotidiana o los cortes de electricidad y su impacto en zonas urbanas.

Se pretende incidir en la prevención del conflicto social que tiene eje en la disputa por el ingreso. Insistamos, un tema que aparece en el centro de la agenda de política económica a comienzo del 2014.

Buenos Aires, 4 de enero de 2014



¿ES UTÓPICO LUCHAR CONTRA EL CAPITALISMO?

¡EL CAPITALISMO NACIONAL ES UNA UTOPIA!

¿ES POSIBLE SOSTENER UNA SOCIEDAD ANTICAPITALISTA,
ANTIIMPERIALISTA, SOCIALISTA?

La crisis capitalista es un dato de la realidad, aunque algunos la nieguen. Es parte de un diagnóstico generalizado, a izquierda y derecha, sin embargo algunos se resisten a esa calificación.

Hace pocos días, el economista Pablo Rojo me discutía la existencia de una crisis mundial y calificaba de utópica mi propuesta en pos del socialismo.¹ Era en pleno despliegue de la mega devaluación de fin de enero.

Lo curioso, es que también me calificaba de utópico un periodista de izquierda ante mis comentarios de nacionalización del comercio exterior y la banca realizados en una entrevista radial telefónica antes de la mega devaluación.

No son los únicos, ya que algunos (muchos) amigos que evalúan mis presentaciones públicas me endilgan la imposibilidad de materializar mis propósitos anti capitalistas y que se requieren soluciones para el “mientras tanto”, lógicamente dentro del capitalismo.

UTÓPICOS SON LOS QUE ESPERAN SOLUCIONES PARA LA MAYORÍA DENTRO DEL CAPITALISMO

La realidad es que mientras me califican de utópico, el capitalismo realmente existente continúa su desarrollo, con mayor desigualdad a escala mundial y local.

¹ En el programa de Rolando Graña, *Tercera Posición (3P)*, en A24.

La organización OXFAM presentó en Davos, en el Foro Económico Mundial, un informe que entre otras cuestiones relata como 85 fortunas tienen el equivalente de la riqueza de la mitad de la población mundial, unos 3.500 millones de habitantes.

A su vez, la CEPAL, en su último Panorama Social de América Latina difundido a comienzos de este 2014 da cuenta del estancamiento en la tendencia a la mejora de los indicadores sociales verificados en buena parte de la década 2002/2012, con deterioro de las causas que explicaron el gran crecimiento de la región y su impacto positivo en la disminución de la pobreza.

El asunto es que la crisis, con epicentro en el capitalismo desarrollado, situación normal para calificar de mundial a una crisis, empieza ahora a sentirse entre los países emergentes, forma de llamar a aquellos territorios receptores de inversiones externas en plena crisis de los desarrollados, y lógicamente con ellos, el impacto de la crisis se extiende a todo el resto de países, amplificando el fenómeno de la miseria, la pobreza y la mayor explotación de los trabajadores, de los pueblos y de la naturaleza.

Lo utópico es pensar en un “mientras tanto” (difuso) en el marco del horizonte capitalista.

Juan Carlos Pugliese, el ministro de economía en el ocaso del gobierno de Raúl Alfonsín, confesaría a la sociedad que les habló con el corazón y los empresarios le contestaron con el bolsillo. Se puede pensar que se olvidó del orden social capitalista presidido por la lógica de la ganancia y la valorización del capital.

Ocurre lo mismo cuando las autoridades actuales se sorprenden ante la actitud especulativa de la sociedad ante la posibilidad otorgada por la política económica para ahorrar en divisas, o cuando solicitan a los productores vender sus tenencias acumuladas en silo-bolsas para bien de la situación económica nacional.

Ambas acciones, las compras de dólares o las retenciones de producciones, son parte de una cultura propia del orden capitalista incentivado por la posibilidad ofrecida desde la política gubernamental.

Ahora, desde el agrupamiento Carta Abierta se acusa al poder económico de haber obligado al gobierno a devaluar, siendo que el deliberado accionar político podría haber enfrentado, no de

palabras, sino con acciones la aspiración por la depreciación de la moneda nacional.

La propia Presidenta aludió a la ausencia de una burguesía nacional, sujeto imprescindible para el sueño utópico del capitalismo nacional a que convocó Néstor Kirchner el 25/5/2003.

¡EL CAPITALISMO NACIONAL ES UNA UTOPIÍA!

No existe ese sujeto burgués para un capitalismo nacional en tiempos de transnacionalización de la economía, verificado en la dominación transnacional de la producción y los servicios en el país, aun en una década de críticas discursivas contra el neoliberalismo, los organismos internacionales y el poder económico concentrado.

Históricamente, el peronismo pretendió suplir la ausencia de burguesía nacional con el papel del Estado como sujeto colectivo para definir ese objetivo deseado.

Resulta que el Estado ha sido reformulado en los 80 y 90, siendo la institucionalidad neoliberal, reforma constitucional incluida, con sus tratados internacionales e institutos de libre comercio y defensa de las inversiones extranjeras (TBI, CIADI, etc.), con la legislación favorable a los transgénicos, la reforma al Código Minero, la protección a la producción de las terminales extranjeras de la industria automotriz, la promoción de la industria de armaduría, o la ley de entidades financieras supérstite; junto al cáncer de la especulación financiera y el endeudamiento, lo que explica el carácter estructural de la subordinación y dependencia del capitalismo argentino al orden contemporáneo del capital, más allá de buenas intencionalidades discursivas.

Un mérito del kirchnerismo fue captar a importantes sectores de la sociedad y el movimiento popular para su proyecto político de hacer normal el desarrollo capitalista en la Argentina, es decir, crecimiento económico con consenso social y relativa capacidad compensatoria de satisfacer necesidades insatisfechas y deterioro absoluto y relativo de condiciones de vida entre 1975 y 2001.

La convergencia de demanda social hacia el 2001/2003 con el discurso oficial kirchnerista favoreció la extensión del consenso que empieza a encontrar límites ante las restricciones para continuar la convivencia del desarrollo capitalista “normal” con paliativos sociales de inclusión.

ESTAMOS EN PLENO DESPLIEGUE DEL AJUSTE

El ajuste responde a plena lógica del régimen del capital. No es impuesto por lógica externa, sino por la propia dinámica de la búsqueda de la ganancia, la acumulación y la valorización.

La devaluación desde el 1 a 1 a 1=1,40 y su proyección 1=3 y su evolución hasta el 1=8 constituyen una política de transferencia de ingresos desde la mayoría de la población con ingresos fijos a la minoría en condiciones de fijar precios en el conjunto de la economía. La política de gobierno, sea fiscal o monetaria, de ingresos y precios, más allá de ciertas iniciativas en el intento de frenar aumentos o administrar el precio de la divisa ha sido funcional al modelo de acumulación de ganancias, de riqueza y de poder.

No todos los países sufren el problema de la inflación, no del modo en que se soportan para la mayoría de la población en la Argentina. El asunto es que la inflación, lo dijimos muchas veces, es la forma específica que tiene el poder económico actuante en el país para redistribuir regresivamente el producto social del trabajo en el país. La responsabilidad gubernamental es esencial, por acción u omisión.

Desde el fortísimo impacto social de la situación económica del 2001/2002, se crearon condiciones para desplegar paliativos que nunca retrotrajeron la situación social a otros tiempos del capitalismo local, previos a 1975, el máximo de redistribución progresiva en el marco capitalista. El tiempo de las reformas encontraron un límite hacia el 2007 y por eso la respuesta del capital hegemónico fue la inflación, que contagia incluso a sectores no hegemónicos, que aumentan precios mientras exista mercado que demande sus bienes o servicios. Por esto es que la inflación no solo tiene sus causas en los grandes fijadores de precios, sino que estos tienen capacidad de extender la cultura remarcadora asociada a la demanda de un patrón de consumo que favorece a los monopolios.

El gobierno se jacta de no querer generalizar el ajuste. Sin embargo, la inflación es ajuste. Es algo que sufre la mayoría de trabajadores, regulares o irregulares, precarios o no, tercerizados o no, activos o pasivos, incluso benefactores de subsidios congelados o actualizadas en una desigual carrera contra los precios de bienes y servicios que consume la mayoría de la población.

La realidad es el ajuste mundial que induce el capitalismo en tiempos de crisis, con especificidades nacionales. En Argentina se

pretende disciplinar a los trabajadores que se aprestan a discutir convenciones colectivas, intentando que demanden por debajo de la inflación pasada y en perspectiva, que dicho sea de paso, nadie puede verificar a ciencia cierta ante las incertidumbres de las mediciones del INDEC. Una gran incógnita es el nuevo indicador federal de la evolución de los precios, algo a develar en los próximos días y meses.

No es en las conspiraciones en que se debe indagar sobre los responsables de los problemas económicos de la Argentina, es en el propio capitalismo y su lógica de explotación de fuerza de trabajo (agro y monocultivo, industria de armaduría dependiente de insumos externos) y naturaleza (tierra, agua, minería, hidrocarburos), como en la dependencia del ingreso de inversiones externas (Chevron, por ej.) o préstamos (acuerdo con el BM, búsqueda de acuerdo con el club de París para cancelar deuda ilegítima asumida en tiempos de la dictadura genocida).

LLAMEMOS A LAS COSAS POR SU NOMBRE: EL PROBLEMA ES EL CAPITALISMO

Resulta imprescindible cambiar la lógica de razonamiento sobre la solución de los problemas que afectan a nuestro pueblo. No existe salida dentro del capitalismo. Eso es lo utópico. Hace falta enfrentar el orden capitalista y así como el capitalismo tiene sujeto social que lo hace posible, en la vanguardia las transnacionales, los principales Estados capitalistas y los organismos internacionales, los que generan el sentido común mayoritario para un patrón productivo y de consumo privilegiando el sálvese quien pueda y el individualismo. El anticapitalismo y el socialismo requieren la construcción del sujeto social para el cambio.

Esa construcción de sujeto es el “mientras tanto” entre la denuncia actual al orden capitalista y su gobierno, y la perspectiva para pensar en construir una sociedad alternativa con otro modelo productivo y de desarrollo, bajo el programa de la soberanía alimentaria, energética, financiera en un marco de integración regional no subordinada.

La soberanía alimentaria supone discutir el modelo sojero “transgénico” monoprodutor, bajo el comando de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, de Monsanto, Syngenta, Dreyfus, Bunge y otros similares. Se trata de avanzar desde la

agricultura familiar y de las comunidades en articulación con comunidades barriales de abastecimiento popular, extendiendo ferias contra grandes cadenas comerciales monopólicas, en beneficio de calidad de vida y empleo extendido con participación popular en la definición del patrón de producción y consumo.

Al remitir a la soberanía energética se supone asumir el proyecto “Petroamérica” oportunamente sustentado por Hugo Chávez para articular una política energética común en nuestramérica, lo que significa aunar criterios de impulso al desarrollo tecnológico y científico autónomo, con aporte de las universidades públicas de la región, con asignación de presupuestos suficientes y una convocatoria a definir el modelo productivo y de desarrollo no solo para el país, sino integradamente con la región.

Apuntamos a sustentar la propuesta de una “nueva arquitectura financiera” para la región, con un fondo constituido por las reservas internacionales, las que deben dejar de alimentar las finanzas del capitalismo desarrollado para organizar financiamiento propio con Banco del Sur o del ALBA, con aliento a monedas locales, sea el SUCRE (aceptado en el ALBA y que Venezuela podría proponer al Mercosur), o los acuerdos escasamente desarrollados de intercambio con monedas locales como el suscripto entre Brasil y Argentina.

Todo ello es posible si se denuncian los acuerdos bilaterales, se retira a la Argentina del CIADI, se generaliza una campaña contra el libre comercio redivivo en la Alianza Pacífico o en los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea, si se audita la deuda pública, especialmente ahora la que demanda el Club de París, que en su mayoría es deuda ilegítima, espuria y odiosa, por haber sido asumida por gobiernos no constitucionales.

Cualquier medida que asumamos en este sentido, sea la nacionalización del comercio exterior y la banca, como venimos proponiendo, supone golpear fuerte al desarrollo capitalista e iniciar la construcción de un nuevo orden que me empecino en llamar socialista. No es una utopía la lucha contra el capitalismo y por el socialismo, es una demanda de nuestro tiempo, es el camino por la emancipación social y la defensa de la naturaleza.

Buenos Aires, 9 de febrero de 2014

ARGENTINA BUSCA “NORMALIZAR” SU INSERCIÓN MUNDIAL

Luego de idas y vueltas se confirmó que el Club de París habilita la discusión para cancelar deuda pública impaga por unos 9.000 millones de dólares desde fines de mayo próximo.

Vale recordar que la puntada inicial fue dada a comienzos de año por el Ministro de Economía, que acercó en enero una propuesta de pago en viaje relámpago a París.

El paquete de “negociación” incluye que el FMI revise las cuentas de la Argentina.

Todo indica que se está en caminos de “normalización” de la inserción internacional de la Argentina con el sistema mundial del capitalismo. El Club de París incluye a las principales potencias del capitalismo y a los organismos internacionales.

Lo curioso del caso es que se trata de una deuda mayoritariamente asumida en tiempos de la dictadura genocida y que por lo tanto, bien podría catalogarse de “odiosa”.

Muchos cuestionan la posibilidad de auditar la deuda por las sucesivas renovaciones realizadas en tiempos constitucionales; de hecho, cada turno presidencial desde 1983 renegoció y convalidó deudas. Ocurrió con Alfonsín, Menem, De la Rúa, Kirchner y con Fernández.

Si bien el argumento de la imposibilidad de auditar toda la deuda es discutible, no hay duda que esta parte de las acreencias es

pasible de ser denunciada, claro que si se la investiga con procesos de auditorías contables, incluso de carácter internacional siguiendo el ejemplo del antecedente ecuatoriano.

EL CLUB, REPSOL Y EL CIADI

No existen dudas que el gobierno argentino busca re-establecer lazos de inserción con el mundo capitalista, lo que supone terminar el proceso de cesación de pagos iniciado en diciembre del 2001, para lo que resta culminar el arreglo con el Club de París y con el 7% de los tenedores de títulos que no ingresaron a los canjes de deuda del 2005 y sus reaperturas del 2010 y 2013, algunos de los cuales se procesan en conflictivos juicios en EEUU. Entre ambos conceptos puede alcanzarse un valor de 15.000 millones de dólares.

Pero también Argentina empezó a reconocer los fallos del CIADI sumando nuevas deudas a soportar por las finanzas públicas. Insistimos en que Argentina es el país con mayores demandas ante este ámbito del Banco Mundial, del cual ya se retiraron Bolivia, Ecuador y Venezuela y que Brasil jamás suscribió. Los procesos en curso ante el CIADI constituyen una hipoteca difícil de estimar para las finanzas públicas argentinas.

En ese camino de “normalización” es que se justifica el acuerdo propuesto a Repsol, que esta semana defendió el gobierno ante el Senado, para cancelar la deuda por la expropiación parcial de YPF. El pago será en bonos con valor nominal por 6.000 millones de dólares, con vencimientos sucesivos hasta el año 2033 y que pueden valorizarse y costar al fisco en todo el periodo de circulación unos 11.000 millones de dólares.

Es evidente que esta danza de millones de dólares por deudas viejas o nuevas, odiosas o reales, que bien vendría investigar y auditar, incluso favoreciendo los procesos legales en curso en la justicia de nuestro país, tienen como sentido “normalizar” la inserción de Argentina en el capitalismo mundial.

¿Para qué? La explicación alude a las restricciones externas, o sea, al ingreso de capitales foráneos para el funcionamiento del orden capitalista local, o si se quiere al saldo positivo del ingreso y salida de capitales.

En el 2013 se aceleró la pérdida de divisas, la llamada fuga de capitales, ejemplificada en la caída de más de 12.000 millones

de dólares de reservas internacionales. La fuga no significa necesariamente una situación delictiva, sino opciones de búsqueda de rentabilidad de las inversiones de capital en el exterior. Es lo que argumentó Repsol para explicar la remisión de utilidades al exterior por 13.000 millones de dólares en una década. Fueron fondos relocalizados para inversiones en diversos territorios, especialmente en África.

La fuga de capitales viene de larga data, aceleradas desde el 2011 y que intentó frenarse con la devaluación de enero pasado, algo que cuesta asumir como política deliberada en ámbitos gubernamentales. Un interrogante de la coyuntura remite a si se frenó el drenaje de divisas, si se puede revertir la situación y por lo tanto si se puede considerar estable la paridad cambiaria o requerirá nuevas adecuaciones en el corto o mediano plazo de este mismo año.

Se argumenta que el país necesita ampliar sus inversiones para mejorar la productividad y con ella el ciclo virtuoso de la producción, es decir el consumo y la inversión. Pura lógica de funcionamiento del orden capitalista, que requiere de inversores con disposición a valorizar sus capitales, o sea a producir plusvalor y obtener ganancias como resultados.

El problema son los límites a la inversión, situación clara respecto de la inversión pública, que sostuvo en estos años la tasa general de inversión y hace evidente la escasa disposición a invertir del capital local, algo que se explicita en los discursos oficiales que sugieren con recurrencia a los empresarios que inviertan en la ampliación de la producción local, con escasísimo resultado.

Por todo ello es que la intencionalidad gubernamental pasa por atraer inversores del exterior, en el camino que sugiere la asociación entre YPF y Chevron. Pero también habilitar el camino de obtención de nueva deuda, lo cual requiere terminar con la cesación de pagos como exigencia del sistema financiero mundial.

¿ES POSIBLE TRANSITAR OTRO CAMINO, OTRA POLÍTICA ECONÓMICA?

No se trata de una pregunta retórica. La respuesta dividió aguas políticas en el movimiento popular que resistió las políticas menemistas (1991/1999) y las de la Alianza (1999/2001), y antes la de la dictadura (1976/1983).

Una porción del movimiento popular y del pensamiento crítico de los 70 y los 90 considera que las políticas de la última década (2003/2013) son el límite de lo posible y acreditan como éxito la disminución de los indicadores sociales tales como se manifestaban en la crisis del 2001. Algunos de ellos se animan a suscitar la necesidad de relanzar un imaginario de nueva ronda de reformas que pueda entusiasmar y contribuir a constituir sujetos políticos y sociales que sostengan un proyecto político para la transformación.

El límite que se les presenta a unos y a otros es el propio orden capitalista, bajo políticas ortodoxas o de austeridad, (como en Europa u otros países que en nuestra región sustentan políticas de libre comercio); o neo-desarrollistas, (sea EEUU y su intervencionismo estatal, tanto como países con políticas críticas al neoliberalismo en América Latina). La heterodoxia argentina choca también con el capitalismo real, que exige condiciones para sostener un ciclo de inversiones que asegure rentabilidad adecuada al tiempo histórico de crisis capitalista. Es la alta rentabilidad ofrecida lo que hizo emergentes a China, India o Brasil, ante las bajas rentabilidades ofrecidas en el capitalismo desarrollado, con tasas de interés tendiendo a cero. Se puede escamotear el índice de precios ante cierto punto, tal como ocurrió entre 2007 y 2013, pero no se puede hacer eternamente.

La lógica del mercado capitalista solo acepta un determinado nivel de intervención estatal, especialmente si existe organización y lucha social desplegada en las calles. Por eso, las desmovilizaciones masivas de la sociedad son funcionales a la demanda de “normalización” capitalista, y al mismo tiempo, convoca a sostener la capacidad de movilización, de resistencia y de demanda por mejoras sociales de los sectores más perjudicados en el orden económico.

Podríamos recordar a Hugo Chávez cuando señaló a fines del 2004 que no debían esperarse soluciones para los pueblos del mundo bajo la lógica del orden capitalista, que recordemos, se somete a la lógica de la ganancia y la acumulación. De ahí surge la convocatoria a pensar nuevamente el socialismo en el Siglo XXI. Se legitima así el pensamiento crítico anti capitalista y se habilita a discutir un nuevo orden de relaciones sociales en la economía, retomando la agenda sustentada en el *Manifiesto Comunista* para el Siglo XIX y más fundada en *El Capital*.

Es cierto que ante este debate, muchos acusan a la propuesta de utópica, ante los límites concretos para afirmar y desarrollar el

anticapitalismo como propuesta a construir en la sociedad actual, sea en Venezuela o en cualquier país. Conspiran las experiencias fallidas (URSS y Europa del Este) y aquellas en curso, entre ellas la cubana, que tiene el límite del criminal bloqueo estadounidense y una situación de época mediada por la ofensiva capitalista desplegada desde la crisis de mediados de los 70. La articulación integrada de un bloque socialista está limitado desde la desaparición de la URSS y el bloque soviético, e incluso las articulaciones con pretensión alternativa, el “tercer mundo”, atraviesa por los límites de sus diferentes posiciones en la situación actual, donde el imaginario cambio si se es “emergente” o receptor de inversiones externas, o si se está en situación de extrema vulnerabilidad, como ocurre en la periferia del sur del mundo.

Este es el marco de la discusión en nuestro país, en la región y en el mundo, que puede condenarnos al límite de lo posible o abordar el camino de la crítica de la realidad, por muy dura que esta sea, es decir, la crítica del capitalismo, lo que exige ir más allá y proponer un rumbo alternativo. Es el camino de Cuba y el que esbozan propuestas que aun requieren de mayores contenidos y sobre todo de una densidad social consciente suficiente para disputar sentido común en el movimiento popular y en la sociedad.

¿Por qué quedar prisionero de la inversión externa y reproducir el modelo productivo extractivo para la exportación o el desarrollo fabril de armadura dependiente de insumos externos, también para la inserción exportadora? ¿Puede construirse otro modelo productivo en el agro y en la industria? ¿Es posible modificar el patrón de consumo estimulado por la producción monopolista actual?

Se puede contestar a esos interrogantes por la afirmativa, pero requiere de un profundo debate sobre el diagnóstico de situación de la coyuntura para pensar más allá del capitalismo, límite de lo posible para una parte del activismo social y político. Un activismo contenido en un imaginario de reformas que la transnacionalización apenas permite bajo ciertas circunstancias históricas, aquellas que generó a sociedad argentina movilizadas a fines del ciclo regresivo de los 90.

Cuando me interrogan sobre las medidas concretas acudo a la extensa programática difundida por el movimiento obrero, campesino, de mujeres, en defensa del medio ambiente o la relación metabólica adecuada entre los seres humanos y la naturaleza, o la armonía entre la producción humana con la naturaleza, e in-

cluso sectores de pequeños y medianos productores y empresarios, de cooperativas y el movimiento de autogestión; a los que sumo la demanda por la des-mercantilización de la educación, la salud, la vivienda, la transporte, la energía. Son todas propuestas a asumir socialmente para disputar políticamente el orden capitalista y construir el otro orden posible, el socialismo.

Claro que no es sencillo, pero es lo que muchos nos proponemos ante una realidad que bajo la lógica de lo posible termina promoviendo la concentración y centralización del capital para la valorización y la explotación de la fuerza de trabajo y la naturaleza.

Buenos Aires, 15 de marzo de 2014

A 38 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN ARGENTINA (1976-2014)

Con el golpe se pretendía reordenar la situación política y normalizar el orden capitalista afectado por la organización y movilización, principalmente de los trabajadores, que reclamaban por sus derechos al tiempo que proclamaban una “patria liberada”, afectando la esencia del orden capitalista, la dominación económica de los capitales más concentrados de adentro y de afuera.

Las clases dominantes no podían permitir tanto poder popular y por eso el golpe y las restricciones de huelga, de movilización e incluso de encuentro social. Los principales afectados fueron los trabajadores y sus organizaciones sindicales y políticas y su efecto por cuatro décadas aún se siente.

Entre otros efectos confluyen la des-sindicalización y la despolitización de buena parte de la sociedad, más volcada a satisfacer opciones de consumo que asumir una lógica gregaria de solidaridad, por ejemplo hoy entre docentes y padres, incluso entre trabajadores en general con los maestros.

Pero sin duda, el principal efecto sobre los trabajadores es la baja de salarios, incluso considerando periodos de recuperación de ingresos, nunca se logró, pese a 30 años de gobiernos constitucionales desde 1983, empatar el mayor nivel de distribución de la renta de los años 70 o incluso de los 50.

La situación estructural del empleo mantiene hoy, como nunca a un tercio de los trabajadores en situación irregular, sin segu-

ridad social, afirmando la tendencia a la precariedad laboral, con las nuevas formas asumidas de la contratación laboral, los salarios basuras, la tercerización, el desempleo y subempleo.

En ese marco debe incluirse el deterioro de las jubilaciones y pensiones, aún con la extensión de beneficiarios de estos años. El achatamiento de la pirámide de ingresos previsionales es resultado de una política deliberada asumida desde la dictadura en 1976 y confirmado con la política privatizadora de los aportes jubilatorios en los 90 y la consolidación de una baja en esos años de los aportes patronales.

CAMBIOS EN LAS RELACIONES SOCIALES DE PRODUCCIÓN

El golpe de 1976 reestructuró las relaciones sociales de producción, modificando la relación entre patrones y trabajadores en beneficio de mayores ganancias, acumulación de capitales y afirmación de la dominación y poder de los capitales más concentrados que actúan en la Argentina.

Pero también modificaron la función del Estado, potenciando su papel al servicio del gran capital, con el endeudamiento (que hoy expresan las demandas del Club de París, por ejemplo) y la liberalización de la economía, crudamente expresado en las leyes de inversiones externas y de entidades financieras aún vigentes y que constituyen una asignatura pendiente de los gobiernos constitucionales. La reforma del Estado avanzó en los 90 con las privatizaciones y desregulaciones que la dictadura no pudo materializar, entre otras cuestiones por la resistencia popular, especialmente de los trabajadores.

En materia de cambios estructurales también debe incluirse la reinserción global de la economía y la política de la Argentina en el rumbo liberalizador que empujaban las corporaciones transnacionales, e ideológicamente las principales potencias del capitalismo mundial y los organismos internacionales. Hasta podemos afirmar que la dictadura local y otras en la región anticipaban en el Cono Sur de América como ensayo, lo que luego se generalizaría como “políticas neoliberales” desde Gran Bretaña o EEUU, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

La nueva situación gestada desde marzo de 1976 expresa cambios profundos en la economía, la sociedad y el Estado, que contribuyeron a una mayor concentración y extranjerización de la economía Argentina en todas las ramas de la producción y los servicios.

Un agravante deviene de la consolidación de esos cambios en los años 90, con la tendencia al monocultivo derivado de la expansión de la soja transgénica y la dependencia del paquete tecnológico de transnacionales de la biotecnología y la alimentación; también con la atracción de inversiones externas mineras para la mega-minería a cielo abierto que resalta el carácter primario exportador del país; en el mismo sentido puede destacarse el carácter de armaduría de la industria local, fuertemente dependiente de las importaciones de insumos industriales, incluidos los energéticos, que tanto afectan las cuentas externas de la Argentina.

¿QUÉ RUMBO ASUMIR AL ENFRENTAR ESOS CAMBIOS ESTRUCTURALES?

Un gran debate apunta a si la Argentina debe retrotraer la situación al modelo productivo y de desarrollo capitalista previo al golpe, es decir, al periodo de industrialización sustitutivo operado entre los años 20 y los 70 del Siglo XX, o intentar ir, incluso, más allá del orden capitalista.

En rigor, la mayoría del debate se restringe a discutir una agenda (de cambios) de acciones y políticas posibles en el marco del capitalismo, y nuestra proposición apunta a pensar en modificaciones esenciales a las relaciones sociales de producción, no para volver al pasado, además idealizado, sino para avanzar en una perspectiva anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo.

Esto requiere de un sujeto social amplio que asuma en lucha un programa de transformaciones para des-mercantilizar la vida cotidiana, entre otras cuestiones, la educación, pues no solo se trata de salarios suficientes, tal y como demandan los maestros hoy, sino discutir el para qué, el qué y el cómo del derecho a la educación. No solo acompañamos a los maestros en sus reclamos, sino que proponemos discutir desandar el camino mercantil inducido para la educación, la salud u otros derechos transformados en mercancías o servicios.

¿Por qué no organizar por fuera del mercado algunos derechos de la sociedad? Entre ellos, la educación, la salud, el transporte, la energía, lo que supone confrontar con el poder real y discutir una reorganización económica de la sociedad con el objetivo máximo de satisfacer necesidades y no la subordinación a la lógica de la ganancia, la acumulación y la dominación.

24 de marzo de 2014



ARGENTINA CRECIÓ 3% EN 2013

El INDEC informó sobre la evolución del nivel de actividad durante el 2013, bajo una nueva modalidad de medición de las cuentas nacionales, con precios bases del 2004.

Con la nueva medición, preliminar, la que se ajustará definitivamente en septiembre próximo, la economía de la Argentina creció el 3% durante el 2013.

Las expectativas, según informaciones oficiales previas, eran de una cifra mayor, superior al 4%, y vale recordar que si el crecimiento es superior al 3,22% existen bonos de la deuda pública atados al crecimiento del PBI que pagan intereses anuales del orden de los 3.500 millones de dólares.

El dato a destacar es que los tenedores de esos títulos esperaban cuantiosas ganancias a cobrar en el 2014, que ahora se esfuman. Al mismo tiempo, se liberan fondos para usos alternativos, los que no debieran asignarse arbitrariamente, favoreciendo un debate sobre la utilización de esos recursos, precisamente en un momento en que se debate, entre otras, la actualización de las asignaciones de los trabajadores estatales.

Desde el INDEC se están presentando nuevos indicadores y mediciones, supervisadas y observadas en su metodología por el FMI. Se trata de la medición de los precios minoristas de carácter federal para enero (3,7%) y febrero (3,4%) de este año; y ahora los datos de actividad económica, es decir, el 3% de expansión del PBI, o sea la nueva riqueza generada en un año.

Es aún prematuro relevar la credibilidad de las nuevas informaciones, aunque parecen más asociadas a la realidad percibida desde distintos ángulos. Habrá que analizar la tendencia de la nueva serie que se habilita para medir la inflación y el PBI y en ese proceso validar o discutir el resultado estadístico de la nueva metodología.

¿QUÉ SECTORES CRECEN Y CUÁLES CAEN?

Los datos confirman intuiciones sugeridas desde diversas fuentes, entre las que sobresale una caída del 1,6% en la explotación de minas y canteras y especialmente una baja del 0,3% en la actividad en la industria manufacturera y en contrapartida una expansión del 21% de la intermediación financiera y otros servicios financieros.

No es un tema menor ante el crecimiento de la actividad industrial desde el 2002 y su impacto en el empleo, importante por lo menos hasta el 2007 y con tendencias mucho más leves desde entonces. Una situación agudizada en el 2009, año de recesión global, y que parecía superada con fuerte intervención estatal en los años siguientes.

Ahora debe registrarse el retroceso industrial, más allá de críticas al modelo de armadura y escasa difusión en sectores pequeños y medianos de partes y componentes para ensamble, en el marco de una crisis mundial que ya no solo impacta en los países capitalistas desarrollados.

El agro (10,6%) y la pesca (22,8%) crecen por encima del promedio; también hotelería y restaurantes (4,3%); e incluso la actividad estatal en educación, salud y seguridad social apenas por encima del promedio. En el otro ángulo se destaca un crecimiento por debajo del promedio en electricidad, gas y agua (2,9%); transporte, almacenamiento y comunicaciones (2,7%); la construcción (2,5%); el comercio (1,8%); y otros sectores como el servicio doméstico o los servicios inmobiliarios.

Interesa por lo tanto la coyuntura derivada de la información y la perspectiva del presente año y siguientes, por el impacto en el empleo y lo que supone en el imaginario social el aliento a la actividad financiera por sobre la productiva en el sector industrial.

No se trata de que uno sea mejor que el otro (sector productivo sobre financiero), ya que el uno necesita del otro, pero si interesa

ver las orientaciones de la actividad económica que se deriva de la política económica.

DEVALUACIÓN Y TASAS DE INTERÉS

En este sentido puede argumentarse que la devaluación de enero apunta a la mayor competitividad de la inversión en producción agraria, minera e industrial, claro que a costa de la merma del poder de compra de los trabajadores y sectores sociales de ingresos fijos.

Junto a la devaluación se aumentan las tasas de intereses para estimular imposiciones en moneda local y desestimular la demanda de divisas, lo que en definitiva alienta horizontes especulativos y encarece el crédito para la inversión productiva. Acompañando el estímulo al ahorro en pesos, el Estado nacional acaba de salir a ofertar bonos de la deuda pública en pesos para captar la voluntad de inversión financiera y restringir la oferta monetaria (circulación de dinero) para intentar frenar subas de precios.

El combo en cuestión, devaluación más alza de las tasas de intereses, apunta a consolidar una desaceleración de la economía argentina, en sintonía con lo que ocurre en buena parte del mundo, incluidos aquellos de gran crecimiento en los últimos años, especialmente China y la India, que siguen creciendo más que la economía mundial, pero menos que en la última década.

Un debate interesante es que la política económica organiza beneficiarios y perjudicados, y en una retrospectiva vale interrogarse por ganadores y perdedores de la convertibilidad y de la salida de la convertibilidad, y ahora conviene pensar como procede el reparto derivado de este conjunto de medidas de política económica sobre el conjunto de la sociedad. En este marco es que se anuncian los retiros a los subsidios del gas para el consumo domiciliario y se mantiene para el sector industrial, precisamente inducido por estos datos de baja en la actividad económica del sector manufacturero. Con esto se habilita el debate sobre quienes continúan siendo perceptores de subsidios y cómo se financia la superación de la desaceleración económica. Al mismo tiempo, las discusiones salariales de los docentes, a la que se suman nuevas negociaciones de actualización de salarios para el resto de los trabajadores bajo convención colectiva, definen el marco de perdedores y ganadores.

No alcanza con saber cuánto crece o no el país, el 3% del 2013 por ejemplo, sino que interesa desentrañar la ecuación entre bene-

ficiarios y perjudicados como resultado de las respuestas gubernamentales de política económica, lo que motiva a respuestas sociales de apoyo o crítica para defender o modificar la situación. Es algo que se resuelve en el plano de la lucha política.

28 de marzo de 2014

LA ECONOMÍA ENTRE EL PARO DEL 10/4 Y WASHINGTON

La coyuntura económica se concentra en los debates en torno al paro realizado el pasado jueves 10 de abril y la presencia del Ministro de Economía y la delegación argentina a la reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial en Washington.

Las demandas en uno y otro caso aparecen cruzadas en el plano político y económico con los organismos internacionales, sugiriendo la tradicional política de ajuste, una posición sustentada no solo para la Argentina, sino para el conjunto de la economía mundial, en momentos en que se reconoce la continuidad de la crisis mundial. En las antípodas, la protesta de los trabajadores trascendió a los propios organizadores y convocó a buena parte de los descontentos con el achicamiento de ingresos que supuso la devaluación de enero y el encarecimiento de los precios, antes y después de la modificación del tipo de cambio.

Es evidente que la presión sobre la política económica se presenta en ambas y opuestas direcciones. Por un lado el afianzamiento de la política de ajuste, especialmente asentada en el deterioro de los ingresos populares; o, entre otras cuestiones, en la atención de demandas de actualización y aumento salarial contra la erosión derivada de la inflación y la aplicación del impuesto a las ganancias a los salarios. Destaca en ese marco la reivindicación de jubilados y pensionados por un pago de emergencia que actualice sus haberes y más de fondo la histórica demanda de un ingreso equivalente al 82% móvil con un mínimo equiparable al salario mínimo, vital y

móvil en niveles acorde con satisfacer la canasta familiar del trabajador y su familia.

REUNIÓN EN WASHINGTON

En el cónclave de los organismos financieros se busca el aval para reinsertar a la Argentina en el mercado de crédito mundial. El país está afuera desde la cesación de pagos del 2001, más allá de los pagos regulares incluidas las cancelaciones al FMI y los canjes de deuda del 2005, 2010 y 2013, al que ingresaron el 93% de los acreedores de títulos públicos.

El argumento para mantener a la Argentina fuera del mercado de préstamos es la continuidad del default con ese 7% de tenedores de títulos, algunos de los cuales demandan al país ante la Justicia de Nueva York; pero también el impago al Club de París, que integran los principales países capitalistas, que a su vez son los principales accionistas y los que deciden en el FMI y el Banco Mundial. Recordemos que a fines de mayo está en agenda el inicio de las negociaciones para salir del default con el Club de París.

La ausencia de un acuerdo con estos organismos es un límite que impone el mercado mundial para liberar créditos, aun cuando YPF obtuvo hace pocos días ofertas varias veces superiores a una demanda de fondos por 1.000 millones de dólares. Pese a una tasa elevada, superior al 8%, la posibilidad de ese financiamiento se considera como una prueba de avanzada para que otros sectores privados de la economía local transiten el mismo camino y volver a la senda del endeudamiento público y privado.

Mencionamos lo público y lo privado porque el gobierno, en tanto sector público, suscribió hace poco un acuerdo estratégico con el Banco mundial por 3.000 millones de dólares para el periodo 2014/2016 y porque YPF sigue siendo una empresa privada, aunque de gestión estatal.

La búsqueda de recursos externos incluye préstamos e inversiones externas directas, que junto al sostenimiento del superávit comercial (mayores exportaciones que importaciones) contrarresten la pérdida de divisas de los últimos años.

Recordemos que las reservas bajaron de 52.000 millones de dólares a mediados del 2011 a unos 27.000 millones en la actuali-

dad. La intencionalidad apunta a frenar el drenaje de divisas y en la medida de lo posible recomponer reservas internacionales.

Para que ello sea posible, los inversores y prestamistas externos actúan sobre el FMI y el Banco Mundial para que las autoridades de la Argentina asuman políticas económicas amigables con los inversores.

Ello puede significar que se profundicen los lazos y vínculos con los organismos internacionales, tal como se viene actuando a los efectos de las correcciones en los índices de inflación y medición del crecimiento del PBI, tal como lo sugirió Christine Lagarde al señalar que la colaboración del Fondo con la Argentina fue a solicitud del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y enfatizando que el organismo debe auditar las cuentas nacionales.

LA PRESIÓN DEL PARO

Desde el otro ángulo, la extensión del paro nacional, más allá del análisis que debe continuarse, respecto de las formas, los modos y los beneficiarios de la iniciativa de acción colectiva, requiere que la política económica asuma algunas respuestas inmediatas.

Una de ellas remite a la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, ya que es impensable desde la lógica hegemónica actual pensar en su eliminación, algo que estuvo incluido en varias demandas de las organizaciones que protagonizaron la protesta.

Otras respuestas que emanan del paro son de carácter más general y remiten a los precios y los salarios.

En materia de precios se anunciaron dos medidas en estos días. Una de ellas es la extensión de los precios cuidados de 194 productos a 302, con una actualización promedio del 3,2% en el paquete vigente, y el debut para 108 nuevos productos, que vienen con descuento, aun cuando incluyen el fuerte colchón de los aumentos procesados entre fines del año anterior y comienzos del presente. Otra alude a la quita de los subsidios de agua y gas, lo que significa facturas abultadas para los usuarios residenciales, ya que a las empresas, en aras de la desaceleración económica, se les mantiene el subsidio.

Queda claro que ambas tienen efectos diferenciados e impactan sobre la capacidad de consumo de los sectores de ingresos fijos,

precisamente los más desfavorecidos y en buena parte protagonistas de la protesta social del 10 de abril.

Otras reivindicaciones son de mayor alcance y proponen un debate político en la sociedad, tal como la derogación de la legislación antiterrorista; la cuestión de la seguridad, que involucra la precariedad y tercerización en el empleo, restringiendo seguridad social y previsional. Más para el debate son las consignas de libertad y democracia sindical, que supone discutir el modelo sindical imperante, sobre el que mucho se discutió en estas horas.

Quizá, valga mencionar que el dato más importante que trajo el paro es que aún a favor o en contra, por un tiempo, la agenda de discusión la pusieron los trabajadores.

Buenos Aires, 11 de abril de 2014

LA PRECARIEDAD LABORAL COMO FENÓMENO ESTRUCTURAL

En estos días se cruza la información difundida por la OIT en su Panorama Laboral 2013 para América Latina y el Caribe¹ y la difusión de medidas locales relativas a la precariedad laboral y el empleo doméstico.

La OIT destaca en su informe sobre América Latina y el Caribe que “Los salarios crecen menos que en años anteriores, la informalidad no se reduce, la productividad está creciendo por debajo del promedio mundial, y aumenta la desocupación de los jóvenes en zonas urbanas”. Agrega que en América Latina y el Caribe son unos “14,8 millones de mujeres y hombres que buscan trabajo sin conseguirlo”, cuantificando la dimensión del problema del empleo, a lo cual deben incluirse unas 130 millones de personas que trabajan en condiciones de informalidad. La OIT señala que hace 20 años que difunde el estudio sobre la cuestión laboral en la región y que los mejores registros de la última década parecen agotarse, interrogándose sobre el futuro, que en el marco de la crisis capitalista no augura noticias favorables para los trabajadores.

Son datos coherentes con los oportunamente difundidos por Michel Husson² relativos a información de la OIT para el 2012,

1 <http://www.ilo.org/americas/publicaciones/panorama-laboral/WCMS_232760/lang--es/index.htm>.

2 Michel Husson, “La formación de una clase obrera mundial”, en <<http://www.vientosur.info/spip.php?article8622>>, 6/1/2014.

donde se señala que para un empleo mundial de 3.130 millones de trabajadores, el empleo en los países “avanzados” es de 470 millones de trabajadores, mientras que los empleos asalariados en los países “emergentes” suman 1.110 millones de trabajadores, y otros empleos en estos países alcanzan a 1.550 millones, con lo cual suman 2.660 millones de trabajadores (1.110+1.550), constituyendo la mayoría de los trabajadores del mundo, y entre ellos se destacan los informales. Es evidente que en estos datos pesan China y la India, pero son elocuentes respecto al trabajo en el mundo, especialmente en el empobrecido Sur, donde sobresale en las condiciones del capitalismo contemporáneo el deterioro de los ingresos y las condiciones de trabajo medido en millones de personas.

El documento de la OIT remarca que de cada 10 trabajadores latinoamericanos y caribeños, al menos 3 no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de protección social. Es el cuadro de la precariedad en la región latinoamericana y caribeña. En ese marco de referencias, la OIT concluye que el desaliento y la frustración sin duda contribuyen a que unos 22 millones de jóvenes no estudien ni trabajen, y en general, confirmando la discriminación de género, se concluye que las mujeres siguen estando más afectadas por el desempleo y la informalidad. Es obvio que se trata de conclusiones que superan la dimensión “económica” para proyectarse en el plano de lo social, lo político y cultural.

SITUACIÓN EN ARGENTINA

Los datos locales confirman esas tendencias en la Argentina, por lo que las autoridades locales anunciaron medidas en estos días para intentar reducir la informalidad con metas concretas en los próximos meses.

Según el INDEC, un tercio de los trabajadores en la Argentina están en situación irregular, sin seguridad social, por lo que se han dispuesto un conjunto de medidas para contrarrestar la situación e incentivar la regularización del empleo.

Entre otras cuestiones se sustenta la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas que tienen historia en políticas similares gestadas transitoriamente en los 90 y que desfinanciaron el sistema previsional. Al mismo tiempo, se propone fortalecer la fiscalización y la capacidad de inspección del Estado, junto a la creación de un registro para incluir a las empresas que violen la legislación laboral. La crónica periodística señala que “La Presidenta

aseguró que con esta batería de instrumentos se apuesta a regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitiría reducir la tasa de informalidad de 33,5 a 28 por ciento.”³ En la misma nota se dice que la presidenta enfatizó “que la precarización laboral es uno de los grandes problemas que suelen enfrentar los trabajadores, junto con el desempleo.”

En esa misma línea, a los pocos días de los anuncios se informó sobre la reglamentación del trabajo a domicilio, uno de los ámbitos de mayor informalidad e irregularidad. Se intenta intervenir sobre el ingreso de los trabajadores doméstico y sobre las coberturas por riesgos del trabajo.

Ambas medidas fueron anunciadas mientras resuenan aún las crónicas y análisis del paro nacional del pasado 10 de abril. El interrogante es si con reducción de aportes patronales y renovados anuncios de control estatal se resuelve el tema de la impunidad empresaria que mantiene los elevados niveles de irregularidad en el empleo. Quizá, para terminar con la informalidad, la solución vendrá más por la libertad y democracia sindical que se deriva de la generalización en la designación de delegados sindicales por empresas. Vale recordar que aproximadamente, solo entre un 15 y 20% de las empresas reconocen la existencia de delegados sindicales, lo que favorece la impunidad en la mayoría de las empresas, las que actúan sin los límites que pueden establecer sus trabajadores si estuvieran organizados sindicalmente.

Es correcto que el Estado actúe, pero más que una respuesta económica sobre disminución de aportes patronales, o relativa a funciones burocráticas, de control y supervisión, resulta más adecuada la propia autodeterminación de los trabajadores en el control del empleo. En ese sentido es necesario modificar la legislación sobre la organización sindical y revertir la tendencia regresiva de la relación entre el capital y el trabajo que construyó la ofensiva del capital hace cuatro décadas. Esto último se juega en la construcción del nuevo modelo sindical que se manifiesta en la experiencia de la CTA y variadas comisiones internas. Es parte del camino propio para responder social y políticamente a la ofensiva patronal y construir una contraofensiva popular.

Buenos Aires, 19 de abril de 2014

3 Plan para regularizar el trabajo informal, *Página 12*, 15/4/2014, en <<http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-244160-2014-04-15.html>>.



LA POBREZA EN DISCUSIÓN

La polémica de estas horas remite a la magnitud de la pobreza e indigencia en la Argentina actual, y el debate transita entre la negada información oficial y mediciones alternativas.

Más allá de la cuestión cuantitativa, la discusión es relativa al modelo de desarrollo en crisis en 2001, con la máxima medición de pobreza e indigencia en nuestra historia, y las políticas asumidas posteriormente.

DATOS Y ARGUMENTOS OFICIALES

En rigor, el INDEC discontinuó la publicación relativa a pobreza e indigencia y como consecuencia de la sorpresa para propios y extraños, el debate generado incluyó una explicación técnica en su sitio en internet el 24 de abril señalando que: “se discontinuó la publicación de la serie histórica de la medición de incidencia de pobreza e indigencia por ingresos monetarios que el instituto estadístico venía realizando desde 1993 por contar con severas carencias metodológicas, sumadas al hecho de la discontinuación del IPC-GBA y la imposibilidad de empalme con el nuevo IPC-NU.”¹

Es raro que se aluda a las “carencias metodológicas” que hasta ahora explicaron la “drástica” disminución de los indicadores,

¹ <http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/novedades/gacetilla_24_04_14.pdf>, consultada 25/04/2014.

según argumenta el Jefe de Gabinete. Las cifras de pobreza e indigencia bajaron desde el máximo a comienzos del 2002, pero no a los niveles irrisorios que enuncia el INDEC.

Según el INDEC², para el primer semestre del 2013 existían un 4,7% de personas bajo la línea de pobreza, 2 millones de personas; y la indigencia en 1,4% de la población, un poco menos de 600.000 personas. Para el IPyPP³ los datos son del 36,5% de personas bajo la pobreza, unas 15.400.000 personas, y la indigencia involucra a 5.000.000 de personas, expresando el 12,1% de la población.

Por lo tanto, la pobreza e indigencia es menor a la del 2001/2002 en las dos mediciones. Los registros del IPyPP están sustentados en actualizaciones de una base con datos del INDEC al 2006. Desde entonces el INDEC ha sido poco creíble en su información y las nuevas mediciones depararan nuevos debates sobre los indicadores de pobreza e indigencia.

En cualquier caso, la reducción respecto del grosero dato del 2002 con 56% de la población bajo la pobreza se explica por una política social masiva, para la sobrevivencia, que no saca a la población beneficiaria de la situación de empobrecimiento. Aludimos a los planes sociales, especialmente a la Asignación Universal por Hijo, de \$460 mensuales con cerca de 4 millones de beneficiarios; y a 2 millones de nuevas jubilaciones mínimas otorgadas en estos años, con un ingreso mensual de \$2.752.

Menos creíble aún es el argumento del “empalme” ya que la información escamoteada remite a datos del segundo semestre del 2013, antes de modificar a comienzos del 2014 el índice de Precios al Consumidor según la nueva metodología. No hay necesidad de empalme, y se necesitaba el dato de fines del 2013, así como oportunamente se informó el IPC de diciembre, que tampoco empalma la inflación con el nuevo Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano.

Es muy importante que el INDEC difunda las cifras, ahora enunciadas desde la nueva metodología, y así como la inflación de enero se multiplicó por cuatro respecto de la de diciembre en la medición de precios; el indicador de pobreza e indigencia podría

2 Ver <<http://www.indec.mecon.ar/>>, consultada 25/04/2014.

3 Ver <<http://www.ipypp.org.ar/index.php/50-articulos/357-36-5-de-pobres-y-12-1-de-indigentes-los-numeros-que-el-gobierno-pretende-ocultar>>, consultada 25/04/2014.

presentar una similitud, además agravada por el impacto de la devaluación y su incidencia en la inflación sobre los sectores más empobrecidos.

POBREZA Y PRODUCCIÓN

Decíamos que el tema supera lo cuantitativo y se asocia a cuestiones estructurales del orden económico en la Argentina, al modelo productivo y de desarrollo.

En ese sentido y a modo de ejemplo vale mencionar la aprobación parlamentaria de la compensación por 5.000 millones de dólares a REPSOL.

¿Por qué el vínculo entre los datos de pobreza e YPF? Porque la petrolera privada de gestión estatal sigue siendo la empresa más importante y de mayor facturación en la Argentina, y constituye el eje proveedor de insumos estratégicos para el desarrollo productivo del conjunto de la economía local.

YPF participa activamente en la generación de valor, o si se quiere, de riqueza. Uno de los interrogantes, por lo tanto, remite a la distribución de la riqueza en el país, y queda claro que lo aprobado por el Parlamento supone el destino de cuantiosos recursos públicos, generados por el esfuerzo del trabajo social en el país al capital externo. Esos inversores externos (REPSOL) son un conglomerado de transnacionales que deterioraron las reservas de gas y petróleo, depredaron la naturaleza y fugaron ganancias para sus estratégicos planes de inversión en otras latitudes.

Vale remarcar que en Diputados la medida avanzó con 135 votos afirmativos del partido de gobierno y aliados (Nuevo Encuentro y otros provinciales), con la abstención de 42 legisladores, básicamente del massismo y el macrismo, que no se oponen a lo esencial de indemnizar a REPSOL⁴, con lo que existe una amplia mayoría

4 “Entre el pragmatismo y el cálculo, un voto opositor incómodo” Por Laura Serra, La Nación. “Yo lo hubiese votado a favor”, se sinceró, sin ambigüedades, un encumbrado diputado del Frente Renovador. El diputado de Pro Federico Sturzenegger, miembro informante de la bancada, lo reconoció en el recinto, cuando dijo que el problema de YPF “es un capítulo que debe ser cerrado, porque los costos de dejar este proceso en su situación actual son mayores que los que acarrearía no hacerlo”. Gilberto Alegre, la voz del massismo en este tema en el recinto, coincidió. “Arreglar con Repsol es necesario y conveniente. El que expropia debe pagar. La Argentina debe volver al mundo y arreglar la situación con los acreedores externos”, en <<http://www.lanacion.com.ar/1684634-entre-el-pragmatismo-y-el-calculo-un-voto-opositor-incomodo>>, consultado el 25/04/2014.

favorable a favorecer recursos públicos a cumplir con acreedores e inversores externos. La votación negativa sumó 59 diputados, que incluye opositores que acuerdan la normalización con la petrolera transnacional (caso de la mayoría de UNEN) y sectores de izquierda y centro izquierda con larga prédica contra la política petrolera desde los 90 (Proyecto Sur, UP, FIT).

Los argumentos del gobierno y la oposición sistémica favorecen una reinserción subordinada de la economía local en el sistema capitalista mundial, por ello la autorización reciente al Santander para girar 32 millones de dólares como remesas de utilidades al exterior, y la búsqueda por conseguir capitales externos para introducir en la Argentina.

Los pagos se realizarán con bonos de la deuda pública, con rentabilidad en dólares, a una tasa mayor de la que obtienen otros países vecinos, entre el 7 y el 8,75%. Para el 2015 empezarán a amortizarse los bonos de deudas y los compromisos se extienden hasta el 2033, configurando toda una hipoteca que se suma al cáncer interminable del endeudamiento externo.

Se entregarán a REPSOL tres títulos: a) el Bonar X por 500 millones de dólares, con tasa del 7%, y con vencimiento en 2017; b) el Discount 33 por 1.250 millones de dólares, con tasa al 8,28%, con vencimiento en 2033; c) el Bonar 2024 por 3.250 millones de dólares, con tasa al 8,75%, que vence en 2024. Un tema de interés es que los 5.000 millones de dólares deben ser efectivamente realizados por Repsol; y si esto no ocurre, porque el valor de mercado obtenido fuera menor a 4.670 millones de dólares, el Estado se compromete a entregar bonos adicionales hasta 1.000 millones de dólares.

Es evidente un gran negocio para REPSOL, que afirma la pérdida de soberanía de la Argentina y la consolidación del carácter dependiente de nuestro orden económico y social. Por ello es que se necesita asociar la pobreza a la riqueza, ya que esta existe como consecuencia de aquella y habilita a un debate sobre un “modelo productivo y de desarrollo no dependiente”, donde la riqueza social generada sea distribuida para resolver las insatisfechas necesidades de la población empobrecida de la Argentina.

La Paz, 25 de abril de 2014

A PROPÓSITO DEL 1 DE MAYO

Resulta interesante, a propósito de la celebración del día internacional de los trabajadores, evidenciar algunos datos referidos al empleo y los salarios en la Argentina, que surgen de un estudio de la FISYP.¹

En el trabajo se señala que la información proviene de la EPH-INDEC, la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, con datos para el cuarto trimestre de 2013 y refieren a la situación de los trabajadores asalariados.

Del estudio surge que sólo el 49,4% de los asalariados es a la vez ocupado pleno o a tiempo completo, o sea, que trabaja más de 35 horas semanales y está registrado.

- Que la mitad de los asalariados gana menos de \$4.500 por mes en su ocupación principal.
- Que el 33,5% de los asalariados no está registrado por su empleador, dando cuenta de la permanencia de una situación de impunidad empresarial que persiste en no registrar a sus trabajadores y privarlos de seguridad social.
- Que el 81,2% de los asalariados no registrados gana menos de \$4.500 por mes en su ocupación principal.

¹ Germán Pinazo, Guido Sacca y Arnaldo Ludueña, "Algunos datos sobre el salario y las condiciones de trabajo en la Argentina actual," Área de Economía Política de la Fisyp-Proyecto ATE, en <www.fisyp.org.ar>.

- Que el salario promedio de los trabajadores no registrados es de \$2.903 por mes. El de los no registrados, pero plenos o a tiempo completo, o sea que trabajan más de 35 horas semanales es de \$3.745.
- Que el ingreso medio de la ocupación principal de distintos grupos de trabajadores asalariados es de \$5.050 al mes.

Ese promedio es resultado de:

- Asalariados Plenos \$5.859;
- Varones \$5.738 y mujeres \$4.182;
- Trabajadores Estatales \$6.204;
- Trabajadores Privados \$4.758;
- Trabajadores Registrados \$6.133;
- Trabajadores No Registrados \$2.903;
- Trabajadores Registrados y Plenos \$6.652;
- Trabajadores no registrados y pleno \$3.745.

Son datos promedios que evidencian la precariedad de ingresos de los trabajadores asalariados y la persistencia de la impunidad empresarial que niega seguridad social a un tercio de los trabajadores.

El conjunto de datos oficiales referencia la base material que justifica la demanda de los trabajadores por mejorar el ingreso y las condiciones de empleo en la Argentina.

En otro trabajo de la Fisyp² se destaca la “recuperación del empleo” en la década transcurrida desde 2002, aunque “asentado sobre dos aspectos que se han demostrado constitutivos e imprescindibles para la sostenibilidad del modelo: un nivel de precarización muy elevado y trabajo ‘en negro’ (no regularizado por impunidad empresarial) en niveles inéditos para períodos de bonanza económica”.

El caso del Estado Nacional es interesante, ya que “a junio de 2013 un 15,7% de sus empleados estaba bajo el formato de ‘contra-

2 Julio Gambina, Germán Pinazo, Guido Sacca y Arnaldo Ludueña. Equipo de Investigación ATE-FISYP, “Los ingresos de los trabajadores y el rol del estado, una década después”, FISYP, <www.fisyp.org.ar>.

tados', constituyéndose en uno de los empleadores que apuntala la situación de precariedad laboral."

Sobre el trabajo "no registrado" se sostiene que "aparece como una necesidad del modelo económico vigente", por ser un dato estructural con límites a la baja desde el 2008.

El informe da cuenta de una diferenciada "recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores en la última década", siendo "para el sector privado registrado [...] del 32%" mientras que "los trabajadores no registrados [...] apenas han incrementado su capacidad de compra".

Se señala que "El poder adquisitivo del salario se encuentra, en la actualidad, en niveles comparables con el que tenía un trabajador promedio a fines de la década del 40, lejos del punto máximo de 1974".

El estudio señala a propósito de la política social masiva que "a pesar del alto nivel de empleo existente, los salarios son lo suficientemente bajos como para que se requiera una transferencia importante del Estado para terminar de conformar los ingresos de los sectores populares, incapaces sin esta ayuda de afrontar sus necesidades cotidianas."

Se concluye destacando "deudas" en este periodo "la precarización laboral, el empleo no registrado y el bajo poder adquisitivo del salario", en tanto "necesarios para el sostenimiento de un modelo económico que no ha transformado estructuralmente el tipo de empleo que se crea en la Argentina."

Son estudios que requieren ser discutidos más allá de ideologismo o concepciones propagandísticas sobre el resultado en condiciones de vida de estos años transcurridos luego de la crisis del 2001/02, especialmente para pensar en una estrategia emancipadora desde los trabajadores.

Buenos Aires, mayo de 2014



LA INFLACIÓN CONDICIONA LA POLÍTICA ECONÓMICA

La AFIP difundió un crecimiento de la recaudación del 37,1% para abril del 2014 respecto de hace un año, y del 34,8% relativo al primer cuatrimestre contra el mismo periodo del pasado año.

Más que explicarse en el crecimiento de la economía, la mejora en la recaudación tributaria remite al aumento de precios gestados en torno a la devaluación de enero. El ascenso de los precios sobre fines del 2013 se consolidó y expandió con la devaluación de enero, consolidando un 10% de crecimiento de precios para el primer trimestre y proyectando un índice de inflación alarmante para el conjunto del 2014.

En efecto, confirmando lo comentado, el IVA, principal fuente de recaudación, batió el record y creció un 51,9% sobre la colecta tributaria de hace un año. Por su parte, las retenciones al comercio exterior, por importaciones y exportaciones, con el precio de las divisas luego de la devaluación, crecieron 64,8% sobre abril del 2013.

La suba de la recaudación se asienta en suba de precios locales e internacionales. Con estos datos, desde la política económica, se piensa que puede sostenerse una tendencia de gasto público que intente contrarrestar la desaceleración de la economía para este año.

DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA

Esa desaceleración responde a causas estructurales del funcionamiento de la economía local y mundial.

En el plano local preocupa el costo del crédito en el sector productivo, ya que la política monetaria restrictiva del BCRA luego de la devaluación favoreció el incremento de los plazos fijos vía aumento de las tasas de interés que ofrecen los bancos al público y que el BCRA ofrece a las propias entidades financieras. El resultado es un importante crecimiento del costo del dinero, incluso “usurario” según palabras del Jefe de Gabinete, ya que entre tasas de interés y comisiones y gastos que cobran los bancos, el costo de los préstamos puede alcanzar el 100% y no existe rentabilidad que cubra ese costo financiero.

En el plano mundial la desaceleración de China y Brasil, principales compradores de la Argentina hace mella en las cuentas externas y exacerba el problema de las divisas ante el déficit por importaciones industriales, déficit energético y vencimientos de deuda pública con el exterior. Son elementos de crisis del capitalismo mundial que repercuten sobre las especificidades nacionales de política económica.

EL SALARIO ES LA VARIABLE DE AJUSTE

Vale mencionar que la combinación de tasas y precios elevados no solo afecta la rentabilidad de las empresas, sino que amenaza seriamente la dinámica del empleo y los ingresos de la mayoría de la población.

Las autoridades señalan que el efecto de la desaceleración de la economía sobre el empleo aún no se siente en materia de suspensiones o despidos, pero la contención inducida en las negociaciones colectivas para la recuperación salarial da cuenta que la variable de ajuste en la coyuntura es el salario y con ello se afecta en forma directa la expansión del consumo.

Insistamos en que la recaudación del IVA crece, más por inflación de precios que por volumen de ventas. De hecho existen variados rubros donde la disminución del consumo es un dato de la realidad.

El problema es que el crecimiento del producto ocurre por expansión del consumo, de la inversión o del saldo del comercio exterior, y ninguna de las tres fuentes del crecimiento aparece estimulada.

Una, el consumo, especialmente el popular, aparece restringido por menor capacidad de gasto de los trabajadores y sus familias. Otra, la inversión está contenida, sea por expectativas desfavorables como por el costo abusivo del crédito. Finalmente y por diversas causas se achica el saldo comercial favorable con el exterior.

En definitiva, se reitera un ciclo de achicamiento de la economía local con impacto diferenciado sobre las clases sociales y su capacidad de gasto para satisfacer necesidades.

Llamamos la atención sobre el tema ante el agravamiento de las perspectivas de continuidad de la crisis mundial del capitalismo y las modificaciones en las tendencias globales, que dan cuenta del fin de las ventajas relativas que habría tenido la región latinoamericana en los últimos años. Informes diversos sobre el futuro cercano auguran el retorno de problemas estructurales, especialmente la desigualdad social y de ingresos, que identifica en las antípodas la concentración y la pobreza, dos caras de una misma moneda. Son cuestiones para pensar la coyuntura y más allá, para discutir sobre el orden social y económico en su conjunto en una nueva ecuación de perjudicados y beneficiarios del modelo productivo y de desarrollo en el país, la región y el mundo.

6 de mayo de 2014



ENTRE LA CRISIS CAPITALISTA Y LA CONSTRUCCIÓN DE PODER POPULAR*

Constituye un gran acontecimiento la octava edición del Seminario “Marx Vive” en Bogotá, Colombia, realizado en la sede de la Universidad Nacional de ese país entre el 14 y el 16 de Mayo del 2014. El lema que presidía el encuentro era sobre el “Proceso constituyente y contrarrevolución en Nuestra América”, en lo que traduzco como consideraciones sobre el cambio político nuestro americano en nuestro tiempo y la contraofensiva imperialista para recuperar poder en nuestros territorios.

En mi exposición presenté una hipótesis sobre la lucha de clases contemporánea con la pretensión de continuar en nuestro tiempo a Carlos Marx en su crítica del capitalismo. La premisa de mi hipótesis es que el aporte del teórico revolucionario nacido en Tréveris contribuyó a la sistematización de un ciclo de lucha de clases que se extiende entre 1848, tiempo de constitución de la “clase para sí”, hasta 1989/91, momento de desarticulación de la experiencia socialista en el este de Europa.

Mi propósito en el texto presentado a la discusión pretende aportar a la nueva síntesis del ciclo de lucha de clases que emerge hacia 1989, en el mismo momento del auge de la política e ideas neoliberales. Este ciclo de la lucha de clases aporta como novedad los cambios políticos en Nuestramérica, un territorio que es un laboratorio de ensayos de prácticas sociales, económicas y políticas

* Publicado en *Época*, semanario boliviano.

en la perspectiva de constituir sujeto, programa y fuerza política para la revolución.

Sostengo en la argumentación que la dinámica de lucha y organización popular de fines del Siglo XX e inicios del Siglo XXI generó las condiciones de posibilidad para el “cambio político” en la región. Al mismo tiempo, la iniciativa política de las clases dominantes, locales y externas a nuestros países, habilitan la posibilidad de analizar críticamente estas experiencias, considerar sus límites y proponer formas de superación para consolidar la iniciativa política popular y revolucionaria, contra el colonialismo, el capitalismo y el imperialismo, por el socialismo.

Marx vive, tal como nos convoca a pensar el Seminario en tierra bogotana, si contribuimos a desarrollar la crítica del capitalismo en nuestro tiempo, y si somos capaces de aportar a constituir la síntesis teórica de la revolución en nuestra época.

NUESTRAMÉRICA EN LA LUCHA DE CLASES

La dinámica de análisis que proponemos nos ubica en las cuatro décadas transitadas desde el ensayo neoliberal gestadas con terrorismo de Estado en el Cono Sur; que luego se generalizaría al mundo con la restauración conservadora en los años ochenta de Thatcher y Reagan. El desquite civilizatorio vendría también desde nuestros territorios y no hay duda que las novedades políticas de confrontación al orden neoliberal y capitalista se sustentaron con intervención política de los pueblos en nuestro continente, contra la liberalización de la economía y el intento del ALCA; contra el endeudamiento deliberado de nuestros países y denunciando la militarización de nuestro espacio como forma de extensión del control militar imperialista en todo el mundo.

Los noventa del siglo pasado fueron momentos de emergencia de nuevos sujetos en lucha, con enorme visibilidad de la lucha indígena, originaria y campesina que otorgó carnadura a procesos de emancipación continental, articulando una agenda obrera contra la precariedad, la flexibilización laboral y salarial, el desempleo, la informalidad, la tercerización y la pérdida de derechos de los trabajadores y su familia; con las demandas de mujeres, jóvenes y el conjunto del pueblo sometido a la lógica liberalizadora del capital en tiempos de transnacionalización.

Esa dinámica social, política y cultural en lucha es la que propició novedades de cambio político e institucional como las reformas constitucionales de Venezuela, Bolivia y Ecuador, con la incorporación de nuevas categorías “programa”, como la democracia participativa y comunitaria, el vivir bien o el buen vivir, los derechos de la naturaleza, el carácter plurinacional del gobierno y la sociedad o el carácter plural de la economía y la visualización e institucionalización para el caso boliviano de la economía comunitaria. Son categorías “programa” porque requieren ser llevadas a la práctica del desarrollo cotidiano, son horizonte civilizatorio de nuevo tipo. Es la recuperación de concepciones anteriores re-significadas en nuestro tiempo, con la necesidad de avanzar en procesos anti coloniales, anti patriarcales, contra el racismo y en sentido antiimperialista y anticapitalista por la construcción de una nueva sociedad socialista.

Es que el derrotado socialismo en el imaginario popular, producto de la debacle del este europeo, fue incorporado al debate teórico y político por el proceso bolivariano hacia el 2004/5, en una crítica al socialismo real y una propuesta renovada para construir la sociedad sin explotados. Claro que la propuesta debe ser completada con la práctica revolucionaria, el desafío en nuestros días. Con ese bagaje asistimos a la renovación del modelo económico del socialismo en Cuba, inspirado en la necesidad de adecuar las políticas en la coyuntura para defender los logros de la revolución en materia social y compartir experiencias productivas y de desarrollo integrado con la región en momentos de disputas de proyectos civilizatorios, el de la liberación social o el programa del capital con la liberalización de la economía.

La tesis que sostenemos es que el ciclo de lucha de clases contemporánea encuentra a la ofensiva del capital por un lado, aprovechando la crisis mundial para hacer avanzar sus objetivos de subsunción del trabajo, la naturaleza y la sociedad en el capital; y por el otro a los pueblos de Nuestramérica en una experiencia en proceso, que define el cambio político y que necesita revolucionarse para otorgar viabilidad a una iniciativa política de los pueblos por otro orden social y civilizatorio sin explotación y en armonía con la naturaleza.

Somos conscientes de los límites y dificultades de los procesos en Nuestramérica, de la dinámica asociada y conflictiva en la dialéctica entre movimientos de masas y liderazgos, como entre movi-

mientos sociales y aparato estatal, con los peligros de burocratización de la demanda social y sus consecuencias en la despolitización e desideologización en aras de lo posible. Del mismo modo ocurre cuando desde los gobiernos y asumiendo un rumbo “posible” dentro del orden capitalista se consume una política que no enfrenta la reproducción de la lógica de la ganancia, de la acumulación y dominación capitalista para sobrevivir en un mundo de consolidación de la transnacionalización y la presión de los organismos internacionales y los principales estados del capitalismo imperialista.

Estamos aludiendo a que así como existe una confrontación entre la ofensiva imperialista y el proyecto revolucionario por el socialismo, con el lenguaje que cada proceso determine, sea el Socialismo del Siglo XXI, el Socialismo Comunitario, el Vivir Bien o el Buen Vivir, la realidad es que existe una ilusión intermedia que sostiene el posibilismo de un “capitalismo autónomo, nacional, neo-desarrollista” y que se expresa bajo las categorías inventadas desde el poder para “países emergentes”, que son tales en tanto territorios con gran extensión territorial y población numerosa con potencialidad de ser contratada a bajos salarios.

EL ORDEN CAPITALISTA

Esta dinámica de lucha de clases que describimos se procesa en un momento de crisis integral del capitalismo, con manifestaciones en la economía y en las finanzas, pero también como crisis alimentaria, energética, medio ambiental, para configurar una crisis estructural y del orden civilizatorio que convoca a una confrontación entre dos iniciativas políticas, una para restablecer el orden capitalista con mayor expresión del salvajismo civilizatorio que supone la desigualdad de riqueza acumulada y de pobreza extendida, la otra por un nuevo orden para la sociedad mundial.

Estamos asistiendo a un momento de crisis capitalista en el marco de la ofensiva del capital construida en los últimos 40 años. El ensayo general de esta ofensiva comenzó en 1973 en el Cono Sur de América con regímenes sustentados en el Terrorismo de Estado y se generalizó desde el propio centro imperialista en la década del 80, desde Gran Bretaña y EEUU. La militarización y la especulación financiera son parte de este proceso, que supuso cambios en la relación de explotación, entre los trabajadores y los patrones; una exacerbación de la explotación de la naturaleza; un cambio de la función del Estado favorable a la mercantilización; y una tendencia

del imperialismo a la mundialización del poder y el gobierno, intentando constituir un poder globalizado por encima de las soberanías nacionales.

Nuestro enfoque articula una visión de economía mundial, donde no es posible pensar las realidades nacionales sin el contexto global, pero claro, reconociendo que las especificidades locales intervienen decididamente en las mutaciones del orden mundial. Es lo que nos anima desde Nuestramérica, precisamente donde hace cuarenta años se inició el ensayo mundial del rumbo neoliberal, y no casualmente donde se procesan la más importantes experiencias de cambio político desde los albores del Siglo XXI.

Esta búsqueda nuestra americana anima la agresión imperialista, reflejada en el último tiempo con los golpes en Haití, Honduras y Paraguay; el persistente bloqueo a Cuba y los intentos golpistas como el reciente desde febrero en Venezuela; la extensión de las bases militares y la preocupación por ponerle límite al proceso de cambio en la región.

No se trata de una novedad, pero queremos enfatizar en la renovada agresividad del imperialismo y las clases dominantes locales ante el cambio político en curso en la región. Por ello es que estamos desafiados a profundizar el proceso de cambio y transformarlo en revolución.

LUCHA TEÓRICA Y POLÍTICA

En síntesis, sostenemos que luego de 25 años de la caída del Muro de Berlín existe un nuevo ciclo teórico y político para el despliegue de la lucha de clases, y en que en esos dos ámbitos se define el futuro de la izquierda y la tradición marxista en todo el mundo.

La izquierda debe retomar lo invariante en Carlos Marx: la crítica del capitalismo en cada época, lo que supone profundizar en las novedosas formas que asume la explotación del trabajo humano y la subordinación de la naturaleza y la sociedad a los designios contemporáneos del capital. Se trata de estudiar la subsunción real del trabajo, la sociedad y la naturaleza al capital, en las condiciones actuales del proceso de valorización y acumulación transnacional del capital.

El capitalismo es una relación social en lucha, que merece considerarse históricamente. Carlos Marx se propuso una obra gi-

gantesca, parcialmente realizada, es decir, inconclusa. Su estudio abarcaba seis enfoques de lo mismo. El eje de estudio era el capitalismo, que estudió parcialmente desde el “capital” (obra inacabada), desde el “salario”, desde la “renta”, desde el “Estado”, desde las “relaciones internacionales”, y desde el “mercado mundial”. Con mucha más razón hoy se necesita continuar ese plan de trabajo, especialmente por las nuevas formas de explotación laboral, el papel de los bienes comunes naturales y su extensión en Nuestramérica, como el rumbo de la mundialización y el papel que se le asigna al Estado. Pero ya no solo con enfoque crítico, sino asumiendo nuevas proposiciones que aparecen, tales como las recogidas en el nuevo constitucionalismo regional, casos de Bolivia y Ecuador con el Vivir Bien o el Buen Vivir; o formulaciones programáticas más generales del estilo del Socialismo del Siglo XXI, del Socialismo Comunitario, o la propia renovación del modelo económico cubano para defender lo logrado, enfrentar el bloqueo estadounidense e intentar satisfacer las demandas de la sociedad cubana en la perspectiva del socialismo.

El desafío teórico a que nos convoca la máxima de “Marx Vive” supone abordar los nuevos problemas del capitalismo, la cuestión medio ambiental y ecológica, abordada desde el eco marxismo y el eco socialismo (aunque a algunos no les satisfaga esta denominación), entre otras denominaciones de quienes acuden a la tradición de Marx para pensar los nuevos temas del impacto sobre la naturaleza del modelo productivo y de desarrollo del capitalismo, supone superar el machismo histórico en la izquierda y abordar los temas de la mujer y la igualdad de género, la liberación femenina y social en términos más generales, lo que supone también la cuestión de las minorías sexuales y todo tipo de derechos sociales y al libre uso de los cuerpos. La cuestión juvenil y el derecho al deporte y la recreación, a la participación en la toma de decisiones, que nos lleva al tema de la democracia participativa a todo nivel, que pasa a ser una cuestión crucial.

La cuestión del trabajo sigue siendo esencial, por lo que describir las formas contemporáneas de la explotación, constituyen una necesidad histórica en el proceso de construcción del sujeto popular ampliado por la revolución.

Sustentamos un desafío teórico para fundamentar la revolución socialista en el presente. Fue la tarea asumida en su momento por Marx y sus varios continuadores hasta nuestros días, con

Lenin, Trotsky, Gramsci, Mella, Mariátegui, el Che, entre muchos que contribuyeron y aún lo hacen pensando críticamente nuestro tiempo, caso de Fidel.

El gran desafío es la construcción de sujeto popular consciente por la revolución, con un programa de transformación contra el racismo y el patriarcado, de carácter anticolonialista, anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo; desplegando la construcción de una fuerza social y política para el cambio, organizada en la forma que surja según las especificidades históricas nacionales: partido, frente, movimiento, o instrumento.

En definitiva, nuestra reflexión apunta a destacar la complejidad de la época, donde existen variadas iniciativas políticas y surge el interrogante de quién vence a quién.

Uno de los ejes principales de la disputa es el modelo productivo y de desarrollo, una cuestión que diferencia los procesos de cambio en curso en Nuestramérica y que condiciona el éxito de la revolución antiracista, antipatriarcal, anticolonial, anticapitalista, antiimperialista y socialista. Es el marco del accionar de los organismos internacionales por retrasar el cambio y restablecer el orden capitalista y la hegemonía en el desarrollo de nuestras sociedades.

Sostenemos que la utopía es la que sustenta el imaginario de soluciones en el capitalismo, aún bajo el manto neo desarrollista, y que ese horizonte nos lleva, no solo al “no lugar” sino al destino de los ideólogos del régimen del capital. Lo que pretendemos, si se quiere, es la utopía del socialismo, el horizonte que nos permite caminar, al decir de Eduardo Galeano. Sostenemos que la lucha por el socialismo, propuesta por Mariátegui hace un siglo en Nuestramérica, tiene absoluta validez en nuestro tiempo, siendo la tarea en la etapa para nuestra izquierda y que otorga validez al propósito de la convocatoria “Marx Vive”.

Bogotá, 15 de mayo de 2014



CHINA Y ARGENTINA CON MAYORES VÍNCULOS ECONÓMICOS

La presencia de Xi Jinping en Argentina apunta a consolidar las relaciones económicas que el país viene desarrollando con China y las aspiraciones de esta potencia por avanzar en el control de los recursos naturales en la región latinoamericana y caribeña. En la visita se anunciaron inversiones por 7.000 millones de dólares en energía y transporte ferroviario y naval, junto a un acuerdo financiero de contingencia por 11.000 millones de dólares, que podrán mejorar las reservas internacionales de ambos países, porque en teoría China apoyará a Argentina si lo necesitara, tanto como Argentina lo hará con China si esta lo requiriera, algo improbable por cierto.

Ocurre algo similar cuando la Argentina suscribe Tratados Bilaterales de Inversión con principales países capitalistas y se compromete a defender las inversiones extranjeras en la Argentina, tanto como que el otro país defenderá las inversiones llegadas a ese destino desde nuestro país.

Es cierto que existen empresas argentinas con inversiones en el extranjero, pero la corriente de flujo de inversiones es inversa, con mayor ingreso de capitales de riesgo o de préstamo. En todo caso, las salidas de capitales de la Argentina son por fuga, cancelaciones de intereses y capital por deudas y remesas de utilidades al exterior, tanto como inversiones inmobiliarias o en activos externos, no necesariamente productivos.

Resulta más corriente el flujo de inversiones desde el exterior hacia la Argentina, que desde nuestro país al exterior. La afirmación se ratifica también en la relación bilateral con China.

Los tratados bilaterales en defensa de las inversiones son la salvaguarda que exige todo capital externo para invertir en el país y asegurarse la fuente de valorización y rentabilidad, motor de las inversiones externas.

¿Por qué pensar que será diferente para el caso chino? ¿Acaso existe beneficencia con los inversores del gigante asiático?

El Senado argentino otorgó media sanción a la ley sobre inmunidad de los fondos de Bancos Centrales en Argentina y viceversa. La Cámara de Diputados la transformará en ley en la primera reunión posible, pues se trata de una cuestión de Estado y en el oficialismo y la oposición sistémica existe acuerdo en atraer inversores foráneos al país para asegurar el ciclo de valorización y acumulación.

La aprobación de la legislación de inmunidad a fondos de bancas centrales ocurrió a muy pocos días de la presencia del líder chino en Argentina y anunciando cuantiosos proyectos de inversión en energía y transporte y el acuerdo de contingencia financiera.

PRODUCCIÓN LOCAL O EXTERNA

En paralelo, los trabajadores en conflicto de la ferroviaria ENFER se preguntan por qué no producir locomotoras y vagones en la Argentina.

Del mismo modo, los trabajadores de astilleros se interrogan por la compra de navíos chinos en lugar de producirlos localmente.

Son comentarios inspirados en otros tiempos de diversificada producción fabril local, ahora transformada en sistema de armaduría.

Lo que está en discusión es el modelo productivo y de desarrollo en Argentina y en la región, con China en progreso como socio privilegiado de América Latina y el Caribe en lo comercial y financiero.

Es que China necesita para sostener su acelerado crecimiento económico recursos naturales inexistentes en su territorio.

La modernización de base capitalista de China desde 1978 y su inserción en el sistema mundial, especialmente con el ingreso a la OMC, fue motivo de la gira anterior de los gobernantes chinos por la región en 2004.

En aquella época se fantaseó con resolver el endeudamiento argentino con un aporte desde China por 20.000 millones de dólares que nunca se materializó.

En estas cuatro décadas transcurridas desde el inicio de la estrategia de expansión de relaciones capitalistas al interior de China y de su inserción internacional muchas cosas han cambiado en la economía mundial.

Una es el mayor peso de China en el PIB mundial, equiparando en la coyuntura a EEUU e incluso desplazando a este país del primer lugar del podio. Sin embargo, no debe perderse de vista que el logro se asocia a la recepción de cuantiosas inversiones provenientes del capitalismo desarrollado. Ahora intenta exportar capitales y sale a la conquista de territorios para sus inversiones, exportando su modelo productivo y de desarrollo para valorizar el activo construido en cuatro décadas.

Otra es la crisis mundial desatada entre 2007 y 2008, que orientó a los capitales a la búsqueda de rentabilidad fuera de los países más desarrollados, que desde entonces mantienen una política de tasas de interés con tendencia a cero. Eso motivó la calificación de emergentes a países que se ofrecían como receptores de inversiones con rentabilidad asegurada por los bajos salarios en divisas y enormes recursos naturales. Ahí puede encontrarse el antecedente de los BRICS y su proyecto de avanzar en cierta institucionalización que se manifestó en el anuncio de estos días por replicar organizaciones similares a las organizadas hace 70 años en Bretton Woods.

El intento es conseguir nuevos mercados emergentes y desde los BRICS estimular la presencia de los capitales originarios de sus países en otros nuevos países con pretensión de emergentes. Argentina y otros vecinos asociados en UNASUR buscan ser receptores de inversiones, subordinando su modelo productivo y de desarrollo a la lógica del inversor.

En rigor, solo China mantiene la dinámica de crecimiento superior al promedio mundial, morigerado en el caso de los demás integrantes, especialmente Brasil, en plena crisis con impacto directo sobre la Argentina.

¿QUIÉN MODELA EL MODELO?

Argentina modeló su proyecto económico de país hacia 1880 bajo la dependencia británica y tuvo sus defensores entre las clases dominantes hasta el pacto Roca Runciman en los treinta.

Desde la década del 20, la penetración de los capitales estadounidenses fue desplazando la hegemonía externa británica sobre la Argentina, hasta consolidarse desde entonces hasta nuestros días.

Las privatizaciones de la última década del Siglo XX hicieron visibles el ingreso de capitales europeos, principalmente españoles y algunos provenientes de países vecinos, diversificando la presencia externa en el capitalismo local.

Entre las principales inversiones externas en el país figuran las de EEUU, de España (crecieron mucho en los 90) y de China, estas última con especial expansión en la última década.

La inserción de la Argentina en el capitalismo mundial nació dependiente a fines del Siglo XIX, cuando el capitalismo transitaba su expansión imperialista.

El proyecto en curso mantiene el carácter de inserción subordinada a la inversión externa para el modelo productivo organizado por las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, de la mega minería a cielo abierto, los hidrocarburos no convencionales, y de un modelo fabril de armaduría, condicionado por la hipoteca del cáncer del endeudamiento eterno.

El debate necesario sigue siendo por la independencia, lo que supone definir el modelo productivo y de desarrollo pensando en la satisfacción de las necesidades sociales insatisfechas más que por las necesidades de acumulación del hegemón o candidato a serlo.

Más que emergentes interesa ser independientes y desde allí insertar a la Argentina en la región y en el mundo, en el camino del programa de las soberanías construidas por los pueblos de la región en el último tiempo: alimentaria, energética o financiera.

Es un programa que aparece postergado e influenciado por la ofensiva de las clases dominantes, que pretenden frenar el cambio político presentado en este comienzo del Siglo XXI en Norteamérica.

Fueron los pueblos en luchas los que generaron la condición de posibilidad del cambio político y son ahora los que están desafiados a profundizar el cambio desde la lucha por la modificación de las relaciones sociales de producción.

Una conclusión en boga en toda la región es que si no se avanza en el cambio político y económico, se retrocede.

Mientras en Argentina se generan condiciones para nuevos ciclos de promoción de inversiones capitalistas, emerge nuevamente y desde el conflicto el descontento por cesantías y despidos, la crítica al financiamiento del estado con impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores, y especialmente el rechazo al pago de la deuda que condiciona una política para la satisfacción de amplias necesidades sociales desde otro modelo productivo y de desarrollo.

Esa movilización y organización popular en el país y en la región es la nueva condición de posibilidad para profundizar los cambios, en la política y en el orden económico, para otra sociedad no capitalista, recreando el horizonte por el socialismo.

21/07/2014



LA AGENDA ECONÓMICA DEL FUTURO EN DISCUSIÓN

Las cartas están echadas en la disputa económica, es decir, por los ingresos y la riqueza, y cada cual atiende su juego en el presente y se posiciona a futuro en la perspectiva del recambio del turno presidencial a fines del 2015.

Se discute la política económica de hoy y de mañana, tanto como el orden económico, la producción y la distribución, los beneficiarios y los perjudicados.

Es una cuestión social y política, por lo que actúan movimientos y partidos mediados por la institucionalidad cultural y mediática. Se disputa el sentido común de la sociedad: la hegemonía.

GOBIERNO

El gobierno pretende sortear el momento con varios frentes abiertos en el orden externo y local.

Con los de afuera se privilegia la discusión con la justicia estadounidense y los fondos buitres, lo que le impide cerrar su objetivo de retornar al mercado mundial de crédito y atraer inversiones externas, especialmente dirigidas al sector energético, con déficit estructural e importante superior a los 10.000 millones de dólares anuales y que incide en los desequilibrios macroeconómicos y en la escalada de los precios locales.

En razón de ello se explica parte del debate hacia adentro y en la intención de contener la escalada de precios acude a correcciones a la ley de abastecimiento para verificar precios y la cadena de valor, recogiendo lógicamente la crítica del poder económico local, impune en el establecimiento de los precios que sufren los sectores de ingresos fijos.

Mientras se define la situación externa derivada de la deuda se sostiene una iniciativa política con una prédica crítica al orden imperialista en la disputa del consenso social, acompañando propuestas legislativas que adecuan la agenda a la nueva situación, por lo que se impulsa la ley de pago soberano y las modificaciones a la legislación sobre abastecimiento, inoperante hasta ahora pese a su sanción desde 1974.

EMPRESAS Y PODER ECONÓMICO

Si el gobierno se juega desde ahora y hacia el fin de mandato en 2015 la herencia de una política económica sostenida en tres turnos presidenciales, el poder económico hace visible sus reivindicaciones con la crítica a toda regulación económica y presiona para una inserción plena en la lógica de la liberalización económica mundial, aun profundizando el carácter subordinado de la economía local.

Queda claro en la presión por nuevas y recurrentes depreciaciones de la moneda local y ganar no tanto en competitividad sino en formas de apropiación de una cuota mayor de la renta nacional generada desde el trabajo social en el país.

Por eso se escamotea la comercialización de la cosecha o se presiona al BCRA para liberar divisas a precio oficial para cancelar importaciones para el ensamble de productos fabriles en el país.

El sector financiero, a su manera, vía bancos, bolsas, seguros o intermediación especulativa de activos disputa al alza la cotización de las divisas.

Así, el poder económico agrario, industrial o financiero condiciona con su accionar y demandas al gobierno actual y al futuro emergente de la renovación en el 2015.

El objetivo apunta a consolidar la institucionalidad liberalizadora lograda en tiempos de la dictadura y el menemismo, confirmando la irreversibilidad de un modelo productivo con privilegio

en la soja, la mega minería y la industria de ensamble. Recordemos además que todo ello fue posible con el endeudamiento público y la legislación de entidades financieras y de inversiones externas sobrevivientes de los años de la dictadura genocida.

TRABAJADORES

Los trabajadores también se expresan. El paro general del 27 y 28 de agosto pasado se hizo sentir más allá de la cuantificación que se realice.

Es un hecho político que pone en juego las demandas de amplios sectores afectados por la desaceleración económica y la recesión productiva, expresada en cesantías y suspensiones.

Las reivindicaciones levantadas en el paro fueron varias, con epicentro en el salario y los ingresos populares.

Se sostiene como cuestión de fondo que los ingresos populares no alcanzan para satisfacer las necesidades cotidianas del trabajador y su familia, estimada en el orden de los 10.000 pesos y un salario promedio que apenas ronda los 6.000 pesos mensuales, con un mínimo vital y móvil de 3.600 pesos y que se acercará en los próximos días a 4.860 pesos (35% de actualización) luego de reunido el “Consejo del Salario”, pero que solo expresa una referencia, puesto que son muchos los trabajadores que perciben ingresos inferiores a ese monto, especialmente en los Estados municipales.

Peor es la situación si consideramos a los trabajadores pasivos, con una mayoría en la mínima de 2.757 pesos mensuales y que en septiembre alcanzará los 3.231, monto que apenas cubrirá un tercio de la canasta de bienes y servicios para satisfacer la vida cotidiana.

En ese marco se inscribe la demanda de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que afecta a un millón de trabajadores.

Pero no se trata solamente de ingresos, sino que se discute la recesión y la respuesta patronal de suspensiones y despidos, por lo que la movilización llevó al parlamento la demanda de una legislación que cierre la posibilidad de suspensiones y despidos.

Las ganancias acumuladas en estos años permitirían soportar los efectos de la recesión en curso, claro que eso supone pensar en

un Estado capitalista con disposición a restringir la lógica de la ganancia.

El solo hecho de empujar la demanda de restricción a las ganancias supone pensar en propuestas anti capitalistas, resistidas por las patronales y sus burocracias legislativas, judiciales, en el poder ejecutivo y en los medios de comunicación a su servicio.

La suspensión de la deuda y la auditoría de la misma formaron parte de los reclamos de algunas de las organizaciones movilizadas por el paro, tal el caso de la CTA que lidera la convocatoria a una campaña popular en demanda por una salida alternativa a la cuestión de la deuda pública, que recurrentemente vuelve al debate de la economía y la política en el país.

EL CUADRO GENERAL: RECESIÓN, EMPLEOS Y PRECIOS

La recesión y el incremento de los precios, entre ellos de las divisas, son un dato de la realidad y tiene impacto regresivo en la distribución del ingreso y en el empleo.

En el horizonte cercano no se ven correcciones importantes de política económica que reviertan estructuralmente la situación. En el marco del desarrollo capitalista no alcanza con inversiones públicas ni ampliación del gasto estatal, asuntos que empuja el gobierno en los últimos tiempos, aun con límites por la situación fiscal y financiera.

Por ello, el gobierno sigue en la búsqueda de conseguir capitales externos, vía inversiones o préstamos, algo que aparece difícil ante la conflictividad externa derivada de la sentencia Griesa.

Sin embargo, la presencia por estos días del titular de YPF por Malasia y China para acercar divisas en la explotación de hidrocarburos no convencionales y la visita urgente del Ministro de Economía a Brasil para activar la producción y venta de automotores a ese país (principal comprador) están encaminadas a intentar resolver el cuello de botella del sector externo. Brasil también está preocupado desde que acumula dos trimestres de caída del PIB, o sea, también entró en recesión.

De lo que se trata es de facilitar la ampliación de la producción vía estímulo a inversiones del capital externo, ya que existen límites a la inversión privada de capital local, más interesada in-

cluso en la fuga de capitales que en organizar un ciclo de reproducción ampliada en el país, confirmando la lógica especulativa y dependiente del funcionamiento del capitalismo en la Argentina y el parasitismo de su burguesía local.

No solo existen trabas por falta de inversiones, sino que la disputa por los dólares, entre gobierno y empresarios adiciona complicaciones al ciclo productivo dependiente de las fábricas de ensamble o armaduría.

Para que funcione la industria local hacen falta cuantiosas importaciones de partes e insumos; por eso, mientras no lleguen divisas para abultar reservas, las importaciones para la industria siguen frenadas y los principales fabricantes denuncian deudas con proveedores superiores a los 4.000 millones de dólares por importación de partes.

No está prevista en el corto o mediano plazo una reestructuración industrial que apunte a la producción local vía sustitución de importaciones. Es algo que quedó claro con la importación de materiales ferroviarios cuando existía en el país la capacidad histórica para su producción.

¿QUÉ PRONÓSTICO? ¿QUÉ HACER?

El pronóstico es de continuidad esencial del cuadro depresivo y con crecimiento de precios y afectación a sectores de menores ingresos, agravado con la destrucción de más de 400.000 puestos de trabajo en el primer semestre del 2014 según informó el INDEC.

Todo indica que se acabó el proceso de recuperación de la economía con ampliación del empleo, especialmente desplegado entre 2002 y 2008, duramente afectado en 2009 y que pareció recuperarse entre 2010 y 2012, para congelarse y deteriorarse entre 2013 y 2014.

El problema radica en que el empleo creció de la mano del sector menos dinámico de la economía, con atraso tecnológico, orientado al mercado interno y no expuesto a la competencia internacional. El sector más dinámico, moderno y competitivo internacionalmente viene perdiendo empleo en el último tiempo, es el caso de las automotrices.

No se visualiza una mayor demanda de empleo en el corto plazo, por lo que el efecto sobre el empleo seguirá siendo impor-

tante y las condiciones de funcionamiento del orden capitalista no presentan soluciones para las expectativas de los trabajadores.

Esa es la importancia del programa anticapitalista a sustentar desde los trabajadores, siendo algo que supera las fidelidades políticas en la coyuntura y aparece como desafío para la clase obrera en la actualidad.

Desde el punto de vista económico la ecuación es salario contra ganancia y no parece que la burguesía, especialmente la más concentrada, esté dispuesta a resignar beneficios cuantiosos acumulados en la década.

La única manera de resolver la ecuación proviene de medidas de política económica, entre las cuáles sobresale el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, o su eliminación directa, lo que podría asociarse a una reforma impositiva para gravar al capital financiero y a las grandes fortunas, algo que no aparece en la agenda del gobierno.

También podría profundizarse una línea de acción contra las empresas en crisis, para la recuperación por el Estado y sus trabajadores en un marco de discusión y modificación del modelo productivo y de desarrollo.

En el mismo sentido apuntamos a la nacionalización del comercio exterior o de la banca, imprescindible para frenar la fuga de capitales y la subordinación a la lógica especulativa del capitalismo contemporáneo.

Insistamos en que la resolución de este conjunto de problemas requiere la lucha con el régimen del capital en su etapa imperialista y de transnacionalización creciente.

¿QUÉ PRESIÓN PESARÁ MÁS?

La presión del poder económico para una devaluación es importante. Remito al accionar del sector agrario (especialmente grandes productores y exportadores, particularmente de soja) y también sectores fabriles asociados a la exportación (automotores, electrónica y electrodomésticos).

En el mismo sentido actúa la presión especulativa del sector financiero, lo que se expresa en las negociaciones del dólar ilegal con impacto en el conjunto de otras divisas.

Desde el gobierno se sostenía que no iba a devaluar y las presiones se abrieron paso en enero del 2014.

Ahora se sumó en sentido contrahegemónico la presión de los trabajadores con el paro nacional del 27 y 28 de agosto.

El interrogante es cuál de las presiones pesará más. La agenda en discusión en el gobierno es más cercana a la del poder que a la de los trabajadores, con lo cual puede pensarse que las mini devaluaciones que llevaron al dólar de 8 pesos a 8,42 desde enero a agosto, pueden profundizarse en cuenta gotas, o con una mega devaluación reproduciendo la lógica de inicio de este 2014. El impacto regresivo sobre los trabajadores y sus familias será gigantesco.

Resulta imprescindible acrecentar la iniciativa política de los trabajadores, no solo por evidenciar la agenda de demandas económicas, sino para intervenir en la disputa política de la Argentina.

Buenos Aires, 29 de agosto de 2014



URGENTE CRÉDITO CON CHINA

Argentina apura un primer desembolso de china por 1.000 millones de dólares de un acuerdo por 11.000 millones, base del suscripto *swap* entre ese país y la Argentina.

Con esos recursos se pretenden recomponer reservas internacionales, en torno a los 28.300 millones de dólares y crear mejores condiciones para liberar pagos de importaciones retenidas por la ausencia de divisas, las que se privilegian para el pago de deuda.

Argentina es un pagador riguroso de su deuda, en general, con nueva deuda, pero los intereses deben cancelarse y a fines de septiembre existen nuevos vencimientos de los canjes 2005 y 2010.

El *swap* con China es en yuan, la moneda nacional de China, aunque convertible en varias partes del mundo.

Claro que podrán pagarse importaciones chinas con esos recursos e incluso valorizar reservas al equivalente en dólares.

El dato es la vuelta al endeudamiento argentino. Se acabó el tiempo del des-endeudamiento y por lo tanto, la vuelta al mercado de crédito es una búsqueda en proceso con los pagos al CIADI, la compensación a REPSOL y los acuerdos con el Club de París. Así, el país retoma su política de mayor endeudamiento para agravar su condición estructural de vulnerabilidad y dependencia financiera, ahora con China.

Claro que puede leerse como un crédito sin condicionamientos, distinto de los que usualmente favorece el FMI, pero no significa un camino hacia la independencia, sino un cambio de acreedores, en momentos en que China se constituye en gran financista internacional, propagando iniciativas como la presente con Argentina con cuantiosos países del mundo.

China es un gran actor de la economía mundial, encabezando el *ranking* mundial por su capacidad de generar riqueza, el PIB más importante del mundo, superior a EEUU. Además, por su capacidad de ahorro y liquidez empieza a ser gran prestamista, ya no solo de EEUU y extiende sus vínculos con variados países, ahora con Argentina.

¿Es el comienzo de una nueva relación de dependencia de la Argentina? Ya conocemos los efectos de la asociación subordinada a Inglaterra y luego a EEUU, ahora se trata de asumir el costo de la dependencia comercial, productiva y financiera con China.

Buenos Aires, 8 de septiembre del 2014

LOS LÍMITES DEL MODELO PRODUCTIVO EN ARGENTINA

Los datos del crecimiento argentino desde el 2002 se explican en buena parte por la expansión de la producción sostenida en alza de los precios internacionales de los productos primarios de exportación y el efecto de la modernización derivada de las inversiones externas de años anteriores en los sectores más dinámicos del sector industrial, especialmente el extranjerizado sector automotriz. Es un rumbo que define la dependencia de la Argentina al orden capitalista en tiempos de transnacionalización.

Ahora existe la preocupación de la desaceleración productiva y la ausencia de divisas para sostener una diversidad de problemas económicos y se generan propuestas de política económica que profundizan el rumbo de la dependencia de un modelo productivo de inserción transnacionalizada que alimenta un patrón consumista para el desarrollo.

Los precios internacionales ya no presentan la tendencia ascendente de los últimos años y en el blog del FMI sobre temas económicos de América Latina se sostiene que “Luego de una década de crecimiento excepcional, los precios de los commodities tocaron techo a mediados de 2011. Aunque siguen elevados, los precios han caído algo y esto le puede quitar brillo a las perspectivas económicas de América Latina.”¹

1 Bertrand Gruss, “América Latina: Creciendo sin la locomotora de los commodities”, en <<http://blog-dialogoafondo.org/?p=3991>>.

En el citado artículo y para la Argentina se destacan precios a futuro entre 2014 y 2019 más parecidos a los expresados entre 1970 y 2001 que a los del 2002 a 2011. En ese marco se destaca la retención de la producción en los campos y silobolsas a la espera de nuevas devaluaciones que compensen la caída de precios de venta. Es un debate sobre el carácter privado o social del producto agrario, entre los que los mantienen con fines especulativos y el Estado necesitado del ingreso de divisas. Un debate adicional es el uso estatal de las divisas, disputadas por los acreedores de deuda, los importadores y la sociedad con diversidad de demandas socio económicas.

La desaceleración golpea en el sector industrial, especialmente en la industria del automotor, con quienes el gobierno negocia liberar divisas para importar partes y facilitar la producción y comercialización de automotores ante la caída del consumo y la afectación del empleo. Las automotrices denuncian deudas millonarias por importaciones de unidades terminadas, insumos y partes componentes que explicitan el carácter dependiente y subordinado del sector automotriz a la dinámica transnacional impuesta por las terminales del automotor. Para la Argentina y según un artículo del diario *Página 12*² “El año pasado las terminales registraron un rojo comercial de 4 mil millones de dólares, se acumulan 33 mil millones desde 2003.” En ese contexto desde el oficialismo se impulsa el consumo individual del transporte automotor.

No solo las automotrices mantienen ese perfil subordinado de la industria local, más orientada a la armadura con dependencia de insumos y partes que a la fabricación de los tiempos de la industrialización con sustitución de importaciones. El componente nacional de los autos armados en el país apenas alcanza el 25%, menor a lo que registra el sector automotor del Brasil. La burguesía local más que “nacional” confirma su carácter de burguesía importadora, compradora, dependiente y subordinada a la lógica de la transnacionalización de la economía, con lo cual resulta imposible asignarle ninguna posibilidad de articular un proyecto nacional y menos liderarlo con perspectiva para la emancipación. Eso impone la discusión sobre el modelo productivo en curso, la necesidad de su transformación y especialmente sobre los sujetos económicos y políticos para liderar un proceso de producción primario e industrial para la independencia y la satisfacción soberana de las necesidades populares.

2 Javier Lewkowicz, “Medidas diseñadas para calentar los motores”, en <<http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-255248-2014-09-13.html>>.

POLÍTICA ECONÓMICA EN DEBATE

En esas condiciones se transita la disputa por la orientación de la política económica. La burguesía empuja la devaluación y variadas formas de subsidios para mejorar la rentabilidad de las empresas. En ese sentido apuntan las flexibilizaciones al encaje bancario logradas por la banca para favorecer la venta con tarjetas en 12 cuotas sin intereses y sostener el alicaído consumo. Por su parte, los trabajadores, desde el conflicto social, intentan morigerar el impacto regresivo de las condiciones de desaceleración y recesión agravadas por una evolución de los precios que oscila entre el 30 y el 40%, según sea la proyección oficial o de otras mediciones de precios. Vale considerar que no alcanza con luchas defensivas sobre reivindicaciones democráticas, especialmente el ingreso popular, y se requiere constituirse como sujeto en lucha por un programa de transformaciones que alejen al país de la dependencia, y por ello, programa anti capitalista y antiimperialista.

La aprobación de un nuevo canje de deuda bajo la denominación de “pago soberano” de la nueva ley sostenida con el voto oficialista y legisladores de cercanía habilita un compás de espera en la discusión con los bonistas no ingresados a los canjes 2005 y 2010, con capítulos próximos a fines de septiembre ante un nuevo vencimiento por 200 millones de dólares; la expectativa por la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York ante la restricción sobre los 539 millones de dólares depositados en junio en el Banco Mellon de Nueva York; y los avatares hasta fin de año y el vencimiento de la cláusula RUFO. La oposición sistémica delegó el costo potencial de la ley de nueva renegociación en el oficialismo, más dispuesta a facilitar el pago y la reinserción en el mercado financiero mundial, por lo que la crítica fue contenida en el seno del parlamento y no se manifestó en movilizaciones, algo a lo que recurre el movimiento popular bajo la consigna “suspensión de pagos e investigación de la deuda”. En ese ámbito no satisface la conformación de la comisión bicameral investigadora de la deuda con 180 días de plazo para pronunciarse, pues además de las consideraciones del límite temporal para investigar, la efectividad de la medida supone la participación social más allá del parlamento y la suspensión de pagos por la totalidad de la deuda y liberar recursos para fines alternativos.

En la nueva legislación se mantiene la prórroga de jurisdicción, ahora con Francia, como si los países capitalistas desarrolla-

dos de Europa garantizaran la soberanía negada en otros tribunales extra-nacionales. En el mismo sentido, más allá de las buenas intenciones de cambios en la esfera mundial, poco se puede esperar de la ONU en materia de soberanía por la cuestión de la deuda, especialmente ante la hegemonía del capital expresado en los organismos internacionales.

No se trata de proponer inmovilidad de política exterior, sino de precisar los ámbitos de iniciativa para un cambio de la correlación de fuerzas a escala mundial y para generar nuevas relaciones internacionales, más proclives en el orden regional y con agenda precisa, especialmente en materia financiera y productiva. Ello supone avances en la conformación de un Banco del Sur para una producción alternativa en alimentos y energía, dos sectores importantes de las condiciones productivas en América Latina. No se trata de ser pesimistas sobre el accionar de la institucionalidad mundial, sino de los límites que el poder del capital impone, más proclive a impulsar mecanismos de liberalización de la economía que un orden global favorable a los más vulnerables y necesitados.

El cambio del orden mundial requiere de proyectos que apunten a la ruptura de la dominación capitalista en el ámbito local-nacional y local-regional. Por eso es que fracasa todo intento de nueva arquitectura del poder financiero o económico y convoca a iniciativas sociales y política de confrontación con el orden establecido, que en materia de deuda pública sigue remitiendo a una renovada consigna por el No Pago. Está claro que no alcanza con no pagar, por eso es que se necesita superar los límites del modelo productivo que impone el capital transnacional.

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2014.

TERRORISMO ECONÓMICO MUNDIAL

Un fuerte discurso de la Presidente de la Argentina en la Asamblea de la ONU en Nueva York denunciando el terrorismo económico y la responsabilidad de la Justicia de EEUU en la impunidad de fondos especulativos constituye el dato relevante por estos días.¹

Aun cuando remitía a la situación de la Argentina y la sentencia del Juez Griesa condenando al país a cancelar el 100% de la deuda más intereses y multas a fondos de inversión estadounidenses denominados “fondos buitres”, el mensaje puede hacerse extensivo al conjunto de las operaciones “normales” de un sistema financiero mundial sustentado en la valorización especulativa y el delito asociado a la compra venta de armas, la trata de personas o drogas, solo por mencionar los hechos más difundidos de la valorización capitalista contemporánea.

ANTECEDENTES

No tiene que sorprender la caracterización realizada cuando la reestructuración regresiva del capitalismo argentino tiene su antecedente en la dictadura genocida y terrorista del 1976, inspirada en

¹ “Son terroristas los que desestabilizan la economía de un país”, aseguró la presidenta ante la asamblea de las Naciones Unidas. Presidencia de la Nación Argentina, 24 de Septiembre de 2014, en <<http://www.presidencia.gob.ar/informacion/actividad-oficial/27958-son-terroristas-los-que-desestabilizan-la-economia-de-un-pais-aseguro-la-presidenta-ante-la-asamblea-de-las-naciones-unidas->>.

las similares de Chile y Uruguay de 1973. Sin la violencia terrorista del Estado capitalista no hubiera existido la condición de posibilidad de las privatizaciones realizadas y consolidadas en tiempos constitucionales en la Argentina.

La institucionalidad regresiva del orden neoliberal mundial tiene origen en la violencia estatal de la articulación de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de la democracia realmente existente asociada al orden capitalista. Por eso no debe sorprender la política de agresión imperialista contra cualquier país cuyas acciones parezcan limitar el interés de las potencias hegemónicas, en nuestros territorios, en oriente o donde sea.

El terrorismo de Estado favoreció el surgimiento de las políticas neoliberales, hegemónicas luego de cuatro décadas de violación a los derechos humanos en todo el mundo.

LIBERALIZACIÓN O LIBERACIÓN

La crisis mundial convoca a discutir el orden capitalista. De hecho, la sociedad mundial está sometida a la presión por la liberalización o la liberación.

Ese programa por la liberalización está sustentado por los capitales hegemónicos, las corporaciones transnacionales, con la legitimidad de la justicia de los países dominantes y aquella asociada a los organismos internacionales como el CIADI, (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) dependiente del Banco Mundial.

Por su parte, la liberación es un proceso en curso, especialmente en los territorios, “nuestro-americanos”, con historia muy rica en luchas sociales, políticas y culturales, que en estos años del nuevo siglo se asociaron a la discusión por una nueva arquitectura financiera, que podría materializarse en la coyuntura, más allá de las fuertes denuncias internacionales y las solidaridades múltiples que recibe la Argentina, con medidas unilaterales como la suspensión de pagos de la deuda, y no solo la referida a los fondos buitres.

MEDIDAS CONCRETAS

El nuevo orden mundial contra el terrorismo económico requiere de variadas batallas, entre ellas la modificación de la institucionalidad gestada bajo el terrorismo de Estado, lo que supone denunciar

los tratados bilaterales de inversión y el conjunto de la institucionalidad favorable a la liberalización, como la pertenencia de la Argentina al CIADI.

Junto a ello, se requiere la profundización de la institucionalidad alternativa sugerida en la integración no subordinada que alienta el programa de la soberanía alimentaria contra la dominación de las transnacionales de la alimentación y la biogenética; la soberanía sobre los bienes comunes contra las transnacionales mineras y de hidrocarburos; la soberanía financiera para administrar fondos soberanos y evitar su acumulación en los centros financieros del capitalismo global para el armamentismo y el delito en general.

Es una batalla que Argentina no puede llevar adelante en soledad. Las solidaridades receptadas en estos tiempos indican que existe espacio político, diplomático y social en la región y el mundo para renovar un proyecto de liberación contra la liberalización sostenida desde los sujetos de la dominación, los capitales transaccionales, los principales Estados del capitalismo mundial y los organismos internacionales.

El mundo capitalista en crisis demanda de iniciativas políticas de reorganización de las relaciones socio-económicas globales, que pueden emerger del renovado conflicto que suscita el endeudamiento público y especialmente el conflicto de la Argentina con los especuladores y la Justicia y el orden prevalente en EEUU.

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2014



REFORMA A LA LEY DE HIDROCARBUROS

El Senado de la Nación Argentina acaba de dar media sanción a la modificación a la ley de hidrocarburos que regía desde los años 60. En pocos días más, la Cámara de Diputados podrá transformarla en Ley.

Se trata de una legislación que generó mucha discusión entre el Poder Ejecutivo Nacional y las gobernaciones de las provincias productoras de petróleo, todo a través de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, la OFEPhi, que incluye a Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Se discutía la apropiación de la renta petrolera, especialmente por las expectativas que genera la explotación de hidrocarburos no convencionales en la Argentina.

Recordemos que la privatización de YPF a comienzos de los 90 fue facilitada con la transferencia de la soberanía de la riqueza a los territorios provinciales, algo que dificulta cualquier decisión nacional relativa a la soberanía energética, la que debe pasar, necesariamente, por las discusiones en los Estados provinciales. Ante la posibilidad del desembarco de inversores externos para explotar los yacimientos de hidrocarburos no convencionales, las provincias hacen cuentas para disputar una parte de la renta a la que también aspira la Nación.

El marco de la discusión es la insuficiencia energética del país, lo que supone importantes importaciones de gas y petróleo que rondan los 12.000 millones de dólares por año, con un déficit cer-

cano a los 7.000 millones de dólares. Es un tema de preocupación cuando la política económica cuida el stock de divisas amenazado por la fuga de capitales, la ausencia de préstamos internacionales, las limitaciones al ingreso de inversiones externas y la preocupante tendencia al achicamiento del superávit comercial. Las fuentes de ingresos de divisas están angostadas y las reservas mantienen una tendencia a la baja, por lo que el gasto energético se constituye en un límite serio para cualquier política económica y especialmente si se pretende ampliar la producción.

Como decimos, las expectativas están colocadas en los hidrocarburos no convencionales, sobre la base de que las reservas en el país son cuantiosas, estimándose a la Argentina como el segundo reservorio mundial en *shale-gas* y el cuarto en *shale-oil*. Hacer realidad las expectativas supone inversiones cuantiosas, las que empezaron a llegar con el acuerdo entre Chevron e YPF de gestión estatal y las señales provenientes del mundo de las petroleras y variadas visitas a las cuencas de hidrocarburos, y entre otras, las manifestaciones de interés de las recientes visitas de autoridades chinas y rusas.

Para asegurar más inversiones externas se modifica la ley, ya que la anterior no incluía esta especificidad *shale*, no convencional, y no existían suficientes garantías a los inversores externos. Desde la privatización de la energía en los 90, la orientación es a la mercantilización energética, algo que choca con una concepción de derecho a la energía que se discute en estas horas en Mar del Plata en un encuentro de trabajadores de la energía de varios países de la región y Europa. Mencionamos la contradicción porque el eje del debate entre una opción, la de mercado, y la otra, por la desmercantilización, supone una discusión del para qué la energía.

En definitiva, se discute el modelo productivo y de desarrollo, el uso productivo de la energía para consolidar un tipo de producción agraria orientada al monocultivo y depredadora de recursos gasíferos y petroleros, o el caso de la mega-minería a cielo abierto, o la propia producción de automotores o la industria de ensamble, con importante demanda de hidrocarburos; o un uso energético ahorrador del estratégico insumo. Sin perjuicio de ello, también se discute la tecnología de la fractura hidráulica, que implica el uso de cuantiosas cantidades de agua y arena y la utilización de un importante cóctel de tóxicos con impacto sobre la naturaleza. Si bien la OFEPhi informa en su página sobre el control en el manejo de

esos tóxicos y el uso adecuado del agua, hoy recurso estratégico, son numerosos los movimientos que surgen en el país en crítica a la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Más de 30 consejos municipales han manifestado su rechazo a la explotación vía *fracking* en sus territorios, lo que puede llevarnos a imaginar que los próximos días puede exacerbarse.

Aún es posible defender la soberanía energética y luchar contra la reforma en curso. Es necesario movilizarse en todo el país, y especialmente en las puertas del Congreso para hacer escuchar la voz del pueblo en favor del Derecho a la Energía. Es el sentido principal que sustentaron las intervenciones de los delegados sindicales de otros países presentes en el Seminario homenaje al 71° aniversario del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata el pasado viernes 10 y sábado 11 de octubre de 2014.

Uruguay, 11 de octubre de 2014



EL MERCADO Y LAS REGULACIONES COMO TEMA DEL NOBEL 2014*

El premio Nobel de Economía se otorga por el Banco de Suecia desde 1969, y en general recayó sobre economistas reaccionarios, críticos de los impulsores de la intervención del Estado, tal como se generalizó a la salida de la crisis del 30 y especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que se critica al galardón como tal, por su clara definición pro mercado capitalista. La opción neoliberal ensayada con terrorismo de Estado en Sudamérica encumbró a los monetaristas ortodoxos, Milton Friedman en 1976, antes Friedrich Von Hayek en 1974, y son escasas las premiaciones a profesores de la heterodoxia, lo que ha coincidido con momentos explícitos de crisis, como en 1998 con Amartya Sen, en 2001 con Joseph Stiglitz, y en 2008 con Paul Krugman. Aun estos, o antes James Tobin en 1981, por ejemplo, jamás pensaron aportes por fuera del orden capitalista, mucho menos en oposición o por alternativas no capitalistas o socialistas.¹

La distinción está asociada a los aportes teóricos para el sostenimiento del orden capitalista que considera la banca sueca. Ahora, para el 2014 el premiado es Jean Tirole, economista francés, formado en su país y en EEUU, creador en 2007 de la Escuela de Economía de Toulouse, o Toulouse School of Economics (TSE), siguiendo la tradición estadounidense desde el interior francés y europeo. Allí se acoge a profesores y alumnos del extranjero, e incluso con clases en

* Publicado en *Tiempo Argentino*, el 14/10/2014, en <<http://tiempo.infonews.com/nota/135046/regular-para-mejorar-el-mercado-capitalista>>.

inglés, contraviniendo el imaginario local de privilegio a la lengua francesa. El financiamiento privado destaca en el marco del aval del sistema estatal de investigación francés. El tema de la originalidad de Tirole apunta a la necesidad de regular un mercado cada vez más dominado por monopolios privados en la industria, la banca o los servicios desde la hegemonía de la iniciativa privada como respuesta excluyente construida por el capitalismo contemporáneo en las últimas cuatro décadas. El resultado de las privatizaciones construidas desde la política económica privatista sustentada en las teorías multi-premiadas por los banqueros suecos, es el motivo de estudio del académico de Toulouse. Sus recomendaciones para mejorar el mercado capitalista apuntan a la regulación estatal para lograr mayor eficiencia del accionar económico.

Vale pensar en la crisis mundial capitalista actual y en las políticas económicas en curso en Europa y en especial en Francia, con impacto en el deterioro del llamado Estado del Bienestar y sus efectos sobre los trabajadores y la mayoría social de menores ingresos, con gravísimas consecuencias sobre los jóvenes que asisten el crecimiento del desempleo y un horizonte social sombrío mientras se agiganta el poder de las transnacionales y su capacidad de incrementar sus ganancias, tema de la investigación de otro economista francés, Thomas Piketty, reconocido por su estudio contemporáneo *El Capital del Siglo XXI*. Claro que no puede demandarse a ambos estudiosos franceses la inspiración en la crítica de la economía política realizada por Carlos Marx hace siglo y medio.

14 de octubre de 2014

¿ES POSIBLE SUPERAR LA DEPENDENCIA TECNOLÓGICA?

Argentina puso en órbita el satélite Arsat-1 producido por la estatal INVAP, lo que pone en discusión varias cuestiones.

Una remite a la sobrevivencia de una empresa estatal provincial, que surgida en los 70 pudo sortear la ola privatizadora de los años 90 y discute, desde la fuerza de los hechos, los cuestionamientos ideológicos a la gestión estatal. No es cierto que la gestión privada sea más eficiente que la gestión estatal. Claro que algunos dirán que no alcanza con la eficiencia de la empresa si ello no incluye procesos de participación de los trabajadores e incluso de la sociedad, pero ese es otro tema.

Otra cuestión nos lleva a la potencialidad de desarrollos productivos locales, ejecutados con recursos económicos suficientes y fuerza laboral, profesional y científica local, con capacidad de competir mundialmente. La mundialización exige tecnología específica y de punta, en general en manos del capital externo, lo que define la subordinación de cualquier emprendimiento económico. Es un asunto de debate en nuestra región ante los límites que supone la dependencia tecnológica para proyectos alternativos, cuando la región es re-colonizada ante la demanda de estratégicos recursos naturales. Existe la posibilidad de romper el límite cultural de la dependencia tecnológica y frenar la fuga de cerebros.

Resulta imprescindible la discusión de ambas premisas, la cuestión de la gestión estatal y la relativa a los desarrollos tecnológicos autónomos. Es que en las últimas cuatro décadas, no solo en

Argentina sino en el ámbito mundial, se generalizó la concepción que afirmaba la ineficacia de la gestión estatal con relación a la privada. Al mismo tiempo existe un límite cultural para pensar la independencia tecnológica, con un sentido común que argumenta a favor de no innovar ni invertir en procesos productivos estratégicos, incluso pensando en tantas necesidades insatisfechas de la mayoría de la población. La experiencia de INVAP es contraria a toda cultura de la improvisación y demuestra la importancia de la persistencia por un largo tiempo de un proyecto que supone la articulación de recursos económicos y potencial humano aplicado a desarrollos científicos y tecnológicos que permiten inserción internacional especializada en un sector de punta. Son consideraciones de orden político, ideológico y cultural que anidan el debate en toda la región para pensar la consolidación del cambio político y las bases materiales no dependientes para construir nuevas relaciones socio económicas.

LA CUESTIÓN NUCLEAR Y LA INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA

Convengamos que INVAP involucra un complejo entramado de desarrollos tecnológicos y científicos, con un fuerte origen en el área nuclear. Es cierto que existe discusión en la sociedad, no solo en el país, sobre el uso de la energía nuclear, donde la Argentina era potencia destacada en la perspectiva de los años 70 y la emergencia de la crisis energética, especialmente explícita en EEUU, condicionó el desarrollo posterior. Es más, fue la orientación de subordinación al imperialismo estadounidense en los 90, lo que discontinuó y desmanteló procesos tecno-científicos asociados a la energía nuclear, un tema que vuelve a instalarse en la política del gobierno y que reabre el debate sobre las fuentes energéticas alternativas.

Traemos a discusión la cuestión porque el desmantelamiento de la política nuclear no impidió desarrollos alternativos en el área satelital, las comunicaciones y los sistemas de automatización para proyectos industriales o espaciales, todos con reconocimiento internacional, lo que ha permitido actuar en la provisión y mantenimiento de equipos en diferentes países del mundo, desplazando a otros proveedores de países capitalistas desarrollados. Quiero insistir que puede discutirse la orientación hacia el uso de la energía nuclear, pero la experiencia de INVAP, ahora difundida por el lanzamiento exitoso del primer satélite geoestacionario latinoamericano de telecomunicaciones, con capacidad de brindar servicio a todo

el territorio nacional (televisión digital e internet) e incluso a los países vecinos, hace evidente la posibilidad de discutir un modelo productivo no dependiente de las transnacionales capitalistas.

Existen proyectos de continuidad, lo que supone una cadena de proyectos a futuro, algunos en desarrollo para la exportación de equipos y procesos, de hardware y software. Vale la pena ingresar al sitio en internet de INVAP y leer que se define como “una empresa dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, con una trayectoria de casi cuarenta años en el mercado nacional y treinta en la escena internacional. Su misión es el desarrollo de tecnología de avanzada en diferentes campos de la industria, la ciencia y la investigación aplicada, creando ‘paquetes tecnológicos’ de alto valor agregado tanto para satisfacer necesidades nacionales como para insertarse en mercados externos a través de la exportación.”¹

Es una definición para extenderla, críticamente, a otras esferas del modelo productivo y de desarrollo vigente en la Argentina, que en el agro, la minería o la industria promueve la profundización de los lazos de dependencia capitalista, especialmente a partir del condicionante científico y tecnológico, por lo que nos interrogamos sobre la experiencia del ARSAT-1 y la necesidad del debate político e ideológico por la independencia.

Buenos Aires, 17 de octubre de 2014

1 <<http://www.invap.com.ar/es/>>.



PRESUPUESTO, DEUDA PÚBLICA, HIDROCARBUROS Y TELECOMUNICACIONES

Variadas son las informaciones económicas sobre el fin de año, y entre las más destacadas figura:

- el presupuesto 2015 que asegura los recursos para el funcionamiento de la administración nacional hasta el fin del mandato presidencial;
- la continuidad de la saga relativa a la deuda y la disputa del gobierno argentino con la justicia de EEUU y los fondos buitres, una cuestión que retrasa el ingreso de capitales; y en sentido contrario,
- la ejecución del *swap* con China y la aprobada ley de hidrocarburos junto a la licitación de frecuencias de telecomunicación, iniciativas que intervienen en la búsqueda e ingreso de divisas.

PRESUPUESTO Y DEUDA

Existe una fuerte discusión sobre la realidad explicitada en los guarismos de previsión de ingresos y de egresos, especialmente si se sigue la comparación de lo previsto y lo ejecutado en años anteriores. Hace 7 años que la inflación afecta a los sectores de menores ingresos y el tema se escamotea. El efecto macroeconómico es una mayor recaudación que se afecta a un gasto indiscriminado y según la arbitrariedad del poder ejecutivo, sin tener en cuenta la opinión del parlamento, aun cuando se tiene mayoría para resolver lo que se quiera.

Lo que sobresale en el presupuesto es el gasto destinado a la cancelación de la deuda pública, que más allá de la importancia por la cantidad de recursos involucrados, como por las autorizaciones a emitir mayor endeudamiento, la cuestión de fondo no prevista explícitamente en la Ley de Presupuesto remite a la discusión con los fondos buitres y la justicia de EEUU. Ahora amplificada en la denuncia a una funcionaria del gobierno de Washington como principal ejecutiva del *lobby* buitre, enunciado en una carta de protesta que dirige la Presidente de Argentina a su par estadounidense. Es un tema a procesarse en los próximos días en la reunión del G20 en Australia.

El asunto es que los vencimientos de deuda renegociada siguen generando una situación sin salida en la coyuntura, puesto que ahora existen depósitos inmovilizados en la Banca Mellon de Nueva York por vencimientos de junio, y otros depósitos que se suceden en el Banco Nación de la Argentina desde fines de septiembre.

Los fondos en EEUU no se pueden usar mientras el juez Griesa no lo permita y en plaza local se requiere que los acreedores realicen un canje de títulos para no cobrar más en Nueva York. Eso hace que el gobierno mantenga su posición de cumplidor de los pagos aun cuando los acreedores no perciben sus cuotas.

Algunos acreedores pueden acudir a la aceleración, lo que supone cobrar la totalidad del valor nominal de los bonos ante el impago, para lo cual se requiere del 25% de la voluntad de los tenedores de cada serie. Otros prefieren esperar a que termine el 2014 y se finalice la cláusula RUFO, con la expectativa de negociación y pago de la sentencia neoyorkina en el 2015. Ello supondrá afectación de recursos de reservas, fiscales o incluso nuevo y mayor endeudamiento público.

El tema no solo afecta al 1% de los acreedores, los buitres, sino al 7% del monto total en default en el 2001, unos 7.000 millones de dólares, que pueden duplicarse sumando los intereses y multas. Todo ello se resolverá en el próximo ejercicio fiscal. Esa es la especulación mayoritaria y afectará fondos del presupuesto, aun cuando no estén contemplados, o si no, nueva deuda, a costa de futuros presupuestos y compitiendo con otros destinos.

Por donde se verifica el nuevo endeudamiento es con la utilización de una parte del acuerdo suscripto con China para utilizar unos 11.000 millones de dólares, de los cuales se acreditaron esta

semana 814 millones de dólares (en moneda china), que aumentan las reservas internacionales a 28.000 millones de dólares. Los recursos facilitados por China servirán para cancelar operaciones comerciales con China, las que tienen un saldo favorable al gigante asiático. En contrapartida, el país depositó el equivalente en pesos en la banca china. El costo de la operación afectará recursos fiscales que limitan usos alternativos.

Se terminó el discurso del desendeudamiento y ahora todo se juega a la búsqueda de nuevos préstamos, renovando la hipoteca y el cáncer del endeudamiento, por lo que se agiganta la demanda de un gran movimiento popular por la suspensión de los pagos y la auditoría de la deuda. Es un tema a desarrollar en el país para generalizarlo como campaña continental y mundial contra el pago de la deuda de nuestros países.

HIDROCARBUROS Y TELECOMUNICACIONES

El proyecto estratégico aprobado esta semana remite a la nueva ley de hidrocarburos, solamente sostenida desde el oficialismo y aliados cercanos, con fuertes críticas del resto de la oposición, claro que con posiciones diferentes entre la oposición sistémica y la de izquierda.

Los primeros, sistémicos pro desarrollo capitalista e inserción subordinada, comparten el criterio de explotar los yacimientos convencionales y no convencionales y solo discuten las formas y procedimientos contenidos en la legislación. Los segundos discuten la cuestión de fondo, desde la crítica a la privatización histórica de los 90, la política energética desde entonces y la nueva entrega que supone la extranjerización y privatización que consolida el mecanismo de gestión legalizado.

El agravante proviene del uso de la tecnología de la fractura hidráulica para extraer los no convencionales, altamente agresiva con los recursos naturales y fuerte consumidora de agua.

Lo cierto es que en la mayoría política de la Argentina existe coincidencia en la explotación de hidrocarburos, convencionales y no convencionales y la asociación con petroleras extranjeras y su tecnología depredadora. Solo se discuten los modos y formas del proceso que subordina la producción de petróleo y gas a la dominación del lobby petrolero mundial. La discusión por la soberanía energética continuará aun con la nueva legislación. La cuestión de

fondo es la soberanía energética y el derecho a la energía, lo que supone discutir la mercantilización creciente de la energía y por ende la des-mercantilización.

Otra novedad provino de las telecomunicaciones. Que los teléfonos no funcionan es sabido y ya no se puede decir como antes que la solución es la privatización. Es más, las privadas ganaron enormes sumas desde la privatización y ahora se disponen a ampliar sus negocios.

La telefonía supone un negocio fabuloso que involucra a grandes grupos económicos y empresas transnacionales. Esta semana cerró la licitación para la ampliación de frecuencias 3G y 4G y el Estado obtuvo propuestas por 2.223 millones de dólares que ingresarán al fisco antes de fin de año, a las que se sumará una cifra similar en inversiones en infraestructura.

Las empresas que participaron de la licitación son Movistar (Telefónica), Personal (Telecom), Claro (del magnate Carlos Slim) y Arlink (Grupo Vila-Manzano). Se consolida la dominación monopólica y transnacional en el negocio de las telecomunicaciones. Ello supone considerar a las comunicaciones como mercancía, contra el derecho a la comunicación que parte de la des-mercantilización de las comunicaciones.

Para el gobierno, las expectativas son grandes en materia de ingresos de divisas y de inversiones, que subsanen el pésimo servicio de telefonía celular en un mercado altamente saturado de consumo, con más unidades de teléfonos celulares que población.

En este marco y a un mes del recambio de autoridades en el BCRA la brecha cambiaria entre el precio oficial del dólar y el paralelo se reduce sin que se pueda afirmar que ello constituye tendencia irreversible. El tema de fondo y que trasciende el momento es el modelo productivo dependiente del ingreso de divisas que también demandan los acreedores de la deuda, con la única salida de nuevo y mayor endeudamiento que agrava la hipoteca sobre generaciones futuras. Es parte de la razón por lo que hasta ahora se rechaza la idea de un bono de fin de año para los trabajadores, que pueda compensar la pérdida del poder de compra de los ingresos laborales. Es un tema de conflicto que se suma a la agenda económica en el cierre del año.

La cuestión a resolver es la alternativa política, ya que lo que hegemoniza el debate económico y político en la Argentina es quien

asume la administración del capitalismo local. Se necesitan otros objetivos, más allá del capitalismo y no solo en contra del capitalismo, sino por el socialismo. Ello requiere de sujetos conscientes que luchen contra el capitalismo y que construyan en la coyuntura el anticipo de la sociedad sin clases del futuro, no solo en el ámbito de las relaciones cotidianas de familia, amistad o cercanía, sino en el campo de las relaciones económicas, de producción y circulación. Ese es el marco, en la lucha y organización cotidiana, que se construye el programa de las transformaciones sociales y económicas necesarias para el proceso de liberación, y al mismo tiempo, el instrumento político para resolver democráticamente el rumbo desde hoy por la revolución.

Vale la pena reconocer que en la Argentina se discute la renovación del turno presidencial hacia octubre del 2015 y que la izquierda y el campo popular necesitan agrupar esfuerzos de construcción militante para disputar el consenso social contra el orden capitalista.

Buenos Aires, 2 de noviembre del 2014



¡EL ENEMIGO A VENCER ES EL CAPITALISMO!

En la Argentina, noviembre del 2014, ya estamos en proceso electoral hacia la renovación presidencial con las elecciones de octubre del 2015.

La prensa y los “opinólogos” remiten a la disputa por la administración central del capitalismo local. La discusión es si es mejor el kirchnerismo o la oposición sistémica, o sea, aquellos a los que no se les ocurre cambiar el modelo productivo y de desarrollo, y en todo caso, ofrecer una variante matizada de beneficiarios del orden económico.

Se disputa el gobierno del orden capitalista. En ninguno de los proyectos se piensa en ir más allá del capitalismo, lo que constituye un desafío para el movimiento popular y la izquierda en sus diferentes manifestaciones.

EL KIRCHNERISMO DISPUTÓ Y GANÓ CONSENSO ELECTORAL Y PRETENDE ORGANIZARLO SOCIAL Y POLÍTICAMENTE.

Es innegable que el kirchnerismo entre 2003 y 2014 promovió una política económica y social que le permitió disputar consenso social electoral, creciente en la sucesión de elecciones presidenciales del 2003 (22%), del 2007 (45%) y del 2011 (54%).

Una de las razones principales remiten al funcionamiento de la economía, a la recuperación del empleo y relativamente de los ingresos populares, convenciones colectivas de trabajo mediante;

y también a una política de memoria sobre derechos humanos y de relacionamiento con la región latinoamericana en un tiempo de cambio político y crítica importante a la hegemonía del discurso neoliberal de los 90.

Nunca hubo propuestas de rumbo superador del orden capitalista; cuando mucho, críticas a las políticas hegemónicas en los 90 (obviando la propia participación protagónica) y convocatoria a un capitalismo serio o normal, el que se define por su capacidad de obtener ganancias, aplicarlas a la acumulación y sustentar la dominación del capital sobre los trabajadores, los recursos naturales y el conjunto de la sociedad.

Nadie espera resultados similares a los del 2011, y ni siquiera a los del 2007 para los próximos comicios de renovación presidencial en el 2015, y más bien, todos los pronósticos oscilan entre el primero y el segundo de los guarismos, rondando el 30%, lo que no es poco para constituirse en primera minoría electoral, con peso considerable en cargos legislativos y algunos ejecutivos, especialmente municipales, pero sobre todo en la conducción del conflicto social.

Resulta un dato interesante a los efectos de pensar en renovadas iniciativas de unidad de acción de los sectores subordinados en el escenario que se abrirá luego de la asunción de un probable opositor, e incluso de Scioli, candidato kirchnerista, en el nuevo turno presidencial entre 2015 y 2019.

El interrogante a pensar es cuál resulta la razón de la pérdida de votos en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández, lo que remite principalmente a la economía, pero también se explica por el retorno de la represión y mecanismos que intervienen en el control social: la ley anti terrorista, otros procedimientos explícitos con fuerzas de seguridad en el control del conflicto social, además de ciertas medidas que alejan de la propuesta gubernamental a los sectores medios, de endeble lealtad política electoral, demanda de divisas mediante. Pero también se explica en el corrimiento que supone la búsqueda de reconocimiento en el sistema mundial capitalista, con señales favorables al poder mundial más allá de ciertas contradicciones con EEUU a propósito de las demandas de los llamados fondos buitres, lo que sugiere el crecimiento de opciones de la izquierda política y social.

Lo económico ocupa cierta centralidad en la pérdida del consenso, y entre otras cuestiones destaca el impacto entre los sectores

más empobrecidos que viven de ingresos fijos, salarios, jubilaciones o planes sociales, derivados de la convergencia de un incremento de precios de bienes y servicios de consumo cotidiano contra ingresos populares ajustados por debajo de la inflación. Es una causa evidente del descontento social por abajo. Al mismo tiempo, la continuidad de la impunidad empresarial mantiene elevado el nivel del empleo no regular en el 33,5% para mediados del 2014 según datos del INDEC, acumulando desconformidad entre los trabajadores y limitando las posibilidades del mercado interno y los intereses de sectores pequeños y medianos de la burguesía local que venden y apuestan al mercado local.

La inflación, el trabajo irregular, la baja de los ingresos populares, no solo los salarios, la precariedad y el mantenimiento de la ofensiva del capital sobre el trabajo genera una masa gigantesca y creciente de descontento que se manifiesta en conflictos sociales explícitos y en los últimos dos años en tres paros generales, convocados por la unidad en la acción de la CTA Autónoma y la CGT disidente, y a veces en soledad por la CTA, cuestión que se repetirá el próximo 20 de noviembre, nada menos que el día de la soberanía.

No resulta menor el tema de la inseguridad, donde se escamotea en su análisis el creciente carácter delictivo que asume el capitalismo, con la producción y la circulación de drogas, de armas y de personas, junto a la fuga de capitales, la evasión y la elusión fiscal. El capitalismo normal de este Siglo XXI está indisolublemente ligado al delito. Alguien puede decir que siempre fue así y tendrá razón, pero el carácter que adquiere hoy es gigantesco y tiene sus responsables principales entre las clases dominantes y el poder de los principales Estados del capitalismo mundial, al que se asocian los Estados nacionales de aquellos países que intentan pertenecer, entre ellos, el caso de la Argentina.

El capitalismo delictivo es una forma de explotación que ofrece mejores salarios a los “trabajadores” involucrados en el sistema del delito que a aquellos explotados en las formas regulares del orden capitalista, la producción y circulación de bienes y servicios que se ofrecen para satisfacer necesidades reales o no de la población. La inseguridad asociada al delito crece en el país y en el mundo, y esas mafias organizadas tienen contacto con el sistema institucional, trasponiendo turnos de gobiernos y constituyéndose en un fenómeno estructural que dificulta la capacidad de constituir alternativa entre los trabajadores y los sectores populares.

La lucha contra el capitalismo es también una cuestión de soberanía, ya que el narcotráfico, la comercialización de armas o de personas, la especulación financiera y económica están dirigidas por redes globales en tiempos de transnacionalización del capital. No puede pensarse en una red de tráfico de drogas, de armas o de personas, de circulación del capital, sin la complicidad de los grandes bancos y entidades financieras del sistema mundial.

BENEFICIARIOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y LA DISPUTA DEL GOBIERNO POR DIFERENTES FRACCIONES DE LAS CLASES DOMINANTES

Precisamente a propósito de la soberanía, o si se quiere, a la falta de soberanía, es que pueden identificarse los mayores beneficiarios de la política económica luego de la convertibilidad, lo que involucra a los gobiernos de Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y dos periodos de Cristina Fernández, claro que con matices, todos originados en el Partido Justicialista, el PJ.

Consideramos al puntano, pues sin la declaración de cesación de pagos del 2001 no hay posibilidad de liberación de importantes recursos públicos para atender otras demandas del proceso de recuperación económica iniciado a mediados del 2002. Del mismo modo, es Duhalde y su devaluación en enero del 2002 el que otorga la condición de posibilidad para la competitividad de la producción local, y con ello la promoción de la producción y las exportaciones locales, claro que asociado a la coyuntura mundial de precios en alza de las “comodities”, entre ellas y principalmente de la soja, aunque antes de la insuficiencia energética, también válido para las exportaciones de petróleo y gas.

La revolución productiva, propuesta electoral de Duhalde en 1999 se materializa con la ruptura de la paridad en 1 de la divisa estadounidense con la moneda local. Los que demandaban esa medida eran los grandes dueños de la producción local, las corporaciones transnacionales y los grandes grupos económicos que nutren la Encuesta de Grandes Empresas en la Argentina. A ellos debe sumarse la banca privada extranjera y local, mayoritaria en el sistema financiero y principal actividad a la hora de explicar las mayores ganancias de los últimos años, cuando habían sido principales exponentes de la crisis en el 2001.

Si los beneficiarios de la convertibilidad entre 1991 y 2001 eran las empresas privatizadas de servicios públicos, los acreedores de la deuda pública y las grandes empresas transnacionales, a la salida de la convertibilidad ganaron presencia y liderazgo el sector industrial y agrario, especialmente aquellos asociados al comercio exterior.

En un sentido accesorio y subordinado, se beneficiaron sectores pequeños y medianos de la economía local, vía mejoras en el funcionamiento del mercado interno. Así, fueron incluidos como beneficiarios en la apropiación de la renta socialmente producida en el país, algo que se pone en discusión con la desaceleración entre 2012 y la actualidad, como con la merma de la capacidad de consumo de la mayoría de la población.

Fue base de disputa del consenso entre los llamados sectores medios que ahora se corren y buscan nuevas representaciones, aun cuando su situación mejoró notablemente respecto de los años 90, los de la convertibilidad, la desindustrialización y de la dominación de la importación. Es cierto que son sectores de corta memoria y solo buscan el rédito inmediato, y en esta coyuntura pretenden mantener volúmenes de ingresos de renta del periodo de ascenso del nivel de actividad y de sus recursos. Si eso puede lograrse cambiando el gobierno cambian su voto sin problema, aunque nadie les asegure que eso pueda ocurrir. Existe una identidad ideológica que solo se rinde ante la realidad de ganancias efectivas de estos sectores medios, oscilantes en la adhesión a cualquier proyecto que no atienda directamente sus intereses.

Conviene señalar que el modelo productivo y de desarrollo surgido luego del 2001 está sustentado en la institucionalidad económica y política gestada desde 1975/76, es decir, la última parte del gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón (junio del 76 a marzo 76), aplicada especialmente por la dictadura (marzo del 76 a diciembre del 83), que abrió las puertas a una mayor inserción subordinada de la Argentina a la división internacional del trabajo en el orden capitalista. Claro que en los 90 el proceso se consolidó, con buena parte de sectores que hoy militan la posición oficial del kirchnerismo en el gobierno.

La pueblada del 2001 puso fin al ciclo de ofensiva capitalista iniciado en 1975. Fue producto de la acumulación de poder de innumerables luchas del pueblo contra el “rodrigazo” en junio del 75; contra la dictadura y los planes en los 70 y 80, posteriormente

ejecutados en los 90 con las privatizaciones, y diversos mecanismos de subordinación al capitalismo hegemónico, transnacional, vía endeudamiento, apertura económica y sumisión a condiciones contractuales a tribunales externos y a la lógica de la ganancia de los grandes capitales de la producción y la especulación. En la resistencia se gestó el poder popular para frenar la lógica del saqueo y el hartazgo de la población, pero sin identificar que el problema era el orden capitalista.

Ese límite en la lucha popular facilitó la tarea de reorganización del poder en torno al kirchnerismo. “Vengo a recuperar el capitalismo nacional” dijo explícitamente Kirchner en 2003 cuando asumió y pronunció su discurso de inicio de gestión. Es una perspectiva buscada desde la recuperación económica, especialmente del mercado interno, en rigor, con la difusión del consumo, lo que aceitó las condiciones para otorgarle al kirchnerismo el consenso electoral creciente para la administración del capitalismo local hasta el 2011/2013, ahora puesto en discusión. El proceso posterior es crítico para el gobierno, porque cambiaron las condiciones de posibilidad del consenso. La economía dejó de acompañar y se manifestó en pérdidas de reservas internacionales desde los 52.000 millones de dólares acumulados hacia el 2011, para llegar a los 28.000 millones actuales; la escalada de la inflación a valores cercanos al 40% anual, aun cambiando la metodología de medición del INDEC. Esta sigue siendo una institución no confiable, denunciada principalmente por sus trabajadores, los que denuncian regularmente el escándalo de la manipulación estadística, que impide rigurosos análisis.

Las clases dominantes, favorecidas en el ciclo ascendente, pero que siempre desconfiaron del discurso por los derechos humanos o las alianzas en la región, especialmente con Venezuela y Cuba, iniciaron acciones ideológicas, políticas y económicas para el logro de una nueva devaluación, lo que lograron en enero del 2014 y ahora van por otra devaluación, antes de finalizado el mandato de Cristina Fernández o inmediatamente luego del cambio de gobierno. Las devaluaciones siempre perjudican a los perceptores de ingresos fijos, trabajadores activos o pasivos, perceptores de jubilaciones, pensiones o planes sociales. La devaluación del 2002 no se notó lo suficiente por la elevada tasa de pobreza, indigencia y desempleo, asociada a bajísimos salarios. Desde ese momento se tomó más en cuenta la recuperación de ingresos vía una política social que se masificó por diferentes programas, sobre la base del

planteo que sustentó la CTA y el Frente contra la pobreza durante los años previos a la pueblada del 2001. Remitimos al seguro de empleo y formación para jefes y jefas de hogar desocupados, a la asignación para menores y los ingresos previsionales para todos los mayores de 65 años, algo que se ejecutó con deformación por los distintos gobiernos desde Duhalde hasta el presente.

Los planes sociales actuales, aun con deformación, son producto del programa de lucha que instaló la CTA en los años 90 y constituyen un triunfo de la lucha popular. Las posteriores devaluaciones, sucesivas desde el 2002, del 1,4 a 1 hasta el 8,5 actual, especialmente la modificación del tipo de cambio de enero del 2014, que afectó la capacidad de compra del salario y los ingresos fijos de los sectores populares, con lo cual, toda salida vía devaluación luego del auge y recuperación del 2002 al presente es considerada como un ataque directo a los ingresos populares.

INICIATIVAS POLÍTICAS CONTRAPUESTAS DEFINEN EL MOMENTO ACTUAL DE LA LUCHA DE CLASES EN LA ARGENTINA

La lucha de clases hoy se expresa en la iniciativa de las clases dominantes por la devaluación para hacer competitivas a las empresas que producen en el país, sea para el mercado interno o el mercado mundial, y en ese marco disputan la renta con acreedores externos, especialmente los fondos buitres, que pretenden una parte mayor de esa misma renta. El 2015 es escenario probable de negociación y acuerdo con estos buitres, restando capacidad de gasto en otras demandas de los trabajadores y sectores populares.

Es una disputa de todos contra todos en el seno de las clases dominantes y por eso los matices son mínimos entre el gobierno que retoma la agenda económica por derecha, cancelando a Repsol una indemnización con más deuda pública, pagando las sentencias del CIADI con deuda, acordando con el Club de París del mismo modo. Son todas medidas que cualquiera de la oposición sistémica hubiera realizado de ser gobierno, sea el PRO de Macri, el Peronismo Renovador de Massa, el mismo Scioli dentro o fuera del kirchnerismo y claro, los radicales en UNEN y otras variantes en su seno. La discusión sobre la sentencia de EEUU y los fondos buitres se dirime en la oportunidad, el cómo y el cuanto de la negociación y cancelación. Muy alejada de la posición sustentada desde distintos ámbitos del movimiento popular por la suspensión de los pagos

de la deuda y la constitución de una auditoría con participación popular para deslindar deuda legítima de ilegítima, ilegal e incluso odiosa.

La agenda asumida por el gobierno desde las elecciones del 2011 (sintonía fina insuficientemente ejecutada) y más precisamente, luego del resultado electoral negativo del 2013, se acerca a las propuestas de los principales referentes de la oposición política y las demandas de las clases dominantes.

Por eso interesa la iniciativa de la clase obrera y el conjunto de los sectores populares para enfrentar en la lucha de clases contemporánea la iniciativa hegemónica de los que dominan y gobiernan. Resulta imprescindible extender el conflicto social, algo que está claro en la CTA Autónoma y variadas expresiones políticas del movimiento obrero en fábricas y empresas, como en los territorios de la precariedad, lideradas por la izquierda política y un activismo militante que en la experiencia consolida una propuesta clasista, anticapitalista y antiimperialista, crecientemente anti patriarcal y contra el racismo. Estas son las bases de un programa necesario, alternativo a la propuesta gubernamental y de la oposición sistémica.

La forma para hacerlo realidad supone una gran articulación de propuestas políticas en la lucha cotidiana, que incluyen el momento electoral, con algunas candidaturas lanzadas e incluso ámbitos del movimiento popular que mantienen una posición distante del proceso electoral. Una propuesta articulada de sectores populares que se reconocen en el clasismo, el anticapitalismo, el antiimperialismo, el anticolonialismo, en la lucha contra el racismo y el patriarcado, necesitan expresarse unidos en la perspectiva electoral del 2015 y constituir una base para disputar consenso social en una prédica contra el orden del capital, esencia de nuestros problemas.

Es en esas condiciones que Argentina puede sumar su experiencia a otras que en la región y en el mundo aspiran a la lucha por la emancipación social y el socialismo.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2014

LA DEPENDENCIA DEL INGRESO DE CAPITALES DEFINE AL CAPITALISMO ARGENTINO

Estamos sobre el fin del año y muchos me consultan sobre la evolución de la inflación y el tipo de cambio, insistiendo en que este, el tipo de cambio, es un precio más en la economía, el de las monedas extranjeras, o sea, las divisas, entre otras, el dólar, el euro, el yen o el yuan.

La cuestión de los precios trasciende la coyuntura y expresa, como aprendimos con Marx, aspectos esenciales de la producción y la circulación, ya que los precios son la manifestación en dinero del valor de cambio, y este resume la contradictoria relación social de intercambio en el capitalismo, entre compradores y vendedores, entre valor de uso y valor de cambio o valor. Los precios condensan las contradicciones del capitalismo, el intercambio de equivalentes y la generación y apropiación del plusvalor.

Aludimos a una cuestión teórica que está en la esencia del régimen de explotación. Los precios remiten al dinero, y este es expresión de una forma histórica del valor, que fetichizado se impone con autonomía de su origen como relación social. La inflación o deflación de los precios está asociado a la teoría del valor y por ende del dinero. No hay autonomía del dinero sobre la producción y circulación en el capitalismo, y por lo tanto, en el dinero y la política monetaria, financiera, cambiaria o de precios se manifiestan las contradicciones inmanentes en el doble carácter del trabajo materializado en las mercancías.

El tema de los precios y la inflación requiere de consideraciones que remiten a la coyuntura y sus impactos en las distintas clases y sectores sociales, como una mirada teórica que permita dilucidar el origen del problema en las contradicciones sociales del orden capitalista.

LOS AUMENTOS EXPRESAN LA DOMINACIÓN DE CLASES

Sobre la evolución de los precios en Argentina se evidencia una aceleración respecto de los años anteriores, proceso en curso desde el 2007. La afirmación se verifica con los datos de la medición oficial o con los que difunden otras mediciones alternativas, de privados o de algunas provincias aferradas a metodologías previas a los cambios en el INDEC. Los datos varían entre el 30 y el 40%. Puede creerse más en una o en otras mediciones, pero nadie duda del alza de los precios en la economía argentina, lo que evidencia un problema en la capacidad de compra para los sectores de menores ingresos y enfatiza la desigual relación social entre quienes fijan los precios y la mayoría que los sufre.

Nuestra economía es parte de la economía mundial, capitalista por cierto, que resume en un mercado mundial crecientemente sostenido con precios internacionales independientes de los costos de producción locales. Lo que se intercambia en el mundo son commodities, más que bienes y servicios. La soja o el petróleo, el oro, los minerales y el conocimiento son commodities y no interesa su localización para la producción, salvo en lo atinente a la búsqueda de la mayor productividad, o la disminución del costo de producción para maximizar la ganancia.

Es una afirmación para localizar a los fijadores de precios en el mercado mundial. No es desde la Argentina que se define el alza o la disminución del precio internacional de la soja o del petróleo, aunque sin duda y a escala, la producción local interviene en tanto y en cuanto participa de la producción global de cada mercancía. Sin perjuicio de lo dicho, el carácter nacional de la política y por ende del Estado, favorece una redistribución del poder global en el orden local, y eso explica las transferencias de ingresos al interior de cada país, siendo la inflación interna el mecanismo de redistribución regresiva del ingreso a escala interna, local. Es un ejercicio del poder, de quienes pueden subir precios y encontrar su realización en el mercado.

LAS TENDENCIAS ACTUALES EN LOS PRECIOS Y LA POLÍTICA PÚBLICA

También puede decirse que en el último tramo de este 2014 se percibe una desaceleración de la tendencia general ascendente de los precios, cuya explicación puede encontrarse en la baja de la actividad económica y en la recesión productiva, con impacto directo en la pérdida de empleo y las restricciones para operar una reanimación de la economía local, que termina dependiendo de los estímulos externos, sean inversiones o préstamos provenientes desde el exterior.

El límite a la expansión de los precios está entonces condicionado por la reducción de la capacidad de realización en el mercado, sea por disminución de las compras empresarias o del consumo en general, especialmente entre los sectores de menores ingresos. Y por ende el ajuste en la contratación de fuerza de trabajo y un agravamiento de las formas de flexibilización laboral y salarial.

La política económica, es decir, el accionar del Estado, intenta frenar la evolución de los precios y activar la economía, incluso compensando con política social a los sectores más desprotegidos, vía planes sociales o renovadas moratorias previsionales. Es parte del aprendizaje del Estado capitalista en la administración de la crisis, legado de los 30 y del keynesianismo que hoy asumen hasta los más conservadores de la política económica convencional en los principales Estados del capitalismo mundial.

En ese sentido y en la Argentina se anotan: a) los precios cuidados; b) los préstamos en cuotas para el consumo diverso; c) el estímulo al crédito para la vivienda o la compra de automotores; d) las restricciones a la compra y venta de divisas; e) ahora la disminución del 5% en el precio de los combustibles.

Uno de los problemas a destacar es que esas políticas no tienen efecto universal, ya que los precios cuidados no involucran más que una canasta de bienes que se distribuye en una cadena comercial de grandes supermercados y limitada geográficamente, con vencimiento a comienzos de enero y una fuerte disputa por la actualización de valores para su continuidad en el 2015.

Con el acceso a los créditos, el problema se presenta por los límites establecidos en los ingresos de los posibles adjudicatarios, excluyendo amplios sectores sociales que sufren el déficit habitacional.

Aun considerando los estímulos crediticios, con tasas subsidiadas a la pequeña producción, constituyen la minoría de la cartera bancaria, ya que lo principal del crédito bancario tiene destino en la confirmación de la estructura concentrada de la economía argentina, y una orientación privilegiada en la especulación y el financiamiento estatal de la deuda pública.

Incluso la reducción de los combustibles es limitada para no entorpecer el estímulo al ingreso de inversores externos para la producción petrolera que morigere el déficit energético que supone la importación de combustibles, al tiempo que los estacioneros denuncian ser los principales perjudicados y señalan el privilegio hacia las grandes petroleras.

Vale también mencionar que las restricciones a la operativa con moneda externa suponen una intervención para evitar la transferencia del precio de las divisas hacia el resto de los bienes y servicios. El problema es la referencia que supone en muchas actividades económicas el tipo de cambio paralelo y aún, la pérdida de reservas para atender las demandas de atesoramiento de pequeños inversores u ahorristas, que en cuenta gotas acumulan cuantiosos recursos, unos 3.000 millones de dólares estimados en todo el año, que son retirados de la actividad productiva.

LA DEPENDENCIA COMO LÓGICA DEL FUNCIONAMIENTO DEL CAPITALISMO LOCAL

En este marco, la economía en la Argentina está atrapada en la lógica capitalista de un excedente definido por el capital externo que presiona vía precios por su apropiación.

En el origen de la acumulación está el inversor de dinero (D) que pretende en un tiempo y espacio obtener más dinero (D', o $D + d$, siendo d el plusvalor). Esta ecuación define la valorización del inversor. Así, quien aporta D pretende D' ($D + d$), o sea un incremento (d) de la inversión originaria (D). La economía local demanda crecientemente de inversores externos dispuestos a colocar su D en el proceso local de producción, y esos inversores demandan la búsqueda de seguridad jurídica para obtener el suficiente valor acrecentado (d) según la lógica de la ganancia monopolista de un capitalismo en crisis. Vale adicionar que los capitales hegemónicos, ya asentados en el país, defienden su posición de dominación vía precios, mientras pueden y no tienen límites de mercado o de la regulación estatal.

La cuestión de los precios en alza, incluso del tipo de cambio, apunta a capturar la renta socialmente generada en la Argentina y disponerla en el circuito de la valorización mundial que definen las corporaciones transnacionales que actúan en el país.

Por todo esto es que sostenemos que el gran problema de la economía capitalista argentina es la dependencia del ingreso de capitales para asegurar el ciclo de valorización económica. Es que para la valorización hace falta una dinámica de inversión reproductiva, la que proviene del excedente económico generado por el funcionamiento de la economía local o por su inserción en la economía mundial.

La dinámica del capitalismo argentino está definida por los capitales externos, tal como se deriva de la estructura económica social hegemónica del capital externo en los sectores productivos y de servicios. Por eso es que hablamos de dependencia de los capitales transnacionales y del mercado mundial capitalista. En el agro, la minería, la energía, la industria, el comercio y los servicios de comunicación, bancarios y transporte, entre muchos, resultan definitivas las inversiones externas y el paquete tecnológico en manos de las corporaciones transnacionales.

Más aún, en términos más generales, el punto de partida del ciclo del capital en la Argentina se resume en la capacidad de ingresar capitales externos, siendo las fuentes de esos ingresos: a) el menguante superávit comercial; b) las renuentes inversiones externas; c) el esquivo endeudamiento proveniente del exterior.

Es más, la apuesta de política económica apunta a sostener el superávit comercial, aun frenando importaciones y regulando las exportaciones; generando condiciones para el ingreso de inversiones, asegurando elevada rentabilidad, especialmente para petroleros interesados en explotar yacimientos no convencionales; y logrando una parcial inserción en el mercado de crédito mundial por medio del acuerdo bilateral con China. Por estas medidas es que puede explicarse la recomposición de reservas internacionales en torno de los 31.000 millones de dólares, la contención de las expectativas por una devaluación, claro que todo tiene un costo, principalmente social.

La afectación de la dinámica de producción y reproducción capitalista afecta principalmente a los trabajadores, la mayoría de la sociedad. El nuevo endeudamiento presiona sobre los recursos

fiscales compitiendo con demandas sociales de gasto público en salarios, salud, educación, seguridad o promoción de las economías regionales y una política productiva y de desarrollo para satisfacer necesidades de otro modelo y patrón de producción y consumo.

Nuestra reflexión apunta a la construcción de una argumentación que supere los límites a que nos condena el régimen del capital e ir más allá, contra el orden capitalista, por la transformación social para la emancipación y la liberación. Ello supone la crítica a la mercantilización creciente, o sea, a la subordinación del orden social a la lógica mercantil de producción de valor y plusvalor que definen la producción, la distribución, el cambio y el consumo, y si se quiere superar estas condiciones históricas del funcionamiento social, se requiere ir más allá en la imaginación de la sociedad necesaria, pensando más en satisfacer necesidades que en la lógica de la ganancia, la acumulación, el poder y la dominación capitalista.

El tema es la revolución para modificar las relaciones sociales de producción, y aquella se juega en la acumulación de poder popular y su orientación en la construcción de una nueva sociedad sin explotación, un paradigma que define los nuevos horizontes de la lucha de clases desde los trabajadores y los pueblos.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2014

PARTE V
DECLARACIONES Y ACONTECIMIENTOS



INTRODUCCIÓN

Esta última parte recoge posicionamientos colectivos en los que intervine, algunos de los cuales contienen esenciales contribuciones de mi parte y en otros solo expresan adhesión a pronunciamientos colectivos en los que participo y protagonizo con diversa identidad.

Se incluyen aportes sobre cuestiones generales que contienen especificidades para su tratamiento, como reflexiones sobre el mundial de fútbol de 2014.



DECLARACIÓN DE LA CORRIENTE SINDICAL EN LA CTA

INICIATIVA POLÍTICA Y LUCHA DE CLASES EN LA ARGENTINA

A treinta años de vigencia de la Constitución en la Argentina, queda claro que existen distintas iniciativas políticas en la disputa del poder, algunas antagónicas entre sí.

Por un lado, existe la disputa por la gestión del capitalismo. En términos generales, es un proceso disputado por radicales y peronistas en la gestión del Estado Nacional, con algunas presencias de otras identidades políticas en algunos Estados provinciales y/o municipales. Ambos partidos tradicionales y los terceros que buscan su lugar en el arco de la dominación política, se disputaron en estos 30 años la hegemonía de la representación institucional. Se trata de un proceso que reconoce varias fracturas y divisiones por “derecha” o por “izquierda” de los partidos tradicionales, pero siempre en el marco del objetivo de lograr “normalidad” en el funcionamiento del capitalismo local. Capitalismo “serio”, “crecimiento con inclusión”, “país normal”, son los nombres que suelen asignarse a esa idea.

Por otro lado, existe un variado movimiento político popular que intenta ir más allá del capitalismo, pretendiendo construir alternativa anticapitalista y antiimperialista, construyendo identidad por el socialismo bajo las nuevas condiciones del desarrollo social contemporáneo. Remitimos especialmente a las novedades en nuestramérica, que lideran el proceso de cambio político regional, sea la renovación del modelo socialista en Cuba, la formulación por el socialismo del Siglo XXI que emerge desde la revolución boliva-

riana de Venezuela, o el propósito del Socialismo Comunitario proveniente desde Bolivia; incluso las formulaciones constitucionales en Bolivia y Ecuador por el Vivir Bien o el Buen Vivir, así como la asunción de esas sociedades como “Estados plurinacionales” poniendo en crisis la legitimidad del Estado nacional vigente desde la época de la independencia. Son estas últimas señales de crítica y orientación alternativa al modelo productivo y de desarrollo del capitalismo realmente existente, como expresión de la búsqueda global experimentada en el laboratorio de cambio en la región latinoamericana y caribeña. Las proyecciones en nuestro país de estas ideas son, en cierta medida, débiles e inconexas. Por un lado nos encontramos con rechazos globales a estas experiencias por no ser “genuinamente” socialistas, sin comprender la importancia de la reinstalación del debate socialista que supuso la propuesta del chavismo en momentos en que parecía imposible la disputa del orden social global por el socialismo. En otras ocasiones se produce la asimilación de la experiencia boliviana o venezolana con procesos, a lo sumo reformistas, que no ponen en absoluto en cuestión el carácter capitalista de la sociedad, como el argentino o el brasileño. Este último comentario genera la confusión de sectores que imaginan aportar a la construcción del bloque popular, cuando en realidad son absorbidos por la hegemonía del bloque en el poder.

La experiencia cubana destaca por su historia y aporte como experiencia viva de la construcción actual del socialismo, y Venezuela aporta la dinámica del poder popular para afirmar un nuevo rumbo social en la región, contribuyendo de una manera especial a la nueva integración y la dinamización del movimiento popular en la disputa contra el capitalismo y por el socialismo.

Iniciativas desde el PODER

Las iniciativas políticas se despliegan en varios ámbitos, el más visible es el institucional. El predominio justicialista y radical es notorio en los poderes del Estado capitalista argentino. Claro que hay agrupamientos a izquierda, centro y derecha de las tradicionales identidades políticas locales. En el peronismo coexisten promotores y cultores de la reestructuración reaccionaria de los 90, con críticos de aquel discurso, aun sosteniendo los cambios institucionales que afirmaron la incorporación de los transgénicos en la producción agraria (soja), las modificaciones al Código minero que explican las grandes inversiones externas en mega-minería, el conjunto de acuerdos internacionales en defensa de las inversiones

externas, el pago de la deuda, y claro, la legislación anti terrorista en tiempos del kirchnerismo y más cercanamente la designación al frente del ejército de Milani.

En el ámbito institucional se desarrollaron batallas interesantes en las tres décadas. En todos los periodos hubo ambición fundadora de nuevos ciclos de representación política. Lo intentó el radicalismo con Alfonsín y el peronismo con Menem y luego la década K. Las identidades mayoritarias conviven con una fuerte y larga crisis política, que se hizo evidente en la pueblada del 2001.

La crisis política, que viene de largo, es una asignatura pendiente de resolución y que entre las propuestas hegemónicas se pone en disputa en procesos electorales, especialmente y en el último tiempo en el 2009, bajo la emergencia de una oposición sistémica (en favor del sistema capitalista) con masivo apoyo electoral. Es un proceso que vuelve a reiterarse en 2013, en un nuevo acto eleccionario de medio mandato. También resulta acentuado el despliegue multiforme del peronismo, con más del 70% de votos colocados bajo ese signo en la decisiva provincia de Buenos Aires. La respuesta desde el gobierno al desafío del 2009, se manifestó en una iniciativa política que consolidó la renovación de mandato de CFK con aumento de adhesiones electorales (54%). En la coyuntura actual, a fines del 2013, parece reiterarse el intento de gestar una fuerte iniciativa política que reinstale al kirchnerismo en el centro de la disputa política. Es una cuestión de importancia por la disputa de espacios sociales que generó el kirchnerismo, contribuyendo a la fragmentación social del movimiento popular. Esa es la primera lectura a realizar del regreso de CFK a sus funciones en el poder ejecutivo luego de la licencia por salud. ¿Podrá lograr consenso social con las medidas asumidas en el último tiempo, sea la designación de Milani o los acuerdos globales con inversores transnacionales? ¿Cómo incide en el consenso la explicitada crisis energética, los nuevos acuerdos de precios? La inflación en ascenso desde el 2007 es una política de ajuste que se agudizará con la aplicación de la “sintonía fina” aplicada en un intento de no perder consenso.

El cambio de gabinete es la primera de las medidas, las que serán acompañadas con el ejercicio de políticas con condiciones económicas diferentes de las presentadas entre 2009 y 2011. En ese periodo, el ciclo virtuoso de crecimiento económico y consenso social facilitó la expansión del gasto y la transferencia de deuda externa con ámbitos locales de la administración gubernamental

(BCRA, ANSES, etc.). La nueva situación de desaceleración económica con cambio en el escenario mundial (continuidad de la crisis mundial y cambio de tendencias en los países no hegemónicos), asociado a la pérdida de reservas internacionales, escaso ingresos de divisas y fuerte presión de los capitales hegemónicos, dificultan iniciativas que no culminen en un fuerte ajuste contra el salario y los ingresos populares. La modificación del elenco ministerial parece apuntar a recortar “excesos” de intervención estatal y de política “redistributiva”, y en el caso de la Jefatura de Gabinete a hacer pie en vértices de poder tales como los gobernadores provinciales, la Iglesia Católica y la embajada norteamericana.

Transitar el conflicto político institucional entre 2014 y 2015 es el escenario probable de oficialismo y oposición para gestionar el capitalismo local. Claro que en un marco de aceleración del ajuste fiscal con impacto concreto en el deterioro de la capacidad de compra del salario y los ingresos populares, especialmente desde el recorte anunciado de los subsidios al transporte y la energía. Por ello es que intentarán contener la demanda salarial en las negociaciones colectivas a pedido de las patronales y el proyecto oficial y persistirán en sostener el viejo modelo sindical contra el que impulsamos desde la CTA.

En ese marco de conflicto institucional actuarán otras instituciones que configuran la constelación del poder, entre ellas la Iglesia o los medios de comunicación masivos. La dimensión militar continúa sumergida por la condena social de sus incursiones directas en la política desde los golpes de Estado de 1930 y especialmente la genocida dictadura de 1976. La búsqueda del poder por restaurar la herida con las Fuerzas Armadas está latente y en ese sentido debe incluirse la designación del nuevo jefe del ejército. Son ámbitos que actúan en la formación del sentido común, construido como contraofensiva al poder popular vigente hacia mediados de la década del setenta. No puede entenderse el consumismo, el individualismo y el descompromiso con la transformación revolucionaria de la sociedad, si no es desde el trabajo ideológico, psicológico, comunicativo, desplegado desde terror del Estado hasta nuestros días. La agresión al sindicalismo y otras formas de agrupamiento de los trabajadores es parte sustancial de este proceso.

Iniciativas desde abajo

Junto a la ofensiva del PODER se pueden verificar en simultáneo iniciativas desde ABAJO. Al terrorismo de Estado se le opuso la

resistencia obrera y popular, contra la represión, por la memoria y la vida. Se resumen en un conjunto de movilizaciones, organizaciones, campañas e iniciativas con reivindicaciones democráticas, por los DDHH, la defensa de los ingresos salariales y populares, todas surgidas al tiempo que se manifestaba la ofensiva de las clases dominantes.

En ese marco se construyó la CTA a comienzos de los 90 y se procesa la experiencia actual, con fragmentación social y política por el accionar de la iniciativa kirchnerista. Mencionamos a la CTA en primer lugar, no solo por sentirnos parte protagonista de su construcción, sino por ser el principal espacio de agrupamiento de trabajadores organizados en nuestro país. En la Argentina es la clase obrera el principal bastión histórico para el despliegue del sujeto político y social por la revolución. Vale reconocer que sobre la base del desprestigio de la burocracia sindical se construyeron miles de agrupamientos de trabajadores que buscan su sindicalización al margen de las centrales sindicales. Muchas de esas experiencias tienen orientación clasista y se reconocen en el combate cotidiano a las clases dominantes y al Estado capitalista, y no se encuentran necesariamente contenidas en la CTA. Ese conjunto es parte de la experiencia de aquellos que nos reconocemos en un nuevo modelo sindical, con democracia y libertad sindical, en contraposición del viejo modelo sindical que sustenta la burocracia sindical y política en el gobierno y consensuada por las patronales.

Junto a la organicidad obrera emerge una diversidad de organizaciones populares, donde se destacan la cuestión de género, de las minorías sexuales y más reciente y con mucha fuerza reivindicaciones ambientalistas, contra la mega-minería a cielo abierto, contra la fractura hidráulica (*fracking*) en la explotación de hidrocarburos no convencionales, en defensa de los pueblos fumigados y por las reivindicaciones históricas de los pueblos originarios, contra el modelo productivo y en pos de la soberanía alimentaria, energética, financiera para otro orden productivo y de desarrollo.

Del conjunto de acciones sociales populares emergen nuevas experiencias políticas, entre las que sobresalen aquellas que involucran a compañeros surgidos de la lucha de la CTA y que en su accionar legislativo promueven los intereses de los trabajadores e intentan construir movimiento político de liberación, tal el caso de la Unidad Popular (UP). Entre lo nuevo en la disputa institucional emerge la potencia de grupos juveniles, herederos de las luchas del

2001. Son diversos los grupos que intentan desplegar acción política, algunos en el plano institucional incluso. Remitimos entre otros a Camino de los libres, las diferentes fracciones del Darío Santillán, el MULCS. Con varios de ellos articulamos experiencias de resistencia y se acercan a la CTA o participan del ESNA. Es cierto que algunos no terminan de delimitar su campo de alianzas y coquetean con la versión nacional y popular, pero participan de nuestra expectativa por el despliegue de una alternativa política. Nuestra propuesta es por la amplitud de alianzas y experiencias, muchas de las cuales se vinculan a una estrategia de articulación regional o global, como el movimiento de lucha por la inserción de Argentina en el ALBA o la promoción de mecanismos de integración alternativos, contra la Alianza Pacífico y los tratados de libre comercio, la defensa de la seguridad jurídica de las inversiones y las empresas transnacionales. Una mención especial merece el caso de Marea Popular o el Frente Darío Santillán, ahora en proceso de unificación, y otros grupos en todo el territorio, protagonistas de una articulación que involucró a UP en la disputa electoral del 2013.

Todos los grupos mencionados y otros son parte de la expectativa esperanzada por profundizar la necesaria unidad en la lucha cotidiana e incluso en la disputa institucional, la que debe ampliarse a otras tradiciones políticas, especialmente hacia la izquierda.

La izquierda partidaria es parte de este proceso, claro que con contradicciones, ya que algunos agrupamientos fueron parte de la cooptación del kirchnerismo en este periodo. Los partidos de la izquierda tradicional, desde una lógica hegemónica intentan ser vanguardia del movimiento popular, con una concepción que escinde “movimiento social” de “movimiento político”. La política de izquierda, anti capitalista o antiimperialista no es solo patrimonio de los partidos tradicionales de la izquierda (que aún sostienen ese posicionamiento), sino que está integrada en las propuestas de diversos movimientos sociales, que incluso intentan disputar en el plano electoral, tal como ocurrió en las recientes elecciones con movimientos estudiantiles, sindicales y territoriales con diverso éxito electoral. De cualquier manera, el fuerte crecimiento del FIT en provincias consideradas “conservadoras” como Mendoza, Salta, y en menor medida Córdoba, tanto como en Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país, nos marca la existencia de sectores que procesan su hartazgo de los partidos tradicionales y de la política profesionalizada en búsqueda de una crítica global de la sociedad existente. Lo dicho va más allá de lo que ocurre y pueda ocurrir en

las disputas entre los integrantes de esa alianza electoral y el conjunto de la izquierda social y política actuante en el movimiento popular.

El debate ideológico constituye un eje central en la disputa del PODER desde ABAJO. En ese sentido se requiere reconstruir la capacidad de acción de la teoría y práctica de la revolución. No alcanza con la crítica al capitalismo desarrollada por los clásicos, desde Marx hasta ahora, y se requiere de una intelectualidad orgánica del movimiento obrero y popular, que desentrañe las formas concretas e históricas de la explotación del hombre por el hombre en la contemporaneidad, al mismo tiempo que sistematice las experiencias de construcción de movimiento revolucionario y emancipador en nuestro tiempo. Es un desafío teórico, educativo, de investigación y de comunicación social para contribuir a constituir sujeto popular para la revolución.

Articular a la izquierda partidaria, política y social sigue siendo un desafío para otorgarle mayor densidad y volumen a una propuesta alternativa que dispute el poder para enfrentar al régimen capitalista y construir la nueva sociedad socialista. Se trata de refundar una tradición con aportes múltiples, que no pueden excluir a quienes procuran sostener posiciones de izquierda desde el peronismo. Es una necesidad en la lucha de clases nacional y regional, contra la avanzada de la militarización y el golpismo en Honduras y Paraguay; la presencia de tropas de la región en Haití y la subordinación al proyecto neoliberal redivivo en la Alianza Pacífico, para restablecer el espíritu del ALCA, contra lo nuevo expresado en el ALBA y aún contradicciones en UNASUR y la CELAC.

Algunas propuestas

En este momento de la lucha de clases, con iniciativas políticas para disputar el gobierno del capitalismo, se necesita construir una variada iniciativa política popular para defender los intereses y demandas de los trabajadores y otros sectores populares. En ese sentido se requiere:

1. Consolidar una articulación popular en la lucha cotidiana en defensa de los intereses de los trabajadores y el pueblo argentino. La CTA, que viene de organizar una jornada nacional de protesta en todo el país el pasado 20/11/13 y el 19/12/13, necesita potenciar su capacidad articuladora de la protesta social. Esto necesita consolidarse en la continuidad y exten-

sión de un Plan de Lucha en el Congreso de marzo del 2014 y especialmente en una masiva elección para la renovación de la conducción en mayo 2014, desplegando una fuerte organización de delegados en ámbitos de trabajo y territoriales, especialmente en el sector privado de la economía y entre el conjunto de trabajadores (activos, pasivos, formales e informales, desempleados y subempleados, precarios y tercerizados, etc.). La CTA necesita ampliar sus relaciones al conjunto de los de ABAJO, de los que luchan día a día en defensa del medioambiente, los bienes comunes y la vida. La estrategia para llevar adelante este proceso de ampliación y articulación es impulsar masivamente la “Campaña Nacional por una Consulta Popular en Defensa de la Soberanía sobre nuestros Bienes Comunes”. Que no es otra cosa que poner en debate la lógica del actual modelo productivo, contra la mercantilización y por la des-mercantilización del agua, la tierra, la educación, la salud, la energía, el transporte. Es decir, discutir el modo de producción, distribución y consumo capitalista. Todo esto conlleva activar la iniciativa por una constituyente social, como forma de agrupar al espacio social y político que pretende discutir el país que tenemos y el que necesitamos de cara a la confrontación con el capitalismo. En este plano se destaca el trabajo que se realiza en la consolidación del ESNA y la FSM, tanto en el ámbito continental y global, pero especialmente en la unidad de acción como espacio unitario de organización de los trabajadores en la Argentina.

2. Profundizar la línea programática sustentada en los últimos años por la CTA, precisando el carácter anti capitalista y antiimperialista de la propuesta de la CTA y discutiendo con el conjunto del movimiento popular que no existe salida posible para los trabajadores y el pueblo si no es en confrontación con el capitalismo. No hay salida popular en el capitalismo y por ello la lucha es por el socialismo. Es necesario habilitar el debate programático en la sociedad y especialmente en el espacio de los de ABAJO. No se pueden generar ilusiones de cambios sin confrontar con el orden capitalista. Argentina necesita potenciar los procesos más radicalizados del cambio político en Nuestramérica, abonando a las propuestas del socialismo en Cuba, del socialismo del Siglo XXI pregonadas desde Venezuela o del socialismo comunitario sostenidas desde Bolivia. A ello debe sumarse un programa para el “mien-

tras tanto” que marque las líneas de enfrentamiento con el sistema capitalista en tanto se lucha por la hegemonía desde fuera del poder político. En ese marco se requiere establecer un conjunto de reivindicaciones a sustentar local y regionalmente, en la CTA y en el ESNA.

3. Necesitamos organizar un gran movimiento político social de liberación, lo que supone construir fuerza política que actúe en todos los escenarios de la lucha de clases, económica, política, cultural, social, institucional. Es algo que se debate en todo el mundo y que requiere pensar la articulación de las construcciones sociales y partidarias en las nuevas condiciones del desarrollo capitalista y la experiencia del movimiento popular por la emancipación social contemporánea.

Buenos Aires, Enero 2014

Víctor Mendibil, Judicial; Julio Gambina, Profesor Universitario; Julio Acosta, Luz y Fuerza La Pampa; Néstor Jeifetz, MOI; Susana Colli, Docente CABA; Carlos Perusini, MTL Santa Fe; Carmen López, MTL Capital; Ismael Medina, MTL Capital; Alfredo Grande, Escritor; Fernando Cardozo, ATE-CTA; Mary Muñoz, Judicial Pcia. Bs. As; Matías Fachal, Judicial CABA; Daniel Campione, Fisyp; Beatriz Rajland, Fisyp; Fernando Pita, Profesor Universitario; Mariano Randazzo, Periodista; Enrique Elorza, Profesor Universidad de San Luis; Sergio Papi, Economista, Mendoza; Julio Bertomeu, Jubilado Judicial L.P; Ester Kandel, Fisyp; Marcos Wolman, Jubilado Mesa Coordinadora; Pola Monti, Jubilada Mesa Coordinadora y Ademys; Juan Murga, Jubilado Mesa Coordinadora; José Lualdi, Bancario Bahía Blanca; Gabriel Martínez, Luz y Fuerza Mar del Plata; Leandro Del Greco, Metalúrgico Villa Constitución S.F; Elsa Picado, Judicial Campana; Héctor Manfredo, CTA-Tucumán; Adrián Ruiz, CTA; Javier Echaide, ATTAC; María Elena Saludas, ATTAC; Carlos Oroz, Docente CABA; Néstor Di Milia, Docente CABA; Eduardo Smidt, Fisyp; Alejandro Gambina, Comunicador Social; Homero Ramirez, MOI; Romina Quintas, Luz y Fuerza Mar del Plata.

Adhieren a ésta iniciativa numerosos compañeros que integran la conducción nacional de la CTA.



DECLARACIÓN DE LOS ECONOMISTAS DE IZQUIERDA (EDI)

"EN VEZ DE AJUSTE, MONOPOLIO ESTATAL DEL COMERCIO EXTERIOR"

La crisis cambiaria que se venía gestando desde hace meses finalmente estalló y el gobierno aplicó la maxi-devaluación que tanto criticaba. No solo eso. Ya comenzó a transitar el camino ortodoxo que prometió eludir. Con la devaluación se inició el primer capítulo de un ajuste tradicional, que seguirá con aumento de tasas de interés, contracción monetaria y apriete fiscal, para incrementar los ingresos de los poderosos a costa del salario.

1

La política gradualista del gobierno para enfrentar estos desequilibrios (mini-devaluaciones diarias, reducción de subsidios, acuerdos con cadenas de supermercados y distribuidores) terminó como era previsible. No soportó la presión de los devaluadores y la falta de ingreso de dólares. Resultado: devaluación del 18% en dos días, que completa un 60% en el año y estampida de precios. Como toda devaluación esta lleva implícita una fuerte transferencia de ingresos de los sectores populares (asalariados, jubilados, beneficiarios de planes sociales) a los sectores del capital concentrado.

2

Un gran ajuste. Sin embargo los mercados no se tranquilizaron. El levantamiento parcial del control para permitir atesoramiento no hizo más que abrir una nueva ventanilla de salida mientras que el encarecimiento del turismo al exterior no logró frenar esa sangría mientras que quienes ingresan al país siguen liquidando sus dó-

lares en el mercado negro. A esto hay que agregarle que las reservas son utilizadas para mantener pagos de una deuda externa que nunca fue investigada junto con pagos genuinos de deuda pública y privada. No es serio afirmar como hace el gobierno que “esta devaluación será distinta”. Los efectos ya están a la vista en los primeros días: inflación que se acelera, incumplimiento de los acuerdos, desabastecimiento de productos.

El gobierno improvisa cotidianamente medidas poco coherentes. Un día anuncia medidas de control y al otro, medidas “amigables” para los mercados. Afirma que hay conspiración, pero hace la devaluación que exigen esos conspiradores. La oposición de derecha aprovecha, pero no quiere tumbar al gobierno. Su objetivo es empujarlo a que siga haciendo el trabajo sucio.

3

Los Economistas de Izquierda hemos señalado en diversas oportunidades: el esquema económico gestado por el kirchnerismo es fuertemente dependiente del ingreso de divisas generadas por el agro y de la captura de recursos fiscales vía retenciones. Tanto la Mesa de Enlace como las exportadoras conocen bien estas debilidades del “modelo” y operan sobre ellas, demorando la venta de la cosecha y la liquidación de divisas, promoviendo la devaluación que mejorará sus ingresos e incrementará sus ya abultadas ganancias a costa del bienestar de la mayor parte de la población.

Pero esta innegable capacidad de presión de productores y exportadores para agudizar la restricción externa y de desfinanciar al Estado no puede ocultar la responsabilidad del gobierno nacional, que interviniendo el INDEC y negando una y otra vez la inflación, dejó crecer los precios internos que abultaron la rentabilidad capitalista. Esta política condujo en definitiva a la presión sobre el tipo de cambio.

4

El gobierno resiste las presiones porque sabe deteriorará aún más los salarios y luego concede. Los trabajadores legítimamente saldrán a exigir recomposición del poder adquisitivo, si no se frena la remarca de precios que hacen los grandes capitalistas el ciclo se realimentará una y otra vez. Como en otras devaluaciones ya están en marcha todos los complementos tradicionales de la ortodoxia: suba de las tasas de interés, reducción de gastos y de la emisión monetaria. El gobierno niega estas medidas y luego las aplica.

El equipo económico busca ganar tiempo esperando el ingreso de dólares de la cosecha gruesa en los próximos meses y que de resultado positivo alguna de las tantas gestiones para conseguir financiamiento externo. Pero al ritmo actual de caída de reservas en ese tiempo de espera, puede producirse un desfase entre ingresos y salidas con consecuencias más que dramáticas.

Todos los opositores derechistas son devaluadores. Cuestionan las medidas por pura demagogia cuando en realidad piensan profundizar el ajuste. Ninguna propuesta intenta resolver la crisis con medidas que no se descarguen sobre los trabajadores y los sectores populares. Por el contrario son estos los únicos que objetivamente se oponen a las devaluaciones y son favorables a los controles de precios efectivos.

Actuar con urgencia y decisión política

5

Frente a la evidencia que por el camino actual se marcha a una agudización de la crisis y a mayores ajustes, desde distintos sectores se está reclamando la inmediata reconstitución del manejo estatal del comercio exterior. Los Economistas de Izquierda entendemos que se debe discutir como concretar esa medida. No hay otra forma de solucionar las tensiones sino se busca una solución de fondo. Y esta solución no es otra que una versión actualizada de la Nacionalización del Comercio Exterior, de la implantación de Organismos Reguladores (Juntas o Agencias), eficientes que defiendan la producción nacional y fijen los precios de los alimentos, poniendo término así a la especulación que hacen los grandes productores, acopiadores, comercializadoras y fondos de inversión con el tipo de cambio y los precios internacionales y saque el negocio de las manos de los monopolios exportadores. Ese sistema instaurado por el menemismo y hasta ahora preservado por el gobierno, que no ha hecho más que observar como controlan el mercado de granos y se apropian de buena parte de la renta.

6

Es importante subrayar que es una propuesta que hay que aplicarla bien para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Es una propuesta prioritaria que hay que aplicar de inmediato antes que el BCRA se quede sin reservas y no tenga margen de maniobras (por eso se debe exigir de inmediato la liquidación de los 3.500 millones de dólares retenidos, bajo amenazas de actuar con la máxima pe-

alidad). No es una propuesta que funcionará en paralelo al actual sistema de comercialización, por el contrario es una propuesta que reemplaza integralmente a lo que ahora está en manos privadas (acopios, puertos, negociación con clientes, etc.). Una propuesta de esta naturaleza no puede repetir lo que se hizo con YPF. Un día expropiar y varios meses después aceptar pagar más de 5000 millones de dólares a los responsables del saqueo. Medidas así, carentes de mínima consecuencia, terminan agravando el problema. Irritan a los poderosos y no despiertan confianza popular. La estatización del comercio exterior debe instrumentarse sin concesiones a los grupos privados que hoy manejan la actividad.

Los puertos privatizados son la salida al exterior, al estar en manos privadas el Estado no puede ejercer un efectivo contralor. Para EDI Nacionalizar los Puertos permitirá controlar efectivamente que el volumen de las exportaciones coincida con lo declarado por los exportadores y cerrará así otra fuente de escape de divisas.

7

Pero esta no puede ser una medida aislada. La captación estatal de los dólares retenidos servirá si al mismo tiempo se actúa sobre los precios y los ingresos populares. Sobre los primeros es necesario un Control Efectivo de los Precios, los acuerdos en el mejor de los casos duran unos meses, hay que fiscalizar los costos de producción y comercialización de las formadoras de precios. Hay que convocar a los trabajadores para que sean ellos quienes ejerzan el contralor de los costos en fábricas y distribuidoras, y especialmente a los empleados de comercio para el control de los precios acordados en supermercados y negocios minoristas. El Estado debe garantizarles la inmunidad en el trabajo a todos ellos.

Asimismo, hay que impulsar la construcción de mercados populares mayoristas con control social articulados con comercios locales y movimientos populares para crear canales alternativos (como los MERCAL venezolanos) para enfrentar el poder de mercado de los oligopolios productores y distribuidores de mercancías.

La Ley de Abastecimiento está en vigencia y el gobierno debe estar decidido a ponerla en práctica a la menor transgresión de las normas establecidas.

Por el lado de los ingresos hay que compensar ya mismo la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y planes sociales, con un Aumento de Emergencia como paso previo al lla-

mado a paritarias sin techo. Al mismo tiempo que se prohíben los despidos mientras persista la crisis.

8

No hay formas de frenar la salida de capitales del proceso productivo sin un estricto control de los movimientos financieros asentado en la Nacionalización del sistema Bancario. En las condiciones actuales ninguna medida para incrementar la provisión de divisas tendrá resultado duradero. Es el Estado quien debe manejar todo el movimiento de divisas en el país. Ninguna entidad privada debiera estar autorizada a realizar operaciones de ese tipo, lo que a su vez requiere un Control de Cambios serio y transparente, que controle la veracidad de las operaciones e impida la corrupción, que priorice el uso de las divisas en función de las necesidades del país. Lo que hay ahora es un control caprichoso e irracional de las divisas.

9

Las concesiones al CIADI, las ofertas a los fondos buitres, a Repsol y al Club de París, los peregrinajes del ministro Kicillof buscando fondos frescos, no han dado resultado alguno, salvo abrir el canal de nuevos endeudamientos. El país tiene bloqueado el acceso al crédito y las inversiones si llegan lo harán en cuenta gotas y exigiendo mayores prebendas.

Desde EDI sostenemos que Argentina debe denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión, salir del CIADI. Es urgente una Reforma Tributaria Progresiva y Recuperar las Contribuciones Patronales cedidas en los años '90 para fortalecer el ahorro y la inversión interna.

10

Para los Economistas de Izquierda este es el momento. La Nacionalización el Comercio Exterior, con las medidas complementarias señaladas, tendrá profundas consecuencias estratégicas para la economía argentina, evitará que la crisis la paguen los trabajadores, abriendo el rumbo para implementar una política económica que favorezca a las mayorías populares.

Somos conscientes que este tipo de medidas serán rechazadas por el bloque socioeconómico en el poder y las clases dominantes, por lo que requieren de la construcción de un fuerte consenso popular que asuma el proyecto político, que aun en el marco del capitalismo, esté dispuesto a transitar un rumbo de transformaciones

profundas de la economía, el Estado y la sociedad y que potencie las relaciones económicas, sociales, culturales y políticas con los países de la región latinoamericana para una integración soberana.

Primeras firmas: Claudio Katz / Eduardo Lucita / Jorge Marchini / Guillermo Gigliani / Alberto Teszkiewicz / Julio Gambina / Mariano Félix / Ariel Slipak / Martín Kalos.

(Dada la urgencia de la situación este documento sale con primeras firmas a la espera de nuevas adhesiones).

Buenos Aires, febrero de 2014

A PROPÓSITO DE VENEZUELA

Si el Siglo XXI define el “cambio político” para la región Nuestra-Americana, en buena medida se debe al proceso iniciado en Venezuela desde 1999, con la asunción presidencial de Hugo Chávez Frías.

Claro que también fue posible, esencialmente, por el accionar popular en el caracazo en 1989, que visibilizó la masiva resistencia a las políticas de ajustes neoliberales. Fueron resistencias que se generalizaron en los noventa en nuestra región.

Es cierto también que el proceso venezolano se benefició de la persistencia del proyecto revolucionario en Cuba. La revolución en Latinoamérica está marcada por el triunfo de 1959 y la gran experiencia en renovación recurrente, aún con caídas de otros procesos que intentaron la construcción socialista.

Es más, ambos procesos, Cuba y Venezuela, redefinieron desde fines del 2004 el proceso de integración regional con la aparición del ALBA, que luego del 2006 será ALBA-TCP (Tratados Comerciales de los Pueblos) con la inclusión boliviana en la construcción de la integración alternativa.

La iniciativa por expresar regionalmente cambios nacionales facilitó la extensión del ALBA-TCP como una serie de instrumentos y propuestas de integración y articulación, algunos demorados como Petroamérica o el Banco del Sur. Se subrayan por su visibilidad, la UNASUR y la CELAC, con destacado cierre reciente en La Habana, donde los bloqueadores quedaron excluidos.

El conjunto de mandatarios presentes en la isla y los encuentros con Fidel marcaron el límite de lo permitido por el imperialismo, a saber, EEUU y las clases dominantes en nuestros países.

Se trata del punto límite para acelerar procesos políticos, sociales, culturales, económicos, que retrotraigan la situación de la región latinoamericana a la dinámica de acumulación de poder en los años noventa del siglo pasado.

INTENTAN RETROTRAER LA HISTORIA

Había antecedentes cercanos con Haití, Honduras y Paraguay, aunque las amenazas principales se orientaban históricamente a Cuba y más recientemente a Venezuela. Por si hay dudas está el intento fallido de golpe del 2002, rechazado por la inmensa participación popular y la intervención de las Fuerzas Armadas.

La respuesta al golpe del 2002 en Venezuela fue el fortalecimiento del proyecto bolivariano, asumiendo el dominio de la empresa petrolera para definir el uso de la renta petrolera, base de la riqueza y la economía venezolana. Fue la medida de cambio estructural más importante, la que permitió financiar las misiones con alto impacto social. Pero también, desde la gestión del chavismo se intervino en la OPEP para generar condiciones de recomposición del precio internacional del petróleo.

Venezuela y el chavismo, fenómeno popular masivo, generaron así condiciones de posibilidad política para inducir condiciones económicas favorables al proceso de emancipación.

Al mismo tiempo, ese proceso generó la condición de posibilidad económica para el cambio político, no solo en el país, sino en la región y con pretensión global.

En definitiva, es la dialéctica entre política y economía, imprescindible para comprender el proceso de transformación y cambio político en la región, amenazado por las fuerzas de las clases dominantes que pretenden retrotraer la situación y asumir la vanguardia en la definición del curso de los acontecimientos.

La consolidación del cambio político en Nuestramérica tiene el sello de esos procesos, que se tiñeron de anticapitalismo ante la formulación de Chávez de que el capitalismo no tiene soluciones para los pueblos y por ende había que construir el socialismo de

este siglo, en clara lectura crítica del socialismo real. La democracia participativa sería nuevo símbolo de la construcción del socialismo.

No hay dudas que la situación latinoamericana se modificó sustancialmente con los aportes transformadores provenientes de Venezuela y la nueva impronta generada por la integración alternativa. Las clases dominantes despliegan una dura batalla para revertir la ofensiva popular.

LA BATALLA SE JUEGA HOY EN VENEZUELA

Chávez murió y quedaron las incógnitas del futuro. Ante la pregunta de la eventual desaparición del líder, reflexionábamos que si el proceso era genuino, sobreviviría e incluso avanzaría.

El desafío estaba especialmente en el plano de la economía, que presentaba deterioros visibles desde el 2009, con desabastecimiento, inflación y especulación con las divisas. Pese al control de cambios entre 2003 y 2013 son gigantescas las transferencias al exterior, incluidas remesas por cancelación de deuda. Manuel Sutherland denuncia fuga de capitales al exterior del sector privado entre 2003 y 2013 por 111.000 millones de dólares¹, y refiere en otro artículo que el total por transferencias de capital al exterior suman entre 2003 y 2013 unos 224.905 millones de dólares.²

Esa fuga de capitales impacta en caídas importantes de reservas y genera descontento social, incluso en sectores afines al gobierno. Sobre ese descontento se disputó electoralmente la hegemonía durante el 2013, ya sin Chávez en la disputa física. El modesto triunfo de Maduro en abril para las presidenciales, se extendió sobre fines de año en las elecciones municipales.

El chavismo había pasado una prueba importante, claro que para ello necesitó de algunos cambios económicos que mostraron al pueblo la decisión de avanzar en la profundización del cambio. Fueron medidas en el marco de otras que afectaron los intereses de los sectores de menores ingresos, por caso la devaluación.

1 Manuel Sutherland, "Fuga de capitales (Venezuela y A.L.), fraudes, devaluación y la Estatización del comercio exterior", en <<http://www.aporrea.org/tiburon/a178809.html>> (consulta 21/12/2013).

2 Manuel Sutherland, "Las nuevas medidas económicas del gobierno, crítica a la devaluación y alternativas socialistas", en <www.aporrea.org/actualidad/a181446.html> (consulta 6/2/2014).

Ante el fracaso de la estrategia electoral, el anti chavismo de las clases dominantes decidió la disputa callejera con agresivas movilizaciones orientadas a disputar el gobierno y el poder.

Pudo causar sorpresa la respuesta luego de los triunfos electorales, que se suman a varios otros en 14 años. El chavismo ha sido invencible hasta el momento en contiendas electorales. La participación y la movilización popular han sido emblemáticas en la construcción del poder del chavismo.

La respuesta gubernamental a la nueva ofensiva de las clases dominantes está combinada de un llamado a la paz, con la utilización de mecanismos legales para frenar acciones contra la ley, e incluso medidas económicas para morigerar la situación. La última de ellas es el cambio de la ley de ilícitos por una nueva que favorece el intercambio de divisas entre privados. Con ello intenta descomprimir las presiones sobre el mercado cambiario, y mejorar la situación del gobierno y de PDVSA, que también disputan las divisas.³ Como señala Sapir, PDVSA *sufre* el régimen cambiario por tener que liquidar sus exportaciones al tipo de cambio oficial y sustentar su gasto y costo, muchas veces, al tipo de cambio paralelo. Es que esos costos y gastos están influidos por una inflación que llegó al 56% para el 2013.

SOLIDARIDAD Y LUCHA POR LA PROFUNDIZACIÓN DEL CAMBIO

Es contundente la solidaridad internacional con la lucha del pueblo venezolano contra los intentos desestabilizadores de las clases dominantes y del imperialismo.

Constituye una realidad que asume el pueblo venezolano en su propia movilización en defensa de lo logrado y en avanzar en la profundización de los cambios estructurales, los que solo serán posibles si se asumen desde el protagonismo popular.

Muchos análisis llegan desde Venezuela y señalan que un límite para avanzar y profundizar es la corrupción, histórica en la cultura del país, pero también, las tendencias conciliadoras existentes al interior del proceso político venezolano.

3 Jacques SAPIR, "La situation économique au Venezuela", Le Grand Soir, <http://www.legrandsoir.info/la-situation-economique-au-venezuela.html>, 18 février 2014.

Por eso vale recordar el 2002 y la lucha popular en contra del golpe, la organización de quienes apostaron a profundizar el proceso, a la apropiación integral para la gestión estatal de PDVSA y pocos años más tarde a pronunciarse por el socialismo.

Retomar con más fuerza el proyecto socialista supone terminar con las inequidades que expresa la brecha cambiaria, cargando el costo sobre las clases dominantes. Implica asumir una política económica que combata la corrupción y asuma con consenso social amplio las reformas estructurales pendientes, para la nacionalización del comercio exterior y la banca, como en una reforma tributaria progresiva y asumir la asignatura pendiente de un proyecto productivo socialista, con diversificación productiva para eliminar la dependencia que hoy caracteriza el abastecimiento de la población.

La batalla se juega en Venezuela y los resultados inciden sobre el conjunto de la región, donde se dirime el rumbo de potenciar el cambio político o retroceder al programa de la liberalización, hegemónico en los 90. Es un tiempo de definiciones que requiere de las fuerzas populares revalidar al proyecto contra la mercantilización y la liberalización para afirmar un proyecto emancipador.

La Paz, 21 de febrero de 2014



LA COPA FIFA 2014 Y EL MODELO DE DESARROLLO

Comenzó el mundial de fútbol en Brasil y junto a lo deportivo y las pasiones nacionales en movimiento, emerge el negocio en el popular deporte.

Se trata del negocio de las multinacionales asociadas al juego, sea por la indumentaria y accesorios diversos usados y visibilizados por los principales protagonistas; por la publicidad exacerbada para el consumo de masas y la televisación de los juegos y el espectáculo, los comentarios y el show de la previa, el durante y el después de cada partido.

Claro que se pone en juego el negocio del turismo y un consumo de élite por costos elevados de pasajes, alimentación, hotelería, electrónica y otros rubros, amén de financiamientos bancarios, descuentos y promociones.

Entre otros aspectos, se incluyen los negocios corporativos de la FIFA, principal beneficiario directo del negocio de la Copa, y también los de los intermediarios particulares vinculados a las obras e infraestructura que encara el país organizador. Ello involucra las sospechas de corrupción en el comentado “se la llevan con pala”, asociando enriquecimiento de funcionarios encargados de supervisar los contratos de la Copa Mundial.

El negocio remite también a la evolución de las cotizaciones de los jugadores y equipos técnicos, como eventuales beneficios para intermediarios y los clubes de origen, como a las apuestas y sospechas de arbitrajes y negociados sobre resultados.

Así, el gran negocio del fútbol mundial inició la versión 2014, que nos tendrá entretenidos por un mes, y que como nunca, ahora rodeado de una serie de movilizaciones y de protestas de diversos sectores de la sociedad brasileña, ampliamente difundidos gracias a la tecnología de la comunicación.

PROTESTAS SOCIALES

Las protestas sociales ya no son solamente de indignados por la orientación del gasto público social, tal como se hizo manifiesto hace un año en la lucha por el precio del transporte público y la demanda por su gratuidad.

Ahora se suman los trabajadores formales, sindicalizados, que demandan mejoras de ingresos y condiciones laborales, utilizando la ocasión del mundial para hacer efectivas sus demandas, capacidad y posibilidad de negociación.

Las luchas son en aeropuertos y en subterráneos, entre otros, con demandas en todo el territorio brasileño. Pero también exigen lo suyo los trabajadores sin techo y los sin tierra, éstos últimos exigiendo una demorada reforma agraria. Con todos ellos existen mecanismos de negociación que se han puesto en juego por parte del gobierno para intentar morigerar el conflicto. Ocurre algo distinto con los movilizadores menos formalizados, que imponen límites a la negociación gubernamental para evitar la extensión de la movilización social crítica a la Copa. En este caso, la respuesta es la represión, que puede empañar el carácter de fiesta que se atribuye al mundial de fútbol.

En definitiva, el sujeto de la protesta, más allá de treguas y negociaciones, son los trabajadores formales e informales, los jóvenes y el movimiento estudiantil, las organizaciones populares y los movimientos contra la opresión racial y de género, entre otros por diversas reivindicaciones, los que expresan la indignación por la utilización de los recursos públicos aplicados a la mercantilización del deporte. Hacen pública y evidencian una demanda y una crítica al modelo de desarrollo que privilegia la mercantilización del deporte y la vida cotidiana, en contradicción con la satisfacción de múltiples necesidades de ingresos y de beneficios sociales de educación, salud, transporte, tierra, vivienda o hábitat, entre variados reclamos por des-mercantilizar la vida cotidiana.

La gran vidriera mediática del espectáculo, aun cuando se la quiera ocultar, favorece la demanda social y laboral en contra de la tendencia a mercantilizar una “pasión de multitudes” en un país emblemáticamente futbolero. Es una propuesta coincidente con la crítica más general a un “modelo de desarrollo” que alienta y promueve la extensión de la satisfacción de las necesidades por el mercado capitalista, el que se define por el objetivo de la ganancia y la acumulación.

Este avance de las relaciones mercantiles capitalistas actúa en la desposesión material y simbólica de bienes comunes, desde la tierra y el agua, al juego y el deporte. Las protestas en Brasil constituyen un llamado de atención y al debate de la sociedad sobre la satisfacción y la insatisfacción en las políticas en curso en la región.

SE DISCUTE EL MODELO DE DESARROLLO

Existe evidencia estadística de mejoras sociales en la región, siempre comparadas con la década perdida del 80 (según CEPAL) y el decenio del ajuste y la reestructuración regresiva de los 90, pero alejadas del imaginario social crítico al modelo productivo y de desarrollo emergente con las políticas neoliberales. Estas políticas fueron explicitadas en aquellas recientes décadas del ajuste y la reestructuración regresiva del capitalismo en la América del Sur.

La resistencia popular a esas estrategias gestó las condiciones de posibilidad para el cambio político en la región en este comienzo del Siglo XXI, y el escenario actual de Brasil, de protestas por la creciente mercantilización, nos devuelve al debate sobre el modelo de desarrollo a que aspiran los pueblos.

Vale mencionar que ese debate sobre el modelo de desarrollo estará presente en las deliberaciones de la Cumbre del G77+China que se realiza este fin de semana en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para un agrupamiento que surgió hace 50 años para discutir estrategias desde el Sur “dependiente” para una inserción “independiente” en el sistema mundial dominado por las empresas transnacionales, los principales Estados del capitalismo mundial y los organismos internacionales.

Claro que mucho cambió el mundo en medio siglo y aquellas viejas aspiraciones se desvanecieron al calor de la disputa por recibir inversiones y ser considerados “países emergentes”, petróleo y recursos naturales mediante. Pero también es cierto que en estos

años de comienzo del Siglo XXI, nuestra región evidenció expectativas de cambio que pueden resurgir en esta cumbre y a favor de un programa de soberanía popular asociado a la alimentación, la energía, el medio ambiente o las finanzas.

En definitiva, la discusión a propósito del mundial en Brasil, o por la Cumbre del G77+China en Bolivia, apunta a considerar si alcanza con medidas sociales compensatorias derivadas de la inequidad del régimen del capital, que sustenta sus ganancias y la acumulación con fuerza de trabajo barata y extensiva explotación de abundantes recursos naturales en nuestros territorios, o si se requiere de otras y variadas estrategias para una industrialización independiente, lo que implica cambios sustanciales en el modelo productivo y de desarrollo, con otras políticas, para otros beneficiarios, entre los que identificamos a los sectores empobrecidos y vulnerables de nuestras sociedades.

Buenos Aires, 13 de junio de 2014